HISTORIA DE EUROPA

LA EUROPA REVOLUCIONARIA
1783-1815

GEORGE RUDÉ



Siglo XXI / Historia de Europa / 9

George Rudé

La Europa revolucionaria

1783-1815

Traducción: Ramón García Cotarelo

Revisión: Jaime Roda



El Antiguo Régimen se derrumbó ante la embestida de la Revolución francesa. En Francia, bajo los ideales de *«Liberté, égalité, fraternité»* se decapitó al rey y se dio la bienvenida a la república, se proclamó que todos «los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos» y se aprobó el sufragio universal masculino. En París, bajo el himno de la *Marsellesa,* la Revolución desembocó en el Terror, ocaso del horizonte de concordia y fraternidad, y la razón moderna se encarnaba en un nuevo Imperio que se extendería por Europa con las victorias de los ejércitos napoleónicos.

La Europa revolucionaria, obra maestra que se ha convertido en un clásico fundamental, ofrece una crónica previa a la gran agitación y describe tanto el desarrollo de la Revolución en Francia como el gobierno de Napoleón y su impacto e influencia en el resto de Europa y el mundo. George Rudé, autoridad y referencia en historia social, presenta cómo aquella sociedad revolucionaria, que transformó radicalmente el orden social y derribó el Antiguo Régimen y sus instituciones políticas, acabó configurando un Imperio.

En el momento de su muerte, en 1993, **George Rudé** era profesor emérito de Historia en la Universidad de Concordia, Montreal, donde había trabajado desde 1970. Anteriormente había sido profesor en diversas escuelas de Inglaterra y catedrático de Historia en la Universidad de Adelaida y la Universidad Flinders. Referencia obligada en toda investigación política y social del siglo XVIII, es autor *La multitud en la historia* y *Revolución industrial y revuelta agraria. El capitán Swing* (junto a E. Hobsbawm) publicado en Siglo XXI de España, y de *The Crowd in the French Revolution* (1959), *Hanoverian London 1714-1808* (1972), *Europe in the Eighteenth Century* (1972), *Debate on Europe 1815-1850* (1972), *Ideology and Popular Protest* (1980) y *The French Revolution* (1994).

Diseño de portada

RAG

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

Título original:

Revolutionary Europe, 1783-1815. Second edition

La edición en lengua española de esta obra ha sido autorizada por John Wiley & Sons Limited. La traducción es responsabilidad de Siglo XXI de España Editores, S. A.

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.sigloxxieditores.com

ISBN: 978-84-323-1906-8

MAPAS


FRANCIA PRERREVOLUCIONARIA
Frontera de Francia
Frontera de provincias
0
50
100
150
200
Millas
Boulogne
Lille
FLANDES
ARTOIS
Dauci
Fleurus
Abbeville
Arras
Amiens
PICARDÍA
Ruán
Beauvais
Caen
NORMANDÍA
ILE DE FRANCE
Reims
Valmy
Thionville
Metz
Verdún
LORENA
PARÍS
Versalles
Estrasburgo
Nancy
BRETAÑA
Rennes
MAINE
Chartres
CHAMPAÑA
Troyes
Orleans
ORLEANS
ALSACIA
Angers
Nantes
ANJOU
TURENA
Dijon
FRANCO
CONDADO
NEVERSADO
Nevers
BERRY
POITOU
Poitiers
BORGOÑA
Moulins
BORBONESADO
MARCHE
SAINTONGE
ANGULEMA
Limoges
LEMOSÍN
Lyon
LYONESADO
St. Etienne
AUVERNIA
Grenoble
Burdeos
DELFINADO
GUYENA
Aviñón
CONTAT-
VENISSIN
GASCUÑA
PROVENZA
Toulouse
BÈARN
LANGUEDOC
Fréjus
Marsella
Tolón
Pau
ROSELLON
CONDADO
DE FOIX
Ajaccio
CÓRCEGA
A la misma escala

EUROPA EN 1792

EUROPA EN 1812

Imperio de los franceses

Estados bajo control de Napoleón

Estados aliados con Napoleón

Estados independientes

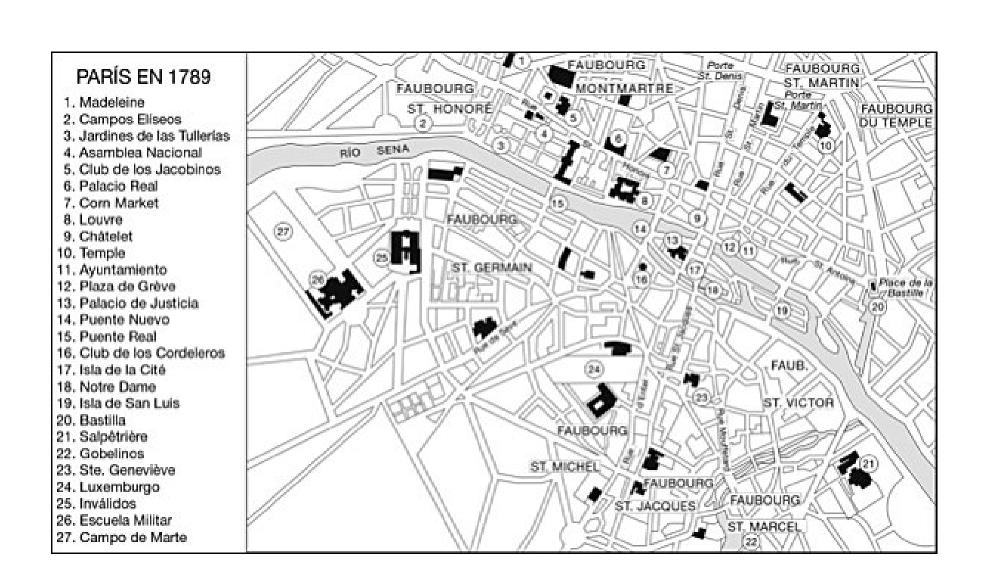
EL IMPERIO FRANCÉS EN 1982

Frontera de los departamentos

Frontera del imperio

EUROPA EN 1815

Límites de la confederación germánica


PARÍS EN 1789
1. Madeleine
2. Campos Elíseos
3. Jardines de las Tullerías
4. Asamblea Nacional
5. Club de los Jacobinos
6. Palacio Real
7. Corn Market
8. Louvre
9. Châtelet
10. Temple
11. Ayuntamiento
12. Plaza de Grève
13. Palacio de Justicia
14. Puente Nuevo
15. Puente Real
16. Club de los Cordeleros
17. Isla de la Cité
18. Notre Dame
19. Isla de San Luis
20. Bastilla
21. Salpêtrière
22. Gobelinos
23. Ste. Geneviève
24. Luxemburgo
25. Inválidos
26. Escuela Militar
27. Campo de Marte
FAUBOURG ST. HONORÉ
FAUBOURG MONTMARTRE
Porte St. Denis
FAUBOURG ST. MARTIN
Porte St. Martin
FAUBOURG DU TEMPLE
RÍO SENA
FAUBOURG ST. GERMAIN
Place de la Bastille
FAUB. ST. VICTOR
FAUBOURG ST. MICHEL
FAUBOURG ST. JACQUES
FAUBOURG ST. MARCEL

PREFACIO

Con este libro se intenta conseguir una visión de Francia y de Europa antes, durante e inmediatamente después de la Revolución francesa. En este terreno, la literatura comprende un número inmenso de títulos que, además, aumentan continuamente. Durante los últimos quince meses se han publicado en Francia, los Estados Unidos e Inglaterra por lo menos media docena de estudios extensos sobre la Revolución, tanto en el marco francés como en el europeo; y, sin duda, otros tantos deben hallarse en prensa. Esto es tanto como decir que la Revolución continúa siendo un terreno abierto a la investigación y que un pequeño tratado como este no puede sino familiarizar a un mayor número de lectores con los muchos problemas sin resolver de aquella y agudizar el interés de estos por una discusión más profunda.

De todos ellos, quizá el problema más debatido durante los últimos años ha sido el de la importancia de la Revolución francesa dentro del marco europeo (o mundial). ¿Era la revolución europea una prolongación de la francesa o era, más bien, el resultado de su propia evolución interna? Es esta una cuestión oscura que permite muy diversas interpretaciones y que, aunque solo se ha planteado con singular relevancia en los últimos diez años, aún cuenta con escasa literatura. Por ello son de agradecer los trabajos del profesor Palmer (últimamente en Princeton) y del profesor Godechot, de Toulouse, que han abierto el camino en este sentido. Hasta aquellos que no aceptamos su punto de vista de una revolución «occidental» o «atlántica» aplaudiremos sus esfuerzos de iniciadores.

Al escribir un libro como este, resulta imposible agradecer debidamente la colaboración a todos los que, de uno u otro modo, han participado en él. Como casi todos los que trabajan en este terreno, tengo que recordar especialmente

el nombre de Georges Lefebvre, pues no solamente ha servido de fuente para cuantos han pretendido estudiar la Revolución «desde abajo», sino que sus obras suponen el tratamiento mejor y más completo de la Revolución francesa y de Napoleón. Todos los estudios recientes de la Revolución, el Consulado y el Imperio y sus repercusiones más allá de las fronteras francesas están en deuda con él más que con cualquier otro estudioso del tema. Quisiera agradecer, además, a Mr. Richard Ollard, de William Collins, la paciencia, el buen humor y el cuidado que puso para hacer llegar mi manuscrito a las prensas y a Mr. William A. Cowan, bibliotecario de la Barr Smith Library de la Universidad de Adelaida, por haber leído las pruebas. Por último, debo mi agradecimiento a la Universidad de Adelaida y, en particular, a mi colega el profesor Hugh Stretton, que ha hecho posible que los historiadores dedicados a la enseñanza escriban libros.

George Rudé
Adelaida
1 de octubre de 1963

INTRODUCCIÓN

George Rudé fue un magnífico estudioso y un maravilloso profesor que hizo aportaciones cruciales al estudio y conocimiento de la historia. En obras como *The Crowd in the French Revolution (La multitud en la Revolución francesa), Wilkes and Liberty (Wilkes y libertad), The Crowd in History, 1730-1848 (La multitud en la historia, 1730-1848), Paris and London in the Eighteenth Century (París y Londres en el siglo XVIII)* y *Captain Swing (El capitán Swing)* (de la que Eric Hobsbawm fue coautor) realizó estudios pioneros sobre la historia y la sociología de la «multitud preindustrial»[1]. En *Revolutionary Europe, 1783-1815 (La Europa revolucionaria, 1783-1815), Europe in the Eighteenth Century (Europa en el siglo XVIII)* y *The French Revolution (La Revolución francesa)* ofreció síntesis magistrales de la Europa de la «Era de la Revolución»[2]. Asimismo, con sus camaradas de la «tradición historiográfica marxista británica», desarrolló un acercamiento crítico al estudio del pasado que se conoció como «historia desde abajo» o «de abajo arriba», ayudando a cultivar una idea más democrática del pasado y de la construcción del presente.

Tras un breve apunte biográfico, estudiaremos la obra de Rudé a partir de los tres temas que la impulsaron: identidades, ideologías e historias. El tema de las identidades tiene que ver con su apasionada búsqueda del «rostro de la multitud»; el de las ideologías con su persistente esfuerzo para «devolverle el pensamiento a la historia»; y el de las historias, con sus inspiradas iniciativas para encontrarle un sentido al «movimiento» de la historia.

GEORGE RUDÉ

George Rudé nació en Noruega el 8 de febrero de 1910. Su padre era ingeniero y su madre era hija de un banquero inglés. En 1919, la familia se mudó a Inglaterra. El joven George estuvo becado en un colegio privado de Shrewsbu-

ry y luego estudió una licenciatura en Lenguas Modernas en la Universidad de Cambridge. En 1931 obtuvo un puesto de profesor en Stow.

Rudé recibió una educación conservadora. Sin embargo, a mediados de la década de los treinta se convirtió en un «antifascista comprometido», leyó con avidez los textos clásicos marxistas y se afilió al Partido Comunista de Gran Bretaña. Poco después se mudó a Londres, donde trabajó activamente para el Partido y enseñó lenguas en St Paul's School. En la capital conoció a Doreen de la Hoyde, que se convirtió en su mujer y en su compañera durante el resto de su vida.

En la Segunda Guerra Mundial, Rudé sirvió en el cuerpo de bomberos de Londres. Inspirado por sus lecturas de Marx y Engels, empezó a estudiar Historia en la Universidad de Londres. A finales de los cuarenta, inició una investigación doctoral titulada «The Parisian Wage-earning Population and the Insurrectionary Movements of 1789-1791» («La población asalariada parisina y los movimientos de insurrección de 1789-1791»); terminó el doctorado en 1950. Pero eran tiempos difíciles. En 1949 perdió su trabajo de profesor por su actividad política y la intransigencia de la Guerra Fría le impidió acceder a ningún puesto universitario. Sin embargo continuó investigando, animado por sus camaradas intelectuales, especialmente por los hombres y mujeres que conoció como miembro activo del Grupo de Historiadores del Partido Comunista (1946-1956). Finalmente consiguió un trabajo de profesor en un instituto de secundaria de Londres.

El Grupo de Historiadores del Partido Comunista fue la incubadora de la tradición historiográfica marxista británica. En él había figuras como Rodney Hilton, Christopher Hill, Eric Hobsbawm, John Saville, Dorothy Thompson y E. P. Thompson; todos ellos, al igual que Rudé, se convir-

tieron en reconocidos académicos. Individualmente, todos hicieron destacadas aportaciones a su respectivo campo de estudio; colectivamente, hicieron profundas aportaciones tanto a la historia social como a la teoría histórica.

Siguiendo la gran hipótesis de Marx y Engels que afirmaba que «la historia de todas las sociedades que han existido hasta ahora es la historia de las luchas de clase», los historiadores marxistas británicos centraron sus estudios –desde los medievalistas hasta los modernos– en el tema de la «transición del feudalismo al capitalismo». Comprometidos con el movimiento laborista y con las políticas socialistas, trabajaron de abajo arriba para recuperar las vidas que llevaban largo tiempo ignoradas, así como las luchas de campesinos, artesanos y clases trabajadoras que cambiaron la historia. En conjunto, sus obras presentaron una crónica original de la construcción de la Gran Bretaña moderna, basada en la lucha de clases, que ha servido tanto para remodelar democráticamente la memoria, la conciencia y la imaginación histórica popular británica, como para inspirar e influenciar a historiadores de todo el mundo.

El propio Rudé realizó una significativa aportación al Grupo. Organizado en «secciones temporales», las dos principales secciones del Grupo se centraban en los siglos XVI-XVII y en el siglo XIX, es decir, en la Revolución inglesa y la Revolución industrial, respectivamente. Como recuerda Eric Hobsbawm: «[El siglo XVIII era] una tierra de nadie entre las dos secciones más florecientes del Grupo, simplemente no había nadie que supiera mucho sobre este periodo, hasta que George Rudé, un explorador solitario, se adentró en el periodo de John Wilkes»[3].

Al mismo tiempo, las investigaciones de archivo que Rudé llevó a cabo en París le permitieron conocer al más importante estudioso de la Revolución francesa, Georges Lefebvre, y a sus discípulos, Albert Soboul y Richard Cobb.

Lefebvre era, en esencia, heredero de la tradición republicana y liberal de la historiografía revolucionaria que, tradicionalmente, había visto la Revolución en términos eminentemente políticos y había presentado la crónica de unos acontecimientos en los que «el pueblo» –al que no se estudiaba o definía satisfactoriamente– derrocaba al Antiguo Régimen. Sin embargo, Lefebvre, simpatizante del marxismo, empujó el estudio de la Revolución en una dirección histórico-social (fue él quien acuñó el término «historia desde abajo»). La investigación que desplegó sobre el campesinado y las protestas urbanas transformó de forma espectacular el estudio de la Revolución y sirvió para inspirar y dar autoridad a los estudios de Soboul sobre los *sans-culottes* parisinos, a los de Cobb sobre los «ejércitos revolucionarios» y los *sans-culottes* en las provincias, y a los de Rudé sobre las «multitudes revolucionarias». Lefebvre se interesó mucho por los proyectos de Rudé, y Soboul, Cobb y Rudé se hicieron amigos íntimos (Lefebvre se refería a ellos como los «tres mosqueteros»). Tanto Soboul como Rudé honrarían a su mentor profundizando en la interpretación marxista de la Revolución y enfatizando la importancia de la estructura de clases en los acontecimientos[4].

En los cincuenta, Rudé publicó una serie de innovadores artículos sobre las protestas que se produjeron en Londres y París en el siglo XVIII (que luego se recopilaron en el volumen *Paris and London in the Eighteenth Century*). Por uno de estos artículos, «The Gordon Riots: A Study of the Rioters and their Victims» («Los disturbios de Gordon: estudio de los alborotadores y sus víctimas») (1956), recibió el muy prestigioso Premio Alexander[5]. Aun así, no le ofrecieron ningún puesto en la universidad hasta 1960, cuando, finalmente, recibió una invitación de la Universidad de Adelaida. A los cincuenta años de edad dejó Inglaterra, junto con Doreen, para irse a Australia (aquello también coincidió con su salida del Partido Comunista).

A partir del momento en el que se convirtió en profesor universitario, la carrera académica de Rudé floreció. Escribió 15 libros, editó otros dos, y firmó numerosos artículos, ensayos y críticas[6]. Gozó del reconocimiento y del afecto de sus estudiantes universitarios por sus extraordinarias cualidades como profesor y mentor, que sin duda había cultivado durante sus muchos años de profesor de instituto. Tras diez años en el hemisferio sur, se trasladó a la Universidad Sir George Williams (hoy la Universidad de Concordia) en Montreal, Canadá. También en los años setenta, fue Profesor Invitado en la Universidad de Columbia, la Universidad de Stirling, la Universidad de Tokio y el College of William and Mary. Enseñó en Canadá hasta 1987. Tras jubilarse a los setenta y siete años de edad, Rudé y su esposa establecieron su residencia permanente en Inglaterra. Allí continuó escribiendo, mientras se lo permitió su salud, hasta su muerte en 1993.

IDENTIDADES: «EL ROSTRO DE LA MULTITUD»

Rudé comentó en una ocasión que «cualquiera que sea la imagen que ha proyectado el siglo XVIII, no ha sido nunca la imagen de una era del hombre corriente». De hecho, lo que ahora conocemos de este siglo sobre la experiencia de la gente corriente se debe en gran medida a sus innovadoras investigaciones sobre las multitudes del París revolucionario y el Londres hanoveriano. Tal como lo expresó su colega, el historiador Asa Briggs, Rudé reveló «el rostro de la multitud».

Rudé realizó la crucial constatación de que el hecho de que el *menu peuple* francés y los *lower orders* ingleses estuvieran excluidos de sus respectivas comunidades políticas nacionales no significaba que no tuvieran intereses, quejas, ideas y aspiraciones, o que carecieran de los medios para expresarlos. La devolución de la identidad histórica a aquellos que habían sido desdeñados o negados por los poderes

del pasado y del presente se convirtió en su gran obsesión histórica. Al hacerlo, desafiaba unos preceptos que, desde hacía largo tiempo, habían sido aceptados por escritores de izquierdas y de derechas.

Rudé tuvo que enfrentarse en primer lugar a la concepción conservadora, que llevaba tiempo vigente, sobre la multitud revolucionaria francesa. En sus *Reflexiones sobre la Revolución Francesa* (1790), Edmund Burke describió a la muchedumbre como «la multitud porcina». Más tarde, el historiador francés Hippolyte Taine superó a Burke al referirse a los participantes en aquellas multitudes como «la escoria de la sociedad», «bandidos», «ladrones», «salvajes», «mendigos» y «prostitutas». Sin embargo, Rudé también tuvo que enfrentarse a la visión liberal tradicional que sostenía que la multitud revolucionaria era la personificación de «todas las virtudes populares y republicanas», el mismísimo espíritu de *«le peuple»*[7].

Observó que, tradicionalmente, tanto conservadores como liberales habían proyectado sus propias fantasías políticas y/o temores sobre la multitud, sin plantearse previamente las preguntas históricas básicas. No atribuía esto a una pereza académica. Afirmaba, más bien, que tanto los historiadores de derechas como los de izquierdas habían mirado a la multitud revolucionaria «*desde arriba,* desde el estrado de la sala del Comité de Salvación Pública, la tribuna de la Asamblea Nacional o el Club Jacobino, o desde las columnas de la prensa revolucionaria»[8].

Rudé se encontró con una serie de actitudes e ideas históricas similares en relación con las multitudes del Londres hanoveriano. Horace Walpole, por ejemplo, presentó a los alborotadores de Gordon como un grupo «formado principalmente por aprendices, convictos y por todo tipo de forajidos»; un juicio de valor del que Rudé todavía encontraba

ecos en el trabajo de historiadores que escribieron casi un siglo y medio después[9].

En respuesta a las generalizaciones vagas o parciales de sus predecesores, Rudé formuló las preguntas que ellos no habían planteado: «¿qué?, ¿quién?, ¿cómo? y ¿por qué?»; especialmente «¿quién?» y «¿por qué?». Sin embargo, comprendió que no era lo mismo plantear estas preguntas que responderlas. En primer lugar, dependía de la disponibilidad de fuentes documentales adecuadas: tanto fuentes tradicionales, como «memorias, correspondencia, panfletos, periódicos, informes parlamentarios y actas»; como no tradicionales, por ejemplo «informes policiales, carcelarios, hospitalarios y judiciales; registros parroquiales de nacimientos, muertes y matrimonios; registros de asistencia pública; tablas de precios y salarios; censos…».

La necesidad de estas últimas es tanto pragmática como política: la necesidad práctica se debe a que probablemente las otras fuentes no den las respuestas a «¿quién?» y «¿por qué?»; la política a que, al tratarse de los documentos de las clases altas y de las clases gobernantes (y sus funcionarios), con toda probabilidad nos iban a ofrecer la perspectiva «desde arriba». Los participantes en acciones multitudinarias «pocas veces dejan constancia documental en forma de memorias, panfletos o cartas»[10]. Rudé también comprendió que para responder a las preguntas más fundamentales había que intentar ver las cosas de forma crítica, de abajo arriba, es decir, desde la perspectiva de las personas de la calle y los talleres.

¿Qué respuestas encontró en los archivos? En el caso de Francia, descubrió que las multitudes revolucionarias provenían en su inmensa mayoría de los «*sans-culottes:* los dueños de los talleres, los artesanos, los asalariados, los tenderos y los pequeños comerciantes de la capital». Y en el caso de Inglaterra descubrió que las multitudes estaban «gene-

ralmente compuestas por asalariados (oficiales, aprendices, peones y "criados"), artesanos, tenderos y comerciantes». En otras palabras, las multitudes, tanto las parisinas como las londinenses, estaban compuestas por trabajadores, no por «la escoria de la sociedad».

Rudé continuó con esta labor de reivindicación de la presencia y el papel histórico de las clases obreras en *El capitán Swing,* un libro escrito con Eric Hobsbawm que trataba sobre los movimientos de los trabajadores agrícolas en la década de 1830. La unión del conocimiento crítico de Hobsbawm sobre el desarrollo del capitalismo, «las rebeliones primitivas» y los «destructores de máquinas»[11], y la íntima relación de Rudé con la «multitud preindustrial», así como sus habilidades para la investigación y el análisis de documentos de archivo, hizo que *El capitán Swing* fuera, y siga siendo, una obra de investigación histórica verdaderamente notable e impresionante.

Hobsbawm y Rudé se dividieron la redacción de los capítulos. Hobsbawm se encargó de los capítulos de introducción, antecedentes, desarrollo y conclusión, y Rudé de los que trataban sobre los detalles y la «anatomía» de la sublevación, así como de los que hablaban de «la represión y las secuelas». Pero aprendieron el uno del otro y en las primeras líneas del libro encontramos reflejado el interés de Rudé por las identidades de los trabajadores agrícolas:

> *Hodge* (nombre típico de campesino inglés), *The Secret People (La gente secreta), Brother to the Ox (El hermano del buey).* Su falta de elocuencia, nuestra propia ignorancia, están simbolizados en los mismos títulos de los pocos libros que han intentado recrear el mundo del labrador inglés del siglo XIX. ¿Quiénes eran? Salvo las lápidas y los hijos, no dejaron nada que los identificara, pues la maravillosa superficie del paisaje británico, el trabajo de sus arados, palas y tijeras de podar y los animales que cuidaron no conservan ninguna firma o marca como las que dejaban los albañiles en las catedrales. Sabemos poco de ellos, porque vivieron en un tiempo que para nosotros es remoto. Sus contemporáneos más elocuentes sabían poco más, en parte porque como urbanitas desconocían la vida del campo o no les interesaba en absoluto, en parte porque, como gobernantes, no se les per-

> mitía entrar en el cerrado mundo de las clases inferiores, o porque, al pertenecer a la clase media rural, lo despreciaban… Por lo tanto, este libro se ocupa de la difícil labor, que hoy en día –y con razón– tienta a muchos historiadores sociales, de reconstruir la mentalidad de un grupo de gente anónima e indocumentada, con el fin de entender sus movimientos, que tan solo se encuentran someramente documentados[12].

Otros historiadores han escribo sobre «Swing»[13]. Sin embargo, como explicaban Hobsbawm y Rudé, había más que contar y nuevas preguntas que plantearse sobre los hechos: «Sobre las causas y los motivos, sobre su forma de comportamiento social y político, sobre la composición social de los que participaron en ellos, sobre su relevancia y sus consecuencias».

Aunque ya no eran campesinos, los trabajadores agrícolas vivían en un orden social que seguía siendo «tradicional, jerárquico, paternalista y, en muchos aspectos, reticente a aceptar del todo la lógica del mercado». Sin embargo, en las décadas que precedieron a 1830, aquella sociedad rural experimentó importantes cambios a raíz de un extraordinario desarrollo agrícola, seguido de unas recesiones transitorias. Los cambios incluyeron la enajenación de las tierras que les quedaban a los labradores, así como modificaciones en sus contratos de arrendamiento; en resumen, se intensificó la proletarización. La reducción de la relación entre el granjero y el trabajador a un vínculo económico despojó al labrador de «aquellos modestos derechos consuetudinarios a los que consideraba que tenía derecho como hombre (aunque fuera un hombre subordinado)». Y, sin embargo, los trabajadores agrícolas eran «proletarios solo en el sentido económico más general», pues la naturaleza de su trabajo y el orden social en el que vivían y pasaban hambre inhibían el desarrollo de «las ideas y métodos de autodefensa colectiva que los urbanitas tuvieron la oportunidad de descubrir».

Sin embargo, instigados por la crisis económica de 1828-1830, y estimulados por los ejemplos de las revoluciones que se produjeron en Francia y Bélgica en 1830, los trabajadores agrícolas empezaron a expresar sus exigencias por medio de «cartas fogosas y amenazantes, folletos y carteles incendiarios, y, especialmente, de la destrucción de distintos tipos de maquinaria». Sus exigencias –«obtener un salario mínimo de subsistencia y poner fin al desempleo rural»– parecían ser únicamente económicas. Sin embargo, Hobsbawm y Rudé demostraron que, aunque el levantamiento nunca llegara a ser revolucionario (y aunque los trabajadores nunca solicitaran una reforma territorial), sí que había un objetivo de mayor alcance: «La defensa de los derechos consuetudinarios que le correspondían al hombre pobre del campo, como inglés libre por nacimiento, y la restauración del orden social estable que los había garantizado (o al menos eso es lo que parecía en retrospectiva)»[14].

El capítulo «¿Quién era Swing?» es especialmente impresionante en su análisis de la información. Frente a las predecibles afirmaciones de observadores contemporáneos e historiadores posteriores, Rudé y Hobsbawm descubrieron que «los alborotadores eran, por lo general, hombres jóvenes u hombres que acababan de entrar en la mediana edad, la inmensa mayoría de ellos veinteañeros o treintañeros»; y, además, «la proporción de hombres casados que había entre los insurrectos también era elevada». De hecho, en general, las pruebas «sugieren un grado relativamente alto de estabilidad y "respetabilidad" entre los alborotadores». En la conclusión al capítulo afirman:

> En conjunto, los labradores de 1830 merecen totalmente la buena reputación que les dieron sus patrones. No eran criminales: relativamente pocos tenían ni el más mínimo historial penal a sus espaldas. Pero creían en el «derecho natural» –el derecho al trabajo y a ganar un salario de subsistencia– y se negaban a aceptar que las máquinas, que les arrebataban este derecho, recibieran la protección de la ley. En ocasiones, invocaban a la autoridad de la justicia o del gobierno –e incluso del rey y de Dios mismo–

para justificar sus ideas y sus acciones, puesto que, como la mayoría de los «rebeldes primitivos», y como sir John Hampden 200 años antes, estaban firmemente convencidos de que la justicia –y hasta la ley– estaba de su lado[15].

El capitán Swing no solo ofrecía una reinterpretación de los orígenes del movimiento de los trabajadores agrícolas, así como de sus prácticas y objetivos: también ofrecía un nuevo punto de vista sobre los efectos y consecuencias del movimiento. Hobsbawm y Rudé sostenían que la ignorancia y los mitos tradicionales que sostenían que el movimiento había sido un fracaso se debían en buena parte a los prejuicios urbanos de los historiadores de los movimientos sociales. Reconocían que el levantamiento había sido un fracaso en el sentido de que no había logrado restaurar el antiguo orden social, ni tampoco –salvo durante un breve periodo– había hecho mucho por mejorar el nivel de vida de los trabajadores. No obstante, argumentaban que en un importante aspecto el movimiento de los trabajadores agrícolas sí que había tenido éxito: «Las máquinas trilladoras no volvieron a utilizarse a tan gran escala como antes. De todos los movimientos de destrucción de máquinas (ludismo) del siglo XIX, el de los desamparados y desorganizados labradores resultó ser el más eficaz»[16].

Es posible que los labradores creyeran realmente que la ley estaba de su lado. Mas los jueces ante los que se presentaron creían lo contrario. Tal como muestran Hobsbawm y Rudé: «En total se juzgó a 1.976 prisioneros, se sentenció a muerte a 252 (aunque 233 de estas sentencias fueron conmutadas, sobre todo por deportación, algunas por prisión), se deportó a 505 (de los cuales 481 fueron embarcados). Ningún otro movimiento de protesta de este tipo –ni ludita, ni cartista, ni sindicalista– tuvo que pagar un precio tan alto»[17].

La elaboración de los capítulos «La represión» y «La deportación» (a Australia de los trabajadores condenados) le

inspiró a Rudé sus dos estudios primarios siguientes: *Protest and Punishment: The Story of the Social and Political Protesters Transported to Australia, 1788-1868 (Protesta y castigo: La historia de los protestantes sociales y políticos deportados a Australia)* y *Criminal and Victim: Crime and Society in Early Nineteenth-Century England (Criminal y víctima: Crimen y sociedad en la Inglaterra de principios del siglo XIX).* En estas obras también buscó fervientemente la restauración de las identidades de los explotados y los oprimidos[18].

IDEOLOGÍAS: «DEVOLVERLE EL PENSAMIENTO A LA HISTORIA»

Además de enfrentarse y refutar opiniones que llevaban largo tiempo vigentes sobre quiénes constituían realmente las multitudes del París y el Londres del siglo XVIII, Rudé sabía que tenía que ocuparse de las ideas concomitantes sobre la dirección y el propósito de las acciones de la multitud. Tenía que plantearse la pregunta de «¿por qué?». Hay que destacar que su respuesta fue cambiando y desarrollándose en sus muchas exploraciones y que, a lo largo del proceso, fue volviéndose cada vez más democrática.

En «The Motives of Popular Insurrection» («Los motivos de la insurrección popular») (1953), Rudé llamó la atención sobre el hecho de que para Taine y muchos otros historiadores «la multitud revolucionaria es una muchedumbre sin conciencia, totalmente incapaz de pensamiento político, empujada a la rebelión por la perspectiva de un botín fácil o por incentivos monetarios». En «The London "Mob"» («La multitud londinense») (1959), Rudé comentaba sobre este tema: «Aunque aceptaran que el hambre podía haber impulsado a las multitudes, [los contemporáneos] estaban aún más dispuestos a creer que el deseo de saquear o conseguir bebida era el factor principal de tales disturbios; cualquier clase de conciencia política, por rudi-

mentaria que fuera, no se tomaba en consideración seriamente. Como los «alborotadores» tenían fama de corruptos, el soborno [con su correspondiente acusación de «conspiración»] realizado por las partes interesadas se consideraba estímulo suficiente para desencadenar un disturbio o una rebelión»[19].

Aunque las propias investigaciones de Rudé desvelaran que los líderes de las multitudes solían provenir de las clases altas, no de las propias clases bajas, también mostraron que las suposiciones conservadoras sobre las motivaciones de las multitudes eran erróneas. Pero ¿cuáles eran las motivaciones de la «gente corriente» que participaba en las acciones de la multitud? ¿Eran las suyas propias o simplemente aquellas de sus líderes de clases más altas?

En sus estudios de la década de 1950 y principios de la década de 1960, Rudé solía llevar a cabo sus análisis en términos socio-psicológicos. Lo hacía, en parte, para abrir la disciplina histórica al pensamiento de las ciencias sociales (el estudio del comportamiento colectivo se realiza a menudo –entonces y ahora– desde un punto de vista socio-psicológico y, en concreto, el estudio de la motivación se ha asociado con la disciplina de la psicología social). Observamos, por lo tanto, que utiliza expresiones como «las necesidades e impulsos más profundos de la "multitud"» y «penetrar en las mentes de sus participantes»[20]. Sin embargo, no recurrió únicamente a la ciencia social contemporánea, sino también a la obra de su mentor Lefebvre, quien también había mostrado un profundo interés en el desarrollo de una psicología social histórica. En palabras de Lefebvre: «La historia social puede, por lo tanto, no limitarse a la descripción de los aspectos externos de las clases antagonistas. También debe tratar de entender la perspectiva mental de cada una de las clases»[21].

Como marxista que era, Rudé enfocó el problema de la motivación de forma «materialista». En su primera obra, examinó los posibles vínculos entre la privación económica y los disturbios sociales y descubrió que la protesta popular respondía, en apariencia, a las fluctuaciones de los precios y los salarios. Sostenía que esto ilustraba el hecho de que los motivos de las multitudes y de sus participantes no eran un mero reflejo de las aspiraciones de sus líderes de clase alta[22]. En sus siguientes libros sobre París y Londres, respectivamente, continuó afirmando que el «motivo más constante de insurrección popular durante la Revolución, como lo fue durante la totalidad del siglo XVIII, fue la acuciante necesidad del *menu peuple* de tener pan barato y en cantidad, así como otros productos esenciales», y que «las pruebas que muestran una concordancia entre la fluctuación de los precios de la comida y determinadas fases del movimiento de "Wilkes y libertad" en la metrópolis son mucho más tangibles que las de otros factores»[23].

A través de estos argumentos, Rudé parecía reducir las causas de las acciones de la multitud a un determinismo económico. Y, sin embargo, no trataba a la multitud de una forma unidimensional. Siempre exploraba otros motivos materiales, menos inmediatos, y tanto en *The Crowd in the French Revolution* como en *Wilkes and Liberty* describía el desarrollo político de las multitudes de París y Londres. Tal como lo explicaba, en la educación política de las multitudes revolucionarias y «wilkitas» participaban la burguesía revolucionaria y las clases medias políticamente activas que imbuían al *menu peuple* y a las *lower orders,* respectivamente, de sus ideas políticas.

Enumeraba claramente las diversas formas en las que los líderes burgueses franceses transmitían ideas radicales, como «los derechos del hombre» y «la soberanía del pueblo», al *menu peuple.* Aunque la alfabetización no era habitual

entre las clases trabajadoras, mucha gente sabía leer, y a menudo leían panfletos políticos en voz alta a sus camaradas analfabetos en tabernas y en reuniones. El «adoctrinamiento» de los *sans-culottes* se producía, además, a través de su participación en la Guardia Nacional y en diversos clubes, sociedades y comités locales. A esto hay que añadir el hecho de que las discusiones y debates que se producían en «lugares de reunión públicos, talleres, bodegas, mercados y tiendas de alimentación» hacían que «las ideas se extendieran y las opiniones se moldearan»[24].

En aquel momento, Rudé parecía tener una concepción elitista –«leninista», en términos marxistas– de la educación política: por sí solos, los *sans-culottes* tan solo eran capaces de llevar a cabo una lucha económica, cualquier cosa más radical o política requería del liderazgo y las ideas de los intelectuales burgueses. No obstante, Rudé mismo expresó ciertas reservas sobre esta teoría. Insistía en que los *sans-culottes* suscribían las ideas revolucionarias «porque parecían corresponderse con su propio interés en la lucha por la destrucción del Antiguo Régimen y la protección de la República», y que asimilaban esas ideas a su manera. Por otra parte, puesto que su experiencia e intereses eran distintos de los de la burguesía revolucionaria, con el tiempo sus diferentes concepciones de los «derechos del hombre» y la «soberanía del pueblo» tensaron la «alianza»[25]. Además, el *menu peuple* poseía unas ideas propias que a menudo tenían que ver con la protección o restauración de sus derechos tradicionales: «Los *sans-culottes* intervinieron en todas las fases importantes de la Revolución, no para renovar la sociedad o para remodelarla de acuerdo con una nueva estructura, sino para reclamar derechos tradicionales y defender unos mínimos que creían en peligro por las innovaciones que introducían los ministros, los capitalistas, los especuladores, los «mejoradores agrícolas» o las autoridades municipales[26].

Al igual que sucedió en París antes de las luchas revolucionarias, los movimientos populares ya estaban en marcha en Londres antes de las campañas «¡Wilkes y libertad!» de la década de 1760, campañas en las que la clase media y los trabajadores se reunieron para apoyar al periodista y político John Wilkes (a Wilkes le estaban procesando –muchos decían «persiguiendo», por la similitud de estas palabras en inglés– por imprimir «calumnias sediciosas contra el rey Jorge III y sus ministros», y mucha gente veía los esfuerzos del gobierno británico para silenciarle como una seria amenaza contra los derechos de todos los ingleses nacidos libres). De hecho, Rudé argumentaba que el Londres del siglo XVIII era, en realidad, más turbulento que el París prerrevolucionario y que los *lower orders,* o «clases inferiores de personas», se caracterizaban en realidad por tener una mayor conciencia política que sus homólogos franceses. Explicaba que esto no se debía únicamente al legado de las luchas revolucionarias inglesas del siglo XVII, sino también al hecho de que la «clase media» inglesa estuviera socialmente más próxima a los *lower orders* de lo que lo estaban sus homólogos franceses a los *sans-culottes,* por lo que les resultaba más fácil influirles y educarles políticamente[27].

En *Wilkes and Liberty* Rudé trataba la cuestión de la motivación en varios niveles. Reconocía, una vez más, la notable relación que había entre las motivaciones materiales de los *lower orders* y la protesta «wilkita», pero enfatizaba que estas no eran suficiente explicación para el movimiento: «Hay que mirar más allá, y tener en cuenta un conjunto de factores políticos, sociales y económicos, en el que influyeron los cambios sociales subyacentes de la época, la crisis política de 1761, la devoción tradicional a los "principios de la Revolución" y la propia astucia, experiencias y personalidad de Wilkes[28].

Hay que prestar especial atención al análisis que realiza Rudé sobre la forma en la que Wilkes apela a la gente corriente en sus batallas por la libertad de prensa y las libertades políticas. En primer lugar, la experiencia de Wilke representaba, o personificaba, la experiencia política y la creciente sensación de injusticia que había estado extendiéndose tanto entre las clases medias como entre las bajas. Además, Wilkes potenciaba enormemente su «imagen pública» abrazando con gran habilidad y persistencia los principios de la libertad, con declaraciones que se remontaban a la Revolución inglesa y aprovechaban las ideas que la gente corriente tenía sobre los derechos del hombre inglés para movilizarla.

Las acciones de las multitudes «wilkitas» tenían, por lo tanto, un carácter más «político» que aquellas relacionadas específicamente con el precio del pan o con disputas salariales o industriales. Aun así, Rudé no exageraba la conciencia política de la multitud y sus participantes: «Tuvo que pasar tiempo, por supuesto, hasta que estos movimientos de los estratos inferiores de la sociedad se impregnaran de un conjunto de ideas y de unos principios políticos y hasta que la idea de "libertad" empezara a adoptar formas más tangibles, como las peticiones de Parlamentos anuales o de una ampliación del derecho al voto, demandas que ya habían sido expresadas por comerciantes y propietarios (la "clase media"), pero aún no por los pequeños artesanos, los oficiales y los asalariados urbanos»[29].

Reconocía que en las acciones de la multitud había violencia. Sin embargo, como señalaba, la misma cultura del Londres hanoveriano era violenta y «la violencia de los pobres era en parte un reflejo de la violencia de sus gobernantes y de las personas que estaban en mejor posición social»[30]. Además, a diferencia de la violencia de los estratos más altos, la de las acciones de la multitud solía dirigirse

contra la propiedad, no contra las vidas. Su investigación reveló posteriormente que incluso en la más «reaccionaria» de las acciones de la multitud, la de los disturbios de Gordon contra los católicos romanos, la multitud no dirigió la violencia contra toda la comunidad católica romana, sino contra los ricos y propietarios. Había una clara distinción de «clases» en los acontecimientos. Rudé no pretendía afirmar que la religión fuera únicamente una excusa para ocultar los verdaderos motivos, pero sí que pedía que se reconociera la dimensión de «protesta social» que había en los disturbios[31].

En una crítica a *Wilkes and Liberty,* el historiador A. J. P. Taylor escribió que Rudé «le había devuelto el pensamiento a la historia y había restaurado la dignidad del hombre». Sin duda Rudé merecía el elogio. Sin embargo, a pesar de todas sus simpatías democráticas, había presentado una imagen bastante elitista de la «política» de las clases trabajadoras. A las clases bajas les atribuía motivaciones materiales; a las clases altas, las ideas originales. Retrataba la posición de los primeros como meramente defensiva y reaccionaria y la de los segundos como progresista. Por lo tanto, presentaba la educación política de las clases bajas como algo que dependía de que entre ellos se propagaran las ideas «progresistas» de la burguesía revolucionaria o de la clase media. Rudé fue lo suficientemente inteligente como para reconocer el problema y, en la época de *El capitán Swing* –tan al principio de su carrera–, empezó a desplazar sus intereses académicos desde las «motivaciones» hasta las ideas, ideologías y creencias[32].

A finales de la década de los sesenta, entró una nueva generación en la historia y en las ciencias sociales, una generación de eruditos, políticamente inspirados por la Nueva Izquierda, que estaba deseando participar en el desarrollo de la historia social y el estudio de la «historia desde abajo».

Rechazando la ortodoxia y el economismo de la Vieja Izquierda, recuperaron una «tradición marxista occidental» que se interesaba más por las ideas y los asuntos culturales que por la economía política[33]. Aunque él mismo no pertenecía a la Nueva Izquierda (Rudé y muchos de sus compañeros historiadores marxistas británicos eran un puente entre las dos generaciones), Rudé aprendió mucho de estos jóvenes historiadores y científicos sociales, a los que su erudición radical también les había servido de inspiración. Se podría decir que la mayor virtud intelectual de Rudé fue que nunca dejó de ser un estudiante de historia. Sus nuevas lecturas le llevaron tanto a introducirse más profundamente como a alejarse mucho más de la historia europea de lo que lo había hecho hasta entonces. Siguiendo su modelo, Rudé exploró también la tradición marxista occidental, especialmente las obras del intelectual italiano Antonio Gramsci (1891-1937)[34].

Enfrentándose a la derrota fascista del movimiento laborista y socialista italiano en los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, Gramsci había hecho una reflexión crítica sobre los problemas de la formación, la lucha y la conciencia de clase; así como sobre el papel de los intelectuales, la ideología y las ideas en la política y el cambio social. Y, dada la estructura de la sociedad italiana, se interesó necesariamente en la política, la conciencia y las ideas no solo de los trabajadores industriales, sino también de los campesinos y los artesanos, por lo que sus escritos despertaron de una forma especial el interés de un historiador como Rudé, cuyo trabajo estaba centrado en el siglo XVIII.

En los setenta, Rudé publicó una serie de maravillosos artículos que culminaron en su libro *Ideology and Popular Protest*[35]. No cabe duda de que seguía siendo un materialista, pero ahora le otorgaba una importancia mucho mayor a las ideas populares, «el elemento tradicional «inheren-

te», una especie de ideología «natural» basada en la experiencia directa, la tradición oral o la memoria popular».

Rudé valoraba la cultura popular, pero no la celebraba. De hecho, aunque expresara un mayor aprecio y una nueva y más completa comprensión de la cultura e ideas de las clases bajas, seguía siendo crítico y realista respecto a su capacidad para fomentar e inspirar las luchas «revolucionarias». Evitó el elitismo, pero no se convirtió en un populista. Más bien, al estudiar las ideas de Gramsci, Rudé exploró la dialéctica entre las ideas o ideologías «inherentes» de la gente corriente, que, según decía, tendían a ser reaccionarias, y las ideas o ideologías de los intelectuales, que solían ser más «estructuradas» o «derivadas» y que, históricamente, habían sido o bien avanzadas y progresistas, o bien reaccionarias y retrógradas.

Argumentaba, basándose en la historia, que para que las protestas populares pasaran de ser un intento de restauración de un orden anterior (y, por lo general, idealizado) a una exigencia de cambio y reforma –es decir, para que pasaran de ser actos de resistencia y rebelión a actos de un carácter más revolucionario– la ideología inherente del pueblo debía ser complementada por una ideología radical más estructurada. Por lo tanto, las posibilidades políticas dependían en gran medida de la capacidad de los intelectuales radicales para formular sus propias aspiraciones e ideas en consonancia con las de la gente corriente.

Rudé dejó bien claro que estos tipos de ideología no estaban separados por un «Muro de Babilonia» y que, además, por lo general, había un «considerable solapamiento entre ellas: entre las creencias "inherentes" de una generación, que forman parte de su cultura básica, hay muchas creencias que en una generación anterior provenían originalmente de una fuente externa»[36]. Y yo añadiría que esto tal

vez sucedía también con las ideas más estructuradas de los intelectuales en relación con las de la gente corriente.

A Rudé le importaba la teoría, pero la historia le importaba aún más. En *Ideology and Popular Protest (Ideología y protesta popular),* describía la evolución de la ideología de la protesta popular durante el proceso de transición del feudalismo al capitalismo. Al escribir sobre los campesinos de la Europa medieval, bajo el dominio del absolutismo europeo, y de América Latina; sobre las revoluciones inglesa, americana y francesa (1789, 1830 y 1848); y sobre Inglaterra en la Revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, además de incluir un «Epílogo» sobre la Gran Bretaña industrial, prácticamente presentó la historia de la lucha por la libertad moderna.

Los estudios de Rudé sobre las multitudes nunca se olvidaban de hablar sobre la cuestión del «legado» de la protesta popular. En sus escritos sobre la ideología de la protesta popular lo planteaba de una forma muy directa: «¿Qué pasa con la ideología popular cuando una rebelión o revolución ha sido reprimida? ¿Desaparece y ha de empezar de nuevo desde el principio?». A esto responde:

> No, evidentemente, no… Tras la derrota de los *levellers* ingleses en Burford en 1649, de los *sans-culottes* parisinos en 1795 o –en este caso– de los *ouvriers* franceses en junio de 1848… la reacción puede ser suficientemente contundente, como lo fue en el protectorado de Cromwell y la Restauración inglesa, y en el imperio napoleónico y la Restauración francesa. Pero también es cierto que la tradición revolucionaria popular, que había llevado una existencia subterránea apartada de la vista de las autoridades, sobrevivió y volvió a emerger con nuevas formas y bajo nuevas condiciones históricas cuando el «pueblo» –los receptores del anterior sistema de ideas «derivadas»– experimentó también un «cambio de tendencia»[37].

HISTORIAS: «TODA LA HISTORIA HA DE ESTUDIARSE DE NUEVO»

Puesto que mucho de su trabajo como pionero implicaba un enfrentamiento con interpretaciones y mitos que llevaban largo tiempo vigentes, tanto en la izquierda como en la

derecha, a Rudé le invitaban regularmente a reflexionar sobre la práctica de la historia y de otros historiadores. Podría decirse que, en relación con este tema, su obra más importante fue *Debate on Europe, 1815-1850 (Debate sobre Europa),* un estudio crítico sobre la historiografía de los acontecimientos y transformaciones de la historia política, económica, cultural y social europea, desde el fin de las guerras napoleónicas hasta las revueltas de 1848[38].

La introducción de Rudé presentaba una original reflexión sobre las variables o factores que moldean el pensamiento de los historiadores en su diálogo con el pasado y con otros historiadores. Señalaba la importancia determinante de los orígenes nacionales, generacionales y de clase, del diferente interés y acceso a distintos tipos de documentación, y de los distintos puntos de vista sociales, políticos y religiosos sobre las interpretaciones, y afirmaba tajantemente que «no existe una única verdad universal o aprendida en la escritura de historia y que "las variedades de la historia" (empleando la expresión de Fritz Stern) deben atribuirse principalmente a factores como estos». Además, por buena que sea la historia, siembre puede ser modificada, puesto que «aunque el pasado no cambie, el presente sí» y, por lo tanto, el diálogo entre el pasado y el presente se transforma a medida que nuestra experiencia hace que surjan nuevas preguntas, intereses y filias que introducimos en el pasado. Sin embargo, también insistió en que hay autores cuyas obras, por diversas razones, siguen siendo valiosas para los estudiosos incluso generaciones después. Citó, en concreto, a Tocqueville, a Marx y a Engels[39].

Como marxista, Rudé enfatizaba, lógicamente, los «valores socio-políticos» que dividían a los académicos y situaba a los historiadores en tres «facciones» distintas: *«Tory»* o «conservadora», *«Whig»* o «liberal», y «socialista» o «marxista». Esto lo hacía porque los valores «no solo afectan al

tipo de libros que escriben los historiadores y a los juicios que efectúan, sino también a los documentos que consultan, a las preguntas que se plantean y los métodos que utilizan para preparar y presentar sus respuestas». Comentaba –tal vez de forma algo ingenua– que la llegada de la «nueva» historia social había atenuado la «polémica» que durante tanto tiempo había caracterizado el pensamiento histórico del periodo 1815-1850. Sin embargo, eso no significaba que la práctica histórica estuviera más «libre de valores» que antes, haciendo referencia, por ejemplo, al acalorado debate que por aquel entonces se estaba produciendo entre los liberales y los marxistas sobre las consecuencias de la Revolución industrial en el nivel de vida de la clase obrera. También afirmaba con optimismo que la aplicación de nuevos métodos y enfoques teóricos, junto con el acceso a nuevos archivos, había hecho que se produjera un verdadero progreso en el estudio histórico[40].

Rudé siempre promovió que los historiadores hicieran uso de los métodos y descubrimientos de las ciencias sociales. Él mismo recurrió a los de la sociología y la psicología social. Por supuesto, ahora que los historiadores se han sumergido en todo, desde la econometría hasta la semiótica, sus «préstamos» de las ciencias sociales no parecen algo tan radical. Sin embargo, Rudé intentó «socializar» la historia sin, por ello, descartar la historia «política», pero no puede decirse lo mismo de todas las corrientes de historia «interdisciplinar» que han surgido en la generación pasada.

En cualquier caso, Rudé consideraba mucho más valiosas las ideas y descubrimientos de Marx y Engels que las de los científicos sociales modernos:

> Lo que aprendí de Marx no fue únicamente el hecho de que la historia tiende a progresar a través de un conflicto de clases sociales, sino el hecho de que sigue un patrón que puede descubrirse y que se mueve hacia adelante (no hacia atrás, en círculos o por medio de sacudidas inexplicables), por lo general desde una fase de desarrollo más baja a una más alta. Tam-

> bién aprendí que las vidas y las acciones de la gente corriente son la verdadera materia de la historia y que, aunque los factores principales son los «materiales» –más que los ideológicos o los institucionales–, las propias ideas se convierten en una «fuerza material» cuando penetran en la conciencia activa del hombre. Además, de Engels aprendí también que toda la historia ha de estudiarse de nuevo.

Por lo tanto, para Rudé, un historiador marxista ve la historia en términos de «lucha de clases» no con un «estrecho determinismo económico», y considera que «el conflicto es un medio normal y saludable de lograr el progreso»[41]. Rudé aplicó esto tanto en su obra primaria como en sus escritos «sintéticos», como *Revolutionary Europe [La Europa revolucionaria, 1783-1815], Robespierre [Robespierre], Europe in the Eighteenth Century [Europa en el siglo XVIII],* y *The French Revolution [La Revolución francesa].*

Puede que *La Europa revolucionaria* sea la obra «sintética» más importante de Rudé si tenemos en cuenta que más de 100.000 estudiantes y lectores han utilizado sus páginas como introducción al periodo. Es un libro maravillosamente escrito. En su estudio de la Revolución francesa y sus consecuencias en el ámbito europeo, Rudé ofrece una crónica y un análisis, junto con claras discusiones sobre los muchos temas que han fascinado a los historiadores desde la caída de la Bastilla. En concreto, cultivó una «gran narrativa» republicano-marxista en la que concebía la Revolución como una «fusión de dos movimientos diferentes, el burgués y el popular [las clases obreras]».

La forma en la que presentaba la Revolución, estructurada por clases, también subyacía en la narrativa de *Robespierre,* un libro que definió como un «retrato político», más que una biografía personal. Rudé retrató al jacobino y revolucionario francés, Robespierre, con extremada empatía (se podría decir que con excesiva empatía), lo cual, a la fuerza, nos hace pensar que su ideología –que mostraba una admiración por la Revolución soviética de 1917– tenía que ver

con sus percepciones favorables hacia el revolucionario ruso, Lenin. Rudé presentaba a Robespierre como un «demócrata revolucionario político» que defendía tenazmente la «soberanía del pueblo», pero que, trágicamente, tuvo que ocuparse de las contradicciones inherentes en la alianza revolucionaria que se produjo entre jacobinos y *sans-culottes.*

Rudé concluía su texto con la siguiente valoración histórica de la Revolución y la personal contribución de Robespierre a la misma:

> La Revolución francesa fue uno de los grandes hitos de la historia moderna. Ningún otro acontecimiento, por sí solo, hizo tanto por destruir la sociedad aristocrática y las instituciones absolutistas de la Antigua Europa y sentar las bases de las nuevas sociedades –tanto las burguesas como las socialistas– que, desde entonces, han surgido de sus cenizas en todos los continentes. Robespierre realizó una aportación crucial a esta transformación: no solo como destacado líder de la Revolución en todas las fases de sus años más vigorosos y creativos; sino también como el primer gran triunfador de la democracia y los derechos de las personas. Y esto es, en esencia, lo que consolida su grandeza[42].

En su siguiente importante obra de síntesis, *Europe in the Eighteenth Century «Europa en el siglo XVIII. La aristocracia y el desafío burgués»,* Rudé presentó un retrato exhaustivo del siglo que había hecho suyo: de la población y la estructura social, a la política, el gobierno y las ideas, a las luchas que les dieron forma (el subtítulo del volumen señalaba claramente su carácter de clase). En la introducción se refirió a los «numerosos escollos» a los que uno se enfrenta al escribir la historia de ese siglo «prerrevolucionario». Entre ellos estaba el peligro de reducir todo lo que se percibía a un mero «prefacio» de la «Era de la Revolución» (empleando el término de Eric Hobsbawm); la eterna cuestión del «excepcionalismo» británico; y el problema historiográfico general de «cómo hacer hincapié en el movimiento –que es la materia prima de la historia– a la vez que en las condiciones, la “estructura” y la “continuidad”». Rudé reconocía que había puesto especial énfasis en los «conflic-

tos internos» y advertía a sus lectores de que «había prestado una gran atención a las clases sociales, a las instituciones e ideas que generan y a las tensiones y conflictos que surgen entre ellas. Estas, por su parte, están presentadas como un importante elemento del proceso histórico»[43].

Naturalmente, Rudé intentó incorporar la «historia desde abajo», así como a las clases populares, en su narrativa y análisis, aunque estaba limitado por el escaso conocimiento histórico que había entonces sobre el tema. Por lo tanto, se centró en los conflictos del siglo XVIII que se produjeron entre la aristocracia y la burguesía, si bien, como demuestra, los antagonismos y conflictos entre las clases populares y las clases altas –tanto la burguesía como la aristocracia– determinaron también de forma crucial el devenir de los acontecimientos. Asimismo, Rudé sostenía que fue el miedo de las clases medias hacia «las personas de clase inferior» lo que logró evitar eficazmente que movilizaran a la gente corriente contra la aristocracia, lo cual favoreció al Antiguo Régimen. Teniendo en cuenta su ideología, un rasgo muy destacado, e incluso sorprendente, de *Europe in the Eighteenth Century* es la forma, no del todo negativa, en la que presenta a los gobernantes y a las clases dominantes. Esto lo vemos, por ejemplo, en su descripción de los «déspotas ilustrados» y de sus esfuerzos reformistas, que estaban destinados al fracaso «mientras las clases privilegiadas conservaran sus poderes y pudieran obstruir su aplicación»[44].

El último proyecto de Rudé fue *The French Revolution [La Revolución francesa].* Como siempre, ofrecía una crónica apasionante, análisis accesibles e inteligentes enfoques sobre cuestiones historiográficas. Al escribirlo a sabiendas de que estaba a punto de celebrarse el bicentenario de la Revolución (1789-1989), y resuelto a defender la interpretación republicano-marxista, Rudé capturó de forma hermosa el carácter heroico y trágico de la agitación y las luchas re-

volucionarias. Y previendo tanto las inminentes luchas y agitaciones que iban a producirse en 1989 desde Europa del Este hasta China y aquellas que sin duda se producirían tras el triunfo global del capitalismo, escribió: «La batalla por los Derechos del Hombre continúa y, a pesar de los nuevos eslóganes, líderes y rostros, hoy tiene la misma relevancia que tenía hace 200 años»[45].

Los estudios de George Rudé sobre el siglo XVIII francés, inglés y europeo y sus estudios sobre la Era de la Revolución, que abarcan desde Europa hasta Norteamérica y Australia, han influido a la investigación histórica y a las ciencias sociales en todo el mundo. Aunque los historiadores se han aventurado por caminos temáticos, metodológicos y teóricos que probablemente Rudé no habría seguido, se puede afirmar que las iniciativas de Rudé para movilizar las metodologías y enfoques teóricos de las ciencias sociales y ampliar los horizontes sociales del pasado han abierto el camino a buena parte de la escritura histórico-social de la generación pasada.

Además, Rudé y sus compañeros historiadores marxistas británicos realizaron aportaciones críticas a la memoria, conciencia e imaginación democráticas. Al leer sus palabras sobre las movilizaciones de los *sans-culottes* en la Revolución, sobre el movimiento «Wilkes y libertad» en el Londres hanoveriano, sobre las luchas de los trabajadores agrícolas en una Inglaterra en proceso de industrialización, y sobre las aspiraciones e ideas de las protestas de los trabajadores en las sociedades preindustriales del Mundo Atlántico, inevitablemente recordamos las palabras que le escribió Antonio Gramsci a su hijo, desde una prisión fascista en 1937: «Supongo que te debe gustar la historia, como me gustaba a mí cuando tenía tu edad, porque habla de hombres vivos y de todo lo relacionado con los hombres, con la mayor cantidad de hombres posible, con todos los hombres

del mundo que se unen en la sociedad y trabajan y luchan y apuestan juntos por una vida mejor»[46].

El estudio de la historia sigue «progresando» y la obra de Rudé, por el mismo hecho de fomentar nuevos estudios, ha sido cuestionada críticamente por una generación más joven de historiadores sociales. Sin embargo, incluso si sus estudios sobre la protesta popular y sus textos sobre la historia del siglo XVIII llegan a ser reemplazados por nuevas investigaciones e interpretaciones, o superados tras una radical revisión de nuestras grandes crónicas, las contribuciones de Rudé seguirán siendo relevantes como ejemplos de escritura histórica pionera y comprometida. Además, mientras continuemos planteándonos las preguntas históricas centrales –«¿quién?» y «¿por qué?»– seguiremos honrando su trabajo, pues él sería el primero en afirmar que «toda la historia ha de estudiarse de nuevo».

Harvey J. Kaye

[1] G. Rudé, *The Crowd in the French Revolution* (Oxford, 1959); *Wilkes and Liberty* (Oxford, 1962); *The Crowd in History, 1730-1848* (Nueva York, 1964); *Captain Swing* (Londres, 1969); y *Paris and London in the Eighteenth Century* (Londres, 1970).

[2] G. Rudé, *Revolutionary Europe, 1783-1815* (Londres, 1964); *Europe in the Eighteenth Century: Aristocracy and the Bourgeois Challenge* (Londres, 1972); *The French Revolution* (Londres, 1988).

[3] E. J. Hobsbawm, «The Historians' Group of the Communist Party», en *Rebels and Their Causes,* ed. M. Cornforth (Londres, 1978), p. 37. También sobre los marxistas británicos, véase H. J. Kaye, *The British Marxist Historians* (Oxford, 1984), especialmente pp. 222-232.

[4] Para conocer la visión de Rudé sobre la obra de Lefebvre, véase su ensayo «Georges Lefebvre as Historian of Popular Protest in the French Revolution» (1960), en H. J. Kaye (ed.), *The Face of the Crowd: Selected Essays of George Rudé* (Londres, 1988), pp. 107-114, y la «Introducción» de Rudé a la obra clásica de Lefebvre, *The Great Fear of 1789* (París, 1932; ed. ingl.: Londres, 1973). Véase también la obra de Lefebvre *The Coming of the French Revolution* (Princeton, 1947). De la obra de Albert Soboul recomendamos *The Parisian Sans-Culottes and the French Revolution* (París, 1958; ed. ingl.: Oxford, 1964) y *The French Revolution, 1787-1799* (París, 1962; ed. ingl.: Londres, 1974). Si se quiere consultar la obra de Richard Cobb, véase *The People's Armies* (1961; ed. ingl.: New Haven, Connecticut, 1987) y *Paris and its Provinces* (Oxford, 1975).

[5] G. Rudé, «The Gordon Riots: A Study of the Rioters and their Victims», está reimpreso en *Paris and London,* pp. 268-292.

[6] Para una bibliografía completa de la obra de Rudé, véase F. Krantz (ed.), *History from Below: Studies in Popular Protest and Popular Ideology in Honour of George Rudé* (Montreal, 1985), pp. 35-40.

[7] *The Crowd in the French Revolution,* pp. 2-3, y *The Crowd in History,* pp. 7-8.

[8] *The Crowd in the French Revolution,* p. 5 (la cursiva es mía).

[9] *Paris and London,* p. 280, y *Wilkes and Liberty,* p. 15.

[10] *Ibid.,* pp. 11-12.

[11] Véase E. J. Hobsbawm, *Primitive Rebels* (Mánchester, 1959) y *Labouring Men* (Londres, 1968). Sobre Hobsbawm, véase Kaye, *The British Marxist Historians,* pp. 131-176.

[12] E. J. Hobsbawm y G. Rudé, *Captain Swing,* pp. xvii-xviii.

[13] Véase J. Hammond y B. Hammond, *The Village Labourer* (Nueva York, 1970 ed.).

[14] E. J. Hobsbawm y G. Rudé, *Captain Swing,* pp. xx-xxiii

[15] E. J. Hobsbawm y G. Rudé, *Captain Swing,* pp. 201-211.

[16] *Ibid.,* pp. 242, 258. Véase también el artículo de Rudé «English Rural and Urban Disturbances on the Eve of the First Reform Bill, 1830-1831», en Kaye (ed.), *The Face of the Crowd,* pp. 167-182.

[17] *Ibid.,* pp. 224-225.

[18] G. Rudé, *Protest and Punishment* (Oxford, 1978) y *Criminal and Victim* (Oxford, 1985).

[19] *Paris and London,* pp. 136-137, 302-303.

[20] *Ibid.,* p. 304.

[21] G. Lefebvre, «Revolutionary Crowds» en J. Kaplow (ed.), *New Perspectives on the French Revolution* (Nueva York, 1965), p. 175.

[22] *Paris and London,* esp. «Prices, Wages and popular movements in Paris during the French Revolution», pp. 163-177.

[23] *The Crowd in the French Revolution,* p. 200, y *Wilkes and Liberty,* p. 188.

[24] *The Crowd in the French Revolution,* pp. 210-219.

[25] *Ibid.,* pp. 199-200.

[26] *Ibid.,* pp. 225.

[27] G. Rudé, «Society and Conflict in London and Paris in the Eighteenth Century» (1969), en *Paris and London,* pp. 35-60.

[28] *Ibid.,* p. 190.

[29] *Ibid.,* p. 197.

[30] *Ibid.,* p. 12.

[31] *Paris and London,* pp. 289-290.

[32] Véase crítica de *Wilkes and Liberty* escrita por A. J. P. Taylor en el periódico *Guardian* del 9 de febrero de 1962. G. Rudé, *Ideology and Popular Protest,* p. 7.

[33] El estudio más exhaustivo del marxismo occidental lo ofrece Martin Jay en su libro *Marxism and Totality* (Oxford, 1985).

[34] Sobre Gramsci y los historiadores marxistas británicos véase H. J. Kaye, *The Education of Desire: Marxists and the Writing of History* (Nueva York, 1992).

[35] *Ideology and Popular Protest* (Nueva York, 1980).

[36] *Ibid.,* pp. 1-31.

[37] *Ibid.,* p. 28.

[38] G. Rudé, *Debate on Europe, 1815-1850* (Nueva York, 1972).

[39] *Ibid.,* pp. viii, x, xiii.

[40] *Ibid.,* pp. xii, xv; 69; y 179, 210-212.

[41] Véase G. Rudé, «Marxism and History» y «The Changing Face of the Crowd», en H. J. Kaye (ed.), *The Face of the Crowd,* pp. 43-72.

[42] G. Rudé, *Robespierre* (Londres, 1975), p 213. Véase también su artículo «Robespierre as Seen by British Historians» en Kaye (ed.), *The Face of the Crowd,* pp. 115-123.

[43] G. Rudé, *Europe in the Eighteenth Century,* pp. 11-14.

[44] *Ibid.,* pp. 239; y 129-135, 140, 153-154, 305.

[45] *The French Revolution,* p. 178.

[46] Para una selección de las *Letters from Prison* de Gramsci, véase la colección editada por Lynne Lawner (Nueva York, 1973).

PRIMERA PARTE

EUROPA EN VÍSPERAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

I. LA SITUACIÓN SOCIAL

En vísperas de la Revolución francesa, la imagen que ofrecía Europa tenía contrastes acusados y variados, entre el Oeste desarrollado y el Este sin desarrollar; entre el auge del comercio, la industria y la demografía y el relativo estancamiento de la agricultura y entre la amplia difusión de noticias e ideas y el tenaz conservadurismo de las relaciones sociales y las instituciones políticas.

Para una gran parte de Europa, el siglo XVIII trajo consigo una creciente prosperidad comercial. Era inevitable que, debido a su situación geográfica y a sus posesiones coloniales, las grandes potencias marítimas se llevaran la parte del león en el comercio internacional. Cerca del 90 por 100 del oro y la plata de las minas de Latinoamérica pasaron de manos de sus originales propietarios, España y Portugal, a Inglaterra, Francia y las Provincias Unidas, cuyas grandes compañías comerciales transportaban mercancías de Asia, África y las dos Américas. La flota mercante de Inglaterra aumentó de 3.300 barcos, con un arqueo de 260.000 Tm., en 1702, a 9.400 barcos, con un arqueo de 695.000 Tm. en 1776; hacia 1800, su capacidad de transporte había aumentado unas cinco o seis veces con respecto al siglo anterior. Francia, el mayor rival comercial de Gran Bretaña, había incrementado casi cuatro veces su comercio con otros países europeos entre 1716 y 1788, y el valor de sus exportaciones de conjunto, en el mismo periodo, aumentó de 120 millones a 500 millones de libras francesas. Arthur Young, durante sus viajes a Francia, en vísperas de la Revolución, se sorprendía ante los claros signos de prosperidad del gran puerto atlántico de Burdeos, más grande, según él, que el de Liverpool, cuyo comercio de esclavos le proporcionaba ganancias del orden de 300.000 libras esterlinas al año. La prosperidad de ambos puertos es una muestra de la importancia creciente del comercio colonial: hacia 1789, el volu-

men del comercio con América ascendía a una tercera parte del valor de todas las operaciones comerciales de Gran Bretaña y solamente a un poco menos en el caso de Francia. Mientras tanto, aunque las Provincias Unidas seguían siendo una importante potencia comercial, estaban quedando rezagadas en la carrera con sus dos mayores y más poderosos rivales; ya en 1739 se decía que en el puerto de Londres descargaban el doble de barcos que en Ámsterdam. Sin embargo, los holandeses seguían aventajando a los ingleses y franceses en las operaciones bancarias y financieras internacionales. En 1777 eran propietarios del 40 por 100 de la Deuda Nacional de Gran Bretaña. «Los efectos comerciales sobre Ámsterdam –escribe un historiador moderno– tenían el mismo valor en el siglo XVIII que los de Londres en el XIX»[1].

Comparadas con las de estos gigantes, las flotas mercantes de otros países europeos parecían insignificantes, aunque Suecia tenía en 1787 una flota de 1.200 hombres, en continua expansión, y Prusia casi un millar. Desde la época de Pedro I, Rusia había ampliado rápidamente la red de su comercio internacional, había abierto a Occidente los cada vez más amplios puertos del Báltico y se había convertido en el mayor proveedor de hierro de Europa; hacia 1790 embarcaban para Gran Bretaña unas 26.000 toneladas métricas al año de sus yacimientos de los Urales. Mientras tanto, Venecia, en otro tiempo ciudad orgullosa de su comercio, estaba en plena decadencia, y el Imperio otomano continuaba considerando el comercio como una actividad inadecuada para una gran nación militar.

La expansión del comercio de ultramar no había afectado aún demasiado a la economía interna europea. El comercio interior seguía atrasado y limitado, estancado a causa de los deficientes medios de comunicación y, en países como Francia, de la abundancia de tarifas restrictivas y de-

rechos de peajes impuestos por los gobiernos y los terratenientes privilegiados. En la mayor parte de los países, la agricultura continuaba aferrada a las tradiciones del pasado y con frecuencia no podía hacer frente a las necesidades de una población en crecimiento; en Sicilia, en otros tiempos granero de la Europa meridional, el hambre de 1763-1764 arrebató 30.000 vidas; en 1770, se contaron 150.000 personas muertas de hambre en Sajonia y 80.000 en Bohemia. Las condiciones podían variar grandemente dentro del mismo país: los primitivos latifundios andaluces ofrecían un vivo contraste con las haciendas relativamente prósperas e independientes de las provincias vascongadas, Cataluña y algunas partes de Aragón. En Francia, los fértiles pastos de Normandía destacaban frente a los áridos campos de Bretaña y la pobreza pertinaz de los *métayers* de las Cevenas y el Lemosín. En el este de Europa, por lo general, apenas se habían explotado las riquezas potenciales del suelo y seguía practicándose un cultivo primitivo y tradicional. Solamente en algunas partes de la Europa occidental se habían dado pasos decisivos para revolucionar las técnicas y aplicar métodos científicos al cultivo rotativo y a la agricultura en general, lo cual sentó las bases para la agricultura a gran escala del futuro. Esta «revolución» había comenzado en los Países Bajos a mediados del siglo XVII y, poco después, atrajo la atención e incitó los ánimos de los agrónomos y aristócratas franceses e ingleses que visitaban el país. En Francia se habían implantado los nuevos métodos en algunas provincias gracias al esfuerzo conjunto de aristócratas emprendedores, la escuela de los fisiócratas o «economistas» y el propio gobierno, que, en 1761, creó un Ministerio de Agricultura. En Inglaterra se habían adoptado estos métodos en muchos condados hacia 1780, como consecuencia de los experimentos de Townshend, Tull y Bakewell y de la labor de divulgación de Arthur Young. Sin embargo, en ningún lugar estaba la agricultura tan avanzada como en los

Países Bajos austriacos, donde todavía en 1802 se calculaba que la producción era superior en un 30 por 100 a la de Inglaterra.

En casi todos los países, la industria seguía desempeñando una función cada vez más importante en la vida económica nacional. En Francia, en vísperas de la Revolución, los talleres textiles de Van Robais, en Abbeville, empleaban a 12.000 trabajadores, y 4.000 la compañía minera de Anzin, mientras en París había unas 50 «fábricas» que ocupaban de 100 a 800 trabajadores. En Rusia, Catalina II fomentó e incrementó la producción de hierro, que ya había aumentado mucho en tiempos de Pedro el Grande, y, hacia 1793, la industria de velas de barcos de Kaluga empleaba a casi 9.000 trabajadores. En la Bohemia rural, 200.000 personas, en su mayoría mujeres, trabajaban en el hilado del lino; solo el pequeño cantón de Glarus, en Suiza, contaba con más de 30.000 hilanderas. Pero esta actividad industrial se llevaba a cabo, en su mayor parte, de acuerdo con métodos anticuados y tradicionales. La fábrica moderna y el capitalismo industrial apenas habían hecho su aparición. El modo predominante de producción era el sistema a domicilio, realizado en las aldeas por innumerables familias de campesinos, bajo la distante vigilancia de comerciantes y fabricantes. En las ciudades, la unidad de producción predominante era aún el pequeño taller, residuo de la época medieval y sometido a las regulaciones restrictivas de los gremios. La gran fábrica, cuando existía, era un apéndice del sistema a domicilio, donde los obreros eran más numerosos y trabajaban bajo la vigilancia directa del Estado o del patrón. Las grandes empresas de Europa oriental y la industria textil de Bohemia se mantenían mediante el trabajo forzoso de siervos, criminales, vagabundos, expósitos o soldados, e incluso empresas de las dimensiones de los talleres textiles Van Robais y las reales «fábricas» del Estado en Francia eran una especie de Bastilla industrial, donde los trabajadores estaban suje-

tos a una disciplina casi militar. Únicamente en Inglaterra se había dado, hacia 1783, un paso importante hacia la introducción, a gran escala, de maquinaria que ahorraba trabajo y hacia la «Revolución» industrial. Pero también allí la fábrica moderna estaba en sus comienzos. La industria del algodón, en rápida expansión, solía utilizar aún la energía hidráulica y, hacia 1780, la máquina de vapor de Watt había apenas comenzado a aplicarse a las hilaturas y a la minería. Aun así, Gran Bretaña ocupaba una posición destacada con respecto a sus competidores industriales, que habría de concederle ventaja en la próxima serie de guerras con Francia. Con todo, también era aún un país agrícola en gran medida, en el que casi la mitad de la población vivía de la agricultura; y, subrayando este hecho, Arthur Young señalaba, en 1770, que de la renta nacional de Inglaterra 66 millones de libras esterlinas procedían de la tierra, comparadas con los 37 millones que procedían del comercio y la industria.

Al despertar del desarrollo económico siguió la difusión de las ideas, que fueron creando poco a poco una «opinión pública» informada y socavando las formas tradicionales del pensamiento y las lealtades en muchas partes de Europa. El primer periódico mensual se fundó en La Haya en 1686 y el primer diario inglés en 1702. En Francia no existían diarios antes de que comenzara a aparecer el *Journal de Paris* en 1777. Pero, en los últimos decenios anteriores a la Revolución, el crecimiento de la prensa periódica en el Oeste fue impresionante. Los debates parlamentarios ingleses se recogían con amplitud en la prensa desde 1771 y, hacia 1782, se publicaban en Londres 18 periódicos. En Francia, en 1779, existían 35 diarios y periódicos de todas clases y 169 en 1789. El número de periódicos impresos era aún mayor en Alemania, aunque, con frecuencia, tenían corta vida, debido a la censura y a la represión. Incluso en España, la *Gaceta de Madrid* y el *Espíritu de los mejores Diarios* servían de medios de divulgación a la nueva «filosofía». En-

tre tanto, los escritos de la Ilustración, los folletos y tratados de Montesquieu y Rousseau, la *Enciclopedia* de D'Alembert y Diderot, la *Historia* de Raynal y las sátiras y cartas políticas de Voltaire habían comenzado a circular bajo diversos aspectos y traducciones más allá de París y los Países Bajos, para llegar a un público nuevo y cada vez más numeroso de lectores curiosos en Roma, Madrid, Bruselas, Berlín, Viena y San Petersburgo. La Revolución americana y sus consecuencias produjeron una rica cosecha de folletos y comentarios que ampliaron aún más los horizontes de la «opinión pública» ilustrada y culta[2].

Tanto el desarrollo económico como la difusión de las nuevas ideas iban a modificar profundamente las actitudes y las relaciones predominantes entre las clases, en el contexto de la guerra y la revolución. No obstante, la sociedad europea seguiría siendo esencialmente jerárquica y «aristocrática». En casi todos los países la aristocracia del dinero, la sangre o la posición social dominaba a sus conciudadanos en calidad de gobernadores y magistrados, señores feudales y monopolizadores de privilegios fiscales y altos cargos del ejército, la Iglesia o la administración; o, sencillamente, por su prosperidad material, su vida ostentosa, su nivel cultural y sus viajes al extranjero. «En todos los Estados de Europa –escribía el abate Raynal en 1770– hay una clase de hombres que adquieren desde su infancia una supremacía independiente de su carácter moral.» Si bien esta generalización era cierta, incluso en la mayor parte de las monarquías y repúblicas occidentales más avanzadas, existían, por supuesto, considerables diferencias de riquezas, posición social y poder entre las clases terratenientes y la aristrocracia y entre los varios países de Europa. En España, grandes como los duques de Osuna, Alba y Medinaceli, dueños de vastos *señoríos* en Andalucía y Cataluña, así como los grandes *títulos de Castilla,* tenían una posición y una importancia sociales muy diferentes de los *caballeros,* de rango inferior; y,

más aún, de la gran masa de *hidalgos* de la pequeña nobleza rural empobrecida, quienes formaban, con mucho, la parte más numerosa de una nobleza que, por entonces, constituía casi un 5 por 100 de la población total. Diferencias similares podían encontrarse en Francia, donde aproximadamente los 4.000 aristócratas de la Corte, propietarios de grandes tierras y titulares de obispados y altos puestos del ejército, miraban desdeñosamente a los *hobereaux* rurales, mucho más numerosos, quienes, desprovistos de capital y de los medios adecuados para encauzar sus vigorosas energías, lo único que podían hacer, por regla general, era apegarse al recuerdo de su pasada grandeza, a sus apellidos, títulos y apreciadas exenciones fiscales. También en Polonia la pequeña nobleza campesina, que formaba el grueso del millón de *szlachta,* podía reclamar todos los privilegios legales de la nobleza, dominar las posesiones de los campesinos, ejercer el derecho a vestir con atavíos diferentes y ocupar asientos reservados en la iglesia; pero su pobreza la posicionaba con frecuencia en situación de ignominiosa dependencia de la docena de grandes magnates, los Radziwill, Czartoryski o Potocki que, realmente, dirigían el país. De forma similar, los propietarios de grandes tierras, como los Esterhazy y los Palffy, en Hungría, y los Cherkaskiis, Galitzines y Dolgoroukis, en Rusia, reclamaban un predominio social de hecho, si bien no siempre nominal, sobre una masa de nobles rurales altivos, aunque pobres y semianalfabetos. En Venecia existían distinciones de diverso orden entre las antiguas familias empobrecidas, o *Barnabotti,* y los nuevos ricos, quienes, más recientemente, habían adquirido títulos de nobleza, al inscribir sus apellidos en el Libro de Oro. Solamente en Inglaterra existía una clara distinción verbal y legal entre la pequeña nobleza (*squires* y *gentry,* diputados tradicionales por los condados en el Parlamento) y los 200 grandes terratenientes, que ocupaban altos cargos en el gobierno, se sentaban en la Cámara de los Lores, poseían bur-

gos y amañaban las elecciones para la Cámara de los Comunes.

También se distinguía Gran Bretaña (distinción que solo compartía con las Provincias Unidas) en que su aristocracia no gozaba sino de los restos de antiguos privilegios e inmunidades legales. Un noble podía aún reclamar el derecho a ser juzgado por sus «pares»; pero, en lo restante, par y plebeyo eran iguales ante la ley y, legalmente, tenían el mismo acceso a la función pública e igual derecho a la propiedad de la tierra, el comercio o la industria. Únicamente los hijos mayores de los pares eran considerados nobles. Existía una tendencia creciente a que solo la riqueza y el poder y prestigio que esta conllevaba determinara la estratificación social. En todas partes la aristocracia disfrutaba de importantes privilegios legales como, por ejemplo, derechos de jurisdicción y exención de distintos tipos de impuestos. En Francia, la *noblesse* no formaba una casta tan cerrada como en muchos Estados de la Europa central u oriental, por no estar registrada como cuerpo social ni excluida de todas las profesiones y oficios. Además, el acceso a la nobleza todavía permanecía abierto a plebeyos enriquecidos, aunque cada vez en número más restringido, mediante la compra de cargos hereditarios. De esta forma, desde el siglo XVII, la nueva y rica nobleza administrativa, la *noblesse de robe,* había crecido hasta llegar a desafiar las pretensiones y la posición social de la antigua *noblesse d'épée* (nobleza de espada); por esta época suministraba la mayor parte de los secretarios de Estado e intendentes y, lo que era más importante, dominaba los *parlements,* las grandes corporaciones legales hereditarias que, en tiempos de gobiernos débiles o divididos y de gobernantes indolentes o ineptos, podían ejercer una considerable autoridad política. Tal autoridad solo estaba en manos de unos pocos miembros de la más antigua nobleza, pero, como propietarios, aún ejercían muchos de los privilegios de los antiguos señores feudales: de-

rechos de justicia local y vigilancia de las aldeas; derechos de monopolio, tales como el derecho exclusivo a cazar y poseer molinos, hornos o lagares *(banalités);* y, sobre todo, derecho a recaudar una amplia gama de impuestos, rentas y servicios feudales de sus campesinos. Por añadidura, la nobleza francesa, en conjunto, estaba exenta, en buen grado, de las contribuciones directas. Estaba prácticamente exenta del pago del principal y más oneroso de estos impuestos, la *taille* (que se aplicaba sobre los ingresos estimados y sobre la tierra); también evadía, en gran medida, el pago de su parte del *vingtième* y la *capitation,* establecidos a finales del reinado de Luis XIV para complementar la *taille,* siendo ambos impuestos nominalmente obligatorios tanto para los nobles como para los plebeyos. El clero, cuyos estratos superiores pertenecían casi sin excepción a la nobleza, aún gozaba de mayores privilegios: además de los ingresos procedentes de sus rentas y derechos feudales, como terrateniente, era acreedor al diezmo (que podía alcanzar un doceavo del producto de la tierra), y, por último, se liberaba de sus obligaciones con el Tesoro por medio del pago de un porcentaje relativamente pequeño de sus ingresos en forma de *don gratuit,* o «don voluntario».

Fuera de la Europa occidental, las exenciones y privilegios de la aristocracia tendían a ser mayores y la distancia que separaba a los nobles de los plebeyos a estar definida de modo más claro. En Polonia, hasta 1768, los *szlachta* conservaban poderes de vida y muerte sobre sus siervos; en Hungría, nadie, de no ser noble, podía poseer tierras y, desde 1741, la nobleza gozaba de exención completa de impuestos. En Suecia, los grandes magnates con título formaban una casta cerrada: por la Constitución de 1720 se restringía considerablemente el derecho del rey a aumentar el número de aquellos ennobleciendo a los plebeyos. No sufrieron tales restricciones los gobernantes autocráticos de Prusia y Rusia, quienes, a lo largo de un siglo, habían refor-

mado y redefinido en gran medida las funciones y privilegios de sus aristocracias. En la Prusia de Federico Guillermo I y Federico II, la nobleza se había transformado en una clase hereditaria de funcionarios del Estado, obligados a servir a la monarquía ocupando cargos en el ejército o la administración; a título de compensación, se les concedieron extensas facultades de jurisdicción y fiscalización económica sobre sus arrendatarios y campesinos. En Rusia, Pedro el Grande había llegado aún más lejos al esbozar un riguroso sistema de grados, en el cual los más altos escalones estaban reservados para la clase terrateniente, a la que, a cambio de un periodo de servicio obligado al zar, se le reconocía una posición hereditaria privilegiada y más poder sobre sus siervos. Sin embargo, con sus sucesores se fue rebajando el sistema. En 1762, Pedro III liberó a los grandes nobles de la obligación legal de servir al Estado y, con la Carta de Nobleza de Catalina (1785), el *dvoryanstvo* se convirtió, por lo menos de nombre, en algo muy parecido al tipo francés de *noblesse.*

En algunos países, la preeminencia social de la aristocracia iba emparejada con la autoridad y la responsabilidad que ejercía en la vida política de la nación; en otros, era muy diferente. De un lado había países, como Prusia, en los que el servicio al Estado no solamente era obligatorio, sino que la aristocracia había llegado a considerarlo como un honor; o como Rusia, donde la tradición del servicio al Estado continuaba existiendo aunque ya no fuera obligatorio. Por otro lado, había Estados como Francia, España, las dos Sicilias, Dinamarca y muchos de los pequeños principados alemanes, en los cuales la aristocracia, si bien conservaba sus privilegios y servía a la Corte, había dejado de tener auténtica importancia en los asuntos políticos. En Hungría, los grandes nobles ocupaban los más altos cargos en la Iglesia y la administración y dominaban la asamblea nacional e incluso los miembros más pobres de la pequeña nobleza

campesina, cuyos representantes se sentaban en la Cámara baja de la Asamblea, administraban justicia y recaudaban impuestos en sus distritos. La aristrocracia polaca y sueca había disfrutado de una «edad de oro» durante la mayor parte del siglo. Los nobles polacos fiscalizaban las dietas y las políticas del gobierno, además de nombrar recaudadores de impuestos y de encargarse del gobierno local. Durante cincuenta años, en Suecia, los nobles cabezas de familia habían llevado la voz cantante en las dietas y en el comité secreto de los cuatro estados, y ocupado todos los escaños del Consejo Real. En ambos países se produjo una reafirmación de la autoridad real en 1772, pero en Polonia las dietas siguieron constituyendo una especie de «democracia» de nobles y caballeros rurales, mientras que en Suecia, hasta 1809, no se abrieron los cargos públicos a los miembros de los Estados no privilegiados.

En estos asuntos, la posición de los terratenientes británicos estaba más cercana a la sueca que a la de cualquier otra aristocracia continental. Ciertamente, no disfrutaban de derecho legal o prescriptivo para monopolizar altos cargos y su victoria sobre la monarquía en 1689 fue menos completa que la de los suecos en 1720. Pero mientras compartían el poder con la Corona continuaban ejerciendo un grado notable de influencia real en el gobierno, en ambas Cámaras del Parlamento y en la administración local. La Cámara de los Lores, en su propia condición de cuerpo legislativo y judicial, aún conservaba un grado de autoridad casi igual al de la de los Comunes; además, podía aumentar mucho estos poderes debido a su casi monopolio de los puestos del Gabinete, sus contactos familiares y su propiedad de *pocket boroughs y rotten boroughs.* Como señores de los condados y jueces de paz, terratenientes y miembros de la pequeña nobleza campesina gozaban de una autoridad virtualmente completa en el gobierno local. Es cierto que tanto la influencia real como la radical «de puertas afuera» habían

tratado, desde 1760, de inclinar la balanza del lado de los elementos monárquicos o populares de la Constitución, como estudiaremos más a fondo en el próximo capítulo. La vuelta de Pitt el Joven a las elecciones generales de 1784 se tiene que considerar, al menos en cierta medida, como una derrota para la «aristocracia». Con todo, poco hubo de cambiar la situación general: en 1783, Pitt era aún el único miembro de su propio gabinete que no tenía un escaño en los Lores, y solamente después del Acta de Reforma de 1832 comenzó la aristocracia inglesa a perder su abrumadora ascendencia tanto en el gobierno como en el Parlamento.

Tarde o temprano, el crecimiento de las ciudades y del comercio tenía que trastornar a esta sociedad «aristocrática» y destruir sus defensas. No obstante, la clase creciente de comerciantes y banqueros enriquecidos por el comercio y las operaciones financieras tendía a confundirse con la aristocrática o, por lo menos, a llegar a un acuerdo con ella, antes que a plantearle un reto total. Este fenómeno podía producirse de formas muy diversas: casando a sus hijas con hijos de la nobleza, comprando los cargos o las propiedades, adquiriendo títulos y distinciones, o creando sus patriarcados exclusivos en el gobierno, los gremios o la administración municipales. En la Europa oriental, donde aún había pocas ciudades y los comerciantes constituían una minoría insignificante, este proceso no había llegado muy lejos, pero también aquí un príncipe comerciante como Nikita Demidov, fundador de una gran dinastía de maestros herreros, podía disfrutar del favor del zar, y comerciantes húngaros, como los Henchel y los Haller, podían adquirir títulos de nobleza. Las grandes ciudades comerciales de Alemania –Hamburgo, Leipzig, Frankfurt-am-Main–, así como Berna y Zúrich en Suiza, tenían, desde mucho tiempo atrás, patriarcados de mercaderes nativos, los cuales, con creciente prosperidad, se habían vuelto orgullosamente exclusivistas y celosos de sus distinciones sociales y de sus pri-

vilegios hereditarios. En Prusia, la clase media en aumento encontró el sistema de aplicar sus energías y pretensiones sociales como funcionarios reales dentro de una privilegiada burocracia estatal en rápida expansión. En las Provincias Unidas, un rico patriciado de mercaderes gobernaba las grandes ciudades de Holanda, dominaba sus estados provinciales y enviaba representantes a los Estados Generales que se sentaban al lado de los miembros de una aristocracia de la tierra más antigua, pero también más pobre.

En Francia e Inglaterra, la influencia social de estas clases había adquirido formas distintas. Las costosas aventuras de Luis XIV habían procurado un terreno fértil para los contratistas, comerciantes y financieros franceses. La política real había admitido al servicio del Estado a hijos de hombres enriquecidos por el comercio y las finanzas: Colbert, el más grande de los ministros de Luis XIV, era hijo de un lencero de Reims. Saint-Simon, crítico aristocrático, tachaba a este periodo de *règne de vile bourgeoisie* (un reinado de burguesía vil). En la obra de Molière *Le bourgeois gentilhomme (El burgués gentilhombre),* Monsieur Jourdain casa a su hija con un marqués. Esta era una de las maneras de trepar en la sociedad aristocrática. Posteriormente, grandes financieros y banqueros, como los cuatro hermanos Paris y Samuel Bernard, pudieron incluso, en su calidad de banqueros de la Corte y fundadores de imperios comerciales, «vivir noblemente», por su propia cuenta, y aun superar al común de los cortesanos. En el siglo XVIII, los burgueses ricos construyeron grandes mansiones y compraron propiedades, gracias a las cuales disfrutaron de todos los derechos señoriales adscritos a sus propiedades. Jaurès sostenía que la febril reconstrucción de París, que constituyó un rasgo tan característico del último cuarto de siglo anterior a la Revolución, se debió más a la iniciativa burguesa que a la aristocrática. Unos pocos escogidos se convirtieron en recaudadores generales e hicieron grandes fortunas recaudando los

impuestos reales y administrando las aduanas interiores. Más frecuentemente, los burgueses ricos invirtieron sus fortunas en la compra, para ellos o para sus herederos, de alguno de los numerosos cargos que pudieran quedar vacantes, o ser de reciente creación, en el aparato judicial, la administración central, o el gobierno de una ciudad dotada de fueros. De esta manera, el Estado podía hacer frente a sus deudas, y la rica clase de los comerciantes satisfacer sus ambiciones sociales, adquiriendo títulos y privilegios como miembros de la *noblesse de robe* o de su pariente de provincias, la *noblesse de cloche.* Mientras el Estado fue lo bastante solvente para pagar el interés de los empréstitos y estos canales de ascenso social permanecieron abiertos, las clases financieras y mercantiles francesas se contaron entre los más decididos defensores del trono y de la sociedad aristocrática sobre la que descansaba. En otro capítulo veremos lo que sucedió cuando estos conductos comenzaron a cerrarse.

En Inglaterra, estas clases habían adquirido, por derecho propio, una posición social superior. Enriquecidas por la expansión colonial y comercial y por las guerras de la Commonwealth y la Restauración, fueron las aliadas de la aristocracia y la pequeña nobleza rural en la realización de la «Revolución Gloriosa» de 1688, fundaron el Banco de Inglaterra para identificar aún más sus intereses con los de la Corona y fueron los partidarios más leales en la guerra contra Luis XIV. En ningún otro lugar les resultó tan accesible la sociedad aristocrática; y en ningún otro lado estuvo la misma aristocracia tan estrechamente vinculada a la clase mercantil: los comerciantes se sentaban en los Comunes, al lado de la pequeña nobleza rural, como diputados de los condados; duques y marqueses casaban a sus hijos con las hijas y nietas de comerciantes y banqueros londinenses; y los mismos terratenientes, muy vinculados al comercio, invertían su capital en instalaciones portuarias, minas y pro-

piedades reales. Defoe no exageraba cuando decía, en 1726, que «nuestros comerciantes son príncipes, más grandes, ricos y poderosos que algunos soberanos» y comparaba la «inmensa riqueza» de los hombres que hicieron su fortuna «tras los mostradores» con la decadencia de la pequeña nobleza rural y de muchas «antiguas familias». Walpole podía contar con el firme apoyo de los grandes mercaderes de Londres, saturados de comercio y honores, con el fin de «dejar dormir al león» durante los decenios de 1720 y 1730; incluso cuando, algunos años después, Londres se pasó a la oposición al gobierno, los grandes banqueros y directivos de las compañías de seguros y las sociedades comerciales ultramarinas continuaron apoyando la política de la Corte y la administración. Así pues, aquí, al igual que en Francia, los «intereses monetarios» siguieron siendo los partidarios más decididos del régimen durante la mayor parte del siglo. Únicamente el surgimiento de una nueva clase de mercaderes «intrusos» y de otros de la «clase media», deseosos de acabar con la supremacía de sus rivales, más antiguos, prósperos y privilegiados, fue lo que hizo entrar en conflicto con el rey y el Parlamento a una gran parte de los intereses comerciales: sobre esto trataremos más detalladamente en el próximo capítulo.

Inglaterra presentaba también la peculiaridad de ser la única que se había embarcado en una «Revolución» industrial, creando con ello una clase nueva e independiente de fabricantes privados que comenzaban a enriquecerse con el capital industrial, más que con el mercantil. En Rusia y Bohemia, la fábrica a gran escala estaba, por lo general, en manos del Estado o de los terratenientes que disponían del trabajo de los siervos, más que del *entrepeneur* de la clase media. En las Provincias Unidas, el comercio seguía siendo floreciente, mientras que la fábrica tendía a declinar o a estancarse. En Francia, la manufactura estaba en manos de las grandes empresas estatales, como las reales «fábricas»

de los Gobelinos y la Savonnerie, dirigidas por maestros artesanos en pequeños talleres; o de comerciantes fabricantes que dirigían el trabajo a domicilio de los tejedores e hilanderos en la industria rural. Las dinastías de particulares, como los De Wendel en la industria del hierro y los Van Robais en la textil, eran completamente excepcionales. Solamente en Inglaterra estaba surgiendo una clase diferente de *entrepeneurs* industriales, al filo de las innovaciones técnicas introducidas por los Darby, los Hargreave, Cort, Arkwright y Watt. Así como en su estudio de 1696 Gregory King no mencionaba a los fabricantes, Colquhoun señalaba, en 1803, no menos de 25.000 «fabricantes que empleaban capital en todas las ramas: lana, algodón…». Aunque la fábrica mecanizada se imponía lentamente, ya estaba apareciendo el norte industrial en la orilla de ríos y canales y dejando su impronta en la evolución social. Sus dirigentes, hombres nuevos surgidos del campo y del comercio, como el ceramista Josiah Wedgwood, el maestro herrero John Wilkinson, el calcetero Jedediah Strutt, el cervecero Samuel Whitbread, estaban amasando rápidas fortunas y labrándose un lugar en la sociedad. Por supuesto, a estos hombres, a pesar de su riqueza, les llevó tiempo conseguir que la sociedad «aristocrática» les aceptara en términos de igualdad: James Watt escribía en 1787 que «nuestros caballeros terratenientes nos consideran a los pobres mecánicos igual que a los esclavos que cultivan sus viñedos». También transcurrió largo tiempo hasta que estos hombres comenzaron a adquirir conciencia completa de sus propias posibilidades como nueva fuerza social: hacia 1780 apenas si habían comenzado a ejercer una influencia discernible en la política nacional, ni habían invocado aún las reivindicaciones de Mánchester y Birmingham, que habrían de desempeñar un papel tan importante a la hora de determinar las acciones de los gobiernos en el siglo siguiente.

Como quiera que la tierra seguía siendo la fuente de riqueza por excelencia, el campesino era aún el productor y el trabajador prototípico de la época. Las familias campesinas suponían el 75 por 100 de la población de Prusia y Polonia, el 80 por 100 de la de Francia y quizá 9 de cada 10 familias en Rusia. Estrictamente hablando, no existía una clase campesina claramente definida y coherente, ya que la posición económica y social del campesinado, así como su grado de libertad personal, cambiaron considerablemente de una parte de Europa a otra. En Inglaterra, la aldea medieval hacía mucho tiempo que se había transformado bajo la influencia del comercio, la guerra civil, las ventas de tierras, los cercamientos y la «Revolución» industrial. Los campesinos acomodados –supervivientes del campesinado anterior– constituían una clase en decadencia y, en muchos condados, la aldea había adquirido ya su estructura moderna (terrateniente-arrendatario-trabajador agrícola). Sin embargo, tanto en Irlanda como en las altiplanicies escocesas se habían producido pocos cambios sociales, pues continuaban existiendo las antiguas formas. Fuera de las Islas Británicas, la servidumbre había dejado de existir en un número cada vez mayor de países de la Europa occidental, como los Países Bajos, España, Suiza, Noruega, Suecia y la mayor parte de Francia, Alemania occidental e Italia, en donde se había suprimido aquella institución, bien por ley, bien por cambio de costumbres; sin embargo, en la Italia meridional y en las provincias españolas de Castilla y Andalucía, donde los terratenientes absentistas dejaban sin cultivar enormes latifundios, esta libertad no era más que un beneficio parcial, pues las condiciones de vida del campesinado eran, por lo general, míseras y deplorables. En Francia, aproximadamente, uno de cada cuatro campesinos era propietario de la tierra que trabajaba, algunos en calidad de *laboureurs,* relativamente prósperos, y otros (como afirmaba Arthur Young) «pobres y miserables, debido en gran parte

a las divisiones de sus pequeñas parcelas entre todos los hijos». La mitad, o más, de los campesinos eran aparceros pobres, o *métayers,* quienes no poseían capital alguno y compartían su producción a medias con los terratenientes; finalmente, la cuarta parte eran jornaleros sin tierra o arrendatarios de parcelas diminutas. Menos de uno de cada veinte campesinos –en zonas del Franco Condado y del Neversado– eran siervos, aunque no estaban por completo vinculados a la tierra o privados del derecho a acudir a la justicia real. Si bien sus desventajas legales eran menos opresivas que en muchos otros Estados, los campesinos franceses soportaban una pesada carga impositiva; pagaban el diezmo a la Iglesia, la *taille,* el *vingtième,* la *capitation* y la *gabelle* (impuesto sobre la sal) al Estado y tributaban al *seigneur* de su parroquia, ya fuera laico o eclesiástico, una cantidad variable de obligaciones, servicios y pagos que abarcaban desde la *corvée* (en metálico o en especie) y el *cens* (renta feudal en metálico) hasta el *champart* (renta en especie) y los *lods et ventes* (cargas que gravaban la transferencia de la propiedad); además, si no eran propietarios de la tierra, tenían que pagar por el derecho a utilizar el molino, la prensa o el horno de su señor. La incidencia de estas cargas variaba mucho, al igual que la posición de los campesinos, entre las diferentes regiones del país, pero en años de mala cosecha y depresión resultaban, como ya veremos, vejatorias e intolerables para todos.

En la Europa central y oriental y en algunos países occidentales el campesino era aún un siervo vinculado al suelo, como en los tiempos medievales, sin protección legal contra las exacciones del señor. En Dinamarca, los primeros intentos de abolir la servidumbre se quedaron en la intención (se repetirían, con más éxito, en 1788) y, debido a las ventas extensivas de tierras de la Corona a especuladores, la situación de los campesinos no hizo sino empeorar. En Alemania, si descontamos las zonas occidentales y el estado meri-

dional de Baden (donde se abolió en 1783), también persistía la servidumbre. En Brandemburgo, Sajonia y Prusia oriental, lejos de encontrarse en decadencia, se extendía e intensificaba cada vez más, al paso que los terratenientes reglamentaban la utilización de sus campesinos, con el fin de aumentar la producción de grano, atraídos por los beneficios del comercio exterior: en la Prusia oriental, los campesinos trabajaban tres días por semana –e incluso cinco o seis– para su amo. A medida que el ejército y la burocracia prusianos extendían su campo de acción bajo Federico Guillermo I y Federico el Grande, se permitió a la nobleza empleada en el servicio del Estado que, como ya hemos visto, estrechara su control económico y judicial sobre sus campesinos. También en Rusia se sometió a servidumbre a poblaciones enteras, libres hasta entonces, a medida que aumentaban las exigencias del gobierno a la nobleza rural o a la aristocracia tanto en forma de impuestos como en la de servicio al Estado. «Los campesinos de Ucrania –escribía un erudito visitante inglés hacia 1784– han sufrido últimamente un cambio deplorable y, por un edicto de la emperatriz actual, se han visto reducidos al estado de sus otros súbditos.» En Polonia y Hungría, así como en otras partes de las posesiones de los Habsburgo, los campesinos continuaban sufriendo las vejaciones y las injusticias tradicionales a manos de sus terratenientes, pero únicamente en Rusia la posición legal del siervo iba empeorando. Únicamente en este país podía ser vendido con el resto de las propiedades del terrateniente, como si fuera ganado, o podía ser alquilado o (por un edicto de 1760) exiliado por su señor a Siberia cuando resultaba perezoso o rebelde. Los intentos de José II de abolir la servidumbre en el Imperio austriaco por medio de la *Unterthanspatent* de 1781 supusieron un agudo contraste con todo lo anterior, aunque ya veremos que estos esfuerzos resultaron claramente prematuros.

Como ya hemos visto, por lo general, el crecimiento de la industria dejó una huella más profunda en la vida campesina que en la urbana, contribuyendo a crear una clase obrera, o proletariado, más rural que urbana; concretamente, el predominio de la industria a domicilio convirtió a muchos miles de familias campesinas europeas en tejedores e hiladores temporeros que proveían tanto el mercado interno como el exterior. En todas partes, incluida Europa oriental, las ciudades crecieron considerablemente, extendiéndose a menudo las poblaciones urbanas más allá de los viejos muros medievales, hasta los nuevos suburbios, en respuesta a las necesidades crecientes del comercio, la industria y la administración. Londres, por entonces la ciudad más grande de Europa, tenía, hacia 1780, una población de unos 850.000 habitantes; París, 650.000; Ámsterdam y Viena, 200.000; Madrid, 150.000; Venecia y Milán, 130.000; y aún había otras ciudades que, si bien eran más pequeñas, también crecían con rapidez. Por supuesto, en ellas los grupos gobernantes de la aristocracia, la nobleza rural, los patricios, los comerciantes y los «habitantes principales» constituían una pequeña minoría; la gran masa de los ciudadanos era una población compuesta de pequeños comerciantes, maestros artesanos, oficiales, aprendices, porteadores, trabajadores, criados domésticos y pobres: en resumen, de aquellos a quienes los ingleses de la época llamaban los *«lower orders»* o *«mob»,* los franceses el *menu peuple* y los italianos el *populo minuto* o *populino.* Entre ellos, los asalariados tenían sus propios intereses, como «funcionarios» o productores, aunque en grado variable de un país a otro. En Londres quedaba ya poco de las antiguas tradiciones del taller medieval y tanto los oficiales como los maestros, incluso en la artesanía y en la pequeña manufactura, estaban ya claramente separados, aunque aquí también el maestro comerciante tenía autoridad para impedir que los oficiales «salieran a la calle en épocas de desorden». No obstante,

esta división no era todavía tan clara o distinta en todas partes. Así, en París, el oficial, en muchos gremios, estaba aún muy vinculado al taller y, a menudo, dormía en la casa del maestro, comía a su mesa, e incluso, en ocasiones, se casaba con su hija (o con su viuda) y heredaba su tienda. Estos casos, empero, iban haciéndose cada vez más raros y, a medida que el antiguo sistema de gremios entraba en decadencia y se convertía en el terreno exclusivo de los comerciantes más ricos y de los maestros artesanos, el oficial se veía reducido a la posición de trabajador fijo, con muy escasas posibilidades de llegar alguna vez a maestro.

Por lo tanto, para el oficial, como para los otros asalariados, el nivel de los salarios se fue convirtiendo en creciente preocupación. Pero las «organizaciones» de trabajadores eran reprimidas con gran severidad y algunas, como las que formaron los sastres y sombrereros londinenses y los impresores, trabajadores de la construcción y papeleros franceses, fueron de corta duración y únicamente podían conseguir algún triunfo ocasional. Así, pues, el coste creciente del pan tendía a anular el aumento de los salarios. En Francia, los precios del grano aumentaron en un 60 por 100 entre 1730 y 1789, en tanto que los salarios aumentaban poco más del 22 por 100. En Londres, mientras que los salarios permanecían casi estables, el precio del pan subía de 1,25 peniques, o 1,50 peniques, hasta dos o, incluso, tres peniques la libra en los años de carestía, que cada vez fueron más frecuentes en la segunda mitad del siglo. Por otro lado, los pequeños comerciantes, los maestros de talleres y los artesanos independientes sintieron también el impacto de la subida de los precios de los alimentos, que amenazaban de continuo su subsistencia. De este modo, aunque el problema de los salarios pudiera enfrentarles, los tenderos, los pequeños patronos y los asalariados podían, como consumidores, inclinarse a considerar que sus intereses económicos eran los mismos, y, en tiempos de escasez, a unirse en acción común contra

los mayoristas, los mercaderes y las autoridades de la ciudad. También, en momentos de tensión política que afectaran al pueblo llano en general, los oficiales tenderían a sufrir la influencia y a seguir los pasos de sus maestros. Por razones como estas veremos cómo en París, a lo largo de la Revolución, surge una combinación de fuerzas sociales, peculiar de aquellos tiempos pero no de los nuestros, a la cual se denominó con el apodo común de *sansculottes.*

No es, pues, en las grandes ciudades donde debemos buscar la aparición de una clase obrera independiente o el prototipo del obrero industrial del futuro, sino más bien en las minas de Sajonia y del Delfinado, en las viejas ciudades laneras de los Países Bajos, en las grandes fábricas y arsenales estatales tanto del Este como del Oeste, o en centros de la industria textil francesa como Lyon, Ruán, Lille, Elbeuf y Abbeville. Aquí, aunque la mecanización estaba en su primera infancia, comenzaba ya a aparecer algo así como una disciplina de fábrica y una relación entre patrón y trabajador en la línea de la que se manifestaría en el siglo siguiente. En las zonas industriales del centro y del norte de Inglaterra, donde se introdujeron con rapidez los nuevos artificios mecánicos, este proceso fue mucho más lejos que en ninguna otra parte; y no fue mucho antes de que las nuevas grandes ciudades industriales de Mánchester, Leeds, Sheffield y Birmingham produjeran un proletariado industrial consciente, cuyo modo de vestir, vivir y hablar, y cuyos intereses económicos y actitudes sociales les diferenciarían enormemente de sus empresarios. Pero, fuera de Inglaterra, tales relaciones eran hasta el momento embrionarias, y no desempeñaron un papel significativo en la situación social de Europa en vísperas de la Revolución francesa.

[1] C. H. Wilson, en *The New Cambridge Modern History* VII (1957), p. 44.

[2] Véase R. R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution,* vol. I, *The Challenge* (Princeton, 1959), pp. 242-244.

II. LOS GOBIERNOS Y LOS CONFLICTOS DENTRO DE LOS ESTADOS

Albert Sorel escribía, a propósito de las instituciones políticas del Antiguo Régimen en Europa: «Existían todas las formas de gobierno… y todas ellas se consideraban igualmente legítimas». La afirmación coincide bastante con la realidad. Si bien la forma de gobierno predominante era la monarquía absoluta, en la que la autoridad real prevalecía sobre la de los otros estamentos, había grandes diferencias en la forma en que aquella se ejercía, y en varios Estados la monarquía, lejos de ser absoluta, se había visto limitada por la aristocracia o el Parlamento, o había sido sustituida incluso por formas republicanas. Se daban, por ejemplo, evidentes diferencias entre el funcionamiento de la monarquía absoluta hereditaria en Francia, España, Suecia, Prusia y el Imperio austriaco; solamente en Gran Bretaña existía una monarquía «limitada», o parlamentaria; la monarquía de Polonia era electiva en la práctica, mientras que la austriaca lo era en teoría; la autocracia de Rusia era de un tipo diferente al de las monarquías absolutas de Francia o España y al despotismo oriental de Turquía; y las Repúblicas de Suiza, Génova y Venecia estaban constituidas de manera muy distinta a la República casi monárquica de las Provincias Unidas. No obstante, y aun teniendo en cuenta estas diferencias, todos los gobiernos europeos, en vísperas de la Revolución francesa, eran «monárquicos» o «aristocráticos»: todos ellos tenían en común la estricta limitación de lo que los escritores políticos llaman el elemento «democrático» de la Constitución.

No sorprenden, sin embargo, estas características de los gobiernos, ya que es natural que estos reflejaran, con bastante fidelidad, la sociedad jerárquica y aristocrática que ha quedado descrita en el capítulo anterior. Aunque en todas partes se hacían sentir cada vez más las pretensiones de la

aristocracia, no debe inferirse de ello que todos los países tendieran a formas «aristocráticas» de gobierno, sino, más bien, a formas «monárquicas» que mantuvieran el equilibrio entre las fuerzas en competencia, que podrían convenir mejor a tal sociedad. Por supuesto, la autoridad del monarca era tanto mayor cuanto más débil o de reciente ascendencia social fuera la aristocracia. El ejemplo más acusado de esa situación era el Imperio otomano, en el que la nobleza disfrutaba solamente de los privilegios temporales que otorgaba a sus miembros el sultán, quien, de este modo, y siempre que pudiera controlar el ejército y el clero, podía ejercer en la práctica, al igual que en la teoría, esa «autoridad prodigiosa e ilimitada» que describía un visitante inglés a principios de siglo. En Rusia se dio una situación hasta cierto punto semejante en tiempos de Pedro I. La autocracia del zar se había beneficiado de la debilidad y división de la aristocracia, que había acumulado escasas propiedades hereditarias y solo ejercía un poder limitado sobre sus campesinos. Ya hemos visto cómo Pedro elevó deliberadamente su posición social y extendió sus privilegios a cambio de obligarles al servicio del Estado. No obstante, seguía existiendo la autocracia del zar; e, incluso bajo Catalina, un viajero inglés escribía que «la soberana del Imperio ruso es absolutista y despótica en todo el significado de estas palabras y dueña de las vidas y las propiedades de todos sus súbditos, que, aunque pertenezcan a la más alta nobleza… pueden, por el motivo más trivial, ser detenidos y enviados a Siberia». Con todo, para el momento que nos ocupa, el juicio era exagerado, pues ya Pedro III había abolido el servicio obligatorio al Estado para la alta nobleza y, bajo Catalina, estaba siendo ya asimilada a la autocracia y pronto se garantizarían sus derechos y privilegios por medio de una carta constitucional.

También en Prusia, la monarquía absoluta seguía conservando la fuerza que le dieron sus creadores. El primer rey,

Federico I, protegió sin tasa las artes, halagó a la aristocracia y se dejó gobernar por sus ministros. Pero su sucesor, Federico Guillermo I, el llamado «Rey Sargento», invirtió el proceso: reafirmó la autoridad real, recortó drásticamente los gastos «suntuarios», puso en marcha una administración eficiente y dejó a su hijo una hacienda bien saneada y uno de los ejércitos más poderosos de Europa. Federico II hizo buen uso de la herencia ampliando sus posesiones y aumentando la importancia y la autoridad de su burocracia, aunque para ello se viera obligado, como ya hemos visto, a seguir el ejemplo de Pedro el Grande y a forzar a las clases terratenientes a servir al Estado en la administración y en el ejército a cambio de amplios privilegios legales y sociales. Así, pues, el despotismo de Federico Guillermo I fue atemperado por su hijo, aunque sus efectos completos no se dejaron sentir hasta la época de sus sucesores.

En teoría, la monarquía de Francia era tan absoluta como la de Prusia y la de la mayoría de los otros Estados alemanes. Luis XIV concentró en Versalles un formidable núcleo de autoridad: la vieja nobleza fue despojada de su poder y desempeñaba en la Corte un mero papel decorativo, y solo la Corona emanaba el poder, la justicia y la posibilidad de acceso a los altos cargos de la Iglesia y el Estado. No obstante, incluso bajo el reinado del *Roi Soleil,* se mantenía la autoridad residual de los *parlements* y de los estados provinciales, y la compra de cargos hereditarios aseguraba a sus poseedores una relativa independencia de la Corona. Bajo sus sucesores, la autoridad real mantuvo sus formas, pero su esencia cambió en gran manera. Durante la Regencia del duque de Orleans se produjo una deliberada devolución de autoridad y, durante algún tiempo, los *parlements* y la nobleza disfrutaron de una libertad e independencia política mayores. Luis XV volvió al sistema de su abuelo tras la muerte del cardenal Fleury (1743); pero pronto se hizo patente que se trataba de una vuelta nominal, más que efec-

tiva. El rey, más aficionado a la caza y a los placeres de la Corte que a los asuntos de Estado, dejó escapar las riendas del gobierno, que se disputaron las facciones rivales, de las que formaban parte secretarios de Estado, pretendientes a puestos oficiales, príncipes de sangre y favoritas reales (tales como la versátil Madame de Pompadour). El marqués de Argenson, que fue destituido de su cargo en 1747, describía el Consejo como «una república… de jefes de facciones, en la que cada uno solo se preocupa por sus intereses, uno por las finanzas, otro por la marina, un tercero por el ejército, y en la que todos consiguen sus propios objetivos según su mayor o menor facilidad en el arte de la persuasión». Aun contando con la exageración propia de un exministro resentido, se trata de un comentario muy atinado. E incluso cuando ministros mejor dotados, como Choiseul y Maupeou, hicieron recuperar momentáneamente la confianza en el gobierno, persistieron y aun se acrecentaron otros males más permanentes (muchos de ellos producto del propio sistema de Luis XIV). A medida que aumentaba y se hacía más independiente, la burocracia de funcionarios hereditarios tendía a convertirse en un obstáculo, más que en un lazo de unión entre el gobierno y el pueblo. Y a medida que el gobierno perdía autoridad, o era objeto de descontento, las peticiones de la aristocracia y los privilegiados se hacían más insistentes. Veremos cómo ni los ministros reformistas mejor intencionados fueron capaces de afrontarlas o superarlas.

En España y en el Imperio austriaco, la monarquía absoluta tenía, una vez más, carácter diferente. Aunque mucho más vigorosa que la de Francia, en ambos países no fue capaz de ejercer jamás una autoridad única y sin paliativos. Esto no se debía tanto a las pretensiones de grupos facciosos privilegiados del centro, como a las provincias enteras a las que nunca se había asimilado totalmente. En España, la guerra de Sucesión de 1702-1713 fue un decidido intento,

por parte de Cataluña y Aragón, para librarse del dominio de Castilla; los estados provinciales (Cortes) de Castilla y Navarra continuaban celebrando sus reuniones; y las provincias vascongadas disfrutaban aún del privilegio especial de que no se les pudiera imponer ninguna carga fiscal sin su consentimiento. En los dominios de Austria, el problema era más complejo. El Imperio se extendía hasta Milán por el Sur y hasta los Países Bajos por el Norte y se componía de provincias, cuyas tradiciones políticas, estructura social, idioma y desarrollo económico variaban enormemente, tendiendo no solo a dividirlas entre sí, sino también a distanciarlas de la Corte de Viena. En tales circunstancias tendía a producirse una cierta delegación de autoridad, y los continuos esfuerzos centralizadores del emperador se veían constantemente estorbados por los estados provinciales de los Países Bajos, la magistratura patricia de Milán, y las dietas de Bohemia y Hungría. La historia interna del Imperio durante la segunda mitad del siglo constituye en realidad uno de los muchos intentos de sus gobernantes para imponer su autoridad más firmemente en Hungría y en el resto de sus desperdigados dominios. Ya veremos cómo José II se excedió en el intento, y estuvo a punto de perder su trono.

Polonia constituía un caso aparte en la Europa de la época. Era una monarquía electiva; y el rey, a cambio de la elección, debía aceptar los *pacta conventa* (o libertades tradicionales) que le proponían los magnates. Polonia, nominalmente una monarquía, y en la práctica una especie de república o «democracia» de nobles, estaba gobernada en realidad por las grandes familias de terratenientes, que controlaban las dietas, en las que se necesitaba unanimidad de votos (el *liberum veto*) para promulgar cualquier ley. Por lo demás, la debilidad de la autoridad ejecutiva se acentuaba por la división entre el rey y el Senado, por la escasez de sus ingresos y por la inexistencia de un ejército permanente. El resultado de este sistema fue la paralización tanto del go-

bierno como del poder legislativo y el abandono de Polonia a las ambiciones depredatorias de sus vecinos cada vez más poderosos, Prusia y Rusia. Como consecuencia se produjeron una serie de repartos de Polonia entre estos países y Austria, que, a partir de 1772, la borraron del mapa durante mucho tiempo.

Única, también a su modo, era la monarquía «limitada» de Gran Bretaña. Formalmente, estaba más cerca de la de Suecia que de la de Francia, Prusia o España; pero, en la práctica, era opuesta a todas ellas. Por supuesto, la diferencia esencial estribaba en el más avanzado desarrollo económico y social del país, sobre el que hablamos en el capítulo anterior. Los ingleses se enorgullecían de su Constitución «mixta» o «equilibrada». «Y en ello» –escribía sir William Blackstone en 1765– «radica la virtud del gobierno inglés, en que cada parte de la misma constituye un control para las demás. En lo legislativo, el pueblo controla a la nobleza, y la nobleza controla al pueblo, por el mutuo privilegio de rechazar lo que el otro ha aportado; mientras el rey controla a ambos, lo que preserva al poder ejecutivo de abusos». Eran estas garantías y contrapesos los que aplaudía Montesquieu, y tanto él como Blackstone tenían toda la razón al señalar la magnitud del poder que la monarquía limitada dejaba todavía en manos del rey. Aún conservaba la facultad de elegir a sus ministros y, si bien no ejercía ya el derecho a rechazar las leyes que le marcaba el Parlamento, podía influir ampliamente en la labor legislativa y en los resultados de las elecciones, así como en la elaboración de la política de su preferencia. Fue el abandono virtual por parte de Jorge II de estos poderes durante la última etapa de su reinado lo que animó a su nieto, Jorge III, a restaurar la autoridad real. No obstante, Blackstone, en su calidad de parlamentario, exageraba el papel del «pueblo» dentro de este sistema. Para él el «pueblo» eran los Comunes, elegidos según un sistema de sufragio extraordinariamente limitado y particu-

lar; y los Comunes, como vimos en el capítulo anterior, procedían en su mayor parte de la nobleza rural y se veían a salvo de la manipulación y el control de las grandes familias de terratenientes; y como quiera que eran estas últimas y la nobleza rural las que controlaban los condados en calidad de gobernadores y jueces de paz, la «mezcla» no era tan perfecta como afirmaban los legisladores. Quienes verdaderamente contrarrestaban la autoridad real eran las clases terratenientes, con una ligera mezcla de mercaderes ricos. Veremos, no obstante, que «el pueblo», en un sentido más amplio del descrito por Blackstone, tendría algo que decir a partir de 1760.

Por último, quedaban las repúblicas, en las que la monarquía había sido reemplazada por la autoridad de las familias nobles o por los mercaderes patricios. La más rica y poderosa de todas ellas era la de las Provincias Unidas; pero en ellas no se había abandonado por completo la forma monárquica. El poder legislativo residía en la Ilustre Grandeza de los Estados Generales, compuestos por los diputados, tanto burgueses como nobles, de las siete provincias; cada una de las grandes ciudades (había varias solamente en la provincia de Holanda) estaba gobernada, a su vez, por miembros de las familias dirigentes locales, llamados «regentes». Predominaban los representantes de mercaderes ricos sobre la antigua nobleza terrateniente; no obstante, quedaban residuos de la monarquía en la persona del estatúder, cuyo puesto era hereditario en la Casa de Orange. El estatúder era comandante en jefe de las fuerzas armadas, así como jefe de la administración pública; y, en los años de peligro para el país, o cuando los grandes comerciantes de Ámsterdam no podían someterle a fiscalización, podía ostentar una autoridad especial que sobrepasaba a la de su rival ante el poder ejecutivo, el Gran Regente de Holanda. En el resto de las pequeñas repúblicas no existía esa dualidad de poderes. En Venecia, solamente podían ocupar car-

gos públicos los miembros de la nobleza hereditaria; y, en el año 1796, el último de su larga historia como República, de una población de 130.000 habitantes, solo unos 1.200 tenían el derecho de todo ciudadano noble a asistir a las asambleas del Gran Consejo. Suiza era una confederación de cantones, entre los cuales, en zonas rurales, había un carácter de democracia; sin embargo, los más prósperos –las ciudades-Estado de Berna y Basilea– estaban gobernados por una aristocracia mercader; a la vez que la ciudad afiliada de Ginebra, patria de Calvino y Rousseau, lo estaba por un pequeño grupo privilegiado de «ciudadanos», que mantenían celosamente sus derechos exclusivos frente a las insistentes demandas de los pequeños comerciantes y artesanos.

Es inevitable que en unos países en que el poder estaba distribuido de tal manera –un incómodo equilibrio entre la monarquía y la aristocracia, o un control exclusivo de la aristocracia o de grupos oligárquicos– surgieran tensiones y algunos reclamaran un fortalecimiento de la autoridad, en tanto que otros pedían participación en el gobierno. El principal problema residía en saber si había que buscar el camino de la reforma aumentando la autoridad de un monarca «ilustrado» a expensas de los Estados, si había que reforzar la aristocracia u otros «cuerpos intermedios» como contrapeso al poder de la Corona, o si había que equilibrar o suprimir el poder de ambos, haciendo recaer mayor responsabilidad sobre el mismo pueblo. En resumen, se trataba de saber si había que buscar el remedio a los males existentes en un reforzamiento de los elementos «monárquicos», «aristocráticos» o «populares» de la Constitución. Las respuestas a estas cuestiones variaban según los países y según las clases; todas ellas se podían justificar de un modo u otro, ya fueran expuestas por gobernantes o por súbditos, en términos de «derecho natural». También estaban influidas, en mayor o menor medida, por las ideas, muy difundi-

das, de los escritores políticos de la Ilustración. Resulta difícil, sin embargo, determinar el alcance de esta influencia y la de cada escritor en particular. No cabe duda de que, en general, la resonancia de sus ideas fue considerable. Los escritos políticos, satíricos y anticlericales de Voltaire conocieron numerosas traducciones desde el decenio de 1730 hasta su muerte, en 1778, y aún después. De la *Historia filosófica* del abate Raynal, publicada en 1770, se hicieron 55 ediciones en cinco o seis lenguas a lo largo de treinta años. *El espíritu de las leyes,* de Montesquieu, publicado por primera vez en 1748, conoció media docena de ediciones francesas en tres años, diez ediciones inglesas hacia 1773, fue traducido al holandés en 1771, al italiano en 1777, al alemán en 1789 y al ruso en 1801 y, en Hungría, según un informe, al latín en 1751. Del *Contrato social,* de Rousseau, la otra gran obra de la revolución de las ideas políticas, aparecieron trece ediciones francesas entre 1762 y 1763 y, hacia 1764, se habían publicado tres ediciones inglesas, una alemana y una rusa. A largo plazo, puede decirse que la influencia de Montesquieu resultó más conservadora y «aristocrática» que «monárquica» o social-revolucionaria; que los preceptos de Voltaire resultaron más adecuados para los monarcas y ministros reformadores que para sus súbditos rebeldes; y que, de las ideas políticas de Rousseau, cualesquiera que fuesen sus intenciones personales, ninguna tuvo una influencia tan explosiva y duradera como su concepción de la soberanía de los pueblos. Aun así, esto no convierte a Montesquieu en el verdadero profeta del conservadurismo aristocrático, como tampoco hace de Voltaire el del despotismo «ilustrado» o a Rousseau el de la revolución «democrática» o popular. A Montesquieu le citaron como oráculo, con los propósitos más dispares, tanto los monárquicos polacos como los *parlementaires* franceses. D'Antraigues, el tardío propagandista de la intervención monárquica en contra de la Revolución francesa, extrajo su filosofía

política en dosis iguales de Montesquieu y de Rousseau. Voltaire, quien mantuvo correspondencia casi íntima con Catalina y Federico el Grande, apoyaba las reivindicaciones de los «burgueses» y los «nativos» frente a los patricios ginebrinos. Rousseau tuvo un significado muy distinto para los revolucionarios franceses de 1789, los patriotas corsos, los aristócratas franceses o los nobles polacos y, a diferencia de Voltaire, no simpatizaba con los «nativos» subprivilegiados de Ginebra, que buscaron su ayuda. De hecho, de haber estado vivo, Rousseau hubiera condenado a los *sans-culottes* parisinos de 1793 por el uso que hacían de sus enseñanzas, tan decididamente como Lutero condenara a los campesinos rebeldes alemanes 270 años antes. Todo esto no hace más que subrayar la convicción de que lo importante en la historia no son las ideas en sí mismas, ni tampoco las intenciones de sus autores, sino el contexto político y social en el que circulan y la utilización que hacen de ellas aquellos que las leen y las asimilan.

Entre los que estaban familiarizados con las nuevas ideas, e incluso mantenían correspondencia con sus autores, se contaba el grupo de monarcas y gobernantes de la segunda mitad del siglo, generalmente conocido bajo el nombre de los «déspotas ilustrados». Este despotismo ilustrado (o «monarquía del arrepentimiento», como lo llamó lord Acton) se puede denominar «ilustrado» en la medida en que sus promotores profundizaron en las obras de los *philosophes,* intentaron gobernar de acuerdo con los principios «filosóficos», o, simplemente, dieron a entender que se preocupaban por el bienestar del Estado o de sus súbditos. Pero, en lo esencial, eran gobernantes que intentaban modernizar la administración y fortalecer la monarquía, generalmente a expensas de la Iglesia, de la aristocracia o de los otros «organismos intermedios». Resulta bastante extraño que aquellos monarcas a quienes con más insistencia se ha aplicado la denominación de «ilustrados» –Federico el

Grande y Catalina de Rusia– fueran, en algunos aspectos, los menos acreedores a tal calificación. Federico gobernó Prusia con mano firme, revisó personalmente el trabajo de su burocracia, introdujo reformas judiciales y educativas y fomentó las industrias del Estado, pero con esto no hizo sino desarrollar las reformas bosquejadas por su padre, Federico Guillermo I; el único aspecto importante en el que se separó de la práctica seguida por este fue introducir en su administración a personas de noble cuna y conceder a la aristocracia una importancia social y una participación en el gobierno que esta no había conocido anteriormente. La labor de Catalina en Rusia fue similar: habló de reforma agraria, abolió la tortura, practicó la tolerancia religiosa, secularizó las tierras de la Iglesia, estableció nuevas autoridades locales y fortaleció el aparato del gobierno central, medidas todas ellas que ya habían anticipado sus predecesores; pero su innovación más significativa y duradera consistió en atraer a las clases terratenientes a una colaboración más estrecha con la autocracia. Otros gobernantes intentaron reformas de mayor alcance. El marqués de Pombal, gobernante efectivo de Portugal bajo José I, marcó la pauta al expulsar a los jesuitas en 1759, acobardó e intimidó a la nobleza, abolió la esclavitud y promulgó leyes contra el antisemitismo y contra las jerarquías de color en las colonias. Gustavo III, que ascendió al trono sueco en 1771, llevó a cabo un *coup d'etat* apoyado por los ciudadanos de Estocolmo, poniendo fin a la prolongada «era de la libertad», durante la cual la nobleza de Suecia gobernó durante cincuenta años prácticamente igual que la de Polonia. Su nueva constitución restauró la autoridad de la Corona, dividió el poder legislativo entre el rey y la Dieta, abolió los tribunales extraordinarios y la tortura judicial y permitió un cierto grado de libertad de prensa. Sin embargo, las reformas más drásticas de todas fueron las que intentó el emperador José II de Austria. En ciertos aspectos, se limitó a seguir las hue-

llas de su madre, la temible María Teresa, cuyo gobierno había adoptado ya algunas medidas enérgicas para acabar con el separatismo de la provincia de Bohemia, anulando su carta constitucional y suspendiendo y reduciendo los poderes de su Dieta. Durante veinticinco años se prohibieron las reuniones de la Dieta húngara; en Austria-Bohemia se abolió la tortura; se disolvieron las órdenes monásticas; y, por el decreto de 1755, todas las posesiones de Austria, con excepción de Hungría, pasaron a constituir una unión aduanera. Sin embargo, José, que había gobernado con su madre durante los últimos quince años, fue mucho más lejos, siendo el único de los «déspotas ilustrados» que intentó llevar a cabo una política coherente y amplia, combinando medidas sociales radicales con la afirmación del poder de la Corona sobre todas las demás autoridades subordinadas, ya se tratara de la Iglesia, la nobleza, los estados provinciales o las ciudades con fueros. Con vistas al primer objetivo, acabó de abolir la tortura y la servidumbre personal (aunque no la prestación de trabajo) por medio de un *Unterthanspatent* de 1781, limitó el derecho del señor a castigar a sus campesinos y eliminó la *corvée.* En sus relaciones con la Iglesia católica se adelantó a muchas de las medidas de los revolucionarios franceses de 1789: disolvió más de 700 conventos y empleó sus fondos en el fomento de la educación y la creación de centros benéficos, abolió la Inquisición, aplicó la tolerancia a los protestantes e hizo extensivos los derechos civiles a los judíos, redujo al silencio la oposición clerical y permitió la crítica pública a la Iglesia, transformó el matrimonio en un contrato civil, socavó la autoridad papal en sus dominios, obligó a los obispos a prestar juramento de fidelidad al emperador y convirtió a los clérigos en funcionarios asalariados del Estado. En su guerra contra la nobleza, retiró a esta el derecho a reclamar la exención de impuestos en las diversas provincias, debilitó drásticamente su autoridad sobre los campesinos y utilizó a la policía política

para acallar sus protestas. En lo referente a las provincias mostró la misma falta de contemplaciones: impuso el idioma alemán en sus posesiones húngaras y bohemias, revocó las autoridades locales de Milán y Lombardía y restringió las funciones de los antiguos gremios y de las asambleas municipales de los Países Bajos.

Sin embargo, en la medida en que era «ilustrado», el despotismo ilustrado resultó un fracaso casi universal. Tuvo más éxito allí donde el objetivo era una reforma administrativa limitada que donde se proponía un experimento social drástico. Federico II no manifestó nunca tales intenciones, y Catalina, a pesar de sus afirmaciones iniciales sobre su propósito de aliviar los sufrimientos del campesinado, abandonó toda idea de reforma social tras la rebelión de Pugachev en el decenio de 1770. Gustavo III consiguió inclinar la balanza decisivamente del lado de la monarquía en Suecia, pero los ministros reformadores, como Pombal en Portugal y Struensee en Dinamarca, vieron deshecha gran parte de su labor cuando cayeron del cargo que ocupaban. En Francia, los bien intencionados esfuerzos de Maupeou y Turgot a favor de la reforma impositiva quedaron en nada. La experiencia de José II, quien, más que ningún otro, estaba decidido a construir de cara al futuro y a romper con el pasado, ilustra la estrechez de los límites dentro de los cuales podía actuar eficazmente un «déspota» reformista. Por falta de una clase media culta en el país, José tenía que depender, para la ejecución de sus planes, de un pequeño grupo de funcionarios ilustrados de Viena; mas la entrega de estos y su apoyo a un poderoso mecanismo del Estado –por no mencionar la buena voluntad de muchas familias campesinas– no eran suficientes para romper la resistencia de la Iglesia, la nobleza, los estados provinciales y las ciudades con fueros, con los que se enajenó y enemistó por sus reformas y sus métodos directos. El resultado fue que los Países Bajos se rebelaron y Hungría casi se separó del Imperio.

Para salvar sus dominios de la desintegración, José II y su sucesor, Leopoldo II, se vieron obligados a hacer concesiones que destruyeron prácticamente su trabajo de reforma. Con todo ello, quedó una herencia importante: el «josefismo», que, si bien era anatema para la Iglesia establecida y para las clases privilegiadas, suscitó una «gran esperanza» entre el campesinado sometido a servidumbre y pisoteado, así como entre los pequeños burgueses y artesanos de las ciudades, y muchos de los «josefistas» del decenio de 1780 habían de convertirse en los «jacobinos» del decenio de 1790.

Quizá un rasgo más perfilado de los tiempos fuera la realidad tangible de la reacción «aristocrática» o «feudal», frente a las consecuciones de la monarquía «ilustrada». Esta reacción podía tomar la forma de un choque entre la monarquía y la nobleza o la de una extensión gradual y pacífica de la influencia de la aristocracia en la sociedad y la administración; además de, por último, la de un intento más deliberado, por parte de las clases privilegiadas, para recuperar el terreno perdido o restablecer el equilibrio a su favor. Hemos visto ejemplos de lo primero en Rusia y Prusia, pueden encontrarse ejemplos de lo segundo en Inglaterra, Francia y Suecia. En Inglaterra, desde los tiempos de la reina Ana, solamente aquellos que tenían grandes propiedades de tierra podían alcanzar un escaño en el Parlamento; la dignidad de par no solía concederse sino a los miembros de la clase terrateniente, y los jueces de paz se estaban convirtiendo cada vez más en una casta cerrada. En tanto que en 1719 solo un tercio de los oficiales del ejército sueco era noble, en 1760 los nobles alcanzaban los dos tercios. En Francia, los sucesores de Luis XIV fueron abandonando gradualmente la práctica de este de promover a los burgueses o *roturiers* (plebeyos) a altos cargos en el ejército, la Iglesia y el Estado; en 1789 ni un solo obispo, ni un solo intendente era de procedencia plebeya; desde 1718 todos los minis-

tros del rey, salvo tres, fueron nobles; algunos de los *parlements* se negaban a admitir plebeyos entre sus filas, y una *ordonnance* de 1781 hizo imposible que, a partir de entonces, un burgués, o incluso un *anobli* de reciente cuño, pudiera alcanzar el grado de candidato a oficial en el ejército, de no ser que realmente hubiera ascendido desde abajo. Siempre en Francia, los terratenientes, ya fueran nobles o burgueses, habían comenzado recientemente a estudiar con más cuidado los archivos a fin de descubrir y resucitar viejos derechos señoriales, caídos en desuso desde mucho tiempo atrás, o de inventar otros nuevos. Con esto, los campesinos sufrían más que antes por las exacciones de sus *seigneurs.*

Aún más espectaculares resultaron las luchas abiertas entre la aristocracia y la monarquía, que a menudo se realizaron en nombre de las «libertades tradicionales» o fueron acompañadas de apelaciones al «derecho natural» o a los preceptos de Montesquieu o Rousseau. En la oposición parlamentaria a Jorge III en Inglaterra hubo algo de este resurgimiento aristocrático: sus dirigentes eran pares *whig* y exministros disconformes, tales como los duques de Newcastle, Devonshire y Portland y el marqués de Rockingham. La misma actitud tuvo también gran importancia en Polonia y Suecia, incluso después de 1772, pero resultó especialmente acusada en Francia y en los Países Bajos austriacos (o Bélgica). En Francia, quienes marcaron la pauta fueron los magistrados hereditarios de los *parlements,* más que el clero o la antigua nobleza de espada. Tras la muerte de Luis XIV, los *parlements* resucitaron la antigua costumbre de publicar sus agravios o protestas contra las acciones y decretos gubernamentales con los que no estaban de acuerdo. A partir de mediados de siglo, el gobierno, que se hallaba en perpetuas dificultades financieras, hizo una serie de esfuerzos para reformar el sistema fiscal y obligar, o convencer, a las clases privilegiadas para que renunciaran a algunos de sus pri-

vilegios. En 1751, el interventor general, Machault, fracasó en su intento de imponer un nuevo *vingtième,* o impuesto de un vigésimo sobre los ingresos, ante la oposición conjunta de los *parlements,* el clero y los partidarios de estos en la Corte. En 1763, propuestas similares provocaron una respuesta similar: esta vez, el *Parlement* de París tomó prestado el lenguaje «filosófico» de moda al acusar a los ministros de delinquir contra «el soberano, la ley y la nación»; una vez más, los *parlements* ganaron la disputa y el ministro delincuente, Bertin, fue depuesto del cargo. En 1770-1771, el canciller Maupeou tomó la iniciativa, tras acusar al *Parlement* de París del delito de abierto desafío desterró a los magistrados, abolió sus cargas sin compensación y creó nuevos tribunales en lugar de los antiguos, en tanto que Terray, el interventor general, procedía a reformar los impuestos. Mientras duró, fue un brillante experimento, pero las protestas crecientes alcanzaron tal envergadura que, al acceder al trono en 1774, Luis XVI se vio obligado a deponer a Maupeou y a Terray y a restablecer a los magistrados en sus cargos. El sucesor de Terray, Turgot, era un fisiócrata, íntimo amigo de los *philosophes,* y más decidido que Machault y Maupeou a llevar a cabo reformas, con lo que sucedió lo que era casi inevitable: sus intentos de abolir los gremios y la *corvée* y de reformar los impuestos provocaron una tormenta tal de desaprobación de los *parlements* y de otros partidos interesados que, para mantener la paz, Luis XVI le retiró su apoyo. Con la caída de Turgot se esfumó la última posibilidad seria (si bien es cierto que bastante lejana) de reformar las antiguas instituciones de Francia antes de la Revolución. En todo esto resulta especialmente interesante observar que los *parlements,* que estaban preocupados sobre todo por el mantenimiento de los privilegios y de las inmunidades tradicionales, se vieron obligados, en el curso de estas discusiones, a utilizar un lenguaje calculado para obtener respuesta entre otras clases sociales cuyos in-

tereses y aspiraciones eran muy diferentes de los suyos. Como veremos más adelante, este había de ser un factor de importancia en los años venideros.

Las innovaciones de José II en Bélgica provocaron una especie de revolución nacional que, al igual que el aristocrático preludio a la Revolución en Francia en el mismo año, estuvo dirigida por las clases privilegiadas y orientada al restablecimiento de los viejos cimientos, más que a la reconstrucción del Estado sobre otros nuevos. Al oponerse a José II, los aristócratas y patricios belgas, al igual que sus colegas de otros países, fundamentaban sus argumentos no solo en los precedentes históricos, sino en los escritos de los *philosophes* y en la experiencia de los americanos. En las provincias belgas, los tres estados –que representaban al clero, a la nobleza y a los gremios de las antiguas ciudades– habían conservado cuidadosamente sus privilegios y «libertades». La nobleza y el clero gozaban de mayores privilegios que el humilde Tercer Estado, pero también este, al convertirse en una casta hereditaria, se aferraba tan tenazmente como las «clases» más elevadas a sus viejas tradiciones. Por ello, cuando en 1787 José II reorganizó por completo la estructura administrativa y judicial de Bélgica, abolió los tribunales señoriales, las asambleas de los estados y los consejos municipales y mitigó los monopolios comerciales de los gremios, tropezó con la oposición y la rebelión concertada de los tres estados. Dirigidos por el «Partido de los Estados», mayoritariamente patricio, del abogado Van der Noot, los belgas expulsaron a los austriacos en 1789 y proclamaron los Estados Unidos de Bélgica, concebidos en estrecha semejanza con los artículos de la Confederación americana. Entretanto, un partido democrático, compuesto de elementos de la clase media, fundado por otro abogado, J. F. Vonck, cumplió una cierta función durante la revolución. Los «vonckistas» adelantaron algunas proposiciones moderadas de reforma constitucional, pero, una vez expul-

sados los austriacos, sus rivales les acusaron de querer destruir la Iglesia y subvertir las antiguas libertades del país; fueron arrestados por centenares y obligados a marchar al exilio, muchos de ellos a Francia. Resulta significativo que solo pudieran regresar con la ayuda de los austriacos, quienes recuperaron el dominio de la situación en diciembre de 1790[1]. Volveremos a hablar de estos demócratas belgas dentro del contexto de la revolución en Francia.

También en otros países comenzaban las clases «medias» a afirmarse y a presentar sus reivindicaciones frente a la monarquía y a la aristocracia. En la ciudad-estado de Ginebra tuvo lugar en 1768 una revolución a pequeña escala, de carácter estrictamente «burgués». Los burgueses, quienes componían la segunda de las tres categorías en las que se dividían los habitantes de la ciudad, venían padeciendo desde antiguo la dominación de los Doscientos, que monopolizaban los cargos en el pequeño consejo gobernante, por lo que reclamaban el derecho a bloquear, o vetar, la representación de aquellos en el Consejo General, o cuerpo legislativo. Tras suscitar y organizar el apoyo popular aquel año, los burgueses consiguieron muchas de sus reivindicaciones, mas cuando la tercera categoría de ciudadanos, los nativos, que estaban excluidos de la mayoría de las ocupaciones por encima de la de artesano y carecían de derechos políticos, presentaron sus propias quejas poco tiempo después, una acción conjunta de patricios y burgueses les redujo al silencio. Las conquistas de 1768 tuvieron corta vida, sin embargo: en 1782, el gobierno francés (que patrocinaba la revolución en América, pero no en Suiza) intervino en defensa de los Doscientos privilegiados y ayudó a restaurar la antigua constitución aristocrática de la ciudad[2].

También en Inglaterra se produjo durante los decenios de 1760 y 1770 un renacimiento radical que se oponía al control del Parlamento tanto por el rey como por la aristo-

cracia. Cuando John Wilkes, radical de la clase media, no solo fue elegido para el Parlamento en 1768, tras su regreso del exilio, sino además sostenido en su derecho al escaño frente a la oposición concertada de Jorge III y de la mayoría de los Comunes, esto supuso una victoria tanto para los propietarios libres de Middlesex, que le habían elegido, como para la opinión política de la clase media en general y dio un nuevo impulso al movimiento radical, que se había venido desarrollando en los doce años anteriores en la ciudad de Londres, a favor de parlamentos más breves y de una «representación del pueblo más igualitaria». Hasta cierto punto, el desafío radical corrió parejo con la oposición aristocrática en el Parlamento, representada por hombres como Rockingham y Burke, quienes tenían sus propias razones para desear que se mitigara la «influencia» de la Corona. Pero la colaboración duró poco, ya que la oposición *whig,* deseosa de llevar a cabo una reforma «económica» limitada, no estaba dispuesta a apoyar reivindicaciones relativas a parlamentos más breves, abolición de los «rotten boroughs» o ampliación sustancial del electorado. Así, cuando el movimiento de reforma resucitó en 1779, Christopher Wyvill y sus «asociados» de Yorkshire y Londres, abogados de la reforma radical, no pudieron llegar a un acuerdo con la oposición *whig* y, en las elecciones de 1784, terminaron por apoyar el nuevo partido *tory* de Pitt el Joven (que también lo era del rey), frente a Charles James Fox y su nuevo colaborador, lord North. El comentario que Wyvill hizo del resultado de la elección ilustra hasta qué punto se habían separado los antiguos aliados: una victoria de la coalición Fox-North, escribía a un amigo, «hubiera transformado a nuestra Monarquía limitada en una mera República aristocrática»[3]. La asociación de los intereses de la clase «media» con Pitt resultó un obstáculo para las reformas, pero el movimiento revivió bajo la influencia de los

acontecimientos revolucionarios en Francia, como veremos en otro capítulo.

Resulta claro que, en Inglaterra, tanto los radicales como la oposición *whig* se sentían atraídos por los acontecimientos de Norteamérica: ambos grupos hicieron suya la causa de las «libertades» americanas. Los comerciantes de Londres, Bristol y Liverpool se resentían de la interrupción o pérdida de un valioso comercio colonial y los inconformistas se sentían inclinados a simpatizar con sus hermanos calvinistas de Nueva Inglaterra. También en otras partes de Europa el resultado de la Revolución americana, la primera gran brecha en el viejo sistema colonial, excitó a la opinión, tanto aristocrática como de la clase media. Ello se deduce de la gran cantidad de escritos que el tema americano suscitó en Europa: el profesor Palmer ha enumerado 26 libros sobre América, que aparecieron en tres o cuatro lenguas europeas entre 1760 y 1790, y todavía resulta más llamativo el espacio dedicado al Nuevo Mundo en la prensa en rápida expansión de una docena de países. Las pasiones democráticas e igualitarias –e incluso republicanas– que surgieron de esta discusión producirían sus frutos en forma de participación activa de escritores, profesores universitarios y maestros en los movimientos revolucionarios del decenio siguiente; por el momento, incluso en los países en que este fermento intelectual era más evidente –en Alemania, Italia y la misma Francia– la actividad política de la clase media se limitó, sobre todo, a la discusión, los libelos y los artículos de prensa. Ello no sucedió, por supuesto, en Inglaterra, ni tampoco en Bélgica y Polonia, ni siquiera en Irlanda, donde los voluntarios y el movimiento nacional encabezado por Henry Grattan obligaron a Westminster, en 1782, a liberar al Parlamento de Dublín de su yugo de trescientos años y a restaurar su independencia legislativa. Otra excepción notable fue la de las Provincias Unidas, donde se produjo una especie de evolución de la clase media –aunque abortada–

con el movimiento patriótico de la década de 1780. La influencia de Norteamérica era ya fuerte en las provincias en 1778, cuando la ciudad de Ámsterdam firmó un tratado secreto con los Estados Unidos y emitió un préstamo a su favor. En 1780, a despecho de la oposición del partido de Orange (el partido pro-inglés del estatúder, Guillermo V), los holandeses entraron en la guerra al lado de los americanos y los franceses. El partido patriótico, que surgió de estos acontecimientos, era un partido con composición mayoritaria de la clase media que, debido a sus tendencias democráticas, se enfrentaba al mismo tiempo a la autoridad de la casa de Orange y a la de las familias regentes que dominaban las grandes ciudades. Este doble enfrentamiento fue fuente de fortaleza y de debilidad: consiguió el apoyo popular para los patriotas, pero facilitó la unión de sus enemigos monárquicos y «aristocráticos», normalmente en desacuerdo entre sí, para combatirlos. Los franceses amenazaron con intervenir en favor de los patriotas y los ingleses en interés de los orangistas. Los ingleses, bien informados por su ministro en La Haya, sir James Harris, convencieron a sus aliados prusianos de que enviaran 20.000 soldados; los franceses, divididos y amenazados por la bancarrota, abandonaron a los patriotas a su destino[4]. Los patriotas tenían también otro punto débil, que los incapacitaba para dirigir con éxito una revolución «democrática». Ya señaló este defecto el americano John Adams, que conocía bien a los holandeses y no era ningún demócrata, cuando escribía que se habían mostrado «demasiado indiferentes al sentimiento del pueblo llano de su propio país» y habían confiado demasiado en los franceses.

Esta indiferencia ante el «sentimiento del pueblo llano» iba a resultar, de hecho, el talón de Aquiles de más de una incipiente revolución «democrática» en Europa en vísperas de los grandes acontecimientos en Francia. Ninguno de los pensadores políticos, a pesar de lo avanzados que pudieran

parecer sus puntos de vista en relación con la sociedad aristocrática de su tiempo, había mostrado simpatía claramente marcada por las «clases bajas» o «Cuarto Estado», que exponían sus agravios frente a la sociedad existente, a su propia manera, con independencia de la opinión «ilustrada» o de la clase media. Los campesinos, empujados a decisiones desesperadas por la opresión señorial o la penuria económica, se amotinaban, se rebelaban o iniciaban insurrecciones violentas. En Rusia, solamente entre los años 1762-1769, se registraron 73 levantamientos campesinos y los extensos desórdenes rurales que caracterizaron los primeros años del reinado de Catalina culminaron con la gran insurrección dirigida por el guerrillero cosaco Pugachev, que no fue completamente dominada hasta el año 1775. En aquel mismo año, hubo un levantamiento en Bohemia, cuando 15.000 campesinos invadieron Praga; siguieron otros en Transilvania en 1784, en Moravia en 1786 y en Austria en 1789, este último provocado por las reformas agrarias de José II. En Francia, bajo Richelieu y Luis XIV, las rebeliones campesinas fueron casi endémicas, pero, en el siglo XVIII, debido a la creciente prosperidad agraria y a la ausencia de grandes hambres, las *jacqueries* y rebeliones rurales se hicieron más escasas. Las insurrecciones campesinas, como las de las poblaciones agrícolas, eran ahora provocadas por los aumentos de los precios de los alimentos en años de escasez. En las provincias francesas se registraron un centenar o más de estas entre 1715 y 1785; algunas de ellas para obligar a los molineros, comerciantes y panaderos a reducir el precio del grano, de la harina o del pan *(taxation populaire).* El último gran estallido de esta clase antes de la Revolución se produjo en mayo de 1775, durante el segundo año del ministerio de Turgot. Como fisiócrata, Turgot había comenzado a introducir el libre comercio en el grano y en la harina. Estas medidas coincidieron con una mala cosecha, y el resultado fue un pánico que desató la compra en las principales re-

giones de cereales que suministraban a París, seguido por una serie de motines en un área de unos 5.000 kilómetros cuadrados en torno a París. Durante una quincena los motines se fueron extendiendo, de aldea en aldea y de mercado en mercado, propagados por la penuria, la ira y el rumor, hasta que Turgot pudo sofocarlos mediante una combinación de represión judicial, fuerza militar y homilías sincronizadas desde lo alto de los púlpitos en las aldeas. En Inglaterra, los disturbios rurales podían ir dirigidos contra las barreras, los cercamientos, los talleres y las leyes contra el contrabando o la milicia o contra los grupos metodistas o disidentes. Pero lo más frecuente era que estallaran en los años de malas cosechas y alza de precios: no menos de 175 estallidos, de los 275 registrados entre 1735 y 1800, fueron de esta clase, y solamente en el año 1766 se produjeron casos de rebelión popular pidiendo precios fijos en 24 ciudades y distritos.

También las huelgas y los conflictos industriales se hicieron más frecuentes a medida que los asalariados iban siendo más conscientes de sus intereses económicos particulares. Paralelas al movimiento wilkista en Londres en 1768-1769, hubo huelgas de tejedores, sombrereros, marineros, aguadores, vidrieros, aserradores, toneleros, sastres y cargadores de carbón; en toda Inglaterra estos conflictos se agudizaron a partir de 1780. En Francia, los tejedores de seda de Lyon realizaron huelgas y motines sangrientos en 1744, 1779 y 1788, y en París hubo huelgas de encuadernadores, obreros de la construcción, carpinteros, herradores, cerrajeros, panaderos, canteros, porteadores y sombrereros entre 1776 y 1789. Aun en estos casos, por razones ya señaladas en el capítulo anterior, los trabajadores estaban a menudo más preocupados por el precio de los alimentos que por sus salarios, y los motines por los alimentos eran más frecuentes que los conflictos industriales. Esto sucedía incluso en las ciudades: en Viena, Roma y Nápoles fueron la causa más

común de los disturbios populares. Eran menos frecuentes en París, donde se adoptaron medidas especiales para alimentar a la población; pero, incluso en esta ciudad, hubo media docena de grandes explosiones de este tipo entre 1709 y 1775. En Londres, los motines por los alimentos fueron más bien la excepción que la regla y los objetivos de la violencia popular fueron más a menudo los «marginados», tales como los católicos, los judíos, los escoceses, los irlandeses y los disidentes, además de los consorcios de la prensa y los políticos impopulares. Sin embargo, tales motines solían llevar consigo un elemento de profunda protesta social y el movimiento «Wilkes y Libertad», al proporcionar a las «clases bajas» de Londres una consigna política, señaló una nueva fase en su evolución política.

Pero cualquiera que fuese su carácter, los movimientos de protesta del pueblo llano fueron, por lo general, duramente reprimidos por las autoridades y reprobados, o condenados de plano, por la «clase media», aunque a veces se hallara envuelta en conflictos con la Corona y la aristocracia[5]. En Francia, las milicias burguesas de las ciudades de provincias se unían a las tropas reales y a la *maréchaussée* en la represión de los disturbios campesinos y de los motines provocados por los alimentos. En Londres, en 1780, los cabezas de familia de la ciudad se enrolaron en la milicia o formaron «asociaciones de voluntarios» para protegerse contra los amotinados de Gordon, cuando sus actividades adoptaron la forma de una amplia protesta social; y ya vimos que los patriotas holandeses, al igual que los burgueses ginebrinos, eran «demasiado indiferentes al sentimiento del pueblo llano». Hemos señalado una pequeña excepción en Inglaterra, en el decenio de 1760 y a comienzos del siguiente, cuando los radicales de la clase media se unieron con las «clases bajas» de Londres para apoyar la causa de John Wilkes; mas esta experiencia fue breve. El dilema de muchos supuestos reformadores de la clase media en esta época se

reflejaba en la angustiosa pregunta de un corresponsal del *Gloucester Journal* en septiembre de 1769: «¿Son mis recelos frente a la tiranía del gobierno iguales a los que tengo frente a la licencia del pueblo?». Veinte años más tarde, el Tercer Estado francés, enfrentado a un problema similar, se apresuró, debido más a las circunstancias que a la lectura de Rousseau, a volverse al pueblo en busca de apoyo. Y este no es uno de los motivos menores que explican que los franceses fueran los únicos que en 1789 y en los años posteriores llevaran a cabo una «revolución democrática».

[1] Para lo anterior véase R. R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution,* I, pp. 341-357.

[2] *Ibid.*

[3] Citado por N. C. Phillips, *Yorkshire and English National Politics, 1783-1784* (Christchurch, N. Z., 1961), p. 60.

[4] Un factor que contribuyó a ello fue que la Corte francesa se alarmó ante la perspectiva de dar apoyo a una «democracia pura» [J. Egret, *La Pré-Révolution française, 1787-1788* (París, 1962), p. 70].

[5] También es de notar que, en un dominio de los Habsburgo, José II, durante los últimos años de su reinado, ordenó a las tropas y a la policía que aplastaran aquellos mismos movimientos de campesinos y trabajadores urbanos que habían originado y estimulado sus anteriores reformas «ilustradas» [E. Wangermann, *From Joseph II to the Jacobin Trials* (Londres, 1959), p. 36].

III. LOS CONFLICTOS ENTRE LOS ESTADOS

La guerra seguía siendo el árbitro habitual entre los Estados europeos, una vez agotadas todas las sutilezas de la diplomacia. Era habitual, y se consideraba decoroso, que una declaración solemne de guerra precediera a la apertura de hostilidades, si bien a veces se prescindía de esta práctica: por ejemplo, Inglaterra inició las hostilidades contra Francia en la guerra de los Siete Años capturando varios centenares de barcos antes de hacer declaración alguna. Es cierto que se veían con sorpresa tales irregularidades, pero, por otro lado, apenas existía una opinión generalizada dispuesta a condenar la guerra como instrumento de política nacional. Las denuncias de esta clase eran desechadas como utópicas por los que las leían y despertaban escasas simpatías entre los gobiernos y los pueblos. Sin embargo, ya había comenzado a discutirse, en un pequeño círculo de juristas internacionales y de pensadores avanzados, la idea de un «contrato social» entre los Estados y de un básico «derecho de las naciones» que debería regir las relaciones entre ellas. Entre estos pensadores se contaba el abad de Saint Pierre, cuyo *Proyecto para conseguir una paz duradera en Europa* (1713) por medio de una autoridad federal internacional fue más tarde encomiado por Rousseau. También figuraba el radical inglés Richard Price, quien en 1776 propuso la creación de un Senado representante de todos los Estados de Europa, provisto de poderes para intervenir y solventar sus querellas. Aunque sin subsistir estos proyectos visionarios, el jurista suizo Emmerich Vattel condenaba la guerra como una calamidad injustificable «por cualquier motivo que no sea vengar una ofensa recibida o defendernos de otra con la que se nos amenaza». Los fisiócratas franceses y los economistas ingleses, quienes comenzaban a vincular la paz con el libre comercio, veían el problema de modo distinto. «Nada es tan evidente», escribía sir James Steuart en

1767, «como que la guerra es incompatible con la prosperidad de un Estado moderno». Escritores tan diversos como Pope, Hume y Herder ridiculizaron las virtudes militares y despreciaron las nociones convencionales de heroísmo y honor.

Estas opiniones, sin embargo, pasaron, por lo general, inadvertidas. Es cierto que algunos hombres de Estado –entre ellos, Turgot y Vergennes, en Francia, y Pitt el Joven, en Inglaterra– respondieron a estos argumentos, pero, para los gobernantes absolutos de Rusia y Prusia y para el «ilustrado» José II de Austria –todos ellos ocupados en ensanchar sus territorios–, estos mensajes carecían de contenido. A los filósofos escépticos tampoco les impresionaban. «Los tiempos», escribía Voltaire, «la ocasión, la costumbre, la prescripción y la fuerza…, he ahí de donde proceden los derechos (de las naciones)»; y Guibert, profeta del ejército de ciudadanos del futuro, pensaba que «declamar contra la guerra… es pregonar al aire sonidos hueros». La pequeña nobleza rural y los mercaderes, sobrecargados de impuestos o saciados con anteriores botines, podían protestar momentáneamente contra los costes crecientes de una guerra prolongada, pero la opinión pública, en general, permanecía inconmovible. Esto tampoco resultaba sorprendente en una época en que la guerra en muchos países no afectaba más que a una pequeña parte de la población, y los beneficios que proporcionaba a algunos podían dar la impresión de superar las penalidades que acarreaba a otros. Incluso Adam Smith, que condenaba el despilfarro de la guerra, argumentaba en 1763 que «la guerra está lejos de ser una desventaja en un país bien organizado, pues muchos se hacen ricos con ella. Cuando los Países Bajos son el escenario de una guerra, todos los campesinos se hacen ricos, porque no pagan impuestos cuando el enemigo ocupa el país y los alimentos se venden a precios más altos». En Francia y en Inglaterra, los campesinos y los habitantes de las ciudades se

amotinaban contra los consorcios de prensa y contra los Decretos de Milicia, como aquellos 5.000 mineros de Hexham, en el norte de Inglaterra, quienes, en marzo de 1761, dejaron 42 muertos y 48 heridos en un sangriento encuentro con la milicia. No obstante, en Inglaterra, al menos, había poca oposición a la guerra como tal; más bien, se daba el caso contrario: la exaltación patriótica de William Pitt, el gran ministro de la Guerra de las décadas de 1750 a 1760, era compartida por sus aliados tanto de la clase «media» como «baja» y, en 1780, tras cinco años de guerra desastrosa en América, se produjeron signos evidentes de hostilidad popular hacia los católicos, los franceses y los españoles –los enemigos nacionales tradicionales–, pero no parece que hubiera mucha protesta popular contra la guerra en sí. Sin embargo, es posible que no existiera el mismo espíritu en países como Austria y Prusia, donde la guerra imponía cargas agobiantes en forma de reclutamiento de campesinos, impuestos y alza de precios. En Austria, por ejemplo, la guerra de José II contra Turquía en 1788 fue muy impopular, en tanto que la firma de la paz, un año más tarde, se acogió con muestras de alegría y alivio.

Así pues, en tanto que la creencia de los gobernantes en la eficacia de la guerra permaneció constante, los objetivos que trataban de alcanzar con ella fueron cambiando lentamente. En primer lugar, y como correspondía a una era de tolerancia e «ilustración», poco quedaba de las preocupaciones «ideológicas» de los siglos anteriores. Para el cardenal Richelieu, e incluso para Cromwell, las estrictas consideraciones de la ortodoxia religiosa tendieron a dejar paso a los motivos más apremiantes de la «razón de Estado», cuando se trataba de alianzas en tiempos de guerra. Para los gobernantes del siglo XVIII aquellas pertenecían al pasado: el Estado o el interés «nacional» se habían impuesto por completo. Excepcionalmente se podían invocar consignas tales como la defensa de la «causa protestante», para

justificar la alianza de Inglaterra con Federico de Prusia en 1756, pero su fin era meramente propagandístico, por lo que no se tomaban en serio como normas de conducta de los reyes, los ministros o los jefes militares. Las «Santas Alianzas» o los «conciertos» de Europa permanecerían de hecho arrinconados, hasta que los viejos gobernantes de Europa comenzaron a ver amenazados sus intereses en el decenio de 1790, por los avances de la Revolución en Francia. Por otro lado, en tanto que la monarquía absoluta continuara siendo la forma habitual de gobierno, seguiría habiendo guerras para dirimir cuestiones dinásticas, y en tanto, también, que persistieran las ideas feudales sobre la propiedad de la tierra, los gobernantes tenderían a ver en la ampliación de sus dominios una reciente adquisición de territorios. Vemos cómo en el siglo XVIII sobreviven estos conceptos, en la serie de guerras de Sucesión por las posesiones españolas: Polonia, Silesia y Baviera; en la preocupación de la monarquía francesa por el Pacto de Familia con los Borbones españoles y en la prolongada hostilidad entre Borbones y Habsburgos. De hecho, fue la larga resistencia de Francia a abandonar estas pretensiones lo que la situó durante muchos años en grave desventaja en su lucha contra Gran Bretaña por las posesiones coloniales.

Vinculado a este concepto, si bien con un carácter más universal y duradero, estaba el del equilibrio de poder. En el siglo XVIII, otros países trataron de conseguir el equilibrio constituyendo sucesivas coaliciones con el fin de contener las ambiciones de las mayores potencias continentales, España y Francia. Inglaterra luchó contra Luis XIV, como lo hiciera antes contra Felipe II, con el fin de impedir la ocupación de los Países Bajos, situados frente a su propia costa sudoriental, por una potencia hostil. Tras la derrota de Francia en 1713, ningún país aislado era lo suficientemente poderoso para dominar la Europa occidental, por lo que la situación se hizo más flexible. Durante la primera

mitad del siglo, el equilibrio continental se consiguió generalmente por el alineamiento de Francia con España, Prusia y Baviera, por una parte, contra los Habsburgo austriacos, habitualmente apoyados por Gran Bretaña y las Provincias Unidas, por otra. Los demás países del Este, Italia y Alemania, se integraban según las circunstancias. No obstante, en el curso de aquellos años la situación cambió profundamente, debido al surgimiento de Rusia como gran potencia, que dominaba el Este y el Báltico y, a partir de 1740, debido también a la meteórica expansión de Prusia como poderoso contrapeso frente al Imperio austriaco en el centro. Entretanto, Suecia había dejado de ser una potencia de importancia militar, Polonia estaba virtualmente eclipsada y el Imperio otomano se encontraba a la defensiva frente a las pretensiones expansionistas de Rusia y Austria. El resultado fue un desplazamiento del centro de equilibrio europeo del Oeste, donde se mantuvo durante largo tiempo, para dar paso a cuestiones como la participación de Polonia y el «problema oriental», así como la incorporación de las potencias occidentales a nuevos alineamientos.

El otro factor importante que alteró el equilibrio entre las potencias europeas y proporcionó una nueva salida a los conflictos internacionales fue el crecimiento del comercio y de los imperios coloniales de ultramar. En la guerra de Sucesión española, Inglaterra consiguió de España el inestimable derecho de *asiento,* extendiendo considerablemente sus posesiones en América y las Indias occidentales y constituyéndose así en la potencia colonial dominante. Sus guerras posteriores contra Francia y España en 1739-1763 inclinaron aún más la balanza a su favor por medio de conquistas en la India y Norteamérica. En estas guerras, Inglaterra contó con la ventaja de su superioridad naval y la posibilidad de concentrar sus energías en sus empresas ultramarinas, al tiempo que recompensaba a sus aliados europeos gracias a un Tesoro bien saneado. Francia contaba con un

aparato bélico y diplomático más desarrollado, pero su atención se apartó continuamente de la disputa colonial a causa de sus trasnochadas preocupaciones por las luchas dinásticas en Europa y del espejismo de su Pacto de Familia con los Borbones españoles. Un resultado de las conquistas coloniales británicas fue la reafirmación de su prestigio, no solo en cuanto a su comercio y a su Tesoro, sino también en cuanto a la política exterior y al equilibrio de poder. A principios de siglo, Defoe proclamaba que «ser dueños del poder en el mar significa ser dueños de todo el poder y todo el comercio en Europa»; y John Campbell, en *The Present State of Europe,* argumentaba en 1750 que «el interés y el comercio del Imperio británico están tan inseparablemente unidos que se pueden considerar como una misma cosa». En la escala de los valores coloniales, hay que señalar que la opinión contemporánea adscribía el primer lugar a la posesión de islas de esclavos y azúcar en las Indias occidentales, y no sin razón, ya que el valor del comercio anual de Gran Bretaña con sus posesiones del Caribe en 1783 ascendió a 4.250.000 £ (y más de la mitad solamente con Jamaica), frente a 2.000.000 £ con la India y 882.000 £ con Canadá y Terranova.

Tampoco es sorprendente que este desplazamiento en el equilibrio del poder colonial impresionase igualmente a la opinión de otros países, especialmente de aquellos cuyos comerciantes y gobernantes perdieron riquezas y posesiones a favor de la creciente supremacía de Gran Bretaña. Así, a mediados del siglo, vemos cómo un publicista francés argumentaba que el «dominio del mar daría a una nación la monarquía universal»; y el ministro francés Choiseul sostenía que los ingleses, «con la excusa de proteger el equilibrio en la tierra, que nadie amenaza… están destruyendo por completo el equilibrio en el mar, que nadie defiende». Estas consideraciones influyeron en el cambio de la política exterior de Francia, que comenzó a abandonar sus ambiciones

dinásticas (manteniéndose incluso a distancia de los problemas de Polonia y Baviera), «revocó» su alianza tradicional contra los Habsburgos y recuperó la libertad para saldar cuentas en ultramar con Inglaterra. Para ello contaba con la ventaja de que otros países europeos, cuyas flotas mercantes habían sufrido las pesquisas de los ingleses en busca de contrabando, se convencían fácilmente de que tanto la libertad de los mares como el equilibrio del comercio estaban en peligro debido a los métodos despóticos de Gran Bretaña y a su creciente dominación. De este modo, a partir de 1763, Gran Bretaña se encontró virtualmente aislada en Europa, en tanto que Francia, España, las Provincias Unidas y las «neutrales» Potencias Nórdicas se unían a los americanos en la guerra de 1775-1783, para despojarla de sus colonias norteamericanas.

Otros factores que, a lo largo del siglo, influyeron sobre el carácter, el alcance y la prosecución de las guerras fueron los adelantos de la técnica y la organización militares y el surgimiento, en algunos países, de una opinión pública entre la clase media. Los ejércitos tendieron a hacerse más grandes, mas esta no fue la regla general, ni hubo inclinación a formar ejércitos «nacionales» o a recurrir al tipo de movilización masiva que llevaron a cabo los franceses en la época de la Revolución. El mayor incremento tuvo lugar en las nuevas grandes potencias: Rusia y Prusia. La fuerza de Rusia pasó de 132.000 hombres en 1731 a 458.000 en 1796 y la de Prusia de 38.000 en 1714 a 80.000 en 1740; en un determinado periodo de la guerra de los Siete Años, las fuerzas prusianas sumaban el 4,4 por 100 de su población, proporción mucho más elevada que la que se consideraba practicable en cualquier otra parte. Los ejércitos franceses eran un poco mayores de lo que habían sido durante las guerras de Luis XIV, pues el mariscal de Saxe, uno de sus grandes teóricos militares, sostenía la tesis de que, en una batalla, «las multitudes solo sirven para desorientar y estor-

bar». Otro factor restrictivo fue la persistente idea de que en la guerra había que utilizar a las clases productivas con criterio ahorrativo: los soldados extranjeros, los desertores de otros ejércitos y los desechos sociales servirían mejor para el propósito. En Inglaterra, una gran parte de los reclutados en el país eran vagabundos y criminales; estos últimos podían elegir entre el alistamiento o la deportación. El gran ministro francés de la Guerra, conde de Saint-Germain, creía que «tal como están las cosas, el ejército tiene que proveerse inevitablemente de la escoria del pueblo y de todos aquellos que no sirven para nada a la sociedad»; incluso Federico el Grande afirmaba que «en tiempo de guerra no se deben reclutar soldados en el propio país sino cuando la más amarga de las necesidades obliga a hacerlo». La limitación en el número, sin embargo, estaba compensada, en cierta medida, por una mejora de las técnicas y la organización militares. Los gobernantes comenzaban a manifestar un interés más personal y competente por el equipamiento y dirección de sus ejércitos: las hazañas militares de Federico II han llegado a ser legendarias y también Jorge II de Inglaterra y Hannover desenvainó su espada para dirigir a las tropas en la batalla de Dettingen en 1743. Esta preocupación creciente de los gobernantes se reflejó, además, en la fundación de escuelas y academias militares: durante este periodo, los rusos establecieron su Noble Cuerpo de Cadetes en San Petersburgo, los franceses su Real Escuela Militar y los ingleses su Academia de Ingenieros en Woolwich. De estas instituciones fluyó una riada de manuales sobre problemas militares, que originaron un aumento de la capacidad de tiro de los ejércitos y de la manejabilidad de las armas. Se generalizó el uso de la bayoneta; la primera demostración de metralla se hizo en Gibraltar en 1787, y las reformas radicales de Gribeauval en Francia, que proporcionaron a sus ejércitos una artillería más ligera y más móvil, su-

pusieron un legado inapreciable para los ejércitos de la Revolución y el Imperio.

En las monarquías absolutas, las cuestiones de la guerra y la paz, como todos los asuntos relativos a la alta política del Estado, eran incumbencia del gobernante, asistido por un pequeño círculo de íntimos. Los debates acerca de estos temas se llevaban a cabo tras las puertas cerradas del despacho real, el gabinete o la cancillería y las decisiones se guardaban en el más estricto secreto. En la Francia de Luis XV, el secreto alcanzó proporciones casi ridículas: como quiera que el gobierno se hallaba dividido en facciones, el rey había adoptado la costumbre de mantener consultas privadas con una reducida camarilla de consejeros (el *secret du Roi*) para proseguir su propia política dinástica, que a menudo divergía de la que practicaban y proclamaban sus embajadores y secretarios de Estado. En Inglaterra la oposición venía sospechando insistentemente que Jorge II realizaba intrigas similares entre bastidores con un grupito de «amigos del rey», mas esta práctica, tanto si era cierta como si no, difícilmente hubiera podido mantenerse frente a la multitud de preguntas y debates parlamentarios. Además, el Parlamento no reclamó nunca el derecho a la fiscalización completa de los asuntos exteriores y, en el debate sobre el Tratado de Aix-la-Chapelle en 1748, Henry Pelham recordó a los Comunes que «la facultad de firmar la paz y declarar la guerra, según nuestra Constitución, está prudentemente reservada a la Corona, porque, en ambos casos, resulta absolutamente necesario mantener secretas nuestras intenciones, hasta el momento de su ejecución». Sin embargo, Inglaterra difería de otros países en que el Parlamento, encargado de discutir e informar sobre política exterior, determinaba de hecho su resultado y su orientación y en que ningún ministro, por más que estuviera sostenido por la Corona, podría mantenerse mucho tiempo frente al descontento del Parlamento. Así, Walpole se vio obligado a decla-

rar la guerra a España en contra de sus deseos, Carteret cayó a causa del fracaso de su política antiborbónica y, caso más significativo, lord North fue expulsado del cargo en 1782, a pesar de que su política en la guerra americana coincidía con los deseos de la gran mayoría del Parlamento, cuando aquella resultó un rotundo fracaso. La novedad de todo esto no era tanto la afirmación de los derechos del Parlamento frente al rey, como el desarrollo de una opinión pública bien informada entre la clase media fuera del mismo Parlamento, que obligaba a la Cámara de los Comunes a tener en cuenta sus deseos. Fue la presión «exterior» de la naciente clase de los comerciantes «intrusos» de Londres y de las grandes ciudades comerciales, deseosas de ajustar cuentas con Francia y España, la que obligó a Walpole a cambiar su política antes de dimitir de su cargo. Por un proceso inverso, William Pitt fue elegido en 1757, no por el deseo de Jorge II o de la mayoría del Parlamento, sino por la influencia exterior de los poderosos intereses mercantiles. Una corriente de opinión similar apoyó a Pitt cuando este dimitió en 1761, obstaculizando los preparativos de la paz del gobierno de Jorge III, que culminaron en el Tratado de París de 1763, calificado de blando frente a Francia y España. En los últimos periodos de la guerra americana, fue el partido de la paz el que recibió el apoyo de este público exterior y no el partido de la guerra, y con su beneplácito se formó el Ministerio Rockingham-Shelburne, tras la dimisión de North en 1782. Con el desarrollo de la prensa política independiente, tal presión se había hecho más efectiva. Hacia 1782, los 18 periódicos de Londres dedicaban bastante espacio a la «información del exterior» y el *Annual Register,* por ejemplo, estuvo instruyendo a sus lectores durante años en las complejidades de la política europea. Otros países tenían también periódicos, pero cuando las decisiones sobre política exterior constituían un secreto celosamente guardado estos no podían estar tan bien infor-

mados y, cuando no existían instituciones parlamentarias, la opinión de la clase media tenía escasa posibilidad de influir en la política de los gobiernos. De modo excepcional, en Francia, un poderoso financiero como Pâris-Duverney pudo persuadir, a principios de siglo, al cardenal Fleury, ministro del rey, de que prestara atención a sus advertencias contra las aventuras militares costosas. Pero solamente a partir de la guerra americana comenzaron a descorrerse los velos del secreto en los asuntos diplomáticos y militares, gracias a la insistente intervención de un amplio público capaz de leer y pensar. No cabe duda de que una de las razones por las que el gobierno francés estuvo dispuesto a enviar sus fuerzas a América fue la popularidad que había alcanzado la causa americana entre los franceses interesados en política, al igual que sucedió, como ya hemos visto, en Alemania y en otros países. Este factor iba a tener una importancia creciente en los años siguientes.

El Tratado de Versalles de septiembre de 1783, que ponía fin a la guerra americana, proclamaba entre «sus Majestades Británica y más Cristiana» de Inglaterra y Francia «una paz cristiana, universal y perpetua». Estos nobles sentimientos eran fáciles de manifestar e, incluso, de llevar a la práctica, debido al agotamiento de ambos países por los recientes empeños. Así, en los años que median entre las Revoluciones americana y francesa, fueron los tres «déspotas» orientales de Austria, Rusia y Prusia quienes tendieron a tomar la iniciativa en los asuntos europeos. Mientras que las potencias occidentales trataban de reorganizarse de diversos modos y de recuperarse de las heridas que se habían infligido mutuamente, nuevas posibilidades de expansión se abrían al Este.

Resulta sorprendente que los principales problemas de Inglaterra no surgieran de una continua animadversión por parte de Francia o los Estados Unidos de América, que fue-

ron los principales responsables de su derrota. Francia estaba al lado de la bancarrota nacional (de lo que se hablará más detenidamente en el capítulo siguiente) y únicamente hizo tímidos intentos de mezclarse en los complejos asuntos europeos, mientras que Inglaterra, a pesar de haber perdido sus colonias americanas, pronto estuvo en situación de restaurar su comercio con ellas sobre una nueva base, de modo que Francia, que había entrado en la guerra para ganar la India y las Indias occidentales, sacó en la práctica muy poco en limpio. Los principales problemas para Inglaterra eran restaurar su posición financiera (había gastado 100.000.000 de libras en la guerra) y acabar con su aislamiento en Europa, que duraba ya veinte años, reanudando antiguas amistades, como la de los holandeses, y participando en nuevas alianzas. El primer ministro, Pitt, que había leído a Adam Smith y estaba convencido de muchos de los argumentos de la nueva escuela de economía política, inició la obra de reconstrucción pacífica con un estilo vigoroso, aumentó la renta nacional, redujo la deuda pública, controló el gasto público e, incluso, firmó un acuerdo de «Libre Comercio» con Francia sumamente ventajoso (el Tratado Eden-Vergennes de 1786), con lo que prosperaron la industria y el comercio. Pero el sistema financiero de Pitt solo podía funcionar y proporcionar mayores beneficios a las empresas y compañías comerciales en tanto que durara la paz y se mantuvieran a raya los rumores de guerra. Su buena suerte residió en la obligada pasividad de Francia y las crecientes dificultades de Austria. En la medida en que fue capaz de restringir sus intervenciones activas en el Oeste, al tiempo que mantenía un ojo vigilante en el Este, pudo sortear los peligros y permanecer a salvo.

Si bien al principio las posibilidades de que Pitt encontrara un aliado en Europa parecían escasas, se vio favorecido por la incansable actividad y las retorcidas ambiciones del emperador austriaco. En los planes de José II entraban

los de cambiar sus provincias belgas por Baviera, lo que le acarreó la hostilidad de los príncipes alemanes, que encontraron un campeón para su causa en Federico de Prusia. La Liga de los Príncipes Alemanes, bajo la dirección de Federico de Prusia, obligó a José II a abandonar Baviera y le indujo a poner en práctica su plan alternativo para el desarrollo económico de Bélgica. A tal fin, intentó obligar a los holandeses a abrir el río Scheldt al libre tránsito hasta Amberes. Aunque Inglaterra se alarmó por esta amenaza a sus intereses comerciales, aún estaba en malos términos con los holandeses y hubieron de ser los franceses quienes, llamados en su ayuda, consiguieron convencer a José II para que renunciara a su plan en el río Scheldt y firmara un tratado de alianza con las Provincias Unidas en 1785. Ello significó un contratiempo temporal para la diplomacia de Inglaterra; pero las crecientes dificultades de José II en Bélgica, los problemas financieros de Francia y los conflictos internos en las Provincias Unidas se combinaron en beneficio de Gran Bretaña. La alianza francesa fortaleció al patriciado urbano holandés y a los incipientes grupos patrióticos de las provincias en su oposición al partido proinglés del estatúder Guillermo V. Los estados de Holanda depusieron de su cargo al estatúder, mas la agitación revolucionaria de los patriotas alarmó a los patricios, quienes, con el fin de defender sus privilegios amenazados, volvieron la vista a la Casa de Orange en busca de protección. También Prusia era parte interesada, ya que la princesa de Orange, mujer del estatúder, era hermana del nuevo rey prusiano, Federico Guillermo II. En tanto que sir James Harris intrigaba en La Haya en favor de los intereses de Inglaterra, los prusianos intervinieron activamente con un ejército de 20.000 hombres cuando la princesa de Orange fue humillada públicamente por los patriotas de Utrecht. En octubre de 1787 se tomó Ámsterdam y el estatúder fue repuesto en su cargo. Francia, en bancarrota y enfrentada a una rebelión «aristo-

crática», era incapaz de apoyar a sus aliados, los patriotas, y José II tenía que habérselas con una revolución en Bélgica. El resultado fue una Triple Alianza entre los ingleses, los prusianos y los holandeses para la defensa mutua y el mantenimiento del *statu quo.* De este modo, tras veinte años de aislamiento, Inglaterra consolidó su posición en Europa.

Sin embargo, el principal foco de interés diplomático, por su gran poder de expansión, se hallaba en el Este. En 1772, las tres potencias orientales solventaron sus diferencias habituales, a iniciativa de Prusia, repartiéndose un tercio de los territorios de Polonia. En 1774, Rusia llegó al Mar Negro y tomó el puerto de Azov. En 1780, Rusia y Austria iniciaron negociaciones para establecer una alianza cuyo principal objetivo era repartirse las posesiones otomanas en Europa. Entretanto, Suecia había puesto los ojos en Finlandia y Carelia, Dinamarca en el Göteborg sueco y Prusia en las ciudades polacas de Thorn y Danzig. En 1783, Catalina se anexionó Crimea y obligó a Turquía, un año más tarde, a reconocer el hecho. En 1787 se abrieron de nuevo las hostilidades en el Cáucaso y en Crimea y, cuando el ejército ruso, al mando de Potemkin, puso sitio a Oczakov, cerca de Odesa, José II, atendiendo a la llamada de Catalina, entretuvo a los turcos a lo largo del Danubio. La guerra parecía que iba camino de convertirse en otra conflagración general cuando Suecia, aprovechándose de la preocupación rusa en el Sur, abrió la ofensiva en el Norte, marchando sobre Finlandia, en tanto que Dinamarca se unía a los rusos e invadía Suecia. En este momento, la Triple Alianza, ansiosa por limitar el alcance del conflicto, intervino a iniciativa de Pitt, y obligó a Dinamarca a aceptar un armisticio. Un año más tarde, los suecos, debilitados por los motines y derrotados en Finlandia, firmaron la paz con Rusia y aceptaron el *statu quo.*

También la intervención de Austria fue de corta duración. José II murió en febrero de 1790 y su hermano, Leopoldo II, interesado en recobrar Bélgica y en restaurar su autoridad en sus desintegradas posesiones, aceptó la mediación de la Triple Alianza y, por el Tratado de Reichenbach con Prusia (octubre de 1790), acordó retirarse de la guerra turca. Pero los rusos no tenían tan imperiosas razones para responder a los deseos de alianza angloprusiana, de modo que, una vez solucionado el problema de los suecos en el Norte, Catalina concentró aún más sus fuerzas contra los turcos. Potemkin redujo la ciudad de Oczakov; a continuación, la fortaleza de Ismail, en el Danubio, se rindió a Suvorov, cuyas tropas ocuparon todo el territorio entre los ríos Bug y Dniéster. Los rusos se dirigieron hacia Constantinopla y el Mediterráneo, lo que alarmó mucho a los ingleses, quienes exigieron que Catalina firmara la paz con los turcos y devolviese sus conquistas. Cuando Catalina se negó a devolver Oczakov, que para ella tenía un gran valor como base en el Mar Negro, Inglaterra estuvo, durante un mes, al borde de la guerra con Rusia (marzo de 1791); pero la Triple Alianza se estaba resquebrajando y, si bien Inglaterra no tenía nada que temer de Francia, temía que no podría conseguir resultado alguno en el Este sin el apoyo de Prusia. El obstáculo resultó ser Polonia. En 1790-1791, mientras Rusia concentraba su atención en otros asuntos, los polacos llevaron a cabo una pequeña revolución, dirigida por los nobles más liberales. Uno de sus fines era debilitar la influencia de Rusia y protegerse contra posteriores usurpaciones rusas. Por ello, se dirigieron a Prusia en solicitud de ayuda. Los prusianos estaban dispuestos a concederla, mas a cambio de Thorn y Danzig. Esta exigencia condujo, a su vez, en varios periodos a renovadas demandas sobre Polonia por parte de Rusia y de Austria. La Triple Alianza se rompió y Prusia, Rusia y Austria –aunque profundamente divididas con respecto a Alemania, los Países Bajos y Tur-

quía– pudieron arreglar sus diferencias una vez más, con posteriores particiones en 1792 y 1795, a expensas de los infelices polacos.

Pero en esta época una revolución de consecuencias mucho mayores agitaba a Francia. En sus primeros momentos, esta no podía sino beneficiarse de los apuros de los gobernantes europeos y de los conflictos que tenían que afrontar en el interior y en el exterior. Sin embargo, antes o después, estos gobernantes tuvieron que enfrentarse con los problemas que aquella planteaba y concertar sus esfuerzos para darle una solución. Cómo respondieron ellos y sus pueblos a este desafío será el tema de capítulos posteriores.

SEGUNDA PARTE
LA REVOLUCIÓN FRANCESA

IV. ¿POR QUÉ HUBO UNA REVOLUCIÓN EN FRANCIA?

De los capítulos anteriores se deduce que no puede encontrarse una respuesta sencilla a esta pregunta: ¿por qué hubo una revolución total en Francia en 1789 y no en otra parte? No vamos a discutir aquí en qué medida hicieron los americanos una revolución social, nacional y política en 1776. En Bélgica y Polonia hubo una especie de revolución nacional contra los austriacos, por una parte, y contra los rusos, por otra; en las Provincias Unidas se produjo un intento de revolución política (aunque prematuro) por parte del Partido Patriótico y, en Ginebra, en 1768, un *coup d'etat* de los burgueses de la ciudad, quienes, por unos pocos años, restablecieron el equilibrio de la constitución en su favor. Mas en ninguno de estos conflictos hubo una decisiva victoria de un grupo social sobre otro; ninguno era «democrático», en cuanto que no transfería, ni pretendía transferir, el peso de la autoridad política al pueblo en general; y ninguno perduró, en etapas progresivas, hasta conseguir una transformación completa de la sociedad existente. Esto solamente sucedió en Francia, y aunque algunos de estos países y otros más siguieron después la estela de los cambios revolucionarios que se produjeron en Francia, no es esta la cuestión que nos ocupa ahora.

¿Por qué, entonces, hubo tal revolución en Francia? Los historiadores, aficionados a leer la historia retrocediendo en el tiempo, han contestado a esta cuestión de muy diferentes modos, de acuerdo con sus propios prejuicios y con los de sus contemporáneos. Antes de ofrecer una explicación que quizá pudiera parecer hoy válida y razonable, quizá sea interesante ver cómo han enfocado el problema algunos de los grandes cronistas e historiadores del pasado.

El primer personaje de importancia que comentó la cuestión fue Edmund Burke, quien, aunque no era historiador,

fue un observador de la Revolución y ejerció una gran influencia en el pensamiento de mucha gente. Para Burke, la sociedad descrita en nuestro primer capítulo no era en modo alguno indeseable y, por lo tanto, no precisaba de una profunda transformación. También consideraba que sus instituciones políticas eran susceptibles de graduales mejoras, aunque, en general, habían resistido el paso del tiempo y no había por qué modificarlas. En su calidad de anglo-irlandés, pensaba que las instituciones inglesas eran superiores a las francesas; pero, para Francia, la monarquía absoluta existente, la aristocracia y el alto clero, aunque lejos de ser perfectos, eran todo lo buenos que se podía esperar razonablemente. Por todo ello, la Revolución no podía ser, en su opinión, el resultado de una necesidad de reforma sentida genuina y generalmente, sino más bien de las diabólicas maquinaciones de grupos sociales egoístas y subversivos. En particular, apuntaba a la camarilla de literatos y *philosophes* que desde hacía tiempo venía socavando los cimientos de la Iglesia establecida y al advenedizo interés monetario, ansioso de arreglar cuentas con la aristocracia tradicional. En pos de estas influencias siniestras, argumentaba, venía el «populacho» ignorante o la «grosera multitud», que poco o nada tenía y era incapaz de cualquier pensamiento o discernimiento políticos. Por lo tanto, la Revolución, sin raíces en un descontento legítimo, fue el fruto de la «conspiración» de unos pocos. Esta explicación fue desarrollada más detalladamente por los *émigrés* del decenio de 1790, como el abate Barruel, y, con ligeras modificaciones, encontró desde entonces eco entre todos aquellos para quienes la Revolución fue algo negativo desde el comienzo hasta el final.

Como es natural, aquellos que estuvieron al lado de la Revolución tendieron naturalmente a explicarla en términos bastante distintos: ya como legítima protesta política contra las tiranías y las restricciones del Antiguo Régimen, ya como protesta social de las clases oprimidas o empobre-

cidas. Los historiadores liberales de la Restauración francesa –hombres como Thiers y Mignet– la contemplaron mayormente bajo el primer punto de vista. Los motivos que los indujeron en su día a exigir una constitución o una Carta más liberal de Luis XVIII y Carlos X fueron básicamente los mismos que una generación antes indujeron a los revolucionarios de 1789 a redactar la Declaración de los Derechos del Hombre y a exigir de Luis XVI una constitución. Así, en esencia, se vio ante todo en la Revolución un movimiento político iniciado por las clases «respetables» de la nación para reparar viejos agravios y reformar instituciones anticuadas. «Cuando se hace necesaria una reforma –escribía Mignet– y llega el momento de llevarla a la práctica, nada puede detenerla y todo sirve para hacer que progrese.» Al igual que la explicación conservadora de Burke, esta interpretación liberal, o *whig,* de la Revolución fue modificada y mejorada por historiadores posteriores, pero aún hoy ejerce influencia.

Jules Michelet, el gran historiador del decenio de 1840, también simpatizaba con los revolucionarios de 1789, pero, en su condición de republicano y demócrata, veía en la Revolución una operación quirúrgica más radical que Mignet o Thiers. En sus páginas, la Revolución se convierte en un levantamiento espontáneo y regenerador de toda la nación francesa contra el despotismo, la miseria agobiante y la injusticia del Antiguo Régimen: algo parecido, de hecho, al estallido espontáneo de esperanza y odio populares que retrata Dickens en los primeros capítulos de su *Historia de dos ciudades.* Y como fue el pueblo llano –los campesinos y los indigentes de las ciudades– quien más sufrió por la crueldad y la injusticia de los reyes y los aristócratas, para Michelet «el pueblo», lejos de ser un instrumento meramente pasivo en manos de otros partidos y grupos sociales interesados, fue el héroe real y vivo del drama. Esta interpretación de la Revolución, como explosión espontánea y

airada de todo un pueblo contra la pobreza y la opresión, ha sido, probablemente, hasta tiempos recientes más influyente que ninguna otra.

Pero, como reconocía Alexis de Tocqueville hace más de cien años, ninguna de estas interpretaciones tan diversas da una repuesta realmente satisfactoria a la cuestión de por qué hubo una revolución en Francia. Tocqueville, que escribió su propia explicación, está en parte de acuerdo con Burke. Por ejemplo, escribe que, en Francia, «la irreligión… originó un enorme perjuicio público», que «todo el espíritu de oposición política engendrado por los vicios del gobierno, incapaz de encontrar salida en la acción, buscó refugio en la literatura» y que «los escritores se convirtieron en los auténticos dirigentes del partido, cuyo fin era derribar todas las instituciones políticas y sociales del país». Así, Tocqueville, como Burke y muchos otros, reconoce la importancia que tuvieron los escritos de la Ilustración al minar las creencias y lealtades tradicionales, dejando con ello todo el sistema debilitado y en peligro; pero, a diferencia de Burke, no ve en todo esto parte de una conspiración organizada, sino, más bien, el resultado de «los vicios del gobierno» y del extenso descontento existente frente a la situación. De hecho, coincide con Mignet y Thiers en que el gobierno era despótico, corrompido y necesitado de reforma: «Desde hacía mucho tiempo –escribe– había comenzado a temblar el viejo edificio del gobierno; ya se estaba tambaleando». Pero, después de haber dicho esto, continúa argumentando que el Consejo Real y los funcionarios del Estado, lejos de mostrarse impermeables a las repetidas exigencias de reformas, eran hipersensibles a ellas y que, especialmente bajo Luis XVI, se produjo una «revolución administrativa», que amplió los poderes del Consejo y las actividades de los Intendentes, integró con más firmeza a la Iglesia galicana en la maquinaria del gobierno y creó un aparato completamente nuevo para el ejercicio de la justicia admi-

nistrativa. Y esto no fue todo: Francia tenía las mejores carreteras de Europa, el bienestar social se hallaba muy extendido, se estaba aboliendo la tortura, las *lettres de cachet* estaban cayendo en desuso (hubo 14.000 bajo Luis XVI, comparadas con las 150.000 bajo Luis XV) y la Bastilla se estaba vaciando de prisioneros. Pero Tocqueville añadía, con un notable destello de sagacidad: «El orden social destruido por una revolución es casi siempre mejor que el que la precedía inmediatamente y la experiencia muestra que el momento más peligroso para un mal gobierno es, por lo general, cuando se propone realizar una reforma». Por tanto, no fue la ausencia de reformas, sino el carácter y la tardanza de estas lo que, al abrir los ojos a los hombres a cosas mejores, sirvió para precipitar la Revolución, más bien que para evitarla.

Tocqueville hace uso de un razonamiento similar al criticar la noción de Michelet de la revolución espontánea de la «miseria». ¿Era Francia verdaderamente un país pobre, o en proceso de empobrecimiento? En un capítulo anterior vimos que su comercio, su ingreso nacional y la producción de su industria y agricultura aumentaban rápidamente, que las clases medias eran cada vez más prósperas, que se estaba reconstruyendo París, debido en gran parte a los esfuerzos de la naciente y creciente burguesía, y que Burdeos –al igual que Nantes y Le Havre– podía rivalizar y superar en riqueza y volumen de comercio a Liverpool, en vísperas de la Revolución. También los campesinos, lejos de arrastrarse en una abyecta pobreza, en un atraso o miseria irremediables, o de estar vinculados por la servidumbre al dominio del señor, habían obtenido la libertad (en la mayoría de los casos), estaban aprendiendo a leer y a escribir y habían pasado a ser propietarios de un tercio de la tierra en Francia. ¿Por qué, pues, pregunta sagazmente Tocqueville, hubo una revolución en Francia y no en Austria, Bohemia, Prusia, Polonia o Rusia, donde el pueblo –y, en particular, los

campesinos– estaba mucho más empobrecido y oprimido? Fue precisamente, continuaba, porque las clases medias se estaban enriqueciendo y adquiriendo más conciencia de su importancia social y porque los campesinos estaban liberándose, aprendiendo a leer y a escribir y progresando, por lo que los viejos residuos feudales y los privilegios aristocráticos resultaban más irritantes e intolerables. Así, Tocqueville concluye, en un pasaje que ya hemos citado:

> No por ir de mal en peor cae una sociedad necesariamente en la revolución. Sucede muy a menudo que un pueblo que ha soportado sin queja, como si no las sintiera, las leyes más opresivas, las desecha violentamente tan pronto como se alivia su peso… En la cumbre de su poder, el feudalismo no inspiró a los franceses tanto odio como lo hizo en la víspera de su desaparición. Las más ligeras arbitrariedades de Luis XVI parecían menos fáciles de tolerar que todo el despotismo de Luis XIV[1].

Los comentarios de Tocqueville son esclarecedores porque nos recuerdan que las revoluciones –a diferencia de las rebeliones campesinas o de los motines por los alimentos– rara vez, si es que sucede alguna, toman la forma de meras explosiones espontáneas contra la tiranía, la opresión o la privación manifiesta: tanto la experiencia como la esperanza de algo mejor resultan factores muy importantes en la historia. Evidentemente, esta es la razón de que la inquietud provocada en las posesiones austriacas por las bienintencionadas reformas de José II constituyera, a largo plazo, un peligro mucho mayor para la monarquía absoluta que todas las rebeliones campesinas contra Catalina de Rusia. Sin embargo, tanto las recientes investigaciones como nuestra propia experiencia de las revoluciones posteriores sugieren que el análisis de Tocqueville, a pesar de su brillantez, no profundiza suficientemente ni tiene en cuenta todos los factores que intervinieron en la Revolución francesa. Si reyes y ministros estaban tan dispuestos a realizar reformas, ¿por qué no consiguieron –y era evidente que no podían conseguirlo– dar una satisfacción más general? Si las clases medias se estaban tornando gradualmente más prósperas y

más conscientes de su importancia social, ¿por qué sintieron repentinamente la necesidad de recurrir a la rebelión abierta contra un sistema al que hasta entonces habían apoyado? Si los campesinos estaban adquiriendo tierras y liberándose gradualmente de los últimos vestigios de servidumbre personal, ¿por qué volvieron en 1789 a formas de rebelión que no se habían visto en Francia en los ochenta años anteriores? ¿Cómo comenzaron a configurar la mentalidad de las personas pobres de las ciudades, si no la de los campesinos, las ideas de la Ilustración, propagadas por escritores, periodistas y clientes de los salones de moda? ¿Cuáles fueron las circunstancias reales en las que se produjo la Revolución y cómo fue posible que una rebelión de magistrados y aristócratas irritados se transformara en una revolución de las clases «media» y baja de las ciudades y el campo? Estas son algunas de las cuestiones a las que hemos de encontrar respuesta.

Ya vimos en un capítulo anterior que el sistema de gobierno puesto en práctica por Luis XIV perdió con sus sucesores gran parte de su fuerza y de su capacidad para mantener el respeto y la lealtad de sus súbditos. Como pudimos ver, esto se debió, en parte, a la indolencia y a los defectos personales de Luis XV y, en parte, a la tendencia de la burocracia, compuesta de funcionarios privilegiados, a convertirse en un sistema de derecho por sí misma. Entretanto, resultaba difícil que una clase media cada vez más próspera y más consciente de su importancia no comenzara a resentirse de la ineficacia, la extravagancia y la pequeña tiranía de una Corte y un gobierno a cuyo mantenimiento tanto había contribuido y sobre los cuales no poseía control alguno. Al subir al trono, Luis XVI estaba deseoso de realizar reformas importantes en la administración, reducir los gastos de la Corte, liberar el comercio de las restricciones embarazosas, aliviar los impuestos de los campesinos y fomentar en cierta medida el autogobierno por medio de asam-

bleas locales en las provincias. A diferencia de su predecesor, Luis XVI tenía un alto sentido de la responsabilidad personal; además, contaba con un ministro, Turgot, que gozaba de la simpatía y el afecto de las clases medias tanto «ilustradas» como industriales; sin embargo, al cabo de algunos años, todo el sistema se vino abajo y Turgot dejó de ser ministro. ¿Por qué? Porque las reformas de Turgot, aunque admitidas de buen grado por las clases medias, tropezaban con los intereses creados de los *parlements,* el alto clero y las facciones aristocráticas de la Corte. En este aspecto, la experiencia de Turgot resultó parecida a la de Machault y Maupeou antes de él y a la de Calonne, Brienne y Necker después, demostrando, una vez más, que no había posibilidad de realizar reformas a largo plazo, aun contando con un rey bienintencionado y con ministros capaces y honestos, en tanto las clases privilegiadas conservaran, por medio de los *parlements* o de su influencia en la Corte, poder para obstaculizar sus acciones. Tales eran los límites que se imponían a las reformas, las cuales no conseguían sino excitar los deseos de algunos, irritar a otros y dejar a todo el mundo insatisfecho. La consecuencia de estos fracasos era aumentar el odio hacia las clases privilegiadas y el desprecio hacia una monarquía que parecía defenderlas.

Además, a medida que las clases medias se hacían más prósperas, sus esperanzas de realizar sus ambiciones sociales se iban debilitando. Los obstáculos al libre ejercicio del comercio y la manufactura, por medio de gravosos tributos internos, *péages* (tributos privados sobre el uso de los ríos, canales y puentes) y las actividades de los inspectores del gobierno eran agravios que venían de antiguo, a los que ahora se añadía uno nuevo: como en un periodo de «reacción feudal», las posibilidades de ascenso social y político se iban cerrando progresivamente. Hacia 1750, el comerciante o financiero enriquecido con el ejercicio de la banca, la manufactura o el comercio colonial ya no podía albergar

esperanzas de coronar su carrera comprando para él o para sus hijos un cargo hereditario en el Estado o un grado en el ejército. Como ya hemos visto, estos puestos se estaban convirtiendo en dominio exclusivo de la aristocracia: los *Parlements* cerraban sus puertas a los intrusos de la clase media, y hacia 1789 el nacimiento noble era el único requisito esencial, con pocas excepciones, para conseguir un cargo elevado en el ejército, la Iglesia o la administración. Quizá lo más significativo sea que las clases medias francesas –si se exceptúan los escritores, abogados, publicistas y periodistas– esperaran tanto tiempo antes de desahogar su protesta. Solamente cuando los *parlements,* el alto clero y la nobleza las aguijonearon a la acción, aquellas clases comenzaron, como veremos, a reclamar seriamente la igualdad social y la participación en el gobierno.

Por otro lado, el cuadro ofrecido por Tocqueville de una creciente prosperidad campesina no se podía generalizar. Es cierto que un tercio de los campesinos franceses eran propietarios directos de sus tierras, pero la mayor parte de estos propietarios no poseían más que pequeñas parcelas que, incluso en los años de buena cosecha, apenas si alcanzaban para alimentar a sus familias. Arthur Young escribía que en Champaña y Lorena había visto «más de una vez llevar a tal extremo las divisiones que un simple árbol frutal, que ocupaba unos cuatro metros de terreno, constituía una granja y su posesión determinaba la situación de la familia». Aún era mayor el número de los aparceros y jornaleros sin tierra, quienes compraban el pan en el mercado y nunca podían alimentar la esperanza, ni siquiera en las circunstancias más favorables, de alcanzar una participación, por mínima que fuese, en la prosperidad rural. A todo esto, los pequeños propietarios, los arrendatarios y los labradores tenían el agravante de que, impulsados por la necesidad de aumentar la producción agrícola, los terratenientes y campesinos ricos estaban cercando los campos y tierras comu-

nales y usurpando los derechos tradicionales de los aldeanos al espigueo y los pastos. En un capítulo anterior se ha hablado ya de otro agravio de carácter más general: la nueva tendencia de los terratenientes a rastrear viejos derechos vinculados a sus tierras y a imponer obligaciones nuevas o adicionales a aquellas que ya pesaban sobre sus campesinos. Lo que no vio Tocqueville es que, como han demostrado recientes investigaciones, precisamente durante los últimos años del Antiguo Régimen la prosperidad agraria generalizada se había detenido y comenzaba a ceder frente a un proceso de prolongada depresión, que se desarrolló a lo largo de dos periodos principales. Después de 1778, el año en que Francia entró en la guerra de América, se inició una recesión de resultas de la cual cayeron los precios, gradualmente en muchos de los productos agrarios e industriales, pero con carácter de crisis en los vinos y textiles. Durante aquellos años, y a causa también de los gravosos tributos en forma de impuestos, diezmos y exacciones señoriales, los beneficios netos de los pequeños arrendatarios, pequeños propietarios, viticultores y aparceros se redujeron muy por debajo de los precios, en tanto que los grandes propietarios estaban protegidos contra las pérdidas por medio de sus ingresos feudales. Cuando esta depresión cíclica se hallaba en su apogeo, se produjo la repentina catástrofe económica de los años 1787-1789, a causa de las malas cosechas y de la escasez, duplicándose el precio del trigo en dos años en las principales regiones productoras del norte y alcanzando los niveles más elevados en el verano de 1789 en 27 de las 32 *généralités.* La crisis afectó al grueso del campesinado, tanto propietarios, arrendatarios, aparceros o jornaleros, como viticultores, granjeros, lecheros o cerealeros, en su doble condición de productores y consumidores. De la agricultura, la crisis se extendió a la industria, y el paro, que ya venía aumentando desde el Tratado de «libre comercio» de 1786 con Inglaterra, alcanzó proporciones desastrosas en París y

en los centros textiles de Lille, Lyon, Troyes, Sedan, Ruán y Reims. Otra consecuencia de la crisis fue que los jornaleros y todos los pequeños consumidores de la ciudad y del campo se vieron obligados, por la rápida subida de precios de los alimentos, a aumentar su gasto diario de pan de aproximadamente la mitad a tres cuartos o, incluso, a cuatro quintos de sus ingresos[2]. Por esto, los campesinos, los artesanos y los trabajadores urbanos se unieron en su hostilidad frente al gobierno, los terratenientes, los comerciantes y los especuladores, e iniciaron la Revolución en una situación de pobreza y escasez crecientes y no de «prosperidad». En este sentido, por lo menos, la investigación moderna tiende a justificar la opinión de Michelet más que la de Tocqueville.

Sin embargo, para hacer una revolución se precisaba algo más que dificultades económicas, descontento social y frustración de las ambiciones políticas y sociales. Tenía que haber algún tipo de ideología unificadora que diera cohesión al descontento y a las aspiraciones de unas clases sociales tan diversas, un vocabulario común de esperanza y protesta: algo, en resumen, parecido a una «psicología revolucionaria» común. En las revoluciones de nuestros días, esta preparación ideológica ha estado a cargo de los partidos políticos, pero en la Francia del siglo XVIII no había tales partidos. Fueron, en primer lugar, los escritores de la Ilustración los que prepararon el terreno, los que debilitaron las defensas ideológicas del Antiguo Régimen, como señalaron Burke y Tocqueville. Como ya hemos visto, las ideas de Montesquieu, Voltaire y Rousseau, así como las de muchos otros, se difundieron ampliamente, siendo absorbidas por un público ansioso de lectura, tanto de la aristocracia como de la clase media. Se puso de moda, incluso entre el clero, ser escéptico e «irreligioso» y los escritos de Voltaire vinieron a añadirse a las disputas dentro de la propia Iglesia (galicanos contra jesuitas, richerianos y jansenistas contra la

creciente autoridad de los obispos) para exponer a esta a la indiferencia, al desprecio o a la hostilidad. En el decenio de 1750, los parisienses se manifestaron contra su arzobispo, que se negaba a permitir que los sacerdotes administraran los sacramentos a los jansenistas moribundos, y Hardy, librero del barrio universitario de París, recoge expresiones parecidas de anticlericalismo en su diario de la década de 1780. Entre tanto, el vocabulario político habitual comenzó a incluir términos como «ciudadano», «nación», «contrato social», «voluntad general» y «derechos del hombre», a los que pronto habría de seguir el de *tiers état.* Como observaba Tocqueville, a menudo fueron los propios pilares de la misma administración –ministros e intendentes– los que iniciaron a un público más amplio en el empleo de estos conceptos; pero no fueron estos, ni los mismos *philosophes,* ni la sociedad y los literatos de los salones de moda quienes llevaron este vocabulario a la calle y transformaron las especulaciones abstractas en conceptos populares y consignas para la acción política. Esto fue, en parte, obra de los publicistas del Tercer Estado en 1788 y 1789, aunque, mucho antes de esto, los *parlements* venían preparando concienzudamente el terreno con los libelos y los agravios publicados en el curso de su prolongada disputa, a partir de 1750, contra el «despotismo» de los ministerios, en los que citaban con la mayor libertad y sin censura los escritos de los *philosophes.* El *Parlement* de París, por ejemplo, en su gran escrito de agravios de 1753, afirmaba su derecho, como «cuerpo intermedio», a actuar como guardián de una «especie de contrato» entre el rey y su pueblo. La ley, proclamaba el *Parlement* de Toulouse en 1763, ha de estar sujeta al «libre consentimiento de la nación». En 1760, el *Parlement* de Ruán insistía en que el «derecho de aprobar (las leyes) corresponde a la nación» y, en 1771, repetía que las leyes fundamentales del reino deben ser «la expresión de la voluntad general». En 1788, el *Parlement* de Rennes citaba casi tex-

tualmente a Rousseau y a la declaración de independencia americana al proclamar: «Que el hombre nace libre, que originalmente todos los hombres son iguales, son verdades que no precisan demostración». La novedad de todo ello era que los *parlements* no escribían tratados políticos, como hicieron antes que ellos los *philosophes,* sino que se proponían deliberadamente influir sobre la opinión pública y ganarse un apoyo eficaz en sus luchas con la Corona.

Pero, aun teniendo en cuenta todo lo anterior, sigue siendo dudoso que en enero de 1787, por ejemplo, cualquier francés u observador extranjero inteligente hubiera encontrado una razón válida para predecir el próximo estallido de una revolución y menos aún para pronosticar la forma que adoptaría tal revolución. Provistos de nuestros superiores conocimientos después del hecho, resulta fácil para nosotros ver que tales razones existían. Con todo, todavía falta un elemento importante. Para que se produjera una explosión se necesitaba una chispa y para conseguir el alineamiento especial de fuerzas que se anunciaban en la revolución de 1789 se necesitaba una segunda chispa.

La primera chispa fue la declaración de bancarrota del gobierno después de la guerra de América. Puede haber opiniones diversas en cuanto al alcance de la influencia de la Revolución americana y su declaración de independencia sobre el desarrollo de los acontecimientos en Francia, pero todas coinciden en cuanto a los resultados catastróficos que produjo la participación de Francia en la guerra. En un famoso *compte rendu* sobre la situación financiera de la nación en 1781, Necker, interventor general, aseguró a los acreedores del gobierno que había un balance favorable de 10 millones de libras; en 1786, tres años después del fin de la guerra, su sucesor, Calonne, estimaba un déficit de 112 millones de libras. Esta cantidad suponía casi un cuarto del ingreso total del Estado y exigía remedios radicales. Calon-

ne decidió que sería inútil recurrir a los anticuados procedimientos anteriores: los préstamos a corto plazo alcanzaban ya los 400 millones de libras; la *taille* se había revisado por última vez en 1780, y aún era lo bastante elevada para provocar el descontento campesino, por lo que parecía desacertado aumentar los impuestos sobre los bienes de consumo en una época de recesión y de beneficios industriales decrecientes. Por todo esto, el ministro propuso al rey reducir el gasto del gobierno (medida que siempre gozaba de popularidad, con excepción de la propia Corte), aumentar el impuesto del timbre y substituir el *vingtième* (que evadían muchos terratenientes) por un impuesto agrario sobre la producción anual del suelo, pagadero en especie por todos los propietarios y fijado y recaudado por medio de asambleas locales de propietarios representantes de los tres estados. Como estímulo para los grandes cultivadores, el ministro proponía resucitar las medidas anteriores de Turgot para el libre comercio de granos y extenderlas al mercado de exportación.

Estas propuestas eran muy acertadas; si se hubieran puesto en práctica, habrían terminado con el déficit y asegurado un ingreso regular al Tesoro. Pero, por experiencia, el rey y el ministro sabían que iban a tropezar con la resistencia de las clases privilegiadas, a las que se pedía que renunciaran a una parte de sus inmunidades fiscales; la Iglesia, especialmente, se aferraría a su derecho de pagar los impuestos a través del *don gratuit* (don voluntario) y los *parlements* provinciales protestarían contra la intromisión en su jurisdicción de las nuevas asambleas locales. Además de esto, la comunidad financiera –y, por tanto, el Tercer Estado– protestaría igualmente contra el impuesto del timbre, cuyo peso principal recaería sobre sus hombros. Para soslayar los problemas se decidió someter las propuestas no al *Parlement* de París, como era costumbre en estos casos, sino a una asamblea de notables convocada especialmente –

órgano mixto de todos los estados, compuesto de prelados, nobles, miembros de los *parlements,* intendentes, consejeros de Estado y miembros de los estados provinciales y de las corporaciones urbanas–, que tenía la ventaja de ser nombrada a dedo por el rey y de no haberse reunido desde hacía ciento sesenta años. Además, fue convocada con prisas y en secreto, sin que conocieran por adelantado los asuntos que tratar.

Los resultados fueron mucho menos positivos de lo esperado. Calonne consiguió indisponer a todos los partidos. Los intransigentes, aunque se encontraban en minoría, se sintieron ofendidos por los ataques a sus privilegios y la mayoría se opuso a las propuestas por otros motivos. En particular, los aristócratas liberales (entre ellos el marqués de Lafayette), que desempeñaron un importante papel en los acontecimientos, no se opusieron a una distribución más equitativa de los impuestos, y, en principio, no pusieron objeciones al impuesto del timbre, a las contribuciones agrarias y a las asambleas provinciales; pero desconfiaban profundamente de Calonne, de quien sospechaban que estaba tratando de afianzar la autoridad ministerial por medio de las nuevas asambleas y por la manipulación de un impuesto cuya cuantía y método de recaudación no habían quedado suficientemente claros. Cuando Calonne intentó romper el punto muerto con un recurso abierto a la opinión pública, el rey se aterró ante tal falta de decoro, depuso al ministro y le reemplazó por Loménie de Brienne, arzobispo de Toulouse. Brienne era un *protégé* de la reina y además tenía la ventaja de su popularidad (era conocido por sus opiniones liberales y fisiocráticas) y de gozar de la confianza de los notables y del clero. Con todo, aunque había sido uno de los más duros críticos de Calonne, las circunstancias le obligaron a presentar un programa que difería solamente en los detalles del de su antecesor: modificó el impuesto del timbre e hizo una importante concesión al fijar el límite supe-

rior en 80 millones a la renta estimada del impuesto agrario. Las propuestas tuvieron buena acogida, pero no consiguió tener el apoyo necesario para su promulgación, como había esperado. Los notables, posiblemente estimulados por el aluvión de panfletos que provocó la asamblea, decidieron que unas medidas fiscales tan radicales transcendían a su competencia y que su aprobación debía delegarse en el *Parlement* de París, o, mejor aún (la idea fue de Lafayette), en los Estados Generales, que no se habían reunido desde 1614. El 25 de mayo se disolvieron los notables, y, después de todo, Brienne hubo de hacer frente al *Parlement.*

En realidad fue, una vez más, la oligarquía judicial de los *parlementaires,* y no los notables o la vieja aristocracia, la que enarboló la bandera de la rebelión y provocó lo que se ha llamado la «revuelta aristocrática». En aquel tiempo, el *Parlement* no representaba un sólido cuerpo de reacción. Su tribunal principal –la *cour des paires*– se componía de 144 miembros, incluidos siete príncipes de sangre, siete pares eclesiásticos y 27 nobles laicos; el resto incluía la muchedumbre de los *conseillers* de *Enquêtes y Requêtes,* principalmente hombres jóvenes: de los 72 cuya edad ha llegado hasta nosotros, 59 tenían menos de treinta y cinco años[3]. Estos estaban divididos en dos grupos: aquellos que acechaban toda oportunidad favorable para afirmar los privilegios (antiguos o usurpados) del *Parlement* y otros «cuerpos intermedios» en contra de las exigencias crecientes del gobierno, y un grupo más reducido que, inspirado por los *philosophes* y la Revolución americana, estaba deseoso de conseguir una reforma constitucional de amplio alcance. El portavoz del primer grupo en los debates que siguieron fue Duval d'Eprémesnil, y el del segundo Adrien Duport, apoyado a veces por el amigo de Lafayette, el duque de La Rochefoucauld, entre los pares, y el primo del rey, el duque de Orleans, entre los príncipes de sangre; los tres habían de desempeñar un papel decisivo en la Revolución de 1789.

Aunque divididos en cuanto a sus fines últimos, los dos grupos se hallaban unidos debido a las circunstancias del momento: ambos desconfiaban del «despotismo» ministerial y esperaban realizar sus diversos propósitos por medio de los Estados Generales. Por ello, cuando Brienne acudió al *Parlement* a registrar sus decretos, este no puso objeción alguna a la liberación del comercio de granos y acogió de buen grado las nuevas asambleas provinciales, pero rechazó el impuesto del timbre y la contribución agraria e insistió en que se convocaran los Estados Generales para que estos entendieran de la crisis financiera. Brienne se mostró también inexorable: tenía proyectadas otras reformas –tales como la del gobierno local, la restauración de los estados provinciales, la reforma judicial y militar y la concesión de derechos civiles a los protestantes– y temía (con cierta razón) que, si se convocaban los Estados Generales, se anularían sus propias medidas moderadas o se anegarían en otras mucho más radicales. Así, se invocó la autoridad del rey para convocar un *lit de justice* que desechó las objeciones del *Parlement,* promulgó los decretos fiscales y exilió a los magistrados de París a la ciudad de Troyes, en el norte.

Pero fue el *Parlement* quien ganó la disputa. Los tribunales de provincias, a los que recurrió luego Brienne, eran campeones más decididos que los parisienses en la defensa de los privilegios aristocráticos y las inmunidades locales: rechazaron casi todas las proposiciones del ministro y se solidarizaron con sus colegas de París, por lo que a Brienne no le quedó otro camino que ceder. En septiembre se restableció el *Parlement,* se retiraron los decretos sobre el impuesto del timbre y la contribución agraria y todos los interesados coincidieron en que había que prolongar hasta 1792 el *vingtième* existente (aunque se esperaba que diera un rendimiento menor). En la ciudad de París se produjeron manifestaciones entusiastas que saludaron el regreso del exilio de los magistrados; y comenzaron a circular pan-

fletos antimonárquicos. Como señalaba Arthur Young, Francia estaba «al borde de una gran revolución en el gobierno».

Sin embargo, la «revolución» que predecía Young no era una revolución de las clases medias y del pueblo, sino una revolución que habría de «inclinar la balanza», como él decía, a favor de la nobleza y el clero. Los acontecimientos de 1788 confirmaron ampliamente esta interpretación. En octubre del año anterior el *Parlement* de París había accedido a conceder nuevos préstamos a cambio de la promesa gubernamental de que los Estados Generales se reunirían en 1792; pero las negociaciones volvieron a romperse en noviembre, y el duque de Orleans, que se había convertido en una figura popular, y otros dos magistrados, que se habían mostrado particularmente explícitos durante los debates, fueron al exilio. Ello indujo al *Parlement,* en mayo, a buscar nueva popularidad publicando una declaración en la que se condenaba la totalidad del sistema de gobierno arbitrario, incluyendo las odiosas *lettres de cachet.* Brienne replicó rodeando de tropas los tribunales y obligando al *Parlement* a entregar a dos de sus dirigentes (d'Eprémesnil era uno de ellos) a la justicia real. Entre tanto, el guardasellos, Lamoignon, publicó seis edictos que suspendían todos los *parlements,* transferían la mayor parte de su jurisdicción de apelación a 47 nuevos tribunales y sus poderes de registro de los edictos reales a una corte «plenaria». La intención no era solamente castigar a los *parlements* por su desobediencia, sino introducir una cuña entre ellos y el resto de la «nación política», particularmente la aristocracia liberal y la multitud de *avocats* y abogados de la clase media a quienes las nuevas medidas abrían nuevas posibilidades de ascenso.

Pero el plan fracasó y, lejos de dividir a sus críticos, provocó algo parecido a una rebelión nacional en contra del gobierno. Invitado a votar un *don gratuit* extraordinario, el

clero reafirmó su inmunidad impositiva y protestó contra la suspensión de los *parlements.* Los duques y pares del reino añadieron sus voces de protesta a las del clero, y el Estado General de la nobleza, si bien resentido desde hacía tiempo ante las pretensiones sociales de la *noblesse de robe,* encontró oportuno el momento para manifestar su apoyo. En París y en las provincias, las clases medias y bajas, exaltadas por las declaraciones militantes de los *parlements,* se unieron a la indignación y protesta generales contra el «despotismo» de los ministros. Los «patriotas», como campeones de «la nación» en contra del privilegio y el «despotismo», se habían inclinado, al igual que Mirabeau y Lafayette (y a diferencia de Duport y Barnave), a depositar sus esperanzas en la reforma ministerial; mas ahora, viendo en el *coup d'etat* de Lamoignon una velada amenaza contra la convocatoria de los deseados Estados Generales, tendieron a alinearse junto a los *Parlements.* Además de esto, muchos miembros del Tercer Estado se habían sentido desengañados por el carácter indeciso de las reformas ministeriales u ofendidos por su falta de liberalismo. De los 500 panfletos publicados en los cuatro meses que siguieron a los edictos de mayo de 1788, la mitad eran de «patriotas». Entretanto, estallaron sublevaciones en Burdeos, Dijon, Grenoble, Pau, Rennes y Toulouse, todas ellas ciudades con una tradición de separatismo provincial y de autogobierno aristocrático. En el Delfinado, donde desarrollaron sus actividades Barnave y Mounier, la *noblesse* y el Tercer Estado cooperaron con el fin de resucitar los Estados de la provincia, que llevaban ya mucho tiempo moribundos; en Bretaña, los Estados se unieron para protestar contra el «despotismo» ministerial. En Grenoble una serie de sublevaciones de masas, provocadas por los pasantes de abogados y apoyadas por el pueblo y los campesinos de paso, impidieron durante cinco días que los magistrados suspendidos de cargo pudieran abandonar la ciudad. En Ruán, donde la nobleza explotaba

la irritación popular causada por los altos precios resultantes de la restauración del libre comercio de los granos, el intendente y el gobernador militar fueron atacados en las calles y acosados en sus respectivas casas. En ambas ciudades, el ejército mostró inseguridad: instigado por los jóvenes oficiales de la *noblesse* provincial, e irritado por los nuevos reglamentos disciplinarios de Brienne, se negó a disparar y fraternizó con los rebeldes.

Abrumado por este movimiento nacional de protesta, el gobierno se vio obligado a ceder. Se prometió la convocatoria de los Estados Generales en mayo de 1789; Necker sustituyó a Brienne; se retiraron las reformas judiciales de Lamoignon y, con ellas, todas las demás reformas proyectadas, y poco después volvieron a convocarse los *parlements.* El pueblo en general saludó estos resultados como una victoria, no faltando en la celebración los comerciantes, oficiales y aprendices de París, tanto de la ciudad como de los *faubourgs,* quienes encontraban un motivo más de manifestación en la repentina alza de los precios del pan. La «revuelta aristocrática» (pues tal era en esencia) triunfó en toda la línea: con el apoyo de las clases no privilegiadas obligó al gobierno a retirar sus proposiciones de impuestos y a reponer los *parlements.* Los Estados Generales, que se reunirían en mayo, así se creía generalmente, resolverían todos los problemas de la nación. Pero muchos pensaban (algunos lo esperaban y otros lo temían) que, descargando nuevos golpes sobre el «despotismo» de los ministros, se aumentaría proporcionalmente la autoridad, la posición y las ventajas de las clases privilegiadas.

Estos cálculos, sin embargo, demostraron estar equivocados, pues la revolución que surgió de la convocatoria de los Estados Generales resultó ser de índole muy distinta de lo que habían esperado los publicistas de 1788 y los informantes de Arthur Young en octubre de 1787. Más tarde, Cha-

teaubriand escribió que «los patricios iniciaron la revolución y los plebeyos la completaron». Y Robespierre dijo algo parecido. En cierto modo, ello fue cierto y muchos historiadores han aceptado tal veredicto. La revuelta de la nobleza fue, quizá más que nada, un primer acto, ya que constituyó el preludio de una revolución única en la Europa contemporánea, por cuanto que asoció a las clases medias con las más bajas en una acción común contra el rey y la aristocracia. Desde luego, no fue lo que habían esperado o previsto los aristócratas liberales, los «patriotas» de la clase media o cualesquiera otros. Por qué y cómo se realizó se explicará en el siguiente capítulo.

[1] A. de Tocqueville, *L'Ancien Régime* (ed. ingl., Oxford, 1937), p. 186.

[2] C. E. Labrousse, *Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII*^e^ *siècle* (2 vols., 1933), ii, pp. 637-641; *La Crise de l'Economie française à la fin de l'ancien régime et au début de la Révolution* (1944), pp. ix-xli, 625.

[3] J. Egret, *La Pré-Révolutian française* (París, 1962), p. 154. En casi todo he seguido el nuevo punto de vista de Egret acerca de la «revolución aristocrática».

V. 1789

En enero de 1789, cuatro meses después del regreso triunfal del *Parlement* a París, Mallet du Pan, agudo observador suizo, señalaba que la situación en Francia había cambiado radicalmente. La cuestión en debate, escribía, ya no era una disputa constitucional entre el rey y las clases privilegiadas, sino «una guerra entre el Tercer Estado y los otros dos». Y no solamente esto: un movimiento nacional contra el gobierno real, dirigido por la aristocracia y el clero, se estaba convirtiendo en un alineamiento de la monarquía y el pueblo contra las mismas fuerzas que habían liberado la «revuelta aristocrática».

¿Cómo se originó este cambio? En parte se debió a la grave crisis económica, en el curso de la cual el campesino acabó por ver en el terrateniente una amenaza mayor de la que suponía el rey o sus ministros en Versalles. En parte, también, se debió a la confianza recientemente adquirida de las clases medias, cuyos escritores y panfletistas aseguraban estar dispuestos a dirigir y representar a la nación: ya en agosto de 1788, Mirabeau, aun siendo noble, declaraba la guerra al «privilegio», como enemigo mortal de la «nación». Además, la derrota de Brienne y el hundimiento de su programa de reformas unieron a los «patriotas», alineados en campos opuestos durante la «revuelta aristocrática»: la única esperanza de reforma que quedaba consistía en apoyar al Tercer Estado dentro de los futuros Estados Generales. Y quizá aún más importante fue la conciencia repentina de que los *parlements y* los *privilégiés,* los campeones declarados de las «libertades» de la nación[1], lejos de proyectar reformas radicales, estaban únicamente interesados en aferrarse a sus viejos privilegios e inmunidades. Una vez que se prometió definitivamente la convocatoria de los Estados Generales, la gran cuestión era si debían constituirse como en el lejano pasado (en tiempos de Richelieu),

cuando el Tercer Estado se hallaba dispuesto a cumplir una función de segunda importancia frente a los otros dos, o si debía encontrarse alguna nueva fórmula que tomase en consideración la importancia creciente de las clases medias dentro de la nación. De acuerdo con la fórmula de 1614, los tres estados debían componerse del mismo número de diputados y deliberar en tres asambleas separadas, de modo que el Tercer Estado se encontrara en minoría en sus relaciones con los otros dos. Pero el Tercer Estado de 1789 no estaba dispuesto a aceptar este humilde papel y, una vez que se supo la fecha de la reunión de los Estados Generales, sus componentes comenzaron a insistir en que hubiera doble representación y en que los estados se reunieran en una sola asamblea deliberativa, con lo que se aseguraba siempre la mayoría del Tercer Estado. Después de todo, se razonaba, los representantes de los 24 millones de plebeyos de Francia deberían votar en situación de igualdad con los 200.000 miembros de la minoría privilegiada. El abate Sieyes, cuyo panfleto *¿Qué es el Tercer Estado?* apareció a fines de enero, fue más lejos al sostener que el Tercer Estado era la nación misma y que, por lo tanto, se podían ignorar completamente los deseos de esas 200.000 personas. Pero esta no era todavía la opinión generalizada.

Las clases privilegiadas tenían una idea muy distinta sobre la constitución de los Estados Generales y la función del Tercer Estado en ellos; ¿por qué otro motivo, si no, habrían tomado la iniciativa de reclamar la convocatoria de los estados? Ya a fines de septiembre de 1788, cuando su popularidad se hallaba en el cenit, el *Parlement* de París insistió en que se siguiera al pie de la letra el precedente de 1614, esto es, que los tres estados estuvieran igualmente representados y votaran en asambleas diferentes. Un mes más tarde, una segunda asamblea de notables, menos liberal que la primera, al expresar su opinión acerca del asunto, dio una respuesta parecida; y en diciembre los príncipes de san-

gre denunciaron las pretensiones de los plebeyos como un peligro para la seguridad del Estado. Pero hacía ya mucho tiempo que las clases privilegiadas no estaban firmemente unidas: algunos dirigentes *parlementaires,* como Adrien Duport y Hérault de Séchelles, y el duque de Orleans, entre los príncipes, apoyaban las peticiones del Tercer Estado. En un reciente decreto, aprobado gracias a los votos de sus miembros más jóvenes, el *Parlement* de París se había enemistado a la antigua *noblesse* agraria al decidir que se pusiera fin a sus derechos feudales. Pero el golpe más duro fue que, aconsejado por Necker, el Consejo Real, el 27 de diciembre, tras dejar en suspenso la cuestión del procesamiento del voto, decidió conceder doble representación al Tercer Estado. De este modo, y por un momento, la monarquía, irritada por la deslealtad de las clases privilegiadas, asumía una vez más el papel de paladín de la reforma, en tanto que la aristocracia y los *parlements,* recientemente aclamados como custodios de las «libertades» de la nación en contra de la opresión ministerial, parecían sus más encarnizados enemigos. De esta toma de conciencia nació la «gran esperanza» de que la asamblea de los Estados Generales pudiera regenerar a la nación y con esta «esperanza» surgió también el temor a que las diabólicas maquinaciones de un «complot aristocrático» pudieran frustrar aquella asamblea[2].

Entre tanto, continuaban los preparativos para la reunión de los Estados Generales. El 24 de enero se publicaron reglamentos sobre la elección de los representantes y, como muestra de la preocupación del gobierno por las reformas, se invitó al pueblo a que preparara sus propios *cahiers de doléances,* o listas de agravios, para orientar a los estados en sus deliberaciones. Los distritos electorales se formaron, por lo general, según el modelo de las antiguas subdivisiones utilizadas para la administración de justicia, los *bailliages y* los *sénéchaussées,* si bien París se consideraba como

una división electoral separada y a los estados renovados del Delfinado se les acordaba el derecho a nombrar sus propios representantes. Los delegados se elegirían por estados separados. Los privilegiados disfrutaban del sufragio masculino directo para los adultos; todos los nobles laicos, de veinticinco años en adelante, podían votar en sus asambleas electorales, en persona o por poderes; los obispos y el clero parroquial disfrutaban del mismo derecho, en tanto que los canónigos y los monjes solo estaban autorizados a enviar representantes. Los delegados del Tercer Estado, por otra parte, se elegían mediante el uso de un sufragio más restringido y mediante un sistema de elección indirecta más complicado. Con excepción de París, donde el derecho de voto estaba limitado a aquellos que pagaban seis libras al año de *capitation,* los franceses de veinticinco años en adelante, cuyos nombres estaban inscritos en las listas de impuestos (por pequeña que fuera la cantidad), podían votar en la asamblea primaria, ya en la de su parroquia, ya en la del gremio urbano. En resumen, todos los plebeyos varones adultos tenían voto, con excepción de los criados domésticos, los carentes de domicilio *(non-domiciliés),* los hijos que vivieran en la casa del padre, los trabajadores más humildes y los pobres de solemnidad. Pero no se conocían los representantes finales de cada Estado hasta después de transcurridas dos, tres o cuatro fases del proceso electoral, según que el distrito electoral fuera urbano o rural y según se tratara de un *bailliage* (o *sénéchaussée*) principal o secundario.

Cualesquiera que fueran las intenciones del gobierno, el sistema favorecía decididamente a la burguesía urbana y profesional, quien dominaba las discusiones y votaciones en las asambleas del Tercer Estado, obtenía completo provecho de su monopolio de la cultura y la expresión oral y disfrutaba de los medios y el ocio necesarios para concertar la acción entre los «patriotas», para imprimir circulares y panfletos y para dirigir campañas electorales, todo lo cual esta-

ba negado a los artesanos rurales y a los campesinos, por no hablar de los jornaleros y los pobres de las aldeas. No es de extrañar, por tanto, que la burguesía urbana consiguiera la gran mayoría de los escaños entre los diputados del Tercer Estado: de los 610 que fueron a Versalles como representantes, un 25 por 100 eran abogados, un 5 por 100 eran miembros de otras profesiones, un 13 por 100 eran industriales, comerciantes y banqueros, y solo un 7 a un 9 por 100 eran agricultores, de los que únicamente un puñado eran campesinos[3].

Ya antes de que comenzara la campaña había aparecido un partido «patriota» entre los promotores de la reforma constitucional. Este partido, que principalmente representaba las esperanzas del Tercer Estado, incluía a aristócratas adinerados como el marqués de Lafayette, el duque de La Rochefoucauld y el marqués de Condorcet, así como *parlementaires* significados, como Adrien Duport, Hérault de Séchelles y Lepeletier de Saint-Fargeau; algunos habían tomado parte en la «revuelta aristocrática» y todos ellos iban a desempeñar un papel decisivo en la revolución. Algunos pertenecían a logias masónicas; otros al famoso Comité des Trente, que se reunía en casa de Duport y estaba compuesto de abogados, aristócratas liberales y clérigos (Talleyrand y Sieyes, entre ellos); y otros, finalmente, tales como Sieyes y Mirabeau, actuaban como enlace entre el Comité des Trente y el duque de Orleans, quien realizaba su propia campaña por separado. Estos hechos han inducido a algunos historiadores a conceder demasiada importancia a la existencia de una dirección central de toda la agitación revolucionaria y a exagerar el papel desempeñado por los francmasones y «los Treinta», cuyas actividades se han considerado como testimonio de una «conspiración» tramada para minar las instituciones del Antiguo Régimen. Se debe recordar que las logias masónicas reclutaban personas de todos los campos de la opinión y que las comunicaciones

no se hallaban aún lo suficientemente desarrolladas para permitir una dirección muy organizada por parte de personas relativamente desconocidas. Con todo, es cierto que comenzaban a surgir dirigentes entre la burguesía y la aristocracia liberal, capaces de orientar las discusiones que se desarrollaban en toda la nación y de imprimir su personalidad y sus ideas sobre las acciones espontáneas de muchos millares de personas que compartían en general sus opiniones o estaban dispuestas a aceptarlas en todas las partes del país.

Entretanto, los electores habían redactado sus *cahiers de doléances,* que eran de dos clases principalmente: los redactados en las asambleas preliminares de las parroquias y los gremios, para someterlos después a las asambleas de los *bailliages,* y los que se redactaban en el *bailliage* para someterlos directamente a los Estados Generales. Muchos de los últimos que han llegado hasta nuestros días están claramente divididos entre los tres estados. Como era de esperar, los *cahiers* del clero y la nobleza generalmente ponen de manifiesto su apego a los privilegios e inmunidades, si bien admiten con frecuencia el principio de la igualdad fiscal. Al mismo tiempo, coinciden con los del Tercer Estado en reclamar la supresión de las prácticas más opresivas e inútiles de la monarquía absoluta. En general, condenan el abuso y la extravagancia fiscales, los actos arbitrarios de los ministros, el sistema de las *lettres de cachet,* las anomalías y vejaciones de las aduanas internas y el caótico sistema vigente de pesos y medidas. En cuanto a lo positivo, exigen la libertad de prensa y del individuo (aunque no la de conciencia) y una constitución que, manteniendo el poder y la autoridad tradicionales del monarca, conceda a los Estados Generales, reunidos periódicamente, el derecho a elaborar leyes y a votar impuestos, cuya valoración y recaudación se confiarán a asambleas electivas provinciales y municipales. En resumen, los tres estados estaban bastante de acuerdo

en asuntos que afectaban a la reforma administrativa y política.

Pero los *cahiers* generales del Tercer Estado, redactados en casi todos los casos por la burguesía, van mucho más lejos. No solo exigen libertad de palabra, redacción y reunión, libertad de comercio y garantías contra los arrestos arbitrarios, sino que, por lo general, insisten en la igualdad civil completa de los tres estados; esto es, en que el clero y la nobleza han de renunciar a reliquias manifiestamente desacreditadas, como la servidumbre, y a privilegios tan antiguos como el diezmo, las *banalités* (monopolios locales), el *champart* (renta feudal en especie), los derechos de caza y la jurisdicción señorial. La burguesía había aprendido todo esto, si no de su propia experiencia, al menos de la observación de los agravios campesinos, pero la exigencia más urgente de todas, la de la tierra, rara vez aparece en estos *cahiers,* si es que aparece alguna.

De los *cahiers* locales, redactados en las parroquias y los gremios, ha sobrevivido un número mucho menor. Algunos son redacciones basadas en modelos en circulación, por lo que poco nos dicen de las intenciones de sus supuestos autores; otros (y hay algunos entre los *cahiers* de las parroquias) son bastante auténticos e ilustran dos verdades: una, que los aldeanos que tomaban parte en los debates apoyaban la crítica burguesa a la monarquía absoluta y a los residuos feudales en la posesión de la tierra y en la administración de justicia; y la otra, que a menudo tenían estos aldeanos reivindicaciones sociales propias que, en otros aspectos, los separaban claramente de los capitalistas y los grandes propietarios del Tercer Estado. Raramente escuchamos, sin embargo, la voz de los asalariados de las ciudades. En París no se instó a exponer sus agravios sino a los gremios comerciales más ricos y en todas partes se excluyó a los *compagnons,* u oficiales, de las asambleas de maestros artesanos.

También se conocieron excepciones, como en Reims, Troyes, Marsella y Lyon, donde los trabajadores protestaron contra la subida de los precios; pero en los demás casos aceptaron la dirección de sus patronos. Los *cahiers* campesinos tendían a ser más francos. Además de los agravios generales de toda la comunidad agraria, a veces oímos las quejas particulares del pequeño propietario, el aparcero o el jornalero. En el distrito de Ruán, donde el precio de la hogaza de pan de cuatro libras había subido a 16 *sous,* los aldeanos exigen su reducción a la mitad. En Bretaña, los pequeños campesinos de los alrededores de Rennes se quejan de que las cargas impositivas y las exacciones señoriales son tan gravosas que una parcela de tierra con un rendimiento bruto de 40 libras al año apenas si aporta a su propietario un beneficio neto de la cuarta parte de tal cantidad, una vez que se han satisfecho las exigencias del recaudador de impuestos y del terrateniente. En la parroquia de Pierreville (Cotentin), los *laboureurs* (propietarios campesinos) son tan francos en su condena de los funcionarios reales, el diezmo y los derechos de caza, que el *bailli* se niega a aceptar sus agravios y redacta, a su vez, un *cahier* por su cuenta. En Lorena y Hainault, los campesinos sin tierra y los pequeños *laboureurs* unen sus fuerzas para oponerse a los edictos de cercamiento y a los planes de roturación de las tierras, patrocinados por los miembros más prósperos de su comunidad. Por otro lado, en los Vosgos, un *cahier* parroquial protesta de que la distribución de tierras entre los jornaleros, a consecuencia de la división de los terrenos comunes, ha destruido la armoniosa relación hasta entonces existente entre jornaleros y propietarios. En resumen, los *cahiers* parroquiales reflejan tanto los vínculos comunes de interés que unen a todos los miembros de la comunidad campesina en la oposición, al recaudador de derechos reales, al dueño del diezmo y al terrateniente, como las divisiones que separan al pequeño consumidor del gran productor

y al jornalero sin tierra del granjero o del propietario. Todos estos elementos iban a participar en la revolución en las aldeas.

Los Estados Generales se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789 sobre un fondo de crisis creciente y desasosiego popular: en París el precio del pan era casi el doble del normal; en el Faubourg St. Antoine hubo motines sangrientos y en las provincias los campesinos comenzaron a pasar de las palabras a los hechos, deteniendo los convoyes de alimentos, haciendo incursiones en los mercados y destruyendo las reservas de caza. Cuando se inició la gran asamblea, nada se hizo por no herir las susceptibilidades de los plebeyos o por comprender sus esperanzas de pronta reforma. Se ordenó que llevaran el tradicional color negro, que entraran en la sala de reuniones por una puerta lateral y, en todo momento, se les recordó su posición de inferioridad. Aunque el Consejo Real había accedido a conceder a los plebeyos la doble representación, no estaba dispuesto a admitir su segunda exigencia: la deliberación conjunta. Necker simpatizaba con ellos, pero dentro del Consejo tropezaba con la fuerte oposición del guardasellos Barentin, por lo que no se sintió capaz de encabezar el movimiento; se limitó a aconsejar paciencia al Tercer Estado, mientras pedía a las clases privilegiadas que renunciaran voluntariamente a sus inmunidades fiscales. Entre tanto, se invitó a los estados a reunirse en asambleas separadas y recomendar los temas que serían discutidos y votados conjuntamente. El rey carecía de política determinada y oscilaba de un lado a otro; pero los plebeyos tenían la impresión de que había decidido hacer causa común con el clero y la nobleza, ya que la doble representación sería una victoria huera sin la unión de los estados: sin el apoyo de delegados simpatizantes de otros estados serían siempre vencidos en las votaciones por las fuerzas combinadas de sus oponentes. Por ello, se negaron a deliberar en asamblea separada y exigieron una reu-

nión conjunta para examinar la validez de los mandatos, como primer paso para otras reuniones comunes en las que se tratarían cuestiones más fundamentales. Por supuesto, los nobles y los obispos vieron el peligro y se opusieron a la propuesta, aunque los obispos tuvieron dificultades para convencer a los párrocos (que les superaban en proporción de cinco a uno) de que no se unieran a los plebeyos. Así pues, tras la disputa de procedimiento, que duró cinco semanas, había una lucha por un principio básico.

El 10 de junio, animado por el creciente apoyo que encontraba en el «exterior», el Tercer Estado decidió tomar la iniciativa e invitó a los otros estados a una verificación conjunta de poderes; en el caso de que estos se negasen, aquel lo haría sin ellos. Contando con algunos párrocos, el Tercer Estado completó la comprobación del resultado del escrutinio, eligió a dos secretarios y un presidente (Jean-Sylvain Bailly) y el 17 de junio, por una mayoría de 491 votos contra 89, se arrogó el título de Asamblea Nacional. A este primer acto revolucionario de los plebeyos siguieron dos decretos: uno estipulaba que la disolución de la nueva Asamblea, por cualquier causa, invalidaría todos los impuestos existentes; y el otro que, tan pronto como se hubiera determinado una constitución, se consolidaría la deuda pública, que sería suscrita por toda la nación. El 20 de junio se dio un paso más en la serie de desafíos cuando la Asamblea vio cerrado –al parecer, accidentalmente– el acceso a su sala habitual de reuniones: siguiendo a su presidente Bailly a una sala del juego de pelota aneja, todos los delegados, a excepción de uno, prestaron solemne juramento de que la Asamblea no se disolvería hasta que la constitución estuviera firmemente establecida. Por esas fechas, el clero decidió, por una escasa mayoría, hacer causa común con la nueva Asamblea, y, pocos días después, 150 delegados clericales, encabezados por dos arzobispos, se unieron a ella.

Ya antes de este último acto de desafío, Necker había instado al rey a que impusiera su autoridad, rompiera el punto muerto entre los estados y tomara la iniciativa en materia legislativa. Con este fin, propuso que se celebrara una sesión real *(séance royale),* en la que se anunciaría que asuntos como la futura constitución de los Estados Generales se discutirían en asamblea conjunta, en tanto que los que afectasen a los intereses de cada uno de los estados continuarían considerándose separadamente. Tras violentas discusiones dentro del Consejo, se tomó una primera decisión el 19 de junio, en el sentido de celebrar una *séance royale* el 22, presumiblemente sobre la base de las propuestas de Necker. Pero en el intermedio otros consejeros consiguieron convencer al rey, que, como siempre, estaba indeciso. En Marly (a donde se había trasladado la Corte a la muerte del joven Delfín, a comienzos de junio), rodeado de un grupo de cortesanos, dirigidos por su hermano menor, el conde d'Artois, cuyos argumentos tenían el apoyo de la reina y los dirigentes de las clases privilegiadas, fue persuadido de que derogara los decretos del 17 de junio de la autotitulada Asamblea, sometiera a discusión el tema de la futura organización de los Estados Generales a cada una de las clases por separado e intimidara al Tercer Estado con un despliegue de fuerza. En consecuencia, la reunión se aplazó hasta el 23 de junio. Necker, cuya destitución se había decidido en secreto, optó por mantenerse al margen. Una vez más, nada se hizo por respetar los sentimientos de los miembros del Tercer Estado: se les mantuvo esperando bajo la lluvia mientras las clases privilegiadas ocupaban sus puestos, la sala estaba rodeada de tropas y el procedimiento recordaba la atmósfera arbitraria de un *lit de justice.* El asunto más importante fue la lectura por Barentin de dos comunicados reales. El primero declaraba nulas e inválidas las resoluciones de la Asamblea Nacional, y, si bien recomendaba la aceptación del principio de las reuniones conjuntas para

asuntos de interés común, reservaba expresamente para deliberación separada todas las cuestiones relativas a los privilegios e inmunidades especiales de los dos primeros estados. El segundo comunicado esbozaba el programa legislativo del Consejo. En líneas generales, preveía la reforma de las instituciones del Antiguo Régimen siguiendo criterios ya manifestados por los tres estados en sus respectivos *cahiers.* Pero la estructura social del antiguo orden permanecía intacta: se afirmaba categóricamente que los diezmos y las obligaciones señoriales y feudales se considerarían derechos de propiedad y que no se reclamaría la renuncia a ningún privilegio fiscal sin el consentimiento de las partes interesadas. Por último, se ordenaba a los estados que se disolvieran y reanudaran las deliberaciones en el futuro en sus cámaras respectivas.

Pero los planes del partido de la Corte fracasaron. Miles de parisienses invadieron el patio del *chateau* para exigir que Necker permaneciera en el cargo; los soldados al mando del príncipe de Conti se negaron a obedecer la orden de fuego; los delegados del Tercer Estado, tras haberse negado a disolverse una vez terminada la *séance,* fueron arengados por Mirabeau en un histórico discurso. El rey se vio obligado a ceder y Necker permaneció en el cargo. La Asamblea Nacional (cuyos miembros habían aumentado por entonces hasta 830 delegados) no solo continuó en posesión de su sala, sino que, además, el 27 de junio ordenó expresamente a los remanentes de las otras clases que se unieran a ella.

El espíritu revolucionario que se estaba desarrollando en París había carecido hasta entonces de una dirección eficaz. Sin embargo, a la vista de las últimas noticias procedentes de Versalles, las clases profesionales y comerciales, que hasta entonces se habían limitado a aguardar los acontecimientos y a observar sin simpatía los alborotos en los *faubourgs* y en los mercados, comenzaron a imprimir una dirección a

los acontecimientos, sin la cual difícilmente hubiera tenido lugar la revolución de julio. A partir de este momento, los panfletistas y periodistas que rodeaban al duque de Orleans (quien se había sumado a la nueva Asamblea Nacional en Versalles) establecieron su cuartel general permanente en el Palais Royal, donde, por la noche, se congregaban miles de personas, que recibían las consignas y las directrices –y también, posiblemente, los fondos– de lo que Hardy llamó en su diario «el partido extremo de la revolución». También a partir de esta fecha comenzaron a reunirse regularmente en el Ayuntamiento, en el centro de la capital, los 407 electores del Tercer Estado de París, cuya misión original había sido designar a los delegados parisienses del Tercer Estado en Versalles. Estos dos órganos iban a cumplir funciones diferentes, aunque complementarias, en los acontecimientos de julio. En los primeros días, no obstante, fue solo el Palais Royal el que proporcionó una dirección positiva al movimiento popular. Mientras que el Ayuntamiento se esforzaba en redactar proyectos para crear una milicia ciudadana, el Palais Royal daba los pasos necesarios, por medio de la agitación pública y la liberalidad en los gastos, para ganarse a las tropas –sobre todo las Gardes Françaises–, y hacer que renunciaran a la lealtad a la Corte. Se distribuyeron panfletos entre las guarniciones de París defendiendo la postura del Tercer Estado y, a finales de junio, los guardias, que dos meses antes habían disparado por lealtad contra los amotinados del Faubourg Saint-Antoine, desfilaban por las calles de París a los gritos de «¡Viva el Tercer Estado!» y «¡Somos los soldados de la nación!». El 10 de julio se festejaba públicamente en el Palais Royal y en los Campos Elíseos a 80 artilleros que habían desertado de su cuartel en el Hotel des Invalides.

Como réplica a estos acontecimientos, la Corte, que había ido llamando a Versalles a regimientos suizos y alemanes leales, realizó otra demostración de fuerza. El 11 de ju-

lio Necker fue enviado al exilio y sustituido por el barón de Breteuil, protegido de la reina. Esta fue la chispa que hizo estallar la rebelión en París. Las noticias llegaron a la capital a mediodía del día 12. A primeras horas de la tarde los parisienses afluyeron hacia el Palais Royal, donde los oradores –entre ellos el joven Camille Desmoulins– llamaban a las armas. Rápidamente se formaron los grupos que iban a iniciar la marcha; por los bulevares se llevaron en desfile los bustos de Necker y del duque de Orleans, los héroes del momento; en señal de duelo se impuso el cierre de los teatros; los manifestantes chocaron en la plaza de Luis XV (hoy, plaza de la Concordia) con la caballería al mando del príncipe de Lambesc, a quien se había ordenado despejar los jardines de las Tullerías. Besenval, comandante de la guarnición de París, se retiró al campo de Marte. La capital estaba en manos del pueblo.

Al toque de rebato –que pronto habría de convertirse en una llamada familiar para los parisienses– bandas de insurgentes se unieron a aquellos que, dos días antes, habían comenzado a quemar las odiadas *barrières* (puestos de aduanas), cuyas exacciones pesaban duramente sobre tenderos, comerciantes de vinos y pequeños consumidores y que frecuentemente habían sido escenarios de disturbios y de intentos de contrabando. En el curso de cuatro días de sublevación se demolieron sistemáticamente 40 de los 54 puestos aduaneros; se quemaron documentos, registros y recibos; se derribaron barreras de hierro; se quemaron oficinas y mobiliario; y se expulsó de sus locales a los empleados de aduanas. Parece que el Palais Royal tuvo alguna influencia en los acontecimientos: resulta significativo que los incendiarios evitaran deliberadamente dos puestos que, según se decía, pertenecían al duque de Orleans. Sin duda, el principal motivo que impulsó a los sublevados fue el deseo de saldar cuentas con una institución que encarecía materialmente el precio de la comida y el vino que entraba en París. Los

organizadores, sin embargo, estuvieron, al parecer, más interesados en quebrar el monopolio de los recaudadores generales y en fiscalizar el movimiento de armas y personas en las entradas y salidas de la capital. Aquella misma noche se realizó una acción similar en el límite norte de la ciudad: dirigidos una vez más desde el Palais Royal, civiles armados y Gardes Françaises irrumpieron en el monasterio de la Hermandad de San Lázaro, lo registraron en búsqueda de armas, liberaron a los prisioneros y trasladaron a los mercados centrales más de 50 carretadas de grano y harina. A esta primera siguió una segunda invasión de indigentes y parados de la localidad, quienes despojaron el edificio de dinero, comida, plata y tesoros escondidos.

El rasgo característico de la noche del 12 al 13 de julio fue, sin duda, la búsqueda de armas. En diferentes partes de la capital se registraron casas religiosas y se hicieron incursiones en herrerías, armerías y guarnicionerías. Pasado el tiempo, los armeros de París habían de presentar a la Asamblea Nacional una relación de pérdidas que superaban las 100.000 libras. No parece que se les pagara, por lo que se han de contar entre las víctimas menores de la Revolución.

En la mañana del 13 de julio, los electores de Paris dieron un paso importante para hacerse con el dominio de la situación. Formaron un comité permanente que actuara como gobierno provisional de la ciudad y decidieron poner fin al armamento indiscriminado de la población. Para ellos, las bandas de parados y vagabundos, muchos de los cuales habían tomado parte en las incursiones en las *barrières* y el Monasterio de San Lázaro, representaban una amenaza tan grande para la seguridad y las propiedades de los ciudadanos como la Corte y las clases privilegiadas que conspiraban en Versalles. La idea de ambas amenazas les impulsó a trabajar seriamente para organizar una milicia de ciudadanos, o *garde nationale,* y ni que decir tiene que fue

la primera de ellas la que se adujo para inducir al rey a dar su consentimiento al día siguiente. Se llamó a los cabezas de familia para que asistieran a las reuniones en los 60 distritos electorales en que se había dividido París; cada distrito tenía que proporcionar 200 hombres (posteriormente serían 800). Aquella misma tarde, Barnave escribía a sus electores del Delfinado que había ya 13.200 ciudadanos registrados y equipados. Los vagabundos, los sin hogar *(gens sans aveu),* e, incluso, una gran parte de los asalariados estaban explícitamente excluidos de esta guardia que, como decía Barnave, tenía que ser *bonne bourgeoise.* Sin embargo, mientras duró la insurrección, continuaron cayendo armas en manos no autorizadas. La muchedumbre rodeaba el Ayuntamiento, exigiendo armas y pólvora. Jacques de Flesselles, *prévôt des marchands* y cerebro del gobierno provisional de la ciudad, deseoso de limitar la distribución, envió patrullas en infructuosas requisitorias al Arsenal y al monasterio de los Cartujos: esta «traición» le costaría la vida al día siguiente. Entre tanto, los electores habían delegado en uno de los suyos, el abate Lefevre, la tarea de custodiar el parque almacenado bajo las bóvedas del Ayuntamiento; pero la presión de las masas semiarmadas que rodeaban el edificio era tal que se vio obligado a entregar la pólvora con mayor velocidad y menos discriminación de lo que hubiera deseado.

Siempre a la búsqueda de armas, en la mañana del 14 de julio se hizo una aparatosa incursión en el Hôtel des Invalides, al otro lado del río. Los 7.000 u 8.000 ciudadanos que participaron en la incursión se apoderaron de unos 30.000 fusiles, y de aquí surgió la consigna de «¡A la Bastilla!». El objetivo no era liberar a los prisioneros (de hecho, solo había siete), sino apoderarse de la pólvora que, como se sabía, se había enviado allí desde el Arsenal. Además, la fortaleza concitaba un odio profundo como símbolo de tiranías pasadas, y como tal figuraba en los *cahiers* de los tres estados. Se pensaba que estaría poderosamente armada y que sus caño-

nes, que aquella mañana se trasladaron a la rue St. Antoine, podían sembrar la destrucción entre las apiñadas viviendas. La noche anterior también se había rumoreado que 30.000 soldados reales habían marchado sobre el Faubourg St. Antoine y comenzado una matanza de ciudadanos. Parece que, en un principio, no hubo intención seria de tomar la Bastilla por asalto, al menos por parte del comité de electores, quienes se habían impuesto la tarea de dirigir las operaciones desde el Ayuntamiento.

Sabemos, por la propia relación de los electores, que ellos propusieron negociar con el gobernador, De Launay, la entrega de la pólvora en su poder y la retirada de los cañones de las almenas. De Launay recibió a las delegaciones y prometió no hacer fuego a menos que fuera atacado. Sin embargo, la muchedumbre asaltante, que ya había invadido el patio exterior, se las arregló para bajar el puente levadizo que conducía a la *cour du gouvernement* interior, y el gobernador, creyendo inminente un asalto frontal, ordenó a sus hombres que dispararan. En la refriega que se entabló, los asaltantes tuvieron 98 muertos y 73 heridos. Los ánimos se excitaron y los electores perdieron el dominio de la situación. El golpe decisivo lo dieron dos destacamentos de Gardes Françaises, quienes, respondiendo a la llamada de Hulin, antiguo N. C. O., marcharon sobre la fortaleza con cinco cañones que habían tomado por la mañana de los Inválidos. Apoyados por unos pocos cientos de civiles armados –maestros artesanos, oficiales y jornaleros de St. Antoine y distritos adyacentes[4]–, apuntaron los cañones contra la puerta principal. De Launay amenazó con hacer volar la fortaleza, pero, disuadido por la guarnición, hizo descender el principal puente levadizo y se rindió a los asaltantes. Él y seis más de los cien defensores fueron asesinados. De Flesselles corrió suerte similar. Así cayó la Bastilla.

Aunque tenía poca importancia militar, su caída tuvo consecuencias de largo alcance. Al menos por aquel momento, se salvaba la Asamblea Nacional y, además, recibía reconocimiento real. El partido de la Corte comenzó a desintegrarse: Artois, Condé y Breteuil fueron al exilio, mientras que se volvía a llamar a Necker. En la capital, el poder quedó en las manos firmes de los electores, quienes establecieron un consejo municipal o Comuna, con Bailly como alcalde y Lafayette como comandante de la recién creada Guardia Nacional. El 17 de julio, el mismo rey hizo un viaje a París, escoltado por 50 delegados, entre ellos Robespierre, siendo recibido por los triunfadores en el Ayuntamiento. En señal de aquiescencia con el curso de los acontecimientos, el rey se puso la escarapela roja, blanca y azul de la Revolución. Parecía que, a partir de entonces, la Asamblea Nacional podría proseguir tranquilamente con sus trabajos.

Pero las provincias aún tenían algo que decir. Las noticias de París, que llegaban a las aldeas y las ciudades agrícolas a través de relatos orales o por cartas de los delegados durante la tercera semana de julio, intensificaron y difundieron un movimiento campesino que ya había empezado y que, a su vez, provocó una serie de revoluciones municipales menores. A diferencia de los campesinos y de los pequeños consumidores de las ciudades, la burguesía provincial se había resignado a esperar el resultado de los acontecimientos en París y Versalles. Cuando la noticia de la destitución de Necker llegó a Nancy el 15 de julio, Arthur Young recibió la siguiente explicación: «Somos una ciudad de provincias; debemos esperar y ver lo que se hace en París». La «revolución municipal» adquirió diversas formas. A veces, como en el caso de la marítima Flandes, la antigua corporación ciudadana se limitó a ampliar su composición, a adoptar la escarapela tricolor y a continuar como antes. Otras, como en Burdeos, se siguió el ejemplo de París, creándose una asamblea local de electores. Pero más a me-

nudo –como en Lille, Ruán, Cherburgo, Dijon, Rennes y Lyon– las antiguas autoridades fueron destituidas y reemplazadas por cuerpos completamente nuevos que, a veces, se comprometían a reducir el precio del pan. En casi todos los casos, la transferencia de poder fue acompañada por la creación de una Guardia Nacional según el modelo parisiense, cuyo primer objetivo era, al igual que en la capital, hacer frente al doble peligro de la reacción aristocrática y los disturbios populares. Los intendentes, entre tanto, o fueron expulsados o desaparecieron silenciosamente. En cualquier caso, la autoridad real se debilitó.

Otra de las leyendas de los libros de historia es que también los campesinos esperaron hasta ver el curso de los acontecimientos. De hecho, en muchas partes del país, los disturbios rurales habían sido continuos desde diciembre de 1788. Comenzaron, al igual que las sublevaciones del grano de 1775, como un movimiento de los pequeños consumidores, acompañado de asaltos a los molinos, graneros y convoyes de alimentos: en la primavera y el verano siguientes comenzaron a adquirir proporciones de sublevación agraria general contra las leyes y los derechos de caza, los impuestos reales, los diezmos y las obligaciones señoriales. Las noticias de París dieron a este movimiento un nuevo aliento, lo generalizaron y le proporcionaron objetivos más precisos. El movimiento fue acompañado de un extraño fenómeno conocido como *«la Grande Peur»* (el Gran Miedo), el cual, a su vez, fue producto de la crisis económica y de la revolución en París. La crisis aumentó el número de vagabundos en los caminos rurales y reforzó la hostilidad de los campesinos hacia los terratenientes. Para colmo, se añadían las intrigas de la Corte y de la aristocracia en Versalles y la derrota de ambos y la victoria popular en París, seguida, a su vez, por la emigración de Artois y Condé y la dispersión de las unidades militares en los distritos rurales. Esto dio lugar a la creencia de que los aristócratas se estaban prepa-

rando para realizar una sumaria venganza, con ayuda de los vagabundos armados, o «bandidos», de los que se suponía merodeaban por el campo. Por ello, los campesinos se armaron y esperaron la llegada de los invasores: estos incidentes se registraron en todas las provincias de Francia, con excepción de Alsacia, Bretaña y Lorena. Como los imaginarios «bandidos» no acababan de materializarse, los defensores, con auténtica parsimonia campesina, volvieron a menudo las armas contra las mansiones de sus señores. De hecho, sus objetivos no eran las mansiones, sino, más bien, los odiados registros señoriales, en los que estaban inscritas las obligaciones señoriales, tanto antiguas como nuevas. De este modo, en julio y a comienzos de agosto, los campesinos fueron dejando tras ellos una estela de *châteaux* arrasados y documentos señoriales carbonizados en muchas partes del país. A menudo fueron dirigidos por personas que aseguraban ser portadoras de órdenes del mismo rey y es muy posible que los campesinos creyeran que, al ajustar cuentas con sus *seigneurs,* estaban realizando los deseos del rey, si no sus instrucciones específicas[5].

Las noticias de estos acontecimientos obligaron a la Asamblea Nacional a prestar atención inmediata a los privilegios feudales y a las necesidades de los campesinos, a los que no se obligaba a hacer concesiones, en forma de renuncia a sus derechos feudales e inmunidades fiscales por parte de los delegados liberales de la aristocracia y clero en la famosa noche del 4 de agosto. Sin embargo, la pretensión de la Asamblea de que «el régimen feudal había sido totalmente destruido» era equívoca, porque, si bien es cierto que se abolieron por completo los residuos de la servidumbre, la *corvée* y los diezmos eclesiásticos, algunos de los más onerosos privilegios y obligaciones –los *cens,* los foros, el *champart,* los *lods et ventes,* entre ellos– pasaban a ser redimibles por medio de la adquisición individual. El hecho de que los terratenientes nunca recibieran el dinero (la compensación

total se ha estimado en unos 4.000 millones de libras) se debió menos a la previsión y generosidad de los legisladores que a la insistencia y militancia de los campesinos. Algún tiempo después, la Convención jacobina se enfrentó con el hecho consumado y, por decreto de julio de 1793, declaró nula e inválida la deuda remanente.

Aunque el pueblo de París la había salvado en julio y el campesinado la había incitado a la «destrucción del feudalismo» en agosto, la Asamblea Nacional no gozaba de ninguna seguridad. Mientras la Corte y el rey permanecían en Versalles y una minoría activa de delegados, aliada de la Corte, fuera capaz de frustrar el programa constitucional de la mayoría, el poder efectivo continuaría dividido entre la burguesía revolucionaria, apoyada por una minoría de aristócratas y obispos, y los partidarios del Antiguo Régimen. Las conquistas hechas hasta ese momento, a pesar de su carácter fundamental, eran precarias, pues Luis XVI negaba su beneplácito a los decretos de agosto y a la Declaración de Derechos del Hombre (véase el próximo capítulo); los realistas intrigaban de continuo para poner al rey a salvo, lejos de la capital. Por último, se llevaban a cabo intentos para convencer a la Asamblea de que adoptara una constitución «inglesa», que concediera al rey un «veto» absoluto en materia de legislación y creara una Cámara Alta.

Estas proposiciones partieron en agosto de los llamados *«monarchiens»,* o «partido inglés», grupo dirigido por Mounier y Malouet entre los plebeyos y por Lally Tollendal entre la nobleza. Su objeto era establecer una constitución «mixta», según el modelo inglés, donde los poderes estarían divididos, en proporciones más o menos iguales, entre el rey, la nobleza y los plebeyos; únicamente los grandes propietarios tendrían acceso al voto; mientras que los campesinos rebeldes y el *menu peuple* urbano serían mantenidos a raya. La proposición de crear una Cámara Alta resultó fácil

de derrotar, por cuanto no solamente se oponían a ella la izquierda y el centro de la Asamblea, sino también, y decididamente, la *noblesse* provincial, que temía verse virtualmente excluida de una Cámara dominada por la aristocracia de la Corte. Más tenazmente, en cambio, se sostuvo la proposición del «veto», originando agudas divisiones que llegaron a superar los límites de la misma Asamblea; los «patriotas» de París, establecidos en el Palais Royal, reclamaban su total desaparición, pero Barnave, portavoz de los delegados «patriotas» (la izquierda) en Versalles, estaba dispuesto a negociar con el centro, partidario de una solución de compromiso. Cuando, a fines de agosto, se rompieron las negociaciones, la posición de los parisienses se había fortalecido y un grupo de periodistas del Palais Royal hizo un intento de convencer a los habitantes de la capital de que marcharan sobre Versalles y obligaran al rey a regresar a París. Este primer intento fracasó, debido a que Barnave y sus colegas se oponían a él, y a que los parisienses todavía no estaban preparados para llevarlo a cabo.

Cinco semanas más tarde ya estaban en condiciones de hacerlo, gracias a la combinación de tres factores: su asimilación de las ideas de los «patriotas», la agudización de la crisis alimenticia y las provocadoras medidas tomadas por la Corte. Que el pueblo llano de la capital estaba muy influido por las corrientes de opinión avanzada se vio claramente durante la campaña electoral, cuando los sublevados en el Faubourg St. Antoine y en otros distritos se erigieron en paladines de las reivindicaciones del *tiers état* en contra de sus oponentes. Los debates de Versalles se trasmitían con velocidad sorprendente a las muchedumbres del Palais Royal y de la Place de Grève, frente al Ayuntamiento. Ya el 24 de agosto, antes de que se adoptara la Declaración de Derechos del Hombre, un oficial armero, arrestado por la policía, insistía durante su interrogatorio en que *«le droit de l'homme»* le daba derecho a un proceso imparcial. Malouet

nos cuenta que, a las puertas de la Asamblea Nacional, los silleteros discutían libremente los pros y los contras del «veto». En septiembre, los obreros parados de los *ateliers de charité* (talleres nacionales) se declaraban dispuestos a ir a Versalles y traer por la fuerza a la familia real a la capital.

Pero, una vez más, lo que determinó la persistencia y la intensidad de la agitación popular fue la crisis de alimentos. Una semana después de la caída de la Bastilla, el precio de una hogaza de pan de cuatro libras de peso se redujo de 14,5 *sous* a 13,5 y, quince días más tarde, a consecuencia de las manifestaciones ante el Ayuntamiento, a 12 *sous.* La calma que siguió a estas medidas fue de corta duración; la cosecha había sido buena, pero una sequía prolongada impidió que los molineros molieran el grano suficiente. La escasez de harina y pan que ello produjo fue una bendición para los especuladores, pero produjo gran consternación entre los panaderos, que eran los objetivos más inmediatos de la venganza popular. En los meses de agosto y septiembre hubo continuos motines por el pan en París, Versalles y St. Denis, en el curso de los cuales las multitudes enfurecidas mataron a un panadero y a un funcionario de la policía, en tanto que amenazaban a otras personas con la temida *«lanterne».* Hardy observaba que, desde mediados de septiembre, las mujeres de los mercados y los *faubourgs* dirigían en parte la agitación; ellas fueron quienes tomaron la iniciativa y dirigieron a los hombres en la gran marcha sobre Versalles el 5 de octubre.

Sin embargo, al igual que en julio, fue la propia situación de Versalles la que agudizó los acontecimientos. El 11 de septiembre, Barnave convenció a la Asamblea para que esta solicitara del rey que retirara su objeción a los decretos de agosto. La insistencia de la Asamblea sobre este tema determinó a la Corte a romper el punto muerto mediante otro despliegue de fuerza militar. El 15 de septiembre, tras re-

chazar el consejo de los moderados para que trasladara la Asamblea a una ciudad de provincias, Luis XVI mandó llamar a Versalles al regimiento de Flandes. Los Gardes du Corps (Guardia Personal) reales dieron la bienvenida al regimiento con un banquete, en el curso del cual se pisoteó la escarapela nacional y se recibió a la reina y a sus hijos con un fervor casi místico. Al día siguiente el incidente se difundió por todo París y la prensa «patriota» exigió venganza. Esta vez, Barnave no opuso objeción a la utilización de la fuerza; al menos, así se deduce de sus comentarios posteriores a los acontecimientos. Danton hizo aprobar una resolución en el Club de los Cordeleros de París en la que se urgía a Lafayette para que fuera a Versalles con un ultimátum. Desmoulins repitió sus requerimientos a los parisienses para que fueran a buscar al rey y le trajeran a la capital. Estos requerimientos encontraron eco el domingo, 4 de octubre, en las reuniones populares de los jardines del Palais Royal. Al día siguiente, por la mañana temprano, las mujeres de los mercados centrales y del Faubourg St. Antoine invadieron el Ayuntamiento exigiendo pan y buscando armas. Fuera del edificio se unió a ellas Stanislas Maillard, funcionario judicial, que se había distinguido en la toma de la Bastilla y a quien ellas persuadieron para que las condujera a Versalles, a presentar sus reivindicaciones al rey y a la Asamblea Nacional. De este modo, y bajo la lluvia, se pusieron en camino, formando dos grandes columnas y cantando mientras marchaban (o así lo conserva la tradición) «traigamos al panadero, a la mujer del panadero y al chico del panadero». Pocas horas más tarde las seguían 20.000 Guardias Nacionales de los distritos de París, quienes obligaron al reacio Lafayette a ponerse a su cabeza, así como una abigarrada multitud de civiles armados de fusiles, palos y picas. Ante este impresionante aparato, el rey no precisó mucha insistencia para dar órdenes de que se abasteciera a la capital y para sancionar los decretos de agosto y la Declaración de

Derechos. Mas estas concesiones no bastaron para satisfacer a los insurgentes y al día siguiente el rey y su familia, tras haber desperdiciado su última oportunidad de buscar refugio en la huida, se vieron obligados a regresar con los rebeldes a París, en donde, diez días más tarde, se les uniría la Asamblea Nacional. Así fue como, tras una ausencia de más de cien años, el monarca francés regresó a su hogar ancestral para una breve estancia.

Con esta segunda intervención del pueblo de París se consolidaron las conquistas de la revolución de julio. El rey estaba bajo la vigilancia de la Asamblea, el gobierno y los distritos de la ciudad de París. El «partido inglés» quedó desacreditado y sus dirigentes comenzaron a seguir a Artois y Breteuil en el camino del exilio, en tanto que el poder pasó al firme control de los monárquicos «constitucionales». Si estos se mantuvieron y triunfaron fue porque, bajo la presión creciente de los acontecimientos, hicieron causa común con el pueblo, el cual, además de sus propios objetivos y agravios, compartía el temor y la desconfianza de aquellos frente a la aristocracia. En este sentido, la revolución de 1789 fue la fusión de dos movimientos diferentes, el burgués y el popular, fusión que dejaría su impronta en todo el desarrollo de la revolución en Francia.

Sin embargo, aun teniendo en cuenta la diversidad de objetivos, en ningún otro país de Europa hubiera podido producirse este tipo de fusión, ya fuera porque (como en el caso de Austria y Polonia) la clase media era demasiado débil para realizar cualquier cambio político efectivo, o porque (como en Inglaterra, Suiza o las Provincias Unidas) no tenía deseos o motivos para aliarse con el pueblo. Mas también en Francia la Revolución de 1789 hubiera podido seguir otro rumbo. Si el rey hubiera demostrado una mayor honestidad como partidario de las reformas, y si la aristocracia hubiera estado tan pronta para renunciar a los privi-

legios como lo estuvo para combatir el «despotismo» real, el Tercer Estado habría podido decidirse por una fórmula de compromiso; algo parecido, quizá, a la colaboración entre burguesía, aristocracia y monarquía propuesta por Mounier, o a la alianza del rey y el pueblo que deseaba Mirabeau. Pero después de julio era ya demasiado tarde; las insidiosas intrigas del rey con la Corte le arrebataron la última oportunidad de que se le aceptara como el dirigente de un movimiento de regeneración nacional. Además, las clases privilegiadas estaban ya condenadas, a los ojos de los «patriotas» y del pueblo, como enemigos declarados de la reforma.

Tampoco la alianza entre el pueblo y la burguesía fue en modo alguno una fórmula fácil, estable o unificada. Entre los triunfadores de octubre seguía habiendo muchos que la veían con recelo y, una vez que la insurrección alcanzó sus fines, la Asamblea tomó medidas para frenar las energías revolucionarias del *menu peuple* de París, imponiendo la ley marcial, la pena de muerte por rebelión y la censura sobre la prensa radical. La primera víctima de tales restricciones a la libertad fue Michel Adrien, trabajador de la Bastilla, ahorcado el 21 de octubre por haber intentado provocar una «sedición» en el Faubourg St. Antoine. Tras haber conseguido una doble victoria sobre la aristocracia y el «despotismo», la burguesía quería paz y tranquilidad para continuar adelante con su tarea de dar a Francia una constitución.

[1] Tampoco esto era mera hipocresía o doblez: en el lenguaje de la aristocracia, «libertades» y «privilegios» eran, a menudo, términos virtualmente sinónimos, como sucedía con Burke en Inglaterra.

[2] Sin embargo, en Rennes (Bretaña), todavía los días 26 y 27 de enero de 1789 hubo revueltas sangrientas en las que los criados del lugar y los silleteros, apoyados por la *noblesse* provincial, se enfrentaron a los estudiantes de Derecho y a los empleados de los abogados del Tercer Estado.

[3] A. Cobban, *A History of Modern France,* vol. I (1957), p. 140.

[4] En los Archivos Nacionales, T514 (1), en París, están registrados los nombres de 660 de estos, con sus edades y direcciones.

[5] G. Lefebvre, *La Grande Peur de 1789* (1932).

VI. LA RECONSTRUCCIÓN DE FRANCIA

Los hombres que, durante los dos años siguientes, se afanaron por dar a Francia su primera constitución revolucionaria no eran soñadores enfebrecidos o «ideólogos», como a veces se ha afirmado, ni estaban tan decididos, ya fuera por disposición o por mandato, a reorganizar la sociedad sobre fundamentos enteramente nuevos, como suponía Burke. Los constituyentes, o monárquicos constitucionales, eran, en realidad, abogados, comerciantes, antiguos funcionarios del gobierno y terratenientes del antiguo Tercer Estado, aminorados, por un lado, por una pequeña minoría de *monarchiens* y reforzados, por el otro, por unos cincuenta nobles «patriotas», 44 obispos y 200 clérigos. Tras la marcha de Mounier y Malouet, sus nuevos dirigentes eran hombres del antiguo centro y de la izquierda, como el triunvirato Barnave-Duport y Charles Lameth-Sieyes, que desempeñó un importante papel y una oposición de izquierda, compuesta por un pequeño grupo de demócratas, como Robespierre y Pétion. Es cierto que el pensamiento y el lenguaje de estos hombres estaba modelado en el troquel de la nueva filosofía, como el de los americanos, pero, al igual que estos, aquellos tenían una idea muy clara acerca de dónde residían sus propios intereses. Debido a las circunstancias, algunas de ellas ajenas a su voluntad, el Antiguo Régimen de privilegio aristocrático y absolutismo real se había desmoronado y había que sustituirlo por alguna otra cosa. La constitución y las leyes que estos hombres promulgaron durante aquellos años de relativa paz social llevaban, como la Declaración de Derechos que las precedió, la impronta de la filosofía de la época, aunque estaban concebidas de acuerdo con su propia y peculiar imagen.

El 27 de agosto de 1789, estando aún la Asamblea en Versalles, se adoptó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estos «principios de 1789», que más

tarde habían de penetrar y dividir a toda Europa, fueron el resultado de duras negociaciones entre diferentes grupos de delegados. Mounier y Lafayette, de la derecha y el centro respectivamente, tuvieron una participación decisiva en su redacción. Ni la presencia de Thomas Jefferson en París, ni la estrecha afinidad de estos principios con los de la Declaración de Virginia de 1776, prueban que aquellos se inspiraran principalmente en el modelo y la experiencia americanos. Parece más acertado concluir que tanto los franceses como los americanos reconocieron su deuda común con la escuela filosófica del «derecho natural», y en particular con Locke, Montesquieu y Rousseau. La Declaración de Derechos es un documento notable que consigue equilibrar hábilmente una afirmación de principios universales y de derechos humanos con una clara preocupación por los intereses de la burguesía. En líneas generales, el documento proclama las reivindicaciones básicas del Tercer Estado, como este las expresaba en sus *cahiers:* protección de la propiedad, libertad de conciencia y de prensa y garantías contra las detenciones arbitrarias, igualdad ante la ley, igualdad impositiva e igualdad en la elegibilidad para los cargos; por último, como manifestación de la capacidad de los delegados para apreciar las realidades prácticas, el documento sanciona implícitamente –*post factum*– el derecho a la rebelión. Por otro lado, sus omisiones y reservas son igualmente significativas. Nada se dice de la libertad económica, ya que la Asamblea todavía estaba dividida en cuanto al futuro de los gremios y la resistencia de los pequeños consumidores a la «libertad» de mercado aún no se había convertido en un problema apremiante. La igualdad aparece en términos principalmente políticos, sin referencia a la igualdad económica. La propiedad es un «derecho sagrado e inviolable» y no se hace intento alguno de definirla o limitarla; tampoco se hace mención alguna de la obligación del Estado de proveer trabajo o auxilio a los pobres y a los desposeídos. Tam-

bién se guarda silencio en lo referente a los derechos de reunión, petición y asociación. Se dice que la ley es «la expresión de la voluntad general» (reminiscencia de los agravios de los *parlements* en el decenio de 1770), pero no hay garantías de que todos los ciudadanos tengan un derecho igual a aprobarla y menos aún en las colonias: no se hace mención alguna de la esclavitud o del comercio de esclavos. En materia de religión, protestantes y judíos quedan autorizados a profesar sus creencias, «siempre que su manifestación no perturbe el orden público»; pero mientras la Iglesia católica siguiera siendo la única Iglesia estatal de Francia no se podía hablar de total libertad de conciencia. A pesar de la nobleza de su lenguaje y de su proclamación de principios universales, la Declaración es, fundamentalmente, un manifiesto de la burguesía revolucionaria y de sus aliados clericales y aristocrático-liberales. Como tal, representaba el toque de difuntos del Antiguo Régimen y preparaba al público para la constructiva legislación que estaba por venir.

Gran parte de esta legislación, si bien no toda ella, quedó incorporada a la Constitución de 1791. Todo el edificio está presidido por la preocupación de los nuevos gobernantes de la nación de que el sistema que se establezca esté adecuadamente protegido contra el triple peligro del «despotismo» real, el privilegio aristocrático y el «libertinaje» popular. En la Asamblea no había republicanos declarados y todos estaban de acuerdo en mantener la monarquía. Esta tenía que ser una nueva monarquía constitucional, despojada de su anterior posibilidad de dominar absolutamente el gobierno, la legislación, el ejército y la justicia. El «rey de los franceses» tendría un cargo hereditario, se le asignaría una nómina de 25 millones de libras, como primer funcionario del Estado, y tendría derecho a nombrar sus propios ministros (fuera de la Asamblea), sus embajadores y jefes militares. Por el llamado «veto suspensivo», tendría la facultad de suspender o aplazar todas las leyes –excepto las

financieras– propuestas y adoptadas por la Asamblea, por un periodo de hasta cuatro años o la duración de dos parlamentos consecutivos. Pero no tendría poder para disolver la Asamblea; los ministros serían responsables virtualmente no ante él, sino ante la Asamblea y ante sus numerosas comisiones; el rey podría dar los primeros pasos para declarar la guerra o negociar la paz, pero estas medidas estarían sujetas a la aprobación del Parlamento. Entre tanto, las fuerzas armadas fueron considerablemente sustraídas del control real: gran cantidad de los antiguos oficiales aristócratas fueron purgados a menudo por las mismas tropas; los nombramientos se declararon abiertos a todos; se exigió a todos los grados un juramento de fidelidad a la «nación», así como al rey; además, las autoridades locales tenían a su disposición sus propias milicias ciudadanas, o Guardia Nacional. De este modo, Mirabeau, al igual que Mounier, fracasó en su intento de crear un ejecutivo fuerte, centrado en su monarca, con un poder absoluto de veto y un ejército a su mando, asistido por ministros extraídos de la Asamblea.

El verdadero poder del país iba a ser, de hecho, la propia Asamblea Legislativa. Habría de constituir un órgano unicameral, libre de los *checks and balances* según los modelos americano o inglés, armado de poderes ilimitados en materia impositiva y con iniciativa y autoridad en todos los asuntos legislativos, restringidos únicamente por el «veto suspensivo» y por la obligación de realizar elecciones cada dos años. La mayoría se preocupó, además, de asegurar que, si no ellos mismos, al menos diputados de ideas similares resultaran elegidos en posteriores escrutinios. Los constituyentes adoptaron una fórmula, preparada por Sieyes, por la que únicamente los propietarios de cierta categoría tenían derecho a votar en dos etapas electorales. Aunque la Declaración de Derechos proclamaba el de todos los ciudadanos a «tomar parte, en persona o por medio de sus representantes, en la elaboración de las leyes», nada decía del derecho

específico de sufragio. Ahora, los ciudadanos se dividirían en «activos» y «pasivos», de los cuales meramente los «activos» podrían votar. Para conseguir la ciudadanía activa, había que ser varón, de veinticinco años en adelante, haber tenido domicilio durante un año, no trabajar en el servicio doméstico y pagar un impuesto directo equivalente al valor de tres días de trabajo no cualificado. Tales ciudadanos podían votar en las asambleas primarias, en la primera etapa del proceso electoral, pero las asambleas secundarias, que «elegían» realmente a los diputados, estaban limitadas a uno de cada cien ciudadanos activos y excluían a todos aquellos que no pagasen un impuesto directo equivalente al valor de diez días de trabajo. Por último, para aspirar a diputado, un ciudadano tenía que pagar en impuestos un marco de plata, o 52 libras. Los historiadores han discutido acaloradamente acerca de las limitaciones que este sistema imponía realmente, o pretendía imponer, sobre los derechos de sufragio y representación. Es una cuestión difícil de resolver y tanto más complicada cuanto que, en agosto de 1791, la Asamblea amplió notablemente los requisitos que restringían el acceso a los colegios electorales, en tanto que mitigaba los que afectaban a los diputados. En principio, es posible que el profesor Palmer tenga razón al concluir que, hasta agosto de 1971, casi el 70 por 100 de los ciudadanos tenía derecho a voto en las asambleas primarias, cerca del 50 por 100 poseían la calidad de electores y uno de cada cien podía aspirar a la de diputado nacional[1]. Sin embargo, las listas publicadas autorizan a pensar que, en la práctica, tanto los ciudadanos «activos» como los electores –y especialmente los últimos– solían ser personas de mayor fortuna de lo que hacen suponer las cifras anteriores. Aun en ese caso, es evidente que estas restricciones del derecho del voto eran menos severas que las impuestas por el Parlamento de Gran Bretaña, que no había sufrido reforma alguna. La sociedad burguesa de la Francia de 1789 a 1792 era mu-

cho más democrática que la sociedad aristocrática del otro lado del Canal.

La reforma de la administración y del gobierno local debilitaron, además, la autoridad real. Se suprimieron los viejos cargos hereditarios, adquiridos mediante compra, y se indemnizó a sus poseedores, como no podía ser de otro modo, ya que dos de cada cinco miembros de la Asamblea eran antiguos poseedores de uno de esos cargos. Un destino similar corrió el antiguo y complicado sistema de las *généralités e intendances, bailliages y sénéchaussées, pays d'états y pays d'élection,* las corporaciones privilegiadas y los restos de la jurisdicción eclesiástica y señorial. De acuerdo con la Declaración de Derechos, los cargos públicos se abrieron al talento, ya fuera por nombramiento o por elección. En lugar de la antigua mezcolanza de autoridades locales, se estableció un sistema uniforme, fundado en los departamentos, distritos, cantones y comunas, que, en sus líneas generales, ha sobrevivido hasta nuestros días. Habría ochenta y tres departamentos de un tamaño más o menos similar, cuyos límites, no obstante, se trazaron con una gran cautela geográfica: sus nombres, como los de los meses en el posterior calendario de la Revolución, procedían de fenómenos naturales, en este caso, principalmente, de los ríos, montañas y mares. Los departamentos, al igual que sus subdivisiones, los distritos y los cantones, ya no se regirían, como bajo el Antiguo Régimen, por funcionarios nombrados, sino por comités elegidos desde abajo. La base de la pirámide estaba formada por unas 44.000 comunas (o municipios), cuyos alcaldes y consejeros, elegidos por los ciudadanos activos, tenían amplios poderes en materia de administración local. París tendría su propio consejo municipal, que se subdividiría en 48 secciones (en sustitución de los 60 distritos electorales de 1789), provistas de poderes de elección, policía y justicia local. De este modo se desmantelaba no solamente la monarquía absoluta, sino todo el antiguo sistema de go-

bierno centralizado. En este periodo de la Revolución, Francia se transformó virtualmente en una federación de departamentos y municipios electivos, que gozaban de un amplio grado de autonomía local, unidos desde el centro por un legislativo fuerte y un ejecutivo débil.

Estas mismas consideraciones presidieron las reformas de la justicia y del sistema judicial. En el nuevo Estado burgués, la justicia ya no podía ser una prerrogativa real, ni administrarse por medio de una aristocracia local, ya fuera de espada, de toga o de mitra. De este modo, los *parlements,* las *lettres de cachet* y los tribunales señoriales y eclesiásticos acompañaron a la Bastilla y a los antiguos cargos venales en el camino del olvido. Al igual que en Inglaterra y en América, se declaró al poder judicial independiente del ejecutivo; dependería, en cambio, de la «nación» (esto es, de los ciudadanos con derechos). La justicia se proclamó gratuita e igual para todos. Se creó una red de tribunales municipales, provinciales y nacionales, dotados de jueces electivos y de jurados elegidos para juzgar los casos criminales. En la cumbre del edificio había dos tribunales nacionales: un Tribunal de Apelación y un Tribunal Supremo; este último, que entendía en los procesos de los ministros, los funcionarios públicos y los enemigos del Estado, preludiaba el Tribunal Revolucionario de 1793. A su debido tiempo (a partir de marzo de 1792), la guillotina, la gran niveladora, había de reemplazar a la espada o hacha aristocrática y a la cuerda plebeya, como único instrumento de ejecución para todos los delincuentes capitales.

El verano de 1789 fue testigo de la destrucción de la mayor parte del antiguo sistema fiscal; *taille, gabelle, aides,* diezmos, barreras aduaneras, inmunidades fiscales y la autoridad de los recaudadores generales: todo lo había barrido la nación en armas. Su sustitución planteaba a los constituyentes uno de los problemas más difíciles. Con el fin de

atender a las primeras necesidades, se introdujo una contribución agraria que gravaba todas las propiedades, cuya recaudación se calculaba en 240 millones de libras al año. Otros impuestos gravarían los ingresos personales y la propiedad mobiliaria, así como los beneficios comerciales e industriales; además, una contribución «patriótica», propuesta por Mirabeau, proporcionaría otros 100 millones de libras. Todas estas medidas, sin embargo, resultaban insuficientes para hacer frente a la montaña de deudas, pagos compensatorios y gastos habituales y, además, provocaban una violenta hostilidad, especialmente por parte de los campesinos, quienes se quejaron de que seguían pagando excesivos impuestos y declararon, en muchos distritos, una huelga de contribuyentes. Había que recurrir a soluciones extraordinarias, una de las cuales, con mucho la más importante, fue la decisión de nacionalizar los bienes de la Iglesia y someterlos a pública subasta. Con el fin de financiar la operación se emitieron unos bonos a interés llamados *assignats,* que fueron gradualmente aceptados como billetes de banco y que, a partir de 1790, sufrieron una depreciación progresiva. El *assignat* fue una inyección de energía, que salvó a la Asamblea de las dificultades momentáneas, pero la inflación que finalmente produjo, bajo la influencia de la especulación y la guerra, se pagaría a un alto precio en sufrimientos humanos y disturbios populares[2].

La nobleza perdió, como ya vimos, sus derechos de justicia privada, exenciones fiscales y derechos y privilegios feudales; además se abolieron los títulos y la nobleza hereditaria: la aristocracia dejó de existir como estado, al igual que otras corporaciones. La abolición de los títulos, al reducir al antiguo noble a la simple categoría de ciudadano, satisfizo las exigencias de igualdad de los plebeyos. De mucho más alcance fueron las consecuencias de la supresión de ras cargas feudales sobre la tierra, proclamada por la Asamblea Nacional en agosto de 1789, y de la que hemos hecho breve

mención en nuestro capítulo anterior. Ya vimos que la Asamblea distinguía entre dos tipos de obligaciones feudales, traicionando con ello la preocupación de los diputados por no transgredir más que en lo absolutamente necesario su principio de la inviolabilidad de la propiedad. Aceptaron la afirmación de Merlin de Douai de que ciertos derechos habían sido usurpados o establecidos por medio de la violencia; entre ellos los de presidir tribunales señoriales, cazar y pescar, el de poseer vedados, palomares, molinos y lagares, recaudar tributos y multas, exigir impuestos personales y obligaciones laborales *(corva)* y, sobre todo, mantener a los campesinos en servidumbre personal. Estos derechos y monopolios se abolieron sin compensación, por considerarse ilegítimos; otros, en cambio, aunque suponían una carga más pesada para el campesinado, fueron declarados derechos legales de propiedad. Estos fueron los diversos pagos que se hacían por la posesión o transferencia de las tierras, tales como el *cens,* el *champart* y los *lods et ventes.* La redención se estableció en 20 veces la renta anual en metálico y 25 veces la renta en especie. Pero, como ya observamos, los campesinos no apreciaron la sutileza de estas distinciones y se negaron a pagar compensación ninguna, hasta que, cuatro años más tarde, la Convención Jacobina declaró nula e inválida la deuda.

La abolición del diezmo también benefició al campesino propietario, pero aún quedaba la gran masa de aparceros y jornaleros sin tierra, a quienes no afectaban estas medidas. La nacionalización y venta de las tierras de la Iglesia suponía una posible solución, pero, en muchos casos, la venta por subasta tendió a favorecer a los grandes compradores, en tanto que la Asamblea Constituyente hizo muy poco por vender la tierra en pequeños lotes o incitar a la población rural a comprar. De este modo, gran parte del problema agrario quedó sin resolver, manteniéndose la insatisfacción de los campesinos.

Como correspondía a una asamblea en la que los intereses de las clases medias tenían tanta importancia, los constituyentes fueron más consecuentes y minuciosos en el tratamiento de las reformas comerciales e industriales. Por las razones que ya hemos expuesto, estas reformas se omitieron en la Declaración de Derechos. Entre tanto, la opinión pública juzgaba cada vez con más dureza las anomalías y fiscalizaciones del Antiguo Régimen, por lo que la Asamblea aprobó una serie de leyes que, en gran medida, eliminaban las restricciones anteriores sobre la economía de la nación e introducían el libre comercio en el mercado interno. Se aplicó un sistema unitario de pesas y medidas; se abolieron los tributos locales y los *péages* y las aduanas quedaron reducidas a las fronteras nacionales. Finalmente, en febrero de 1791, se suprimieron los gremios y los controles sobre los bienes manufacturados (tema muy discutido en los *cahiers* del Tercer Estado). En lo referente al comercio exterior, la política de los constituyentes resultó menos decisiva y traicionó la lucha de intereses contrapuestos. Así pues, la Compañía de Indias perdió su monopolio, el comercio al otro lado del cabo de Buena Esperanza se liberó de controles y Marsella perdió sus privilegios en el comercio con el Levante. Pero la libertad de comercio tomó un cariz distinto cuando se trató de las relaciones con otros países europeos: se mantuvieron las tarifas para proteger las industrias francesas, aunque los fabricantes no consiguieron convencer, por el momento, a la Asamblea de que repudiara el tratado de «Libre Comercio» de 1786 con Inglaterra. Todos los partidos, sin embargo, cerraron filas cuando se enfrentaron a los problemas laborales. Por temor a los parados, los constituyentes cerraron en junio de 1791 los talleres públicos *(ateliers de charité)* establecidos para absorber y dar trabajo a los obreros en paro en 1789. El mismo mes, la Asamblea aprobó la famosa ley de Le Chapelier, que declaraba ilegales las organizaciones de trabajadores en una época en

que, debido a la ausencia de controles, los precios de los alimentos estaban a punto de subir. La ley, que siguió a las huelgas de carpinteros y otros comerciantes de París, respondió a las exigencias de los fabricantes. Nadie protestó contra ella en la Asamblea, ni siquiera Robespierre. Los sindicatos siguieron prohibidos a lo largo de toda la Revolución y la ley no se derogó finalmente hasta 1884.

El más complicado y funesto, por sus consecuencias, de todos los problemas abordados por los constituyentes fue su decisión acerca de la Iglesia católica. La solución que encontraron no estaba determinada por el desprecio filosófico hacia la religión, por una inclinación anticatólica, ni tampoco por alguna consideración particular de clase; las profundas divisiones y hostilidades que provocó se debieron, en parte al menos, a circunstancias ajenas a la voluntad de aquellos. Generalmente, todos estaban de acuerdo –incluso los obispos y el clero parroquial– en que la Iglesia estaba muy necesitada de reforma. Como órgano corporativo, la Iglesia del Antiguo Régimen había conseguido riquezas, privilegios y autoridad inmensos: el valor de sus propiedades, que producían una renta anual entre 50 y 100 millones de libras, representaba algo así como los dos quintos o la mitad de la riqueza agraria en cada provincia del reino. Además, estaba exenta de todo impuesto, como no fuera el que voluntariamente ofrecía al Tesoro en forma del *don gratuit.* Una gran parte de estas propiedades estaba en manos no del clero secular, sino de los monasterios y los capítulos, que, como titulares del diezmo y otros ingresos, solían pagar un estipendio anual a los curas y capellanes practicantes, conocido como la *portion congrue,* y cuyos servicios a la religión parecían muy dudosos tanto al clero como a los laicos. Las órdenes contemplativas inspiraban tan poco respeto que, según una investigación de la época, hacia 1768 se habían disuelto unas 1.000 comunidades, cuyas propiedades habían pasado a manos seculares. Un abismo social se-

paraba al alto clero, compuesto por obispos y abades aristocráticos, del común de los párrocos: en tanto que un obispo de Estrasburgo obtenía ingresos de 400.000 libras y un abad rico de Angers de 50.000, un humilde *curé* tenía que subsistir con un ingreso de 1.000 o de 700 libras por año, procedentes del diezmo o de la *portion congrue.* También habían aparecido otras divisiones: los obispos galicanos, las universidades y los *parlements* se habían aliado en 1762 para disolver y expulsar a la Compañía de Jesús; el jansenismo, aunque ya era una fuerza muy debilitada a mediados de siglo, continuaba sembrando la confusión entre los predicadores y los fieles en materia de doctrina; y, lo más importante de todo, los curas párrocos, celosos de las crecientes pretensiones episcopales, apoyaban cada vez más las reivindicaciones richerianas de que la Iglesia debía estar gobernada por la comunidad de sus pastores y no solamente por los obispos y los canónigos.

De este modo, la Iglesia entró en la Revolución como fuerza dividida, aunque no como espectador desinteresado. En tanto que los obispos y los abades apoyaban la «revuelta aristocrática» y la convocatoria de los Estados Generales, el clero parroquial vio su oportunidad de saldar viejas cuentas cuando el reglamento del Consejo Real de enero de 1789 le concedió el derecho de asistir a las asambleas electorales en persona, en tanto que los monjes y los canónigos solo podían enviar representantes. El clero parroquial sacó la mayor ventaja posible de estas concesiones para reclamar, en sus *cahiers* separados, amplias reformas, autogobierno para la Iglesia en la línea richeriana e, incluso, el derecho a elegir sus propios obispos. El clero parroquial dominaba las asambleas locales y totalizaba dos de cada tres delegados de su estado en Versalles. Allí, como ya hemos visto, fueron los párrocos quienes apoyaron más decididamente las reclamaciones del Tercer Estado, y su deserción de las filas de sus superiores eclesiásticos tuvo una gran importancia para de-

cidir al rey, en contra de su propia voluntad, a ordenar a los dos estados superiores que se unieran a la autodenominada Asamblea Nacional. Por ello no es de extrañar que la Asamblea contara con el apoyo y no con la oposición de la mayoría del clero cuando, en agosto de 1789, decretó la abolición del diezmo, la anata y la pluralidad de cargos y terminó con la antigua situación corporativa de la Iglesia y con su derecho de imposición. Tampoco se alarmó grandemente el clero cuando, a propuesta de Talleyrand (entonces obispo de Autun) y de Mirabeau, se decidió nacionalizar las propiedades eclesiásticas y ponerlas en pública subasta; los *curés* y sus *vicaires,* por lo menos, tenían poco que perder (y, posiblemente, mucho que ganar); había, además, poderosas razones para suponer que estas propiedades solo se podían mantener a cambio de servicios prestados. Cuando, una vez más, la Asamblea procedió a disolver o reagrupar las órdenes religiosas contemplativas, en febrero de 1790, pocos fueron quienes derramaron lágrimas, aparte de los propios afectados. De hecho, ninguna de estas medidas provocó conflicto alguno entre la Iglesia y la Revolución: esto solo sucedió a partir de la adopción de la Constitución Civil del Clero, en julio de 1790.

Incluso en aquel momento, tampoco fue inmediato el choque, e incluso pudo haberse evitado. Algunas de las disposiciones de la constitución resultaban aceptables para la mayoría del clero; ni los obispos ni los párrocos tenían nada en contra de la idea de convertirse en funcionarios asalariados del Estado: los sacerdotes, por lo menos, estarían mejor pagados que antes y los constituyentes, aunque habían garantizado plena libertad de culto a los protestantes (y, más tarde, a los judíos), no tenían intención de disolver a la Iglesia católica o de acabar con su posición privilegiada, como única Iglesia del Estado en Francia. El clero estaba preparado también para aceptar una revisión, necesaria desde hacía tiempo, de los límites parroquiales y diocesanos, pero la ra-

dical reducción de obispados de 135 a 83 (de acuerdo con los nuevos departamentos) significaba que varios obispos –y muchos más curas– se verían privados de sus ingresos. Más seria aún resultaba la negativa de la Asamblea a someter la Constitución a un sínodo eclesiástico para su sanción, antes de que entrara en vigor: con esto, tanto el clero richeriano como los obispos galicanos se hubieran dado por satisfechos. Pero las «corporaciones» estaban abolidas, y presentar ante una asamblea de la Iglesia lo que constituía una prerrogativa de la «nación» supondría, como objetaron algunos diputados (entre ellos, Robespierre), someter la «voluntad general», interpretada por los representantes de la nación, al veto todopoderoso de un único órgano corporativo. En lo relativo a este punto, la Asamblea se mantuvo inflexible, con excepción de sus miembros clericales. El fallo canónico, en el caso de que lo hubiese, debía solicitarse al papa. Pero Pío VI, aunque se sabía que era hostil a la Revolución, se hallaba comprometido en delicadas negociaciones sobre el futuro del antiguo enclave pontificio de Aviñón, y, temiendo que una decisión apresurada en materia de doctrina perjudicaría sus intereses temporales, retrasó su respuesta durante varios meses. La Asamblea, en cambio, tenía prisa: sedes y beneficios iban quedando vacantes y, por falta de guía y autoridad firmes, el clero estaba confuso y dividido. De modo que, en noviembre de 1790, la Asamblea quemó sus naves, promulgó la Constitución y ordenó a los clérigos en ejercicio que prestaran juramento de obediencia a la constitución del reino (y por ello, implícitamente, a la Constitución Civil del Clero). Los diputados laicos, muy seguros de que se alcanzaría un acuerdo, quedaron aterrados ante el resultado: únicamente 2 de los 44 obispos y un tercio de los miembros del clero prestaron el juramento. El clero, en general, quedó dividido en dos bloques opuestos, más o menos igualados, de «juramentados» y «no juramentados», división que llegó a ser irreparable cuando

por fin, en marzo de 1791, Pío VI cerró el camino a todo posible compromiso, condenando la Constitución Civil en su totalidad, suspendiendo a los obispos conformistas Talleyrand y Gobel de Lydda y ordenando expresamente a todo el clero que retirara o suspendiera su obediencia a la nueva regulación de la Iglesia. Así, una vez que el papa habló en tales términos, aquellos que reconocían su autoridad o se limitaban a seguir su conciencia, rechazando el juramento, se convirtieron, a lo largo de un proceso inevitable, en oponentes declarados, no solo de la Constitución Civil, sino de la misma Revolución, y como tales fueron identificados por los «patriotas» con la aristocracia y la contrarrevolución. De ahí procedieron, a su vez, las consecuencias trágicas y fatales de la emigración, la proscripción e, incluso, las matanzas de curas «refractarios», la guerra civil en la Vandea, el Terror y el Contraterror. Otra consecuencia fue que, con el tiempo, la misma Iglesia constitucional, cuya doctrina era idéntica a la de los «fanáticos» proscritos, también perdió crédito, se separó del Estado, sufrió persecución en los tiempos de la «descristianización» y se vio sustituida por los cultos de la razón, del ser supremo y de la teofilantropía, hasta que el Concordato de 1801 de Bonaparte restableció la antigua Iglesia sobre nuevas bases.

Mas con ello estamos adelantando acontecimientos muy posteriores al periodo de la Asamblea Constituyente. Hay que recordar también que los constituyentes no fueron los únicos legisladores de la Revolución que desempeñaron un importante papel en la reconstrucción de Francia tras el desmoronamiento del Antiguo Régimen. La Revolución atravesó muchas etapas y no toda su labor sobrevivió. Los principales artículos políticos de la Constitución de 1791 fueron abandonados solo un año después de que se hubieran adoptado, ya que en 1792 se derribó y abolió la monarquía y se proclamó la República. Aquel mismo año se suprimió la distinción entre ciudadanos «activos» y «pasivos» y

todos los hombres adultos (con algunas excepciones) obtuvieron el derecho al voto. La Convención Nacional de 1793 creó un tribunal extraordinario para entender de los delitos contra el Estado, el Tribunal Revolucionario, que se concibió como instrumento de justicia ejecutiva; creación, por supuesto, completamente distinta de la concepción de los constituyentes de un poder judicial independiente. La Constitución Jacobina de junio de 1793 era mucho más democrática y revelaba mayor inquietud hacia las personas pobres que la de 1791, pero, a causa de las circunstancias creadas por la guerra y la revolución, hubo que dejarla de lado. mientras surgía un «gobierno revolucionario» estrictamente centralizado, basado en dos comités poderosos: el de Salvación Pública y el de Seguridad General, cuyos miembros procedían de la Asamblea y que tenían a sus órdenes representantes «comisionados» y «agentes nacionales», autorizados a saltar por encima de las autoridades de los departamentos y las comunas. Así, la concepción de la República «única e indivisible» vino a sustituir a la desdibujada monarquía federal de 1791. En la legislación social, la Convención superó con mucho los límites que se habían impuesto los constituyentes. Se estableció una fiscalización sobre el precio y suministro de todos los bienes necesarios; se anuló (como ya hemos visto) la deuda remanente de los campesinos con los señores; y se dieron algunos pasos, aunque vacilantes, para asegurar que parte de las propiedades de la Iglesia y de la nobleza *emigrée,* vendidas en pública subasta, pasaran a poder de los campesinos pequeños o sin tierras. Los jacobinos abolieron en 1794 la esclavitud en las colonias, que los constituyentes habían dejado intacta. Finalmente, tanto antes como después de la caída de Robespierre en Termidor (julio de 1794), la Convención sentó los cimientos de un sistema nacional de educación pública y un código de derecho que, más tarde, encontraría su expresión en el Código de Napoleón.

Gran parte de esta legislación, sin embargo, resultó efímera. La República de la Virtud de Robespierre dio paso a la República de propietarios de Termidor y al Directorio; este, a su vez, dio paso a la dictadura militar del Consulado y del Imperio napoleónicos; y la monarquía borbónica fue restaurada en 1814. Bajo el Directorio apareció una segunda cámara o Senado que, en esencia aunque con distinto nombre, heredaron luego Napoleón y la Restauración. La República del año II dejó grandes recuerdos: su espíritu revivió y algunos de sus grandes momentos se repitieron en las revoluciones posteriores de 1830, 1848 y 1871; sin embargo, unos u otros de sus sucesores fueron destruyendo la mayor parte de su trabajo, incluidas la fiscalización de los precios, la participación popular en el gobierno local y la libertad de los esclavos negros.

No obstante, y a pesar de todas esas extravagancias, cambios y experimentos constitucionales, un sólido núcleo de legislación constructiva consiguió sobrevenir al periodo revolucionario, siendo desarrollado posteriormente a la derrota y exilio en Santa Helena de Napoleón, y plasmado en las monarquías, imperio y repúblicas del siglo XIX. Aunque la «libertad» y la democracia continuaron sufriendo altibajos y los asalariados obtuvieron pocos beneficios permanentes de la Revolución, las exenciones de impuestos y los privilegios desaparecieron. Se mantuvo la igualdad ante la ley y «la carrera abierta al talento»; Francia conservó su unidad económica y administrativa y los campesinos la tierra que habían ganado, así como su libertad frente a los diezmos y las obligaciones feudales. De hecho, gran parte de lo que perduró de la legislación de los años revolucionarios fue lo que la Asamblea Constituyente iniciara o completara. No es exagerado decir que la herencia de la Revolución fue, en esencia, la que resulta de la imagen decididamente burguesa de «los hombres de 1789».

[1] R. R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution,* I, pp. 522-528.

[2] S. E. Harris, *The Assignats* (Harvard University Press, 1930).

VII. LA LUCHA POR EL PODER

Al promulgar la Constitución el 28 de septiembre de 1791 y al presentarla a los franceses con un conmovedor alegato en favor de la unidad nacional, Luis XVI declaraba solemnemente: «La Revolución ha terminado». Era esta una esperanza compartida muy sinceramente por la gran mayoría de la Asamblea e, incluso, por algunos miembros de la oposición democrática. No obstante, al cabo de un año se desechó la Constitución, el rey perdió su trono, los dirigentes monárquicos constitucionales fueron proscritos o emigraron y la Revolución, lejos de haber acabado, entraba en una nueva fase.

Hubo una serie de razones que explicaron esta evolución, algunas de ellas hijas de las circunstancias y conflictos que ya hemos explicado y otras de acontecimientos que, por entonces, no pasaban de ser ligeramente discernibles. En primer lugar, el rey había aceptado la Constitución solo aparentemente: mucho antes de haberla firmado, hizo un intento fallido de buscar salvación en la huida y, habiendo tenido que regresar ignominiosamente a la capital, continuaba intrigando con los gobernantes de Suecia, España, Prusia y Austria con el fin de restaurar su antigua autoridad por medio de las armas. Por tanto, el rey no era de fiar, y mucho menos aún la reina. La deserción y traición de ambos imposibilitaban a los monárquicos constitucionales –autores de la Constitución de 1791– para continuar gobernando o para alcanzar la solución de compromiso que preveía su Constitución.

Únicamente una minoría de los nobles aceptaron voluntariamente la renuncia a sus antiguos derechos y privilegios. Muchos siguieron a Artois y Breteuil al exilio o se sumaron al ejército *emigré* de Condé en Coblenza y Worms, si bien estos últimos nunca fueron más de una doceava parte de las antiguas familias nobles de Francia. Otra minoría, aún más

reducida, se opuso a la Revolución desde dentro y, de esta, unos 1.250 cayeron víctimas de la guillotina[1]. Algunos llegaron a un acuerdo con la Revolución y muchos antiguos aristócratas tomaron parte en los trabajos de las asambleas, comités y tribunales, incluso durante el Terror: la Convención Nacional de 1793 comprendía a 23 exnobles, de los cuales 7 eran marqueses y 1 príncipe de sangre. Mas estos eran, por supuesto, representativos de la gran mayoría que, aun permaneciendo en Francia y sobreviviendo a lo largo del Terror, nunca llegó a reconciliarse con el nuevo orden y, en su calidad de foco permanente de descontento, de resentimiento rencoroso y de conducta sospechosa, obligó a las autoridades revolucionarias a tomar de continuo medidas más duras y más fuertes para restringir sus libertades y mantenerla a raya. Quizá más importantes resultaran las consecuencias de la división del clero ocasionada por la nueva regulación de la Iglesia, que ya hemos descrito en el capítulo anterior. Al enemistarse a un gran número de curas párrocos, los revolucionarios de 1789 emprendieron un camino que iba a echar en brazos de la contrarrevolución no solamente a una gran cantidad del clero, sino también a sus congregaciones, sobre todo entre el campesinado devoto y socialmente atrasado del oeste y del noroeste, donde la tradición de sumisión al *seigneur* y al cura seguía siendo fuerte. A ello siguió una amarga situación de guerra civil y guerrillas en ciertas partes del sur que hubo de restar a la futura República muchos de sus recursos naturales y humanos y de provocar medidas de represión más intensas.

Solamente estos conflictos hubieran bastado para impedir que se detuviera el curso de la Revolución, estabilizándose alrededor de las conquistas de 1791. Sin embargo, no era únicamente la oposición de las fuerzas que tenían más que perder con la Revolución la que la empujaba hacia adelante, sino también la intervención de aquellas clases que habían esperado del estallido de 1789 la solución de sus

problemas y cuyas esperanzas no se habían cumplido o solo lo habían hecho de modo parcial. Como ya hemos visto, se liberó a los campesinos del diezmo y de los impuestos y obligaciones feudales más opresivos, pero pocos pudieron satisfacer su hambre de tierras, el peso de sus deudas continuó gravitando sobre ellos y los pequeños propietarios, los campesinos sin tierras y los aparceros, al igual que la población urbana, siguieron sufriendo el alza de los precios de los alimentos y recibiendo muy poca o ninguna protección frente a las usurpaciones de los granjeros y propietarios mayores en materia de derechos comunes. En las aldeas, por lo tanto, continuó la Revolución con la fuerza explosiva de 1789, si bien no por largo tiempo, y, a su manera, sirvió para alimentar los motivos de guerra entre los grupos políticos rivales. Por otro lado, entre los pequeños propietarios urbanos y los profesionales había muchos a quienes se había privado del derecho al voto– y a muchos más del de participar en la Asamblea– mediante las restricciones aprobadas a iniciativa de Sieyes, en octubre y diciembre de 1789; estas personas participarían de modo decisivo en la lucha por acabar con la distinción entre ciudadanos activos y pasivos y con la calificación del *marc d'argent.* Por encima de todo, aparecía el sempiterno descontento de la gran masa de *sans-culottes* urbanos –pequeños tenderos, maestros de talleres y asalariados–, en especial de los de París, quienes aseguraron el triunfo de la Revolución por medio de su intervención en 1789 y sin recibir recompensa digna de mención, ya fuera en forma de derechos políticos o en la de beneficios materiales, tales como salarios más elevados o suministros alimenticios más baratos o adecuados. Sus agravios y aspiraciones eran ya antiguos, pero su propia participación en los acontecimientos revolucionarios les dotó de un contenido y un significado más explícitos con la incorporación de las nuevas consignas e ideas contagiosas de los «derechos del hombre» y la «soberanía del pueblo», ideas recogidas sobre

todo de los escritores y periodistas burgueses, que los militantes populares adoptaron y transformaron a menudo para sus propios fines. Poco a poco, los *sans-culottes* se fueron convirtiendo en una fuerza política con la que había que contar, que buscaba aliados y dirigentes entre las facciones que luchaban por el poder y que, con ello, aumentaba la enemistad entre los grupos burgueses, orientando así la Revolución hacia la izquierda, en un camino que los «hombres de 1789» no pretendían ni deseaban.

No obstante, si Francia hubiera mantenido relaciones pacíficas con el resto de Europa (como lo hizo durante casi tres años de Revolución), habría sido posible detener la trayectoria de la Revolución o, al menos, dejarla reducida a la situación de 1791, a pesar de todas estas tendencias opuestas. Pero la guerra estalló en abril de 1792, debido a los motivos que se expondrán más adelante, y la violencia que desató agudizó en gran medida las tensiones y los antagonismos existentes. Como escribía una vez Engels a Victor Adler: «Toda la Revolución francesa está dominada por la guerra de Coalición y su rumbo depende de ella». Era inevitable que la guerra infundiera nuevos ánimos a aquellos que trataban de destruir la Revolución desde dentro y desde fuera, lo que, a su vez, originó medidas excepcionales para combatir la contrarrevolución, la aristocracia y el «fanatismo». La guerra puso al descubierto el doble juego y la traición de la Corte y ocasionó la caída de la monarquía; produjo inflación y aumento de los precios de los alimentos, provocando, con ello, la agitación y la decidida resistencia por parte de los *sans-culottes* urbanos. La inflación, la derrota y los disturbios sociales obligaron a la Asamblea, en contra de sus propios principios, a instituir un gobierno «revolucionario» fuerte, a emplear el terror, a fiscalizar los precios y a movilizar a la nación para la guerra. Tal era el trasfondo de guerra y paz y conflictos sociales sobre el que se perfilaban los dirigentes y los partidos en su lucha por el

poder, mientras la Revolución avanzaba a través de nuevas fases y experimentos. Parte de esta historia se narra en este capítulo.

El año de 1790 fue un año de relativa calma social; el precio del pan bajó de nuevo temporalmente al nivel normal prerrevolucionario; los disturbios sociales disminuyeron hasta casi desaparecer y la Asamblea pudo continuar con su programa constitucionalista sin ser interrumpida. Los primeros meses de 1791 presenciaron el resurgir de la agitación: los demócratas parisienses del Club de los Cordeleros comenzaron a interesarse por la situación de los parados, cuyos talleres *(atelliers de charité)* estaban siendo cerrados, y a apoyar a los trabajadores huelguistas; emprendieron la lucha contra el *marc d'argent* y la privación de derechos de los ciudadanos pasivos y enrolaron a asalariados y pequeños artesanos en sociedades «fraternas» afiliadas al club principal de la rue Dauphine. Este adoctrinamiento deliberado de los *sans-culottes* por los demócratas habría de resultar muy fructífero, pero sus resultados hubieran tardado más en manifestarse de no haber sido por el intento del rey de cruzar la frontera imperial. Con el fin de ocultar sus intenciones, Luis XVI dio instrucciones a su ministro, el conde de Mont-morin, para que en abril de 1791 enviara una carta a las cortes extranjeras exaltando las virtudes de la Revolución (descrita como «la simple destrucción de multitud de abusos acumulados durante siglos por los errores del pueblo o el poder de los ministros»); sin embargo, en su correspondencia secreta con España, Suecia y Austria, tanto anterior como posterior a esta carta, repudiaba todas las concesiones hechas al Tercer Estado y a los constituyentes, asegurando que habían sido conseguidas por la fuerza; además, desde finales de 1790 estaba elaborado el plan de huida, que se aplicó en junio de 1791, con la ayuda del conde sueco Fersen, devoto caballero andante de la reina. El plan era abandonar París bajo disfraz, de noche, y

unirse a los austriacos en la ciudad fronteriza de Montmédy, desde donde se haría un llamamiento a los gobernantes de Europa para que intervinieran en contra de la Revolución. El proyecto fracasó el 25 de junio, debido a la incapacidad del rey y de sus allegados, así como al celo de un administrador de correos de aldea; desde Varennes hubo de regresar a París la familia real bajo fuerte escolta militar y civil. Este episodio ejerció una influencia electrizante y destruyó muchas ilusiones. Temiendo una invasión, se movilizaron tropas en las fronteras; los clubes de París intensificaron la agitación y en las manifestaciones se pidió la abdicación de Luis XVI y la proclamación de la República. La Asamblea Constituyente quedó dividida, pero pudo llegar a una solución de compromiso: se suspendió al rey de sus funciones, mas, habiendo empeñado este su palabra de aceptar la futura Constitución, se le repuso en su cargo y se hizo correr la noticia de que los enemigos de la Revolución le habían «raptado». Los periodistas demócratas y republicanos del Club de los Cordeleros, e incluso muchos de los más serenos del club hermano de los Jacobinos, se negaron a aceptar el veredicto y organizaron una serie de protestas y peticiones. La última de estas, apoyada por una gran muchedumbre en el Campo de Marte, en París, sin reclamar específicamente una república, exigió la abdicación de Luis XVI. Unas 6.000 personas habían firmado ya la petición, desplegada sobre el *autel de la patrie,* cuando la Comuna de París, dirigida por Bailly, decidió declarar ilegal la manifestación, impuso la ley marcial y envió a Lafayette al frente de 10.000 guardias nacionales a disolverla. Los manifestantes se resistieron y los guardias abrieron fuego, matando o hiriendo a 60 de ellos. Posteriormente se perpetraron unas 200 detenciones, mientras que los dirigentes del Club de los Cordeleros –incluyendo a Danton– buscaban la salvación en la huida. Fue este un acontecimiento cargado de consecuencias, no tanto porque con ello el movimiento republi-

cano (hasta entonces en su infancia) ganó nuevos adeptos, como porque, desde entonces, el Tercer Estado de 1789 quedó irremediablemente dividido. Tres semanas antes, con el fin de señalar su desaprobación ante la agitación provocada por los demócratas para deponer al rey, la mayoría de los monárquicos constitucionales, encabezados por Barnave y los hermanos Lameth, rompieron con el Club de los Jacobinos, donde hasta entonces habían estado unidos los diputados del centro y de la izquierda, y formaron su propio Club de los Feuillants. Así fue como los jacobinos –entre los cuales Robespierre tenía cada vez mayor importancia– aparecieron como los dirigentes reconocidos de la izquierda dentro de la Asamblea y del movimiento popular fuera de ella. Los jacobinos, los demócratas y los *sans-culottes* se unieron más estrechamente, en común oposición a la mayoría de los constituyentes, que ahora eran responsables no solo de negarles el derecho al voto a los ciudadanos humildes, sino también de haber derramado su sangre en el Campo de Marte.

A pesar de los intentos de la Asamblea de unificar a la nación en torno a la nueva Constitución y de olvidar y perdonar las consecuencias inmediatas de la huida del rey a Varennes, esta hubo de provocar otras a largo plazo, como el encadenamiento de episodios que condujeron a la guerra con Austria y Prusia el 20 de abril de 1792. Leopoldo II, emperador «liberal» austriaco que sucedió en el trono a su hermano José en 1790, se negó resueltamente a dar paso ninguno, a pesar de la insistencia de Artois y de los *émigrés,* para que interviniera decididamente en contra de la Revolución. No hay duda de que el emperador lamentaba las humillaciones que estaba sufriendo su hermana, María Antonieta, pero se encontraba demasiado atareado con problemas urgentes dentro de sus propias posesiones y, además, al igual que el gobierno de Pitt en Inglaterra, era favorable a la implantación de algunas reformas constitucionales en

Francia. La situación cambió con la huida de Luis XVI desde París y su consiguiente deposición. Pensando que la familia real francesa corría peligro físico, Leopoldo II promulgó la circular de Padua del 5 de julio, invitando a los gobernantes de Europa a tomar «severas medidas» con el fin de restaurar «la libertad y el honor del más Cristiano de los reyes». Sin embargo, en la declaración conjunta de Pillnitz, firmada por Austria y Prusia el 27 de agosto, el tono amenazante del primer escrito quedaba muy suavizado: por entonces Luis XVI ocupaba de nuevo el trono, la elaboración de la Constitución continuaba su rumbo y, además, la respuesta de las otras potencias a la circular había sido tibia, si no fría. En consecuencia, lo que se pretendía con la Declaración era salvar la responsabilidad de los autores, más que amenazar realmente, limitándose a invitar a todas las potencias, si podían ponerse de acuerdo, a que prepararan una alianza con el fin de restaurar el orden en Francia: no había indicación alguna de una intervención armada inmediata. En cualquier caso, la Declaración fue una provocación que sirvió para unificar la contrarrevolución en el interior y en el exterior, confiriéndole un programa, y para proporcionar un pretexto al partido de la guerra en Francia para redoblar los tambores marciales.

Aparte de los pretendidos crímenes de la Revolución, existía ya la posibilidad de ruptura entre Francia y Austria. El *protégé* del emperador, el elector de Tréveris, había permitido que Condé armara y entrenara su ejército de nobles *émigrés* dentro de sus posesiones de Coblenza; además, los príncipes alemanes que tenían propiedades en Alsacia se habían negado a aceptar la abolición o redención de sus derechos feudales, conforme a lo decretado por la Asamblea francesa en agosto de 1789. Sin embargo, Tréveris hubo de someterse a las presiones francesas y aceptar la disolución de la fuerza contrarrevolucionaria en Coblenza; las negociaciones sobre las exigencias de los príncipes hubieran podi-

do terminar en algún tipo de acuerdo, a pesar del apoyo que aquellos gozaban del emperador y de la Dieta de Frankfurt, si hubiera habido una cierta buena voluntad por ambas partes. Pero esto resultaba imposible, debido, por una parte, a la creciente belicosidad de la Corte Imperial (en marzo de 1792, el agresivo Francisco II sucedía a Leopoldo II) y, por la otra, al surgimiento de un partido de la guerra en Francia, de extraña composición. Había que contar, además, con la propia Corte, que, animada por la reina y por los consejeros de esta, comenzaba a considerar que solo la derrota militar de Francia podía llevar a cabo la restauración de su autoridad perdida. En estrecha asociación con la Corte se encontraba el ministro de la Guerra, Narbonne, por entonces amante de madame De Staël, hija de Necker, y cuyo plan consistía en provocar una guerra limitada con el fin de fortalecer el poder de la Corona por medio de una dictadura militar. Pero el grupo que más eficazmente sembró en el país un fervor guerrero fue la nueva izquierda de la Asamblea Legislativa (la cual había substituido a la Constituyente el 1 de octubre de 1791), dirigida por Jacques-Pierre Brissot, diputado por Eure-et-Loir, estrechamente aliado a un grupo de diputados, algunos de ellos del departamento de la Gironda, en el sudoeste[2]. Desde octubre de 1791, Brissot venía predicando una cruzada armada de los pueblos contra las cabezas coronadas de Europa, en el curso de la cual los pueblos liberados, ya fuera por sus propias conquistas o por las victorias de los ejércitos franceses, se unirían bajo la bandera de la Revolución; en tanto que el rey se vería obligado a llamar a los partidarios de Brissot para formar gobierno. Brissot llevó la discusión desde la Asamblea al Club de los Jacobinos, donde, en diciembre, tuvo lugar un acalorado debate sobre este tema entre él y Robespierre. En aquella época, Robespierre era el único de los dirigentes jacobinos (a excepción de Marat, editor del periódico radical *L'Ami du Peuple*) que se oponía al

plan de Brissot de una cruzada militar, argumentando que, lejos de fomentar la causa de la revolución en el exterior, ello no haría más que favorecer a la oposición y realizar el proyecto de Narbonne de implantar una dictadura militar en el interior. Pero Brissot ganó la disputa, y la mayoría de los jacobinos, las secciones y clubes parisienses, así como la gran mayoría de los diputados a la Asamblea Legislativa, apoyaron sus puntos de vista. El 20 de abril, tras la ruptura de las negociaciones de marzo con el emperador y los príncipes alemanes, Francia declaró la guerra a Austria y pronto hubo de enfrentarse a los ejércitos unidos de Austria y Prusia, dirigidos por el antiguo general de Federico II, el duque de Brunswick.

Pero el triunfo de Brissot fue de corta duración: a la larga, Robespierre demostró estar en lo cierto; y sería su partido el que recogería la cosecha. Al principio, los acontecimientos parecieron darle la razón a Brissot: ya antes de que estallara la guerra, el rey se vio obligado a deponer a Narbonne y a sus ministros del Club des Feuillants y a llamar al gobierno a hombres de la tendencia de Brissot, como Dumouriez, soldado profesional y portavoz del partido antiaustriaco; Clavière, financiero suizo; y Roland, alto funcionario civil y esposo de una mujer aún más famosa. Sin embargo, las fuerzas francesas, en lugar de comportarse como «misioneros armados», debido a su poca preparación para el combate (y aún menos para la ofensiva), se desbandaron ante los ejércitos de Brunswick, y Francia quedó indefensa ante el enemigo. Hubo brotes de contrarrevolución armada en el sur. El *assignat* descendió al 63 por 100 de su valor nominal en enero y, como consecuencia, en las provincias estallaron tumultos a causa de la escasez de cereales. De resultas de la guerra civil en las colonias de las Indias Occidentales, en París se triplicó el precio del azúcar y en los *faubourgs* las muchedumbres de ciudadanos enfurecidos asaltaron las tiendas de aprovisionamiento y obligaron a los

propietarios a vender sus mercancías a los precios anteriores. La traición en las altas esferas añadió leña al fuego: las intrigas de la reina con la Corte austriaca eran cada vez más evidentes, alimentando la convicción –hábilmente manejada– de que un «comité austriaco» estaba planeando la restauración de la monarquía absoluta con ayuda de las armas extranjeras. Brissot se había jactado de que tales actividades traidoras redundarían en beneficio de su propio partido (*«il nous faut de grandes trahisons»,* había exclamado) y tanto él como sus asociados no dudaron a la hora de agitar las pasiones populares contra la Corte, hasta el punto de que Luis XVI se sintió obligado a deponer a los ministros de la tendencia de Brissot, acto que provocó una manifestación popular en París el 20 de junio, durante la cual los pequeños tenderos y artesanos de los dos *faubourgs* revolucionarios de St. Antoine y St. Marcel desfilaron en armas ante la Asamblea e irrumpieron en el palacio de las Tullerías, obligando al reacio Luis XVI a ponerse el gorro de la libertad y a brindar con ellos a la salud de la nación.

Esto resultó un ensayo de la insurrección del 10 de agosto, mayor y más violenta, en el curso de la cual se tomaron las Tullerías y se derribó la monarquía. Sin embargo, el partido de Brissot no obtuvo ninguna ventaja de ello, pese a haber atizado las llamas de la sublevación y conseguido reponer a sus ministros. De hecho, por entonces la dirección del movimiento popular había pasado a Robespierre y a los jacobinos. Lo cierto es que, al igual que el aprendiz de brujo de la leyenda y muchos otros partidos, tanto antes como después, el partido de Brissot no estaba preparado para hacer frente a las consecuencias de la tormenta que él mismo había desatado. Tras haber incitado demagógicamente a las secciones y *faubourgs* a manifestarse contra la monarquía y tras haber amenazado con derribarla, ahora retrocedían en apoyo del rey: en realidad no estaban a favor de una república que iba a depender de los votos y las armas de los has-

ta entonces ciudadanos «pasivos», o *sans-culottes.* Fueron los jacobinos, que habían tenido poco que ver con la manifestación del 20 de junio, los que se alzaron con el triunfo. Pétion, que sucedió a Bailly como alcalde de París y estaba vinculado a Brissot y a la Gironda, era aún el héroe del día cuando se celebró la fiesta anual de la Federación, el 14 de julio; pero, a fines de mes, todo había cambiado, y 47 de las 48 secciones de París se pronunciaron por la abdicación del rey. Por entonces ya se habían desmoronado las antiguas distinciones establecidas por Sieyes y los ciudadanos pasivos fueron invitados a asistir a las asambleas de la sección. Todavía en estos momentos, Robespierre sostenía que el futuro de la monarquía, como el de la misma Constitución, debía decidirse por medio de una Convención elegida popularmente, y no por medio de las armas. Sin embargo, los temores de un *coup* contrarrevolucionario (había insistentes rumores acerca de complots, y Lafayette había abandonado poco antes el frente para insistir en la urgencia de tomar medidas contra los demócratas), y la presión que ejercían las secciones y los clubes, persuadieron a los dirigentes jacobinos para iniciar una insurrección armada. A los preparativos para llevarla a cabo se unieron los temores y los odios populares, hasta ahora agudizados por el manifiesto del duque de Brunswick del 1 de agosto, en el que se amenazaba a las secciones de París y a la Guardia Nacional con una sumaria venganza si los invasores los encontraban con las armas en la mano. De esta manera, en parte como resultado de un proyecto premeditado y en parte como medida de autodefensa, los jacobinos, los contingentes de milicianos de Marsella, Brest y otras ciudades, que se encontraban en París, y las secciones y Guardia Nacional de la capital, se unieron bajo la dirección de una comuna «revolucionaria», recientemente formada, para asaltar las Tullerías por la fuerza de las armas, y obligaron al rey a buscar refugio en la

Asamblea Legislativa. Seis semanas más tarde, la nueva Convención deponía al rey y proclamaba la República.

En el curso de la revolución del 10 de agosto de 1792 se produjo el espantoso episodio conocido con el nombre de «las matanzas de septiembre», cuando bandas armadas entraron en las prisiones de París, improvisaron rápidamente «tribunales del pueblo» y ejecutaron a entre 1.100 y 1.400 de los detenidos, entre ellos curas y prisioneros políticos, pero, principalmente, delincuentes de derecho común: ladrones, prostitutas, falsificadores y vagabundos[3]. Se trata de un episodio misterioso, que se resiste a un análisis preciso, aunque parece que fue más bien producto del pánico engendrado por las amenazas de contrarrevolución e invasión: Verdún, a 200 millas escasas de la capital, acababa de rendirse a los prusianos, y los parisienses útiles, respondiendo a las llamadas del nuevo ministro de Justicia, Danton, afluían para enrolarse en el servicio en el frente, dejando con ello más indefensa la capital. Mientras duraron las matanzas, e incluso algunos días después, hubo autoridades dispuestas a aplaudirlas como acto necesario de justicia popular y hasta a recomendarlas, como ejemplo que otros debieran seguir. Mas, una vez pasada la crisis, no hubo partido o facción que las justificase o que se las atribuyera, y el hecho de haberlas provocado, sancionado, o incluso de no haberlas impedido, se convirtió en un arma aceptada en las luchas entre partidos, en las que los jacobinos trataban de desacreditar a los girondinos, y los girondinos de difamar a los jacobinos, en tanto que los realistas y los moderados lanzaban acusaciones sobre ambos partidos, indiferenciadamente. Y, sin embargo, con independencia de su origen o de su carácter, las matanzas constituyeron un acontecimiento de cierta importancia: aparecían como la destrucción del enemigo en el interior, algunas semanas antes de que los voluntarios derrotaran al ejército de Brunswick en Valmy el 20 de septiembre y le forzaran a retroceder al otro lado de

la frontera. La República, proclamada aquel otoño, se estableció sobre lo que daba la impresión de ser una base suficientemente sólida: la victoria de la Revolución sobre sus enemigos en el interior y en el exterior.

La nueva Asamblea, o Convención Nacional, elegida por sufragio masculino adulto[4], se reunió el 20 de septiembre de 1792. De sus 750 miembros, solo 96 eran antiguos constituyentes, en tanto que otros 190 habían pertenecido a la Asamblea Legislativa. Había muchos recién llegados, entre otros el joven Saint-Just, que se convertiría en el devoto defensor y lugarteniente de Robespierre. Por su composición social, la Convención difería escasamente de los otros dos parlamentos anteriores: había una preponderancia parecida de antiguos funcionarios, abogados, comerciantes y hombres de negocios, aunque se apreciaba un ligero aumento de los *avocats,* médicos y maestros de provincias; al igual que en las anteriores, no había pequeños campesinos y únicamente dos trabajadores: Noël Pointe, trabajador de una fábrica de armas de St. Etienne, y Jean Baptiste Armonville, hilador de Reims. Políticamente, la Convención se componía de tres grupos principales. La mayoría estaba formada por la gran masa de diputados independientes, no comprometidos con facción particular alguna, conocida bajo los nombres del «pantano» o la «llanura». Por supuesto, ganarse el apoyo de la gran mayoría de estos diputados era una cuestión fundamental en la lucha por el poder de los otros partidos. De estos, el grupo más amplio era el de los «girondinos» (como sus oponentes llamaban ahora a los antiguos partidarios de Brissot), dirigidos por Vergniaud, Brissot, Gensonnet y Guadet. Aunque los girondinos no estaban en mayoría, por regla general determinaban el equilibrio de los votos y proporcionaban la mayoría de los ministros. Contra ellos se alineaban los jacobinos, o la Montaña (así llamados porque se sentaban en las hileras superiores de escaños en la Cámara), quienes contaban con 23 de los

24 diputados de París, dirigidos por Robespierre, Marat y, a veces, Danton. Esta primera fase de la historia de la Convención estuvo marcada por un duelo reñido y prolongado entre la Gironda y la Montaña, duelo que solo se acabó cuando otra insurrección popular, en junio de 1793, depuró a los dirigentes de la Asamblea. La Gironda tenía la ventaja de ser más numerosa, de tener a su servicio a la mayor parte de la prensa de París y de gozar de apoyo notable en las provincias; por otro lado, su conducta equívoca en la revolución de agosto le había arrebatado a los seguidores que tenía entre los militantes de París. La Montaña, por el contrario, aunque débil en las provincias, tenía, en su calidad de triunfadora reconocida de agosto, el sólido respaldo de las secciones y los clubes de París. Los jacobinos surgían, pues, como los verdaderos dirigentes de París, como el principal bastión de la Revolución, en tanto que los girondinos se veían obligados, en parte por su propia decisión, en parte por las circunstancias de su elección y la táctica de sus adversarios, a propiciar una política «federalista», o provincial-nacional, en abierta oposición a las pretensiones de la capital, pero no muy diferente, en otros aspectos, de la que proponían los constituyentes de 1789-1791. Mientras que todos los partidos estaban decididos a apoyar la guerra hasta la victoria, con diferentes grados de entusiasmo, los girondinos, firmes campeones del liberalismo económico y portavoces de los intereses comerciales, estaban más decididos –y con mayor convicción que sus adversarios– a apoyar las soluciones de *laissez-faire* en todos los asuntos relativos a la economía de la nación, suministros alimenticios y planificación general de la guerra. También los jacobinos eran *bons bourgeois* y mostraban poco entusiasmo ante la idea de una economía dirigida y, menos aún, ante una posible división de la propiedad. Sin embargo, estaban más cercanos al pueblo, eran más flexibles en sus actitudes y más capaces de ceder ante la presión popular y de adaptar sus opiniones

a las necesidades y exigencias del momento. Los girondinos, sobre quienes recaía casi todo el peso del gobierno, al negarse a las medidas de excepción y a las fiscalizaciones, fueron enemistándose progresivamente con las secciones y con el movimiento popular de París y, cuando otra oleada de traiciones y derrotas acosó a la República en la primavera de 1793, se les hizo responsables de todo ello y perdieron aún más crédito. Esta situación y su creciente tendencia a fomentar las reivindicaciones «federalistas» de las provincias, en contra de la concepción jacobina de «la República única e indivisible», fueron las que, finalmente, proporcionaron los argumentos necesarios a sus adversarios para expulsarlos de la Asamblea.

Entre tanto, la lucha por el poder discurría en torno a asuntos bastante más concretos. En un primer momento, la Gironda consiguió convencer a la Asamblea de que disolviese a la comuna «revolucionaria» que había usurpado la autoridad en París a raíz de la revolución de agosto y se había dotado a sí misma de poderes excepcionales. Una vez pasada la crisis, la continuación de aquella autoridad resultaba una ofensa para los representantes acreditados de la nación; los jacobinos hicieron pocos esfuerzos por justificar las actividades extralegales de la Comuna y, tras algunos debates acalorados, accedieron tranquilamente a su liquidación. La batalla por el proceso y ejecución de Luis XVI resultó más prolongada y obstinada. Tras haberse entregado a la Asamblea Legislativa, Luis XVI ingresó con su familia en la prisión del Temple, para esperar su destino. En nombre de los jacobinos, Robespierre propuso ahora que se le llevara ante la Convención y se le condenara a muerte como traidor a la nación. No era necesario un proceso formal, explicaba Robespierre, porque el rey ya había sido juzgado por el pueblo: «El derecho a castigar al tirano y el derecho a destronarle son la misma cosa; no adquieren formas distintas». Como el pueblo ya había dictado su veredicto, la Con-

vención, en consecuencia, no tenía otra cosa que hacer, sino recoger una sentencia de muerte. La Asamblea aceptó parte de esta argumentación y rechazó la otra, decidiéndose a favor de un proceso, pero un proceso en el que ella misma actuaría como fiscal y juez. Algunos de los diputados girondinos deseaban salvar la vida del rey, pero el peso de las pruebas en contra de Luis XVI era tal (se acababa de desenterrar en las Tullerías una caja de hierro que contenía su correspondencia secreta), que decidieron unirse al veredicto unánime de culpabilidad. Después de esto, trataron de recurrir a una maniobra: como no pudieron conseguir un aplazamiento de la ejecución, reclamaron un referéndum; mas también en este asunto quedaron vencidos en la votación, y el 21 de enero de 1793 se ejecutaba a Luis XVI.

Las tropas de la República, tras la anexión de Bélgica, en su avance tras los prusianos en Valmy y Jemappes, se preparaban para ocupar Holanda. Mientras duraron estas victorias de las armas francesas, los girondinos mantuvieron el equilibrio de poder dentro de la Asamblea. En marzo, sin embargo, Dumouriez fue expulsado de Holanda y, como no consiguió convencer a su ejército para que marchara sobre la Convención, disolviera a los jacobinos y restaurara la Constitución de 1791, con Luis XVII como rey, desertó, pasándose al enemigo. En la Convención comenzaron las recriminaciones mutuas. Los más expuestos eran los girondinos, como estrechos colaboradores del general, pero, para defenderse, dirigieron sus ataques contra Danton, que había sido enviado a parlamentar con Dumouriez la víspera de su deserción. La maniobra falló, y Danton, hasta entonces mediador entre las facciones en guerra, estrechó su colaboración con los jacobinos. La Gironda salía aún más perjudicada de este encuentro. Otro resultado de la crisis fue que la Asamblea, bajo la presión de los acontecimientos, promulgó una serie de medidas excepcionales que habrían de tener la mayor importancia para el gobierno revolucio-

nario del futuro: incluían la creación de un tribunal revolucionario, un Comité de Salvación Pública y «comités revolucionarios» en las secciones o comunas, así como el envío a provincias de agentes investidos de la autoridad de la Convención, a los que, al poco tiempo, se conocería como «representantes en misión».

Entretanto, la situación económica evolucionaba a favor de la Montaña y en desventaja de sus enemigos. El *assignat* cayó a la mitad de su valor nominal en febrero y el precio de los alimentos, tras mantenerse relativamente estable durante el verano y el otoño anteriores, sufrió una gran subida en la primavera. Una vez más, los precios de los productos coloniales –café, azúcar, cera, jabón– aumentaron desproporcionadamente, mas esta vez el alza alcanzaba a una cantidad de bienes de consumo mayor que en febrero de 1792. Los motines que siguieron fueron, por tanto, más violentos y más extensos que los del año anterior, y el 25 y el 26 de febrero las tiendas de ultramarinos de casi todas las secciones de París fueron invadidas por los *sans-culottes,* que se negaban a pagar más por los productos de lo que pagaban en 1790 e, incluso, a pagar nada. El Consejo de la Ciudad, el Club de los Jacobinos y los partidos de la Convención se unieron para denunciar tal infracción de los sagrados derechos de la propiedad; Barère (que pronto había de pasarse de la Llanura a la Montaña) habló veladamente, sin la menor prueba que lo confirmara, de «la incitación pérfida de los aristócratas disimulados», en tanto que Robespierre lamentó que los patriotas llegaran a perder el tino y recurrieran a los motines a causa de lo que él llamaba *chétives marchandises.* Pero, aunque ninguno de los portavoces de la Asamblea estaba dispuesto a sancionar tales desmanes, una vez más fueron los girondinos quienes, en su calidad de partido gobernante y más estrechamente comprometido con el mantenimiento de la libertad de mercado, cargaron con todas las desventajas, en tanto que sus adver-

sarios únicamente obtenían beneficios. En marzo, la Comuna de París, bajo la dirección de los jacobinos, decidió fijar el precio del pan en tres *sous* la libra, solamente un 50 por 100 por encima del nivel prerrevolucionario en una época en que otros precios habían llegado a pasar el 100 por 100, compensando a los panaderos con una subvención. Dos meses más tarde, la Asamblea seguía su ejemplo, aprobando la primera ley del tope «máximo», por la que se autorizaba a todas las autoridades locales del país a fiscalizar el precio y los suministros de pan y harina. Mientras tanto, en las secciones, clubes y calles de París comenzó un movimiento que exigía una «insurrección» popular con el fin de purgar a la Asamblea de los dirigentes girondinos. Tal sublevación corrió, en realidad, el 10 de marzo, a cargo de un pequeño grupo de revolucionarios conocidos bajo el nombre de *enragés,* cuyos dirigentes eran Jacques Roux, el cura «rojo» de la sección de Gravilliers, Théophile Leclerc y Jean Varlet. Los *enragés* estaban más cerca que ningún otro grupo de los *sans-culottes* de las calles y mercados y constituían el único partido que apoyaba de verdad la reivindicación de que se impusiera un tope a los precios de todos los bienes de consumo. A Jacques Roux se le había acusado de participar en los motines de febrero (se ignora si con fundamento). Varlet llegó a atraer grandes masas de público a su tribuna al aire libre en la Terrasse des Feuillants, a las puertas de la Asamblea, donde reclamaba la pena de muerte para los acaparadores y especuladores, el procesamiento de Roland, ministro del Interior, y la expulsión de Brissot de la Convención. Tanto su llamada a la insurrección como la de sus compañeros hubiera encontrado un amplio eco si la Comuna de París, el Faubourg St. Antoine y el Club de los Jacobinos hubieran dado el visto bueno.

Pero la Montaña y los dirigentes jacobinos no tenían prisa. Habían aprendido de la experiencia y aunque, a diferencia de sus adversarios girondinos, estaban dispuestos a utili-

zar el movimiento popular para conseguir sus fines políticos, no querían permitir que este pasara a otras manos, tales como las de los *enragés,* o las de Hébert, director del popular *Père Duchesne,* cuya influencia crecía cada vez más en el Club de los Cordeleros y en la Comuna de París. Además, temían que una sublevación prematura llevara consigo una purga demasiado estricta de la Convención, cuyos restos serían incapaces de resistir las reivindicaciones económicas de los *sans-culottes;* ello iría acompañado de nuevas matanzas en las prisiones y dejaría a París a merced de la hostilidad unida de las provincias. Por ello, procedieron con cuidado; pero a comienzos de abril ya estaban en situación de formular su programa, con apoyo de las secciones, y de arrancar la dirección del movimiento popular a ambos grupos de «extremistas». De acuerdo con ello, el 5 de abril, en el Club de los Jacobinos, el hermano menor de Robespierre, Augustin, invitó públicamente a las secciones a ir a la Convención y «obligarnos a arrestar a los diputados desleales». La respuesta fue inmediata: en el plazo de una semana, las secciones «nombraron» a 22 diputados de la Gironda, cuya expulsión de la Asamblea satisfaría la exigencia popular de purgar la desacreditada Convención y aseguraría a la Montaña una mayoría efectiva en el seno de aquella. Hacia mediados de abril, tres de cada cuatro secciones habían dado su apoyo a la Montaña, muchas de ellas empujadas a la acción por la insensatez de los girondinos de emplazar al popular Marat ante el Tribunal Revolucionario. La Comuna sancionó estas reivindicaciones y, un mes después, respondiendo a su invitación, la gran mayoría de las secciones formaron un Comité Revolucionario Central en el antiguo Palacio Arzobispal, que organizó y dirigió la revolución del 31 de mayo al 2 de junio casi con precisión militar. Se aumentó el número de Guardias Nacionales, cuyo mando se dio a Hanriot, hijo de un criado y antiguo empleado de aduanas, que sustituía a Santerre, rico cervecero de St. Antoine. Ade-

más, se decidió organizar en las secciones una milicia revolucionaria de 20.000 *sans-culottes,* a los que se compensaría por su pérdida de trabajo con un pago de 40 *sous* diarios por cada día que pasaran bajo las armas. Se estableció el toque de rebato, se cerraron talleres y *barrières* y, tras un par de intentos fallidos, el 2 de junio se puso cerco a las Tullerías con una fuerza conjunta de Guardias Nacionales y *sans-culottes* armados. Los diputados intentaron una heroica salida, pero, al encontrar todas las puertas bloqueadas, se rindieron ignominiosamente a las demandas de los insurgentes. Veintinueve diputados y dos ministros del partido derrotado quedaron en arresto domiciliario. En un principio nada se dijo acerca de la reivindicación más urgente del programa popular –la fiscalización de los precios de los alimentos–, pero la Montaña alcanzó sus objetivos inmediatos.

A partir de aquel momento, los dirigentes jacobinos teníán asegurada una mayoría real y, con notable rapidez, procedieron a celebrar y a consolidar su victoria haciendo que la Convención y las asambleas primarias aprobaran la Constitución de junio de 1793; una carta que poseía un enorme significado histórico, ya que, por primera vez, se dotaba a una nación (por lo menos, en teoría) de un sistema de gobierno republicano y democrático, bajo el cual todos los ciudadanos varones tenían derecho a voto y un amplio grado de fiscalización de sus representantes y gobernantes. Por supuesto, también tenía limitaciones: como hizo observar Roux a una airada Asamblea, el documento no tomaba debidamente en cuenta las necesidades económicas de los pobres. Paralelamente, sin embargo, los jacobinos tenían que resolver problemas más urgentes. Incitadas por la agitación «federalista», la ciudad de Lyon y algunas zonas del sur y del sudoeste destituyeron a las autoridades jacobinas y se levantaron en armas contra la recién depurada Convención; Tolón se disponía a entregarse a los ingleses (en guerra con Francia desde el 1 de febrero de 1793); la rebelión

de los campesinos de Vandea, en apoyo de sus curas y sus señores –a la que pronto se había de sumar la de los *chouans* bretones y normandos–, estaba minando desde marzo la fuerza militar del país. Incluso en París, los moderados (entre los que se contaba el conocido exmarqués de Sade) aún controlaban una docena de secciones del centro y del oeste. La situación económica seguía empeorando. El *assignat,* que ya había caído hasta el 36 por 100 de su valor en junio, bajó hasta el 22 por 100 en agosto. Los precios de los artículos alimenticios volvieron a subir durante el verano y, si bien se había fijado el del pan, se produjeron escaseces y colas ante las panaderías en junio, agosto y septiembre. Resultaba imposible, dada la situación, resistirse a la constante exigencia popular de una fiscalización general de los precios y de medidas de excepción contra los acaparadores y los especuladores, así como para asegurar el suministro alimenticio de París y de otras ciudades.

Los problemas se agudizaron con una nueva intervención de los *sans-culottes* parisienses. En julio y agosto se había purgado a los últimos bastiones de la «moderación» de sus elementos conservadores y burgueses. Durante agosto y los primeros días de septiembre llovieron sobre la Convención reducciones para que esta tomara medidas estableciendo un tope (o «máximo») en los precios, dominando la inflación y restringiendo la especulación y el acaparamiento. Estas exigencias de los pequeños comerciantes y propietarios, que ahora dominaban las asambleas de las secciones, recubrieron el respaldo de las masivas manifestaciones callejeras de los *sans-culottes* –asalariados y pequeños artesanos–, que tuvieron lugar en la ciudad los días 4 y 5 de septiembre. La «insurrección» comenzó por la mañana temprano con asambleas de obreros de la construcción y oficiales de taller de los distritos de Temple y St. Denis, al norte del Ayuntamiento. Otro contingente salió de los bulevares, cerca del Ministerio de la Guerra, cuyo secretario era Vincent, uno

de los lugartenientes de Hébert. La manifestación avanzó hacia la Place de Grève y el Ayuntamiento, exigiendo pan. Al principio, los dirigentes de la Comuna, Hébert y Chaumette, trataron de engañar a los manifestantes con un despliegue de oratoria, mas luego, a iniciativa de Hébert, se acordó que a la mañana siguiente volvieran a reunirse para marchar sobre la Convención y exigir que se tomaran medidas más severas contra los acaparadores y los políticamente sospechosos. El Club de los Jacobinos también prometió unirse a la manifestación. Aquella misma tarde, la Comuna dio órdenes para que se disolvieran los trabajadores de la construcción, que reivindicaban salarios más elevados, pero, al mismo tiempo, hizo saber a los talleres que al día siguiente tenían que cerrar para que los maestros y los oficiales pudieran asistir a la manifestación. Una vez más, se olvidaron convenientemente las cuestiones de precios y suministros, en la avalancha de oratoria que se produjo a partir del día 5 y a pesar de que habían sido los principales movilizadores del día 4. No obstante, se acordaron importantes medidas: las secciones solamente se reunirían dos veces por semana, pero los *sans-culottes* necesitados recibirían 40 *sous* por cada vez que asistieran; se detendría a los sospechosos; se creó una *armée révolutionnaire,* después de varios meses de dilaciones, reclutada entre los *sans-culottes* de la ciudad, que había de servir de instrumento del Terror (puesto ahora en el orden del día) para asegurar el suministro adecuado de París desde el campo vecino[5]. Por último, tras haber intentado o discutido todas las demás posibilidades, la Convención cedió ante la presión popular y, el 29 de septiembre, aprobó la ley del *Maximum Général,* que fijaba el precio no solamente del pan, sino también de un gran número de bienes y servicios esenciales, a los niveles de los departamentos en junio de 1790, más un tercio; al tiempo que elevaba los salarios en un 50 por 100. Tanto los pequeños tenderos como los maestros y oficiales de la capital, que fueron

sus partidarios más decididos y obstinados, recibieron con agrado la medida. Al día siguiente, un agente del Ministerio del Interior escribía: «El pueblo ha recibido con agrado los decretos de la Convención Nacional que fijan los precios de las mercancías esenciales». Esta medida originó también nuevos problemas, pero estos no eran visibles aún.

Se había iniciado una etapa de la Revolución nueva y distinta. Al igual que sus predecesores, el nuevo partido gobernante debía su ascensión, en gran medida, a la intervención popular, pero, a diferencia de aquellos, los jacobinos buscaron deliberadamente al pueblo y le aceptaron como aliado. A cambio de su apoyo, los *sans-culottes* obtuvieron beneficios visibles: conquistaron el derecho al voto y satisficieron sus reivindicaciones de artículos alimenticios más baratos y de fiscalización de los suministros. Y no solamente esto: en aquellos momentos surgió una cierta división de autoridad entre el partido gobernante y sus aliados populares. En tanto que los jacobinos dominaban la Asamblea y los órganos del gobierno, de los cuales estaban casi excluidos los *sans-culottes,* los militantes populares, por su parte, ejercían el poder en la Comuna y dominaban las asambleas de sección y los clubes, los comités «revolucionarios» locales y los batallones de la Guardia Nacional. Esta colaboración, cargada de contradicciones, no podía mantenerse mucho tiempo. Las contradicciones se hicieron visibles al día siguiente de la victoria común y se agudizarían en los meses siguientes. En octubre de 1793 las diferencias casi habían llegado a desaparecer; en el verano de 1794 la alianza se había desmoronado y arrastró a ambas partes en su caída. El relato de estos acontecimientos se hará en el próximo capítulo.

[1] Véase D. Greer, *The Incidence of the Emigration during the French Revolution* (Harvard University Press, 1951), y *The Incidence of the Terror during the French Revolution* (Harvard University Press, 1935).

[2] En aquel tiempo, llamados por lo general *brissotins* y, después de septiembre de 1792, girondinos. Como ha demostrado el Dr. M. J. Sydenham (*The Girondins,* Londres, 1961), carecían de una identidad definida y de política clara que no fuera una oposición insistente a la mayor parte de los ja-

cobinos después de octubre de 1791. Esta actitud –como su destino posterior– les procura una cierta identidad (como a los mismos jacobinos) y seguiré llamándoles por sus nombres tradicionales en las páginas siguientes.

[3] P. Caron, *Les Massacres de septembre* (París, 1935).

[4] Sin embargo, parece que se impidió a los trabajadores que vivían en habitaciones amuebladas o en pensiones que votaran, hasta la siguiente «revolución» de mayo-junio de 1793. Y, aun después de esta, los criados domésticos siguieron privados de derecho al sufragio.

[5] Para un estudio completo, véase R. C. Cobb, *Les Armées révolutionnaires* (2 vols., París, 1961-1963).

VIII. ROBESPIERRE

El nuevo gobierno «revolucionario» no comenzó a perfilarse hasta octubre de 1793, si bien, con el ingreso de Robespierre y de sus ayudantes en el Comité de Salvación Pública en julio, se abría realmente una nueva fase de la Revolución. Hasta entonces, el Comité se había limitado a cumplir su función original de actuar como perro guardián sobre el consejo ejecutivo de ministros, pero a partir de entonces se convirtió en el núcleo de un gobierno fuerte, el primero que creara la Revolución.

Los doce hombres que integraban el Comité hasta la caída de Robespierre, un año más tarde, componían un equipo notable. «El más extraño grupo de hechiceros que el mundo había visto hasta entonces», escribía de ellos Carlyle. No formaban un grupo o partido estrechamente unido, sino que eran los urgentes problemas del momento los que les obligaban a mantenerse juntos y a unificar sus propósitos. El más débil y el que menos duró fue Hérault de Séchelles, antiguo *parlementaire* y aristócrata que consiguió distinguirse, por un momento, por la parte que le cupo como presidente de la Asamblea en la expulsión de los girondinos en junio; en diciembre salía del Comité y, tres meses más tarde, subía al cadalso junto a Danton. Desde el mes de junio surgieron desde la Llanura dos nuevos miembros: Bertrand Barère, un «hábil» abogado, y Robert Lindet, quien se encargó de los suministros alimenticios. Cuatro personas estaban encargadas principalmente de los asuntos militares y de los suministros a las fuerzas armadas: Prieur de la Marne, abogado y emisario de los ejércitos; Prieur de la Côte d'Or, ingeniero militar que tomó a su cargo el suministro de municiones; Jeanbon Saint-André, expastor protestante y especialista en asuntos navales; y el gran Lazare Carnot, genio militar a quien el mismo Napoleón llamó «el organizador de la victoria». Había también dos hombres fuertes de la iz-

quierda, reclutados en el Club de los Cordeleros después de los motines de septiembre: Collot d'Herbois, antiguo actor, y Billaud-Varenne, abogado y libelista. Les igualaban en vigor y elocuencia dos colaboradores íntimos de Robespierre: Georges Couthon, otro abogado a quien la parálisis había condenado a desplazarse en una silla de ruedas, y Louis-Antoine Saint-Just, licenciado en Derecho de veintiséis años escasos, visionario y hombre de acción orgulloso y valiente, de quien un adversario decía que «llevaba su cabeza como el Santo Sacramento». Por último, Maximilien Robespierre, que, sin desempeñar cargo específico alguno en el Comité, pronto se convirtió en el dirigente aceptado del mismo.

Hasta tiempos muy recientes, los historiadores han solido tratar duramente la figura de Robespierre: heredando la interpretación de aquellos que le derribaron, con frecuencia se le ha despreciado como a un fanático severo y estrecho, un tirano y un «hombre sangriento», dedicado al culto de la guillotina y aspirando a la dictadura personal; incluso su reputación de «incorruptibilidad» se ha utilizado en contra suya y Acton le denominaba «el personaje más odioso en la primera fila de la historia desde que Maquiavelo codificó la corrupción de los hombres públicos». En los últimos tiempos, sobre todo desde que Albert Mathiez saliera decididamente en su defensa, se le ha representado, si no como la encarnación de todas las virtudes, al menos como la principal figura pública de la Revolución, como el demócrata más auténtico y el más convincente de los oradores. Robespierre nació en Arrás, en 1758, hijo y nieto de abogados; de sus maestros de oratoria en el colegio Louis-le-Grand, en París, heredó la afición a los clásicos y el amor a Rousseau. De Rousseau procedía su creencia en la soberanía del pueblo y en la utilidad social de la religión liberada de la superstición, así como su ideal social de una república de pequeños y medianos propietarios, incorruptibles por la riqueza o por

la pobreza: esta es la concepción subyacente en sus continuas referencias a la «corrupción» y a la «virtud». Ya era conocido como abogado de los pobres cuando se le eligió para representar a su ciudad natal en los Estados Generales de 1789. En Versalles y en la Asamblea Constituyente se distinguió en seguida como liberal y demócrata y también como decidido campeón de los Derechos del Hombre. A partir de septiembre de 1791, apartado de la Asamblea Legislativa, al igual que otros constituyentes, por un «decreto de autorrenuncia» propuesto por él mismo, dedicó sus energías al Club de los Jacobinos y a la administración de la ciudad. Durante el invierno y la primavera de 1791 a 1792 su oposición a Brissot respecto al gran problema de la guerra «revolucionaria» le hizo perder durante cierto tiempo parte de su popularidad entre las secciones y los clubes de París, mas durante el verano su reputación quedó restaurada y desempeñó un papel decisivo (si bien entre bastidores) en la caída de la monarquía, tras lo cual se sumó a la Comuna «revolucionaria» y se convirtió en el principal representante de la Montaña en su duelo contra la Gironda en el seno de la Convención Nacional. Sin tomar parte directamente en la insurrección de mayo-junio, que expulsó a los girondinos, fue, en gran medida, el cerebro que la inspiró. En aquel tiempo, ante la experiencia de la guerra y la revolución, el que fuera durante tanto tiempo ardiente defensor de la inviolabilidad de la Asamblea y de la libertad de palabra e imprenta comenzó a abandonar sus creencias liberales. Ahora sostenía que la única forma de salvar la Revolución frente a sus enemigos internos y externos era la creación de un fuerte gobierno central que, con la ayuda de los *sans-culottes* armados, pudiera hacer frente tanto a los restos de la aristocracia como al «egoísmo» de los ricos. «Lo que necesitamos –escribía por entonces– es una *única voluntad.* Esta sublevación debe continuar hasta que se hayan tomado las medidas necesarias para salvar a la República.

El pueblo debe aliarse con la Convención y la Convención debe utilizar al pueblo.» Era un programa que preveía, más allá de las «jornadas» de junio, las tareas con que se enfrentaría el Comité de Salvación Pública en el otoño e invierno de 1793.

Después de la purga de los dantonistas, quienes habían intentado en vano poner fin a la invasión extranjera por medio de la negociación y la rebelión «federalista» de las provincias a través de la conciliación, el nuevo Comité tomó una serie de enérgicas medidas para asegurar la defensa de la nación. Se puso remedio de una vez a la rebelión del oeste del país, enviando una fuerza debidamente equipada que alcanzó un pronto éxito. Caen, Burdeos, Nantes, Marsella y Lyon fueron arrebatadas a los «federalistas», restaurándose en ellas la autoridad revolucionaria. La flota inglesa se vio obligada a levantar el sitio de Tolón, en gran medida gracias a la pericia y la iniciativa de un joven oficial de artillería, Napoleón Bonaparte. El 23 de agosto la Convención acordó, en principio, movilizar a la nación para la guerra, ordenando una *levée en masse* de toda la población francesa: los jóvenes irían a la guerra, los hombres casados forjarían las armas, las mujeres coserían tiendas y uniformes y los niños harían vendas; incluso los ancianos tendrían que «reparar los lugares públicos, estimular el valor de los guerreros y predicar la unidad de la República y el odio a los reyes». Se crearon talleres del Estado para la manufactura de armas; se reclutaron ejércitos, entrenados y equipados merced al genio organizador de Carnot; se enviaron continuamente representantes al frente para fortalecer la moral de las tropas y asegurar sus suministros. De este modo, la República, con cerca de un millón de hombres en armas, comenzó a limpiar su suelo de invasores; Jourdan derrotó a Coburg en Wattignies en octubre; Hoche persiguió al enemigo a través de los Vosgos; Kellermann liberó Saboya; y se expulsó a los españoles, obligándoles a cruzar los Pirineos.

Por último, la victoria de Jourdan sobre Coburg en Fleurus, en junio de 1794, obligó al último soldado de la coalición a cruzar la frontera.

Entre tanto, el «terror económico» consiguió por fin dominar la especulación y la inflación: el *assignat,* que había caído hasta el 22 por 100 de su valor en agosto, ascendió al 33 por 100 en noviembre y al 48 por 100 en diciembre. También durante esos meses, y a pesar de la guerra, se consiguió asegurar la regularidad de los suministros alimenticios a la población de las ciudades, con mejores resultados probablemente que en ningún otro momento desde el otoño de 1791. Tampoco se perdieron de vista las medidas sociales de largo alcance; en julio de 1793 se canceló definitivamente la deuda de los campesinos con sus antiguos señores, lo que completó la destrucción legislativa del feudalismo; al mismo tiempo, se hicieron esfuerzos (si bien fueron débiles) para incitar a los pequeños campesinos a unirse y comprar las tierras de los *émigrés,* que ahora se ponían a subasta en pequeños lotes. De intención más radical, aunque no llegaron a cuajar, fueron los últimos decretos de la Convención, propuestos por Robespierre y Saint-Just, que dividían y distribuían las propiedades confiscadas de los «sospechosos» entre los «patriotas» pobres y necesitados (leyes de Ventoso, febrero-marzo de 1794). El Comité se ocupó asimismo del porvenir, presentando a la Asamblea una serie de proyectos relativos a la educación, la industria, el código civil y la asistencia pública. Algunos de ellos no sobrevivieron a la caída de sus patrocinadores, otros llegaron a convertirse en parte del cuerpo legal que posteriormente surgiría de la Revolución. No resulta extraño que el gran Comité se ganara el aplauso incluso de algunos de sus críticos más severos, en relación con unos u otros asuntos.

Mas, para realizar sus propósitos, los nuevos gobernantes de Francia se vieron obligados a abandonar los peligrosos

métodos de gobierno aceptados por sus predecesores y ello debido mucho más a la lógica y a la presión de los acontecimientos que a las enseñanzas de los *philosophes;* la concepción de Robespierre de un gobierno de una «única voluntad», apresuradamente esbozada en junio, comenzó a tomar forma en el otoño. Como ya vimos, sus fundamentos residían en las medidas de excepción adoptadas como resultado de la crisis de marzo de 1793, a las que siguieron otras en agosto y septiembre. Pero una cosa era llamar a la nación a las armas e instituir el terror contra los acaparadores y los especuladores y otra dirigir las operaciones. De hecho, durante los meses del otoño, en un cierto número de departamentos prevaleció una especie de anarquía administrativa, ya que los comités locales, las *armées revolutionnaires* (muchas de ellas organizadas sin autorización de la Asamblea) y los poderosos «procónsules» como Fouché, Tallien y Carrier, investidos de poderes excepcionales, tendieron a interpretar y aplicar la ley a su propia manera[1]. Fueron las necesidades de la guerra, de la paz civil y del orden público –al margen de cualquier consideración personal– las que se combinaron para convencer a Robespierre y a sus colaboradores de que era necesario continuar fortaleciendo su poder en París. Por supuesto, para ser eficaces, tales medidas no podían menos de avasallar las previsiones democrático-liberales de la Constitución de 1793. El 10 de octubre, la Convención acordó dar el primer paso, declarando que «el gobierno provisional de Francia será revolucionario hasta la llegada de la paz». No obstante, las medidas de excepción tendrían una duración mayor y, al menos durante aquel tiempo, la Constitución de 1793 quedó momentáneamente arrinconada. Pero extraer de ello, como muchos han hecho, la conclusión de que el gobierno «revolucionario» respondía a las ambiciones de los dirigentes jacobinos, durante largo tiempo acariciadas, es interpretar erróneamente tanto sus principios como la evolución de su política. No

podemos saber si esperaban sinceramente restaurar la Constitución una vez que hubiera terminado la guerra, aunque sí sabemos que no fueron ellos, sino sus sucesores quienes finalmente la enterraron y persiguieron a sus partidarios. Es cierto que Marat exigió la dictadura de un hombre solo, basada en el modelo romano; pero Marat se preocupó poco por las sutilezas «filosóficas» y, de cualquier modo, había muerto apuñalado por Carlota Corday en julio de 1793. Sin embargo, Robespierre y los otros dirigentes eran muy sensibles a las enseñanzas de los *philosophes,* quienes prescribían no una dictadura o un gobierno «revolucionario», sino un legislativo fuerte, un ejecutivo débil y la «separación de poderes».

Es verdad que en los escritos de Rousseau acerca del Estado y de la «voluntad general» se podían encontrar argumentos a favor de esta posición, en especial cuando daba a entender que pudiera ser necesario «obligar a los hombres a ser libres». Pero ni en Rousseau ni en Montesquieu podía encontrarse receta alguna para el sistema de gobierno que tomó forma legislativa el 4 de diciembre de 1793, sistema que –conviene señalar– resultaba tan aceptable en aquellas circunstancias para la Llanura como para la Montaña. Los dos Comités, el de Seguridad General y el de Salvación Pública, debían su autoridad únicamente a la Convención, pero estaban investidos con poderes ejecutivos absolutos. El primero era responsable de la policía y la seguridad interna; bajo su competencia estaban el Tribunal Revolucionario y el funcionamiento de los comités «revolucionarios» y de vigilancia local. El segundo tenía poderes más amplios: exigía responsabilidades a los ministros, nombraba a los generales, determinaba la política exterior y depuraba y dirigía el gobierno local. De hecho, la transferencia de autoridad y la centralización del gobierno no se hicieron a expensas de la Convención, sino más bien de los departamentos y de las comunas. Únicamente en un caso quedó evidentemente de-

bilitada la autoridad del Parlamento: cuando se redujo la independencia de los «representantes en misión», sometiéndoles a la rigurosa fiscalización del Comité de Salvación Pública. El ámbito de la autoridad local quedó muy restringido: a los departamentos se les dejaron funciones puramente rutinarias, los distritos se limitaban a responder de la ejecución de los decretos «revolucionarios» y los «agentes nacionales», responsables ante el gobierno central, sustituyeron a los antiguos *procureurs* (procuradores) de los departamentos y las comunas. La independencia de París, que durante tanto tiempo fue el principal apoyo de los jacobinos en su lucha por el poder, quedó también muy restringida cuando se privó a la Comuna del derecho a enviar comisionados a las provincias, se limitó su derecho de fiscalización de la Guardia Nacional y los comités «revolucionarios» de las secciones fueron sometidos a la dirección del Comité de Seguridad General. Siguió el Terror, pero institucionalizado y dirigido desde el centro; ello significó el fin de la anarquía, pero también el comienzo del fin de la iniciativa popular.

A la larga, había surgido un gobierno fuerte y es dudoso que la República hubiera conseguido llevar adelante sus conquistas sin él. Por su carácter, tenía que provocar un coro de protestas de sus primeros seguidores, así como de los partidos perjudicados. La primera oposición surgió desde las propias filas de los jacobinos y de las de sus aliados del Club de los Cordeleros. Pero esta oposición no estaba unida, sino que se dividió tempranamente en dos facciones mutuamente hostiles. La oposición de derecha se agrupó en torno a Danton y al llamado Partido de los Indulgentes y la de izquierda en torno a Hébert y a los dirigentes de la Comuna de París y del Club de los Cordeleros. Danton, separado del Comité de Salvación Pública a raíz del reajuste del 10 de julio, se retiró en un principio con su nueva esposa a su finca de Arcis-sur-Aube, donde pareció que se dedicaba

a curar en silencio sus heridas; pero, animado por algunos antiguos amigos –entre los que se contaba el periodista Camille Desmoulins–, regresó a la capital en noviembre y comenzó a dirigir lo que fue, alternativamente, un grupo de presión y una oposición organizada dentro de la Asamblea. En la medida en que los dantonistas tenían un programa político preciso, este consistía en derribar el gobierno «revolucionario», restaurar la libertad de acción de las autoridades locales, desmantelar el aparato del Terror, liberar de trabas la economía nacional y negociar la paz, consiguiendo, primeramente, la separación de Inglaterra de la coalición europea. Los dantonistas se dividieron el trabajo: el propio Danton era portavoz en materias de administración y alta política; Desmoulins fundó un nuevo periódico, *Le Vieux Cordelier,* en el que abogaba por una mayor «clemencia» y por la liberación de los «sospechosos»; otros, que posiblemente tenían un carácter más práctico, mostraban su desprecio por los controles económicos participando en negocios conjuntos o embarcándose en aventuras financieras equívocas.

A diferencia de los dantonistas, la oposición de izquierda contaba con pocos seguidores en la Convención: sus principales campos de acción eran el Club de los Cordeleros, la Comuna de París, las *armées révolutionnaires* y los clubes y las secciones, entre cuyos militantes continuaban gozando de amplio apoyo. Los dirigentes jacobinos ya habían derrocado a sus principales rivales en el favor popular, los *enragés,* y arrestado a sus dirigentes; Jacques Roux se había suicidado en la prisión en octubre. Desde entonces, Hébert había heredado el programa de Roux y lo había incluido en el suyo propio; en su órgano, popular y chabacano, *Le Père Duchesne,* exigía diariamente que se prosiguiera la guerra con más energía, que se empleara la guillotina con más frecuencia contra los acaparadores y los especuladores, comerciantes y tenderos, cuyas actividades, opinaba Hébert con

bastante razón, estaban minando toda la obra de fiscalización de los precios emprendida por la Convención. Hébert y su lugarteniente, Chaumette, colaboraron también intensamente, al igual que Fouché, en la campaña contra la religión cristiana, tanto en París como en provincias. La Asamblea había reducido sus medidas coercitivas, por lo general, contra el clero «no juramentado» o «refractario», pero ahora era la propia Iglesia constitucional la que sufría el ataque. A lo largo de esta ola de «descristianización», que se extendió desde París y el departamento de Nièvre (donde Chaumette contaba con seguidores), se cerraron las iglesias, se obligó a los sacerdotes y obispos a que dejaran sus puestos y se entronó solemnemente a la diosa Razón en la catedral de Notre Dame, con acompañamiento de conjuras cívicas. Es probable que los «hebertistas» pretendieran con esta primera agitación estimular a los jacobinos y a la Convención para que tomaran medidas más fuertes y no trataran de usurpar su autoridad, pero la ley del 4 de diciembre, que ampliaba los poderes del Comité a expensas de la Comuna, las denuncias de los dantonistas y la hostilidad creciente de Robespierre fueron empujando gradualmente a los hebertistas a una oposición más abierta.

También los *sans-culottes* tenían motivos para oponerse a las nuevas medidas gubernamentales que, en parte, estaban dirigidas contra ellos. Como ya hemos visto, los *sans-culottes* se convirtieron en una fuerza con la que los que estaban en el poder tenían que contar, ya fuera como aliados o como oponentes. A través de una serie de depuraciones graduales, las secciones de París, así como la Comuna, habían ido adquiriendo otro carácter social: durante esta etapa de la Revolución, aproximadamente tres de cada cuatro miembros de los comités «revolucionarios» locales eran pequeños fabricantes, comerciantes y artesanos; esta era también la extracción social de 93 de los 132 consejeros generales de la Comuna[2]. En muchos centros provinciales, la propor-

ción de *sans-culottes* en los comités de gobierno local pudo ser incluso mayor[3]. Esto originó un problema de división en los consejos; es evidente que las ideas políticas y las aspiraciones sociales de estos hombres tenían que ser diferentes en puntos esenciales, por mucho que tuvieran en común con ellos, de las de los propietarios, abogados, médicos, profesores y hombres de negocios que formaban parte de la Convención, e incluso de las de los pequeños abogados, comerciantes y funcionarios, que predominaban en los clubes y sociedades jacobinos provinciales[4]. En tanto que la Llanura y la Montaña favorecían ahora un gobierno fuerte que destruyera a los enemigos de la Revolución y ganara la guerra, los *sans-culottes* se aferraban a la olvidada Constitución de 1793; creían sinceramente que la soberanía popular residía en esencia en las asambleas primarias y, por lo tanto, en las secciones de París, y exigían el derecho a la revocación de los diputados y la responsabilidad de estos frente a sus electores. En esta situación, los *sans-culottes* no podían dejar de oponerse a la pretensión jacobina de que «mientras durase» la Convención, esta y sus comités eran los únicos custodios y ejecutores de la «voluntad general». Además, si bien los jacobinos y la Convención –incluso los robespierristas– estaban dispuestos a tolerar la fiscalización y la dirección estatales de la economía de la nación únicamente como medidas excepcionales y temporales, para los *sans-culottes* suponían la garantía de un estado permanente de justicia y seguridad sociales. En septiembre, una sección de París llegó a reclamar el establecimiento de un tope en los ingresos y un límite en el tamaño de las empresas y de las propiedades agrarias. Mientras que, como empresarios y miembros del Parlamento, y de los comités del gobierno, los jacobinos estaban interesados en detener el movimiento ascendente de los salarios, los asalariados que figuraban entre los *sans-culottes* (especialmente numerosos en París) tenían motivos suficientes, así como oportunidades –a causa

de la escasez de mano de obra durante la guerra–, para subir los salarios hasta donde los empresarios estuvieran dispuestos a pagar. Por todos estos motivos, la antigua alianza entre los jacobinos y el pueblo estaba comenzando a resquebrajarse a finales de 1793[5].

Al principio, el movimiento «hebertista» fue el que supuso el mayor peligro para los jacobinos. Las actividades de los «descristianizadores», tanto en París como en provincias, les llenaban de preocupación: ya tenían bastantes dificultades para contener la rebelión campesina en el oeste y no veían la necesidad de echar irreflexivamente en brazos de la contrarrevolución a una gran cantidad de franceses, aferrados a sus sentimientos religiosos y que no podían menos de sentirse heridos por los violentos ataques a los sacerdotes y el cierre de las iglesias. De este modo, cuando en noviembre la Comuna de París cerró todos los lugares de culto de la ciudad, Robespierre respondió denunciando a Fouché, Chaumette y a sus compañeros como ateos y desviacionistas y reclamando una vuelta a la política del derecho al culto religioso acordada por la Convención. Danton, de regreso de Arcis, viendo la posibilidad de introducir una cuña entre Robespierre y sus dos antiguos colegas «hebertistas», Collot d'Herbois y Billaud-Varenne, tomó parte en la disputa. Así se inició una lucha triangular, que se desarrolló alternativamente en el Club Jacobino, en la Convención y en los dos comités y en el curso de la cual los portavoces del gobierno, acaudillados por Robespierre, buscaron aliados en las dos facciones, aunque con más frecuencia se inclinaron del lado de Danton y los indulgentes, con el fin de debilitar y destruir a la izquierda. Animados por la alianza, los indulgentes combatieron con mayor energía, pero la creciente violencia de sus denuncias, en especial las de Desmoulins en *Le Vieux Cordelier,* obligaron a Robespierre a romper la alianza y enfrentarse con las dos facciones a la vez. Por si esto fuera poco, se descubrió que uno de los lu-

gartenientes de Danton, Fabre d'Eglantine, había falsificado un decreto de la Asamblea relativo a la Compañía de las Indias Orientales con el fin de obtener mayores ganancias financieras; y, además, los esfuerzos de Danton por terminar la guerra estaban poniendo en peligro las operaciones militares del gobierno. El resultado de la lucha fue la destrucción simultánea de ambos grupos. A comienzos de marzo, Hébert y sus aliados del Club de los Cordeleros, Vincent y Ronsin, intentaron forzar la suerte amenazando con otra insurrección del tipo de las de junio y septiembre de 1793; pero este era un gesto de desesperación, más que de fuerza, ya que, por aquella época, su dominio de la Comuna y de las secciones se había debilitado. Los conspiradores fueron arrestados y guillotinados el 25 de marzo; Chaumette subió también al cadalso tres semanas más tarde. Esto selló igualmente la suerte de Danton y Desmoulins, que, en caso de haber sobrevivido a la destrucción de Hébert, hubieran inclinado la balanza hacia la derecha y derribado los comités. El afecto personal que sentía Robespierre por Desmoulins le hizo dudar a la hora de firmar la sentencia de muerte de este, pero Saint-Just, Collot y Billaud le convencieron para que superara sus escrúpulos. Tras un proceso apresurado y embarazoso, se ejecutó a los dantonistas el 5 de abril.

El destino de Danton causó desagrado entre sus antiguos compañeros de la Convención, pero no originó ni siquiera un murmullo de protesta entre las secciones o los *sans-culottes.* También se recibió con tranquilidad la ejecución de Hébert; el estado de ánimo general era de apatía, más que de ira. Pero precisamente este silencio era significativo; aunque Hébert no gozaba de simpatías populares, como Marat, había sido un portavoz de las pasiones y prejuicios populares y su desaparición rompía los vínculos que habían ligado a los *sans-culottes* con la Comuna, ahora depurada y transformada en una fortaleza robespierrista. Además, la

caída de Hébert tenía que venir inevitablemente acompañada por un ataque hacia aquellas instituciones populares sobre las que había tenido mayor influencia: de este modo, siguiendo el ejemplo de sus vástagos en las provincias, se disolvieron la *armée revolutionnaire* de París, así como los comités para la vigilancia y detención de los acaparadores; al poco, también desaparecía la mayoría de las sociedades «populares» de las secciones, las cuales, a diferencia de las *«sociétés populaires»* originales, quedaban fuera de la guía y vigilancia del Club de los Jacobinos. Los mismos «comités revolucionarios» estaban ahora firmemente unidos al Comité de Seguridad General, con lo que las secciones dejaron al poco tiempo de reflejar las opiniones y actividades independientes de los *sans-culottes,* para convertirse en meros organismos de sanción de las directrices jacobinas y las decisiones del gobierno. Saint-Just observó el cambio y lo resumió en una frase: la *Révolution est glacée.*

Las medidas económicas del gobierno continuaron estrechando el cerco de los *sans-culottes,* que ya habían sido reducidos políticamente al silencio. Las leyes del *Maximum,* las cuales originaron un entusiasmo inicial, resultaron un fracaso. Durante una temporada, los precios mantuvieron la estabilidad, pero, en un país donde predominaban los pequeños productores y distribuidores, estas leyes solo podían imponerse por medio de medidas posteriores de coerción y represión, medidas que el gobierno estaba poco dispuesto a tomar, debido a su necesidad de conservar el apoyo de los campesinos, los comerciantes y los fabricantes. Así, tanto los grandes como los pequeños productores comenzaron a evadir la ley al por mayor y los tenderos, a su vez, a descargar sobre sus clientes las alzas de precios resultantes. En su calidad de pequeños consumidores, los *sans-culottes* reaccionaron violentamente, se manifestaron contra los carniceros y los tenderos y exigieron medidas más enérgicas de fiscalización. En enero, las autoridades se enfrenta-

ron con el dilema de intensificar el Terror contra aquellos mercaderes y productores que transgredían la ley o liberalizar oficialmente las regulaciones, a expensas de los consumidores que protestaban. A instancias de Barère se impuso el segundo criterio: a finales de marzo se publicaba una enmienda a la ley del *Maximum* en la que se preveían precios más elevados, así como márgenes de beneficios; una vez más, los especuladores financieros podían actuar con libertad y el *assignat* volvía a descender en julio hasta el 36 por 100 de su valor nominal. Con ello recomenzó también la agitación en los mercados y los dirigentes jacobinos tuvieron su parte en los insultos dirigidos contra los comerciantes, los especuladores y los tenderos. Aún habrían de complicarse más las cosas. La ley de *Maximum* de septiembre de 1793 preveía, como ya vimos, el control de salarios y precios. En estas circunstancias, ello significaba que las autoridades locales se veían obligadas a *reducir* los salarios hasta el 50 por 100 sobre el nivel de los de 1790. Esta medida se había llevado a cabo ya en muchos distritos, donde la resistencia de los trabajadores no fue muy fuerte, pero no en París, donde los salarios se habían duplicado e, incluso, triplicado sobre los de los tiempos prerrevolucionarios y donde la Comuna, al menos mientras estuvo dominada por los «hebertistas», no tenía ninguna intención de aplicar la ley. Sin embargo, el mismo gobierno era responsable de los salarios en los talleres oficiales y había introducido nuevas escalas (aunque algo moderadas por la experiencia) para sus trabajadores en las armerías y para otros. Entre tanto, a fin de evitar que los salarios en la industria privada se elevaran demasiado, el gobierno había aplicado más de una vez la ley «Le Chapelier» contra las «asociaciones» de trabajadores e, incluso, enviado a huelguistas ante el Tribunal Revolucionario. Sin embargo, los grandes problemas continuaban pendientes de solución e, incluso tras la caída de Hébert, la Comuna vaciló varias semanas antes de dar el

peligroso paso de reducir los ingresos regulares de gran parte de la población de París en un 50 por 100 o más. Cuando por fin se decidió y publicó las nuevas escalas salariales, el 23 de julio, lo hizo en una mala época. No cabe duda de que la hostilidad de los asalariados tuvo no poca importancia en la caída de Robespierre, unos días más tarde.

Robespierre y su grupo habían ido perdiendo el apoyo de la Convención y comités del gobierno. La Convención había aceptado sin muchas vacilaciones las depuraciones sucesivas de los girondinos y los dantonistas, pero estas eliminaciones habían dejado tras de sí resentimientos y miedos de que se produjeran nuevas crisis. La ley de 22 de Pradial (10 de junio de 1794) había refrescado estos temores, en particular por la rapidez con que pasó a través de la Asamblea. La ley, redactada por Robespierre y Couthon, a consecuencia de un atentado realizado contra Robespierre y Collot, aceleraba el procedimiento judicial en el Tribunal Revolucionario y privaba al prisionero del derecho a la defensa, pero también suponía una amenaza para la inmunidad parlamentaria de muchos diputados. De esta ley surgió el «Gran Terror» que, en París, fue responsable de 1.300 de las 2.600 víctimas de la guillotina. Sin embargo, el acontecimiento que más contribuyó a debilitar los lazos que hasta entonces habían unido a Robespierre con la Llanura fue la victoria de Fleurus, el 26 de junio, de resultas de la cual la República quedó libre de tropas extranjeras y abierto, una vez más, el camino de Bélgica. ¿Por qué soportar, pues, una política de Terror y de cinturones apretados, aceptada a regañadientes en un tiempo de crisis, comenzaba a murmurarse, ahora que la crisis había desaparecido? Además, ya se había superado el peligro de la izquierda; se había silenciado a los «salvajes» de la Comuna, los *sans-culottes* tenían las alas cortadas y sus dirigentes habían sido arrestados. Al perder su justificación, la alianza comenzó a desmoronarse y la

cordialidad entre los aliados dejó paso al resentimiento y a la sospecha; tanto más cuanto que los enemigos de Robespierre comenzaron a murmurar que él y su grupo, lejos de disponerse a aliviar los rigores del gobierno «revolucionario», estaban redactando nuevas listas de proscritos e intentando establecer una dictadura personal, o «triunvirato».

Al mismo tiempo, surgieron divisiones más profundas en los dos comités del gobierno, tanto en el seno del Comité de Salvación Pública como en las relaciones entre ambos. Desde la promulgación de la ley de diciembre de 1793, que determinaba sus poderes respectivos, se habían venido produciendo discusiones en cuanto a sus competencias: el Comité de Seguridad General era responsable nominalmente de todos los asuntos relativos a la policía y a la seguridad, pero el otro Comité tenía también su propia vía de acceso al Tribunal Revolucionario. Posteriormente, la coincidencia de competencias se hizo mayor, cuando, en abril, el Comité de Salvación Pública creó su propio departamento de policía para perseguir los delitos de los funcionarios públicos. Ello tenía que suscitar inevitablemente las iras de los enemigos del Comité, dirigidas contra sus principales miembros, Robespierre y Saint-Just, quienes habían dedicado especiales esfuerzos a la creación del nuevo departamento. Como ya hemos visto, fueron Robespierre y Couthon quienes redactaron la ley de 22 de Pradial, pero, en sus prisas por presentarla a la Asamblea, olvidaron consultar a aquellos que más directamente podían sentirse afectados. El Comité de Seguridad preparó su venganza: al apilar las víctimas en las carreteras durante los meses de junio y julio, aquellos contribuyeron a provocar la *naussée de l'échafaud,* o repugnacia contra la guillotina, que recayó sobre las cabezas de los miembros más conocidos del gobierno. Además, el entusiasmo de Robespierre por una religión cívica, de tipo rousseauniano, le había llevado a convencer a la Asamblea para que adoptase su propia creación, el Culto del Ser Supremo

(7 de mayo de 1794), medida que había de producir el descontento de los «ateos» y los «fanáticos», pero que atendía a las creencias de la gran mayoría de los revolucionarios religiosos, cristianos o no. Cualquiera que fuese su efecto a la larga (el Culto pereció con su autor dos meses más tarde), su resultado inmediato fue aumentar el celo de los «descristianizadores» y de los deístas volterianos, quienes temían un resurgimiento del «fanatismo» católico y sospechaban que Robespierre aspiraba a convertirse en el «pontífice» de una nueva religión. Entre estos críticos se contaban Amar y Vadier, miembros del Comité de Seguridad General.

Dentro del Comité principal venía desarrollándose desde mayo un conflicto de principios y personalidades. Entre Carnot y Saint-Just habían estallado violentas discusiones acerca de cómo se llevaban a cabo las operaciones militares: Carnot acusaba a Saint-Just, competente emisario para los ejércitos del norte y de Alsacia, a quien se debió gran parte del triunfo de Fleurus, de inmiscuirse en asuntos que trascendían su competencia. Los hombres «prácticos», Carnot y Lindet, que tenían cierta tendencia al moderantismo, chocaban cada vez más violentamente con los «ideólogos», Robespierre, Couthon y Saint-Just, a quienes acusaban de ser excesivamente indulgentes con los *sans-culottes:* así, por ejemplo, Lindet se opuso a las leyes de Ventoso. Robespierre, a su vez, estaba en desacuerdo creciente con los puntos de vista de los «terroristas» Billaud y Collot, quienes continuaban alardeando de simpatías «hebertistas». Collot había colaborado con Fouché durante la cruel pacificación de Lyon y estaba estrechamente vinculado a otro grupo de «terroristas» que habían desempeñado cargos similares: Barras y Frèron en Tolón, Tallien en Burdeos y Carrier en Nantes. A medida que evolucionaba la crisis dentro de los comités. estos hombres, que temían la hostilidad de Robespierre, el cual había hecho comparecer ya a varios de ellos ante la Asamblea para que respondieran de sus excesos, tendieron

a unificarse alrededor de Billaud y Collot en común defensa contra su acusador.

A finales de junio la atmósfera en el Comité de Salvación Pública se había cargado tanto de sospechas y recriminaciones mutuas que Robespierre, disgustado, se retiró, confinando sus actividades a su oficina privada de la rue Saint-Honoré y al foro del Club de los Jacobinos. A largo plazo, tal gesto no podía sino aumentar las sospechas contra él. La situación empeoró cuando, tras rehusar el ofrecimiento de mediación de Barère, e ignorando aparentemente la disminución del apoyo dentro de la Llanura, decidió apelar a la Convención contra sus colegas disidentes. En un largo discurso el 8 de Termidor (26 de julio de 1794) se defendió apasionadamente de sus atacantes y alegó que una vez más podía salvarse la Revolución, con lo que triunfaría finalmente el reino de la «virtud», si se realizaba una última operación quirúrgica que llevaría a la desaparición de un grupito de hombres «impuros», cuya identidad dejó entrever, pero cuyos nombres se negó obstinadamente a mencionar. Fue un error de cálculo fatal –o una deliberada petición de martirio– que, al parecer, Saint-Just, quien aspiraba a una solución de compromiso, desaprobó tajantemente. La Convención escuchó a Robespierre en silencio y le denegó la gracia habitual de mandar imprimir su discurso, en tanto que Barère, siempre sensible al cambio de aires, se unía a la nueva mayoría. Aquella misma tarde, los jacobinos aplaudían con entusiasmo el mismo discurso. Pero la alianza entre los jacobinos moderados, la Llanura y los «terroristas», momentáneamente unidos por un miedo común, demostró ser más fuerte. En el curso de la noche, los aliados concertaron un plan de acción para la sesión matutina de la Convención. Saint-Just, que había preparado un discurso para la ocasión en defensa de su colega, fue abucheado; a Robespierre, recibido a los gritos de «¡Abajo el tirano!», se le negó la palabra. Saint-Just, los dos Robespierre y su cuñado,

Lebas, fueron arrestados y enviados bajo fuerte escolta al Comité de Seguridad General.

Aun en esta situación, no se hubiera perdido todo si las secciones parisienses y sus batallones armados hubieran acudido en socorro de los dirigentes jacobinos, como en agosto de 1792 y en junio de 1793. Tanto el Club de los Jacobinos como la Comuna seguían siendo favorables a los arrestados; Hanriot, jefe robespierrista de la Guardia Nacional, se escapó de la escuadra que iba a detenerlo; el carcelero de la prisión a la que fueron enviados Robespierre y su grupo se negó a reconocer el mandato de la escolta, de forma que estos quedaban libres para buscar refugio entre sus amigos de la Comuna. Pero, a pesar de la lentitud de sus oponentes, los dirigentes no pudieron recobrar su buena estrella, en parte porque carecían de la voluntad o el deseo de acaudillar una insurrección, en parte porque, cuando llegó el momento, los *sans-culottes,* a quienes había enemistado su política, se mostraron poco dispuestos a tomar las armas en defensa de una causa en la que ya no creían. No fue, ciertamente, por falta de tiempo o de oportunidad para hacerse a la idea. A lo largo de toda la tarde, hasta el anochecer, los dos partidos contendientes, con base respectivamente en la Comuna y en la Convención, enviaron órdenes, amenazas, alegatos y declaraciones contradictorios a las secciones y a los batallones de la Guardia Nacional, apelando a su lealtad. En un determinado momento, en respuesta a una llamada de la Comuna, se situaron fuera del Ayuntamiento más de 3.000 hombres armados, apoyados por treinta y dos piezas de artillería; sin embargo, carecían de dirección y de objetivo, y a medida que los debates en las asambleas de las secciones y en los «comités revolucionarios» se tornaban contra los robespierristas, aquellas fuerzas fueron disolviéndose poco a poco. Mientras tanto, la Convención declaraba fuera de la ley a los «conspiradores» y Barras, provisto del mandato de la Convención, no

encontró ninguna resistencia cuando, durante las primeras horas del 10 de Termidor (28 de julio), apareció con 6.000 hombres en el Ayuntamiento, llevando a sus prisioneros para su identificación oficial ante el Tribunal Revolucionario. Pocas horas después eran conducidos hacia la plaza de la Revolución para ser ejecutados. Entre las 22 víctimas, Robespierre fue el penúltimo en subir al cadalso. Seguramente resulta típico de su austera probidad el hecho de que, tras haber desempeñado durante un año el más alto cargo, dejara una herencia de poco más de 100 libras. Al día siguiente, 71 consejeros de la Comuna, también implicados en la «conspiración robespierrista», le siguieron en el camino de la guillotina: fue el mayor holocausto de la Revolución en París, y también el último. Con las víctimas pereció no solo un hombre o un grupo, sino todo un sistema. Ninguno de los activos enemigos de Robespierre –y aún menos los espectadores pasivos de su caída, los *sans-culottes* de París– podía imaginar lo que vendría después de Termidor.

[1] R. C. Cobb, *Les Armées révolutionnaires,* vol. II.

[2] Véase A. Soboul, *Les Sans-culottes parisiens en l'an II* (París, 1958), pp. 444-445; y P. Sainte-Claire Deville, *La Commune de l'an II* (París, 1946), pp. 42-76.

[3] Véase N. Hampson, *A social History of the French Revolution* (1963), pp. 209-213 [ed. cast.: Alianza, 1963].

[4] C. Crane Brinton, *The Jacobins* (nueva edición, Nueva York, 1961), pp. 46-72, apéndice II.

[5] Para un tratamiento completo del tema, véase A. Soboul, *Les sans-culottes parisiens en l'an II,* así como (para las provincias) Cobb, *Les Armées révolutionnaires,* vol. II.

IX. LA REPÚBLICA BURGUESA

La caída de Robespierre provocó una especie de anticlímax. La Revolución continuó, si bien a un paso más moderado, y la República –una nueva «república de propietarios»– se debatió en una sucesión de crisis hasta que los granaderos de Bonaparte la barrieron en el *coup d'etat* de Brumario (9-10 de noviembre de 1799).

Al igual que sus colegas, Barère supuso que, una vez desaparecido Robespierre, las cosas seguirían como de costumbre. En su informe a la Convención del 28 de julio, describía los sucesos del 9 de Termidor como «una conmoción pasajera que dejó intacto el gobierno». Barère no comprendió correctamente el carácter de las fuerzas que había ayudado a desatar. Lejos de proseguir su rumbo, la Revolución dio un pronunciado giro hacia la derecha (algunos aseguran, incluso, que se detuvo por completo). En el plazo de un mes, el aparato del gobierno «revolucionario» se había desmontado o reformado, y antes de un año el mismo Barère y sus colegas «terroristas» se hallaban camino de la Isla del Diablo, bajo la acusación de ser *la queue de Robespierre.* Una vez más, se desarmaba y privaba de derechos a los *sans-culottes.* Tras un periodo de dudas, los gobernantes de 1795 se inclinaron por la vuelta a los «principios de 1789».

No fueron los restos de los jacobinos, sino la Llanura quien se convirtió en la heredera de Robespierre. Aparecieron nuevos hombres: Boissy d'Anglas, abogado decidido del regreso a un gobierno de «propietarios», hombres de puño de hierro y «terroristas» conversos, tales como Barras, Tallien y Fréron, y dos abogados, Merlin de Douai y Merlin de Thionville. Tras haber «existido», como él mismo dijo, durante los meses del Terror, Sieyes volvió a aparecer entre la Llanura; durante un corto periodo, Cambon, especialista financiero de la Convención jacobina, y Lindet ejercieron influencia como enemigos de Robespierre, pero, al igual

que muchos otros, pronto perdieron el favor, debido a sus antiguas alianzas. Más adelante estos grupos se vieron reforzados por el regreso a la Asamblea de 75 antiguos girondinos, a quienes Robespierre salvó de la guillotina, y un puñado de realistas, que tendieron a formar un ala derechista dentro de la Convención, en tanto que la Montaña, debilitada por la depuración del 9 de Termidor y por las deserciones a la Llanura, formaba un grupo menguado y silencioso, situado a la izquierda.

La Llanura salió triunfante de las jornadas de Termidor. Entre sus hombres se contaban algunos idealistas e «ideólogos», mas, en general, se trataba de hombres prácticos, para quienes la Revolución había sido un buen negocio: les había dado autoridad y posición; muchos se habían enriquecido mediante la compra de las «propiedades nacionales», otros por medio de lucrativos contratos con el gobierno, en un proceso que se iba a proseguir gracias a la anexión de las provincias vecinas. En su calidad de regicidas, eran republicanos y temían una restauración, aunque se tratara de una monarquía constitucional. Su protesta contra los robespierristas no se basaba tanto en que estos hubieran movilizado a la nación para la guerra o institucionalizado el Terror, cuanto en que habían predicado la democracia social, habían dado rienda suelta a los *sans-culottes* y se habían inmiscuido en la propiedad privada y la libertad de mercado. Tras la caída de Robespierre, los objetivos de los hombres de la Llanura eran, por tanto, desmantelar la dictadura jacobina y acabar con el Terror (que ahora resultaba inadecuado), situar de nuevo a los *sans-culottes* en el lugar que les correspondía, regresar a una economía más liberal y continuar la guerra hasta una paz victoriosa. Además de ello, esperaban que el nuevo régimen se estabilizara con el apoyo sólido y voluntario de los «patriotas de 1789».

El último de estos objetivos resultó demasiado ambicioso, debido a las divisiones entre los «patriotas» y a la aparición de un «aliado» nuevo y embarazoso fuera de la Asamblea. Después de los sucesos de Termidor se formó un nuevo triángulo político en las secciones de París, que ahora se dividían entre los moderados, los neo-«hebertistas» y los jacobinos. Los moderados (la mayoría) reflejaban generalmente los puntos de vista de la Llanura. Los neo-«hebertistas», cuya hostilidad a Robespierre les había lanzado en brazos de los enemigos termidorianos de aquel, habían constituido un Club electoral, desde el cual atacaban al gobierno «revolucionario» y exigían la aplicación de la Constitución de 1793; en aquella época, sus portavoces eran Jean Varlet, antiguo *enragé,* y Gracchus Babeuf, director del *Tribun du Peuple.* Por su parte, los jacobinos habían renunciado a su primera adhesión a Robespierre, pero seguían abogando por los principios y métodos «revolucionarios» de 1793-1794. Los jacobinos dominaban ocho o diez de las secciones y, dos meses después de Termidor, consiguieron que se trasladasen los restos de Marat al Panteón para ser enterrados de nuevo. Pero su triunfo había de durar muy poco tiempo. Animado por las divisiones existentes entre los «patriotas», apareció en escena un nuevo elemento, en forma de *jeunesse dorée,* «juventud dorada» (o *muscadins,* como se les llamó a menudo), dirigido por Fréron, «terrorista» renegado. La *jeunesse* se reclutaba entre la juventud de la clase media, empleados de banca y pasantes de abogados, dependientes de comercio, desertores del ejército e hijos de «sospechosos» o de víctimas de la guillotina. Organizados en bandas, hacían incursiones en los distritos populares, apaleaban a los trabajadores jacobinos, coreaban consignas «antiterroristas» y transformaban las estrofas de la *Marsellaise* en las de su propia canción, *Le Réveil du Peuple.* Bajo su impulso, se produjo una auténtica «caza de brujas» en las secciones contra jacobinos y «terroristas»,

reales o imaginarios. Las depuraciones se siguieron unas a otras en rápida sucesión; los moderados se hicieron de nuevo con el control de las secciones y, bajo el peso de la opinión, la Convención se vio obligada a cerrar en noviembre el Club de los Jacobinos. Por aquella época ya los neo-«hebertistas», y Babeuf en particular, comenzaron a lamentar la confianza que depositaran en los dirigentes termidorianos. Pero resultaba demasiado tarde para lamentarse; también se cerró el Club electoral, y poco después se detenía a Babeuf.

Entre tanto, la Convención proseguía sus reformas. Al día siguiente de la ejecución de Robespierre se llegó al acuerdo, a instancias de Tallien, de renovar mensualmente la cuarta parte de los miembros de los comités de gobierno; de este modo, el poder no estaría nunca concentrado en manos de un grupo de personas. Y este no fue más que un primer paso. El 24 de agosto se crearon 16 comités –12 de ellos dotados de poderes ejecutivos– para realizar la labor que antes llevaban a cabo los dos comités de Salvación Pública y de Seguridad General. Los poderes y la autonomía de estos dos comités quedaron reducidos. Cierto es que el último recuperó su dominio indiscutido sobre la policía y la seguridad, aunque estas funciones se fueron reduciendo poco a poco, pero el primero, el soporte principal de Robespierre, perdió todo su poder sobre el gobierno local y las fuerzas armadas, que ahora estaban en manos de un comité militar especialmente constituido y responsable ante la Convención. De este modo, el gobierno conservaba su fuerza y la Asamblea recuperaba parte de su antigua autoridad. Este mismo criterio presidió las transformaciones en el régimen del gobierno local, si bien aquí el motivo más evidente fue la depuración de elementos considerados socialmente indeseables. Los antiguos comités «revolucionarios» y de vigilancia desaparecieron por completo o quedaron bajo mando directo central. En París se abolió la Comuna y los

48 comités «revolucionarios» fueron agrupados en 12 *comités d'arrondissement,* de los que se excluyeron a todos los militantes jacobinos y en los que el elemento social predominante ya no era el pequeño tendero o artesano, sino el comerciante, el funcionario público o el profesional. De modo parecido se depuraron los comités civiles de las secciones, puestos bajo control directo de la Convención, completando sus filas con personas seleccionadas por el Comité de Legislación de aquella; también en estos comités los *sans-culottes* y jacobinos del año II dieron paso a los grandes propietarios y a los moderados que habían ejercido el poder con anterioridad al mes de junio de 1793. Por último, en las asambleas de las secciones, que ahora solamente se podían reunir una vez cada diez días, la influencia ejercida por los *sans-culottes* quedó aún más reducida cuando se les retiró la antigua compensación de 40 *sous* por asistencia.

Oficialmente, también se puso fin al Terror, y, tras la sangría final del 28-29 de julio y algunas víctimas aisladas más, la guillotina perdió virtualmente su función como instrumento político. Se derogó la ley de 22 de Pradial, se abrieron las prisiones y se liberó a los «sospechosos» (500 en París en una sola semana). Se organizaron algunos procesos públicos, incluidos el de Carrier, a quien se hizo responsable de haber ahogado en masa a sus víctimas en Nantes, y el de Fouquier-Tinville, famoso como fiscal público durante el «Gran Terror». Después de ellos también se dejó de lado el Tribunal Revolucionario. En su lugar apareció, sin embargo, un contra-Terror, no oficial. A medida que se iba liberando a los «sospechosos» y que regresaban algunos *émigrés,* aumentaba el número de personas deseosas de ajustar viejas cuentas con los jacobinos, los «terroristas» y los antiguos miembros de los comités. En París el Terror Blanco no oficial se limitó a las actividades de los *muscadins:* hubo apaleamientos, denuncias e intimidaciones, pero se derramó poca sangre; sin embargo, en provincias, la situación

cobró caracteres mucho más violentos y graves: en la provincia de Lyon, la Compañía de Jesús arrojaba los cuerpos de sus víctimas, hombres y mujeres, al Ródano y se produjeron asesinatos masivos de prisioneros, ya fuera en las cárceles o camino de ellas; en otras ciudades del sur, las bandas denominadas Compañías de Jehú y del Sol asesinaron indistintamente a «terroristas», «patriotas de 1789» y –con mayor preferencia– compradores de antiguas propiedades eclesiásticas. En París se lamentaban tales matanzas, pero la Convención y sus Comités, que fueron los que contribuyeron a desatar aquellas fuerzas, eran completamente incapaces de dominarlas.

También la situación económica escapó a todo control, pero en este caso los responsables fueron los nuevos gobernantes, que habían decidido liberar la economía del sistema de fiscalizaciones elaborado por sus predecesores. Como primera medida, en octubre de 1794 se enmendó la ley del *Maximum* de forma que permitiera una elevación de los precios en dos tercios por encima del nivel de 1790; poco después se reducían las penas previstas para los infractores de la ley y, con el fin de fomentar el comercio exterior, se eliminaban las trabas impuestas a la importación. El 23 de diciembre se abolían casi por completo las leyes del *Maximum,* restableciéndose el mercado libre de cereales dentro de la República. En París, el precio del pan sometido a racionamiento aún se mantenía en tres *sous* la libra, si bien ahora ya se podía también vender el pan en el mercado libre; el precio de la ración de carne se estabilizaba en 21 *sous* la libra (antes era de 14 *sous*). Los demás precios quedaban en libertad, a fin de que se establecieran en sus niveles «naturales». Las consecuencias de todo ello fueron desastrosas: los productores quedaron satisfechos de momento, pero la inflación inició una rápida espiral ascendente y los precios se elevaron vertiginosamente más allá de las posibilidades de todos, con excepción de los grandes consu-

midores. El *assignat,* que ya había descendido al 28 por 100 de su antiguo valor en octubre y al 24 por 100 en noviembre, siguió bajando hasta el 20 por 100 en diciembre, 17 por 100 en febrero de 1795 y 7,5 por 100 en mayo del mismo año. En provincias, donde los controles se habían abandonado por completo, en invierno y primavera se produjeron condiciones de hambre general: en Verdún, por ejemplo, la ración diaria de pan de los trabajadores se redujo a media libra, y su precio ascendió a 20 *sous* la libra. En París, la carne racionada solía ser imposible de encontrar y la ración de pan, que en marzo de 1795 se había fijado entre una libra y una y media libras, descendió durante los meses siguientes a ocho, seis, cuatro o, incluso, dos onzas por cabeza, de modo que los pequeños consumidores se vieron obligados a completar su ración comprando en el mercado libre a precios que se elevaron desde 25 *sous* la libra en marzo hasta 16 libras (doce veces aquella cantidad) siete semanas más tarde. Los salarios, aunque liberados del malhadado *Maximum* de julio de 1794, no tenían la menor posibilidad de mantenerse a la altura de los precios, y parece que los salarios reales de los trabajadores parisienses en abril y mayo de 1795 no solamente estaban muy por debajo de los de 1793-1794, sino que habían descendido hasta el nivel catastrófico de los primeros meses de 1789.

Tal era la situación que sirvió de fondo a las grandes insurrecciones populares de Germinal y Pradial (marzo y mayo de 1795). También las motivaciones políticas tuvieron importancia, ya que muchos de los *sans-culottes* apoyaban las exigencias «hebertistas» de que se restaurase la Constitución de 1793, pero lo que sobre todo les sacó de su apatía fueron las medidas económicas del gobierno. En enero, cuando los precios de muchas mercancías se habían duplicado, tras la derogación del *Maximum,* volvieron a oírse las viejas amenazas contra los comerciantes y los tenderos y las amenazas pasaron a la acción cuando la ración de pan co-

menzó a escasear en las dos últimas semanas de marzo. El 12 de Germinal (1 de abril), la ración desapareció por completo en algunas secciones: las mujeres asaltaron las panaderías, los trabajadores de la construcción se reunieron para protestar contra un decreto que, como inquilinos, les privaba del derecho a comprar pan racionado, y las secciones de ambas orillas del río se unieron para marchar sobre la Asamblea. En el momento en que Boissy d'Anglas se dirigía a la Convención, los insurgentes –hombres y mujeres– irrumpieron en la sala a los gritos de «¡Pan, pan!»; algunos llevaban inscrita en sus gorros la consigna «Pan y la Constitución de 1793». Pero, como carecían de dirigentes y de planes previos, se limitaron a presentar sus demandas ante la Asamblea. Los diputados de la Montaña les ofrecieron poco apoyo, y cuando Merlin de Thionville apareció a la cabeza de una banda mixta compuesta por guardias nacionales y *jeunesse,* se dispersaron sin ofrecer resistencia.

Cuando la insurrección se apaciguó, la Convención tomó medidas policiales para restaurar el orden, saldar viejas cuentas y prevenir un estallido posterior. En París se declaró el estado de sitio y las fuerzas armadas pasaron al mando supremo de un oficial del ejército regular, el general Pichegru; en las secciones continuaron el desarme y las detenciones de antiguos «terroristas»; también se arrestó a una docena de diputados de la Montaña (incluidos los antiguos enemigos de Robespierre, Amar y Cambon) y el trío infortunado de Barère, Billaud y Collot, junto con Vadier (perteneciente al primer Comité de Seguridad General), fue senteciado a la deportación. Pero la Convención no hizo nada por acabar con las verdaderas causas de los desórdenes, con lo que prosiguieron las dificultades y la agitación. En Normandía, a lo largo del Sena, se asaltaron los convoyes de alimentos. De nuevo comenzó a invocarse con veneración el nombre de Robespierre. El 16 de mayo, al descender la ración de pan en París a dos onzas, los agentes de policía avi-

saron de la inminencia de un nuevo levantamiento, que resultó inevitable cuando, tres días más tarde, se distribuyeron ampliamente, tanto en los suburbios como en la ciudad, llamamientos a la insurrección armada, entre otros un manifiesto impreso titulado *Insurrection du Peuple pour obtenir du Pain et reconquérir ses Droits,* que explicaba con todo detalle el plan que había que seguir y proporcionaba su consigna central al movimiento: «Pan y la Constitución de 1793».

La rebelión popular que se produjo a continuación fue una de las más persistentes y notables de la Revolución, una protesta social en esencia, inspirada por el hambre y el odio a los nuevos ricos, y acompañada de reivindicaciones políticas aprendidas y asimiladas desde Termidor: liberación de los prisioneros «patriotas», una comuna libremente elegida y la Constitución de 1793. Duró cuatro días y comenzó el 1 de Pradial (20 de mayo) con una invasión masiva de la Asamblea por parte de las amas de casa y las mujeres de los mercados, seguidas por todos los batallones armados de los distritos centrales y de los *faubourgs.* Los insurgentes leyeron su programa ante la Asamblea, la cual, instigada a su vez por la Montaña, no tuvo otra salida que aceptarlo. Pero, una vez más, al igual que en Germinal, y por falta de dirección de objetivos definidos, los insurgentes, tras haber ganado su primera victoria, desperdiciaron horas enteras en discusiones ociosas antes de que los batallones leales de las secciones del oeste, llamadas durante la tarde, los expulsaran. Sin embargo, esta vez la insurrección prosiguió en el Faubourg St. Antoine: se tomó el Ayuntamiento; desertaron los artilleros de las secciones leales; se rodeó, sitió y amenazó a la Convención, al igual que en junio de 1793. Pero los rebeldes se dejaron convencer con promesas, y durante la noche se retiraron a sus casas, dejando el campo libre al enemigo. Veinte mil hombres, al mando del general Menou, invadieron el *faubourg,* que, abandonado por sus aliados, se

rindió sin disparar un tiro. Esta vez, la represión fue completa y despiadada. Fueron detenidos 14 diputados de la Montaña y seis de ellos ejecutados. Un comité militar procesó a 149 personas, de las que 36 fueron condenadas a muerte y 37 a deportación y prisión. En las secciones se produjo una avalancha de prescripciones en las que el saldo de viejas cuentas y la preocupación por la futura seguridad resultaban más importantes que el descubrimiento y castigo de los auténticos responsables de las jornadas de mayo de 1795. En una sola semana se arrestó a 1.200 personas y se desarmó a 1.700. Los arrestos habían de continuar en las semanas siguientes[1]. Este fue un momento crucial; con la detención y desaparición de sus dirigentes (tanto reales como potenciales), los *sans-culottes* parisienses dejaron de existir como fuerza militar y política. La fase «popular» de la Revolución había terminado. A partir de este momento, la burguesía, los «notables» y las *honnetes gens* podían continuar con su trabajo sin la intervención enojosa de sus aliados de antaño.

Entre tanto, los termidorianos, que habían rechazado y destruido el programa de los jacobinos en el interior, se dispusieron a seguir sus directrices sobre la conducción de la guerra y a recoger sus beneficios materiales. Los triunfadores de Fleurus se habían convertido en el ejército de Sambre-et-Meuse; en octubre de 1794, bajo el mando de Jourdan, este ejército cruzó el Ruhr y arrojó a los austriacos al otro lado del Rin. Al mismo tiempo, los ejércitos del Mosela y del Rin ocuparon el Palatinado, y el ejército del Norte, al mando de Pichegru (al que pronto habían de ganarse para su causa los agentes realistas), tomó Maastricht, cruzó el Mosa y las orillas bajas del Rin y ocupó Holanda. En enero de 1795 se proclamaba la República de Batavia. En el frente español, Moncey ocupó San Sebastián y continuó avanzando para ocupar Bilbao y Vitoria. Entre tanto, Prusia, derrotada en Francia y deseosa de intervenir en el reparto de Po-

lonia, comenzó a retirar sus tropas de los territorios occidentales; en abril de 1795 abandonó la coalición y firmó el Tratado de Basilea con Francia, cediendo a la República la orilla izquierda del Rin. También los holandeses se retiraron oficialmente de la guerra, y por el Tratado de La Haya (mayo de 1795) se convirtieron en aliados de Francia, cediéndole el Flandes holandés, Venloo y Maastricht y aceptando sostener una tropa de ocupación de 25.000 hombres y pagar una indemnización de 100 millones de florines. España siguió bien pronto el ejemplo, y en Basilea, en julio de 1795, cedió Santo Domingo y, un año más tarde, firmó un tratado de alianza con los triunfadores. Al mismo tiempo, tras un debate prolongado, la Convención decidió anexionarse Bélgica. Austria y Gran Bretaña prosiguieron la guerra, y pronto Rusia se unió a ellas, pero el carácter de la contienda ya había cambiado. La guerra defensiva revolucionaria de los jacobinos se había ido transformando paulatina y casi imperceptiblemente en una guerra de anexiones y conquistas[2].

Los termidorianos se enfrentaban ahora con la tarea de dar a Francia una constitución que respondiera a sus creencias y aspiraciones políticas. La Constitución democrática de 1793, con sus promesas decepcionantes y sus llamamientos a la «anarquía» y a la insurrección, debía ser enterrada de una vez y la de 1791, aunque cara para algunos, no podía ser restaurada: la República (así se esperaba) era irreversible; el sistema unicameral había revelado sus debilidades; era preciso encontrar nuevos mecanismos de defensa frente a las presiones populares y realistas. La nueva Constitución –conocida como la Constitución del año III– fue convenientemente propuesta y redactada en buena parte por Boissy d'Anglas, campeón de las nuevas clases poseedoras. La Declaración de Derechos y Deberes que la acompañaba estaba impregnada, en líneas generales, del espíritu de los «principios liberales de 1789», pero tenía importantes dife-

rencias con respecto a estos: la igualdad se convertía, ante todo, en igualdad ante la ley, y no en derechos civiles; desaparecía el derecho a la insurrección; se definían con mayor claridad los derechos de propiedad y se arbitraba mejor su defensa; los deberes de los ciudadanos, al igual que sus derechos, se perfilaron con sumo cuidado. Desaparecía el sufragio masculino adulto de 1793 y se volvía al voto restringido y al sistema de elección indirecta de 1791; pero los requisitos electorales eran más amplios: los ciudadanos «activos» incluían ahora a todos los franceses de más de veintiún años que pagaran impuestos, exceptuados los sacerdotes, los *émigrés* de retorno y los «patriotas» prisioneros. Con el fin de servir de freno a la actividad legislativa, la Asamblea se dividió en dos Cámaras: un Consejo de los Quinientos, compuesto por personas de más de treinta años, con poderes de iniciativa en legislación, y un Consejo de Ancianos, compuesto por 250 miembros de más de cuarenta años, con poderes para transformar en leyes las «resoluciones» de la otra Cámara. El poder ejecutivo residía en un directorio de cinco miembros, cada uno de los cuales ejercía el cargo durante cinco años. Se restauraba la separación de poderes de forma que los cinco directores, si bien eran nombrados por los consejos, no podían pertenecer a ellos, ni presentar las leyes. El gobierno local recuperó parte de su autonomía, pero, en todo caso, mucha menos de la que tenía en 1791. Por último, con el fin de evitar el peligro de un levantamiento realista, la Convención decretó que en las próximas elecciones dos tercios de los diputados en la nueva legislatura procedieran de sus propias filas.

Las asambleas primarias, convocadas con el doble propósito de aprobar los decretos de los «dos tercios» y ratificar la Constitución, se reunieron en septiembre de 1795. Los nuevos artículos constitucionales se aceptaron sin contratiempos, pero en París los decretos de los «dos tercios» encontraron una acogida muy diferente y, antes de que la

Convención se disolviera a fines de octubre, tuvo que enfrentarse con un aumento de la actividad realista que estuvo a punto de derribarla. Por uno u otro motivos, la actividad realista y contrarrevolucionaria fue motivo de preocupación desde 1789, aunque hasta que no estalló la guerra consiguió avanzar muy poco. Después de la ejecución del rey, la agitación realista tanto del interior como del exterior tuvo importancia en el fomento de la rebelión de la Vandea y en los departamentos «federalistas» del sur, del oeste y del norte. Mientras los jacobinos se mantuvieron en el poder, estos peligros fueron conjurados y apenas si afectaron a la capital. Sin embargo, los realistas cobraron nuevos ímpetus a partir de la política más liberal de los sucesores de aquellos. Ahora se encontraban divididos en dos grandes grupos: los «ultras», que reclamaban una vuelta a 1787 y la restauración total del Antiguo Régimen; y los monárquicos constitucionales, quienes, en líneas generales, patrocinaban la restauración de la Constitución de 1791. Por desgracia para los «constitucionalistas», el conde de Provenza, quien «sucedió» a Luis XVI, primero como regente en lugar del joven Luis XVII y, posteriormente, como Luis XVIII, era un «ultra» decidido. Esta confusión de pareceres encontrados se reflejó en el resultado desastroso de la expedición que, equipada y financiada por Inglaterra, desembarcó en la bahía de Quiberón, en julio de 1795; condenada al fracaso desde el principio, fue fácilmente derrotada por el general Hoche. La derrota significó un duro golpe para ambos partidos. Poco después, no obstante, los «constitucionalistas» de París explotaron con gran habilidad el descontento sembrado en la capital por los decretos de los «dos tercios» de la Convención. En realidad, únicamente una sección –la de Lepeletier, en el barrio financiero de la ciudad– se encontraba bajo dominio directo de los realistas, pero la burguesía acomodada y los funcionarios públicos que ahora dominaban la gran mayoría de las secciones resultaban fáci-

les de convencer de que los decretos de la Asamblea suponían una infracción peligrosa de los derechos de los electores; y cuando la Convención, previniendo los disturbios, concentró tropas en la capital y permitió que se armaran antiguos «terroristas» y que estos asistieran a las asambleas, también pareció que la «propiedad» se hallaba en peligro. Todas las secciones, exceptuada la de los Quinze Vingts, en el Faubourg St. Antoine, rechazaron los decretos y, además, una vez cumplida su función legal, se negaron a disolverse. La rebelión abierta estalló el 13 de Vendimiario (5 de octubre de 1795), cuando 25.000 parisienses recurrieron a las armas y una docena de secciones, dirigidas por Lepeletier, marcharon sobre la Convención. Pero Barras, a quien se había concedido el mando de las tropas en París, toda vez que el general Menou había proclamado abiertamente sus simpatías realistas, llamó en su auxilio al general Bonaparte y a otros jóvenes generales: las secciones tropezaron en su avance con un mortífero fuego de artillería (la famosa «bocanada de metralla» de Bonaparte), y la rebelión quedó aplastada. Las represalias fueron extraordinariamente suaves: únicamente se produjeron dos ejecuciones, y la mayoría de los dirigentes pudo escapar. Un rasgo característico de todos estos sucesos fue el comportamiento de los *sans-culottes,* quienes, aunque oprimidos y reducidos al hambre por la Convención termidoriana, se negaron a prestar apoyo ninguno a los rebeldes realistas.

Entró en vigor la nueva Constitución; los hombres de 1795, tras haber rechazado la rebelión de la derecha y de la izquierda, parecían estar firmemente asentados y, sin embargo, el Directorio resultó ser uno de los periodos de mayor confusión e inestabilidad política. En parte, ello se debió a la naturaleza de la propia Constitución: al prever elecciones anuales (de un tercio de los consejos y un quinto de los directores), suponía una invitación constante a la agitación y al desorden. Además, su incapacidad para arbitrar

métodos legales adecuados para dirimir los conflictos entre el ejecutivo y el legislativo produjo recursos continuos a la fuerza. Pero lo más grave de todo era, como pronto se vio, que los nuevos gobernantes carecían del apoyo necesario dentro del país para asegurarse una mayoría continua que posibilitara gobiernos estables. Con su política y su legislación electoral se enemistaron no solamente con los realistas y con los jacobinos, sino también con los burgueses moderados y con los ricos propietarios de la capital. Nunca se recuperarían de este error inicial y, obligados a maniobrar y a manipular con el fin de mantenerse en el poder, siguieron una política oscilante de enfrentamiento de unas facciones con otras, animando alternativamente a la derecha realista contra la izquierda jacobina o inclinándose hacia la izquierda, con el fin de conseguir lo máximo de la derecha. Cuando esta política fracasó, como tenía que suceder inevitablemente, la única solución fue llamar al ejército, que ya estaba instalado en París antes de las jornadas de Vendimiario, con el fin de restablecer el equilibrio. De este modo, tras la fachada de una Constitución liberal, los generales tendieron paulatinamente a convertirse en árbitros últimos de las discusiones políticas, con lo que, mucho antes del último *coup d'état* de Brumario, ya estaba preparado el terreno para la dictadura militar de Bonaparte.

Las jornadas de Vendimiario hicieron oscilar el péndulo de nuevo hacia la izquierda, y la Asamblea se reunía ahora con el acompañamiento de llamadas a la unidad republicana y a la concordia: renació la actividad jacobina; los clubes volvieron a abrir sus puertas; el periódico de Babeuf, *Le Tribun du Peuple,* salió de nuevo a la calle. Pero este espíritu de armonía iba a durar muy poco: el florecimiento de los críticos «patrióticos» alarmó a las autoridades, especialmente debido a que la situación económica iba de mal en peor. A finales de 1795 el *assignat* de 100 libras solo valía 15 *sous,* y en febrero de 1796 carecía de todo valor; al cabo de

seis meses, su sucesor, el *mandat territorial,* seguía el mismo camino. Los precios se dispararon como cohetes; en la primavera de 1796, el pan se vendía en el mercado libre a 80 libras la libra[3], y la carne a 100. Los nuevos ricos hacían gala de su riqueza con despreocupada arrogancia, en tanto que la pobreza se encontraba, según palabras de un agente de la policía, «en sus niveles más bajos», y en los hospitales y asilos se amontonaban los enfermos y los menesterosos. Y no solamente sufrían las consecuencias de la situación los *sans-culottes,* también los pequeños *rentiers* y los funcionarios públicos compartían sus desgracias, a medida que sus salarios y pensiones disminuían a causa de la inflación. Sobre este telón de fondo lanzó Babeuf su «Conjura de los Iguales», primer intento histórico de establecer una sociedad comunista por medios políticos, pero episodio secundario dentro de la Revolución, ya que obtuvo poco apoyo y fue rápidamente aplastado. Desde 1789, Babeuf se sintió atraído por la «ley agraria» y la idea de compartir los bienes como medio de conseguir la igualdad económica. En la época de la caída de Robespierre abandonó este plan, juzgándolo impracticable, y evolucionó hacia uno más complejo, fundamentado en la propiedad y la producción colectivas. Este era, en esencia, su último objetivo cuando, en el invierno de 1795 a 1796, conspiraba con un grupo de antiguos jacobinos, miembros de clubes y «terroristas», con el fin de derribar por la fuerza el Directorio. El movimiento estaba organizado en una serie de círculos concéntricos: había un comité insurreccional interno, compuesto por un pequeño grupo de íntimos, que eran los únicos que estaban informados de los fines de la «conjura»; más allá de este, un grupo de simpatizantes, jacobinos y otros, que incluían a los antiguos enemigos de Robespierre, Amar y Lindet; y por último, en la periferia, los militantes parisienses a los que había que ganarse, y cuyo número calculaba Babeuf en unos 17.000 hombres. El plan era original y los agravios cada día

mayores, pero los *sans-culottes,* acobardados y reducidos al silencio desde Pradial, no respondieron. Un espía de la policía traicionó a los conspiradores, informando a Carnot, que ahora era director y evolucionaba con rapidez hacia la derecha. Se detuvo a 131 conspiradores, fusilando a 30 de ellos de inmediato, en tanto que Babeuf y sus principales colaboradores eran procesados y guillotinados un año más tarde.

Una vez más oscilaba el péndulo hacia la derecha, apoyado esta vez por una afluencia masiva de realistas a la Asamblea. En las elecciones parciales de abril de 1797, únicamente once de los 216 anteriores diputados volvieron a ocupar sus puestos; los demás eran, sobre todo, monárquicos constitucionales que ahora constituían la primera mayoría realista de la Asamblea. Como presidente de los Quinientos fue elegido Pichegru, y, como presidente de los Ancianos, Barbe-Marbois, otro realista. Para acabar de complicar las cosas, al casi-realista Carnot se unió en el cargo Barthélémy, monárquico decidido. Parecía como si la monarquía fuera a regresar por medios constitucionales. Barras dudaba, mientras que los otros dos directores republicanos –Reubell y Larevellière-Lépaux– eran partidarios de una clara acción que preservara a la República. Pero ¿cómo? Un llamamiento al pueblo hacía revivir todos los horrores de 1793 y los jacobinos eran demasiado débiles para hacer que la balanza se inclinara. La única elección posible eran los generales, en su doble calidad de republicanos y de partido interesado en una guerra que los realistas estaban ansiosos por acabar. Bonaparte, que tenía recientes sus victorias en Italia, y Hoche, a quien se acababa de nombrar comandante del ejército de Sambre-et-Meuse, prometieron su apoyo; al poco tiempo, el lugarteniente de Bonaparte, Augereau, y parte de las fuerzas de Hoche marchaban sobre la capital. Barras decidió tomar el partido de sus dos colegas, más decididos, y el 18 de Fructidor (4 de septiembre de

1797) los tres se enfrentaron a la mayoría realista. Barthélémy y Pichegru fueron arrestados, mientras Carnot escapaba; se depuró a los Consejos de 214 diputados y se deportó a 65 personas a la «guillotina seca» de la Guayana. Una vez más, los *émigrés* que habían vuelto tuvieron que abandonar el país, mientras se deportaba a centenares de sacerdotes y otros se veían obligados a prestar un nuevo juramento de lealtad. Los directores triunfantes se atribuyeron nuevos poderes, pero la Constitución liberal había demostrado ya que era inservible.

En adelante, el destino de la República ya no dependía de los políticos, sino de los generales, en especial del joven y ambicioso general Bonaparte, cuya participación en el *coup d'état* de Fructidor le había hecho acreedor al reconocimiento general por su solución atrevida, aunque inautorizada, al problema de Italia[4]. En realidad, Bonaparte decidía ya de hecho la política exterior de la República. En Campoformio, tras sentar y firmar las condiciones de la paz con Austria (en octubre de 1797), exaltó la misión imperial de Francia en el Mediterráneo. En la primavera siguiente perdió la oportunidad de llegar a un acuerdo con Inglaterra, al persuadir al Directorio de que le enviara a Egipto, con el fin de inaugurar un Imperio en el Este. Dieciocho meses más tarde regresaría para convertirse en el dueño de Francia.

Una vez que Bonaparte llegó a Egipto, no parecía existir razón alguna para que el gobierno hubiera de preocuparse por aquel asunto. De la victoria de Fructidor surgió una amplia mayoría en las Cámaras; la actividad realista se hallaba, por el momento, en descenso y las severas medidas que se tomaron contra los *émigrés* y sacerdotes que habían regresado tropezaron con escasa resistencia abierta. De nuevo podía el gobierno dedicar su atención al peligro de la izquierda. Cuando la amenaza jacobina cobró nueva vida en

las elecciones de mayo de 1798, la Asamblea aprobó una ley (la ley del 22 de Floreal), por la que se excluía a 106 diputados de las Cámaras. Habiendo recuperado la seguridad, el Directorio pudo realizar algunas reformas útiles, aunque limitadas. Se dieron los pasos necesarios para estabilizar la moneda, retirando de la circulación todo el papel moneda devaluado y declarando una moratoria en todas las deudas pendientes; con ello se iniciaba el camino de las reformas financieras que se llevarían a cabo durante el Consulado. Se revisó y modernizó el sistema impositivo, dándole una forma similar a la actual. A consecuencia de las buenas cosechas de 1796 a 1798, descendió el precio del grano, lo que supuso una fuente de irritación para los productores, pero también un alivio ya muy necesario para unos consumidores que llevaban mucho tiempo sufriendo escasez. Con todo ello, el gobierno continuaba a merced de los contratantes, especuladores y financieros y, a despecho de las contribuciones de los territorios anexionados y ocupados, el presupuesto seguía estando desequilibrado, la industria se mantenía estancada y la guerra marítima contra Inglaterra –por no hablar de la aventura de Bonaparte en Egipto– hacía estragos en el comercio exterior.

Para encontrar una solución a estos problemas a largo plazo se precisaba un gobierno estable y que estuviera dispuesto a recurrir de nuevo a las medidas tajantes del año II, o que –a falta de ello– tuviera a su disposición gran cantidad de recursos de territorios satélite y ocupados. Por supuesto, el Directorio era partidario de la última solución, pero estas intenciones agresivas le enfrentaron a una segunda coalición que, esta vez, incluía a Gran Bretaña, Austria, Rusia, Turquía y Suecia. La guerra comenzó mal, porque Francia y sus ejércitos, alimentados por nuevas levas de conscriptos (gracias a la ley de Jourdan de 5 de septiembre de 1798), fueron derrotados en Alemania y Suiza por el archiduque austriaco Carlos, y expulsados de Italia por el ge-

neral ruso Suvorov. Además, las provincias belgas se sublevaron y los campesinos *chouans* se levantaron una vez más en armas en el Oeste. El Directorio repitió su antigua denuncia contra el monstruo de dos cabezas, el realismo y la «anarquía», pero en las elecciones de 1799 dos tercios de los candidatos del gobierno fueron derrotados, mientras que se fortalecía la minoría jacobina. Sieyes, conocido crítico de la Constitución, sustituyó a Reubell y, con apoyo de la Asamblea, llevó a cabo un *coup d'état* parlamentario contra sus colegas el 30 de Pradial. En el desconcierto ministerial que se produjo, un jacobino, Robert Lindet, antiguo compañero de Robespierre en el Comité de Salvación Pública, llegó a ocupar el Ministerio de Hacienda. Una vez más, las necesidades de la guerra defensiva obligaron a la República a recurrir a medidas de «salvación pública» y a sancionar el renacimiento jacobino. Reapareció la prensa jacobina y revivieron los clubes; entre ellos, el importante Club du Manège, dirigido por Drouet, antiguo oficial de correos, héroe de Varennes y colaborador de Babeuf. Se aplicó la conscripción con carácter general, se tomaron empréstitos a la fuerza y se detuvo como rehenes a los parientes de los *émigrés* y de los agitadores realistas. Cuando a los reveses de la primavera siguió el desembarco de una fuerza anglorusa en Holanda, Jourdan llegó a invitar a los Quinientos a repetir la antigua declaración de *la Patrie en danger.* Lucien Bonaparte, hermano menor de Napoleón, se opuso a ello decididamente, opinando que lo que había que hacer era ampliar los poderes ejecutivos, en lugar de permitir que los «barriese el oleaje revolucionario». La propuesta de Jourdan no prosperó. Se planteaba el viejo dilema: ¿había que apelar a las masas o fortalecer el poder de la minoría?

El problema quedó resuelto, al igual que tras la victoria de Fleurus, no por la derrota, sino por la victoria de las armas republicanas. En septiembre, Masséna derrotó a Suvorov en Italia y le expulsó de Suiza, en tanto que la fuerza

anglo-rusa, al mando del Duque de York, encontraba dificultades en Holanda. El peligro de la invasión había desaparecido y la «gran nación» continuaba existiendo. Por otro lado, las tropas del general Bonaparte, victoriosas contra las inglesas en Abukir, habían sido rechazadas en Siria, por lo que su jefe decidió regresar a Europa en busca de nuevos laureles. Tras dejar a su ejército en Egipto y evitar las patrullas de Nelson, desembarcó en secreto en Fréjus el 9 de octubre de 1799. Ignorados u olvidados sus fracasos recientes, el público y la prensa, extasiados, le saludaron como al gran vencedor de Italia, el pacificador de Campoformio, el único hombre capaz de imponer a Europa una paz honorable para las armas francesas. Mientras tanto continuaba latente el peligro realista: los propietarios, alarmados por las medidas de «salvación pública» y por el renacimiento jacobino, auguraban la «anarquía» y el regreso a 1793; se hablaba insistentemente de la necesidad de reformar la Constitución y de crear un gobierno estable, fortaleciendo el ejecutivo. En este ambiente planeó Sieyes (aquel «rompeolas de la Revolución», como le llamara Robespierre) otro *coup d'état* aún más decisivo. Una vez más, al igual que en Fructidor, se apeló al ejército para dominar a la Asamblea; pero esta vez se trataba de una Asamblea con mayoría republicana. Tras intentarlo con Joubert y Moreau sucesivamente (el primero murió al poco tiempo y el segundo rechazó el plan), Sieyes y sus compañeros de conspiración, Fouché y Talleyrand, volvieron la mirada a Napoleón, el hombre del momento que, además, era el más adecuado por su popularidad, sus hazañas militares, su ambición y su pasado jacobino, para desempeñar la tarea que le iban a encomendar. Agitando el fantasma de un complot «terrorista», los conspiradores convencieron a los Consejos de que se reunieran el 10 de noviembre (19 de Brumario) fuera de París, en Saint-Cloud, bajo la protección de los granaderos de Napoleón. Los Ancianos fueron convencidos con facili-

dad, pero los Quinientos se mostraron más obstinados y cuando, sin previa invitación, Napoleón entró en la sala para hablarles, hubo gritos de «¡Fuera! ¡Abajo el dictador!». El general perdió los nervios, pero su hermano Lucien, que (oportunamente) ocupaba un escaño, salvó la situación llamando a los guardias. Expulsados los Quinientos, disuelto el Directorio, toda la autoridad recaía sobre un Consulado provisional compuesto por tres personas: Sieyes, Roger-Ducos y Bonaparte. Esto significó el fin de la República burguesa y el traspaso del poder a manos de un dictador militar, aunque no fuera apreciado así en la época.

Tres semanas más tarde se redactó y presentó a las Asambleas una nueva Constitución cesarista, acompañada de una proclamación de los Cónsules, que corría el telón sobre diez años de historia: «La Revolución se ha establecido sobre los principios que la originaron: la Revolución ha terminado.»

[1] Para una relación detallada, véase K. D. Tönnesson, *La Défaite des sans-culottes* (Oslo-París, 1959).

[2] Véase cap. XI.

[3] Una libra de peso equivale a unos 450 gramos *[N. del ed.]*.

[4] Véase cap. XI.

TERCERA PARTE
LA EUROPA REVOLUCIONARIA

X. EUROPA Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA

En un capítulo anterior vimos que, ya antes de la revolución en Francia, en numerosos países europeos se estaban produciendo movimientos políticos cuyo objetivo era transformar, de uno u otro modo, las tradiciones, instituciones y lealtades de la antigua sociedad aristocrática. Observamos tales movimientos en los Países Bajos austriacos (Bélgica), en las Provincias Unidas (Holanda), en Inglaterra, Irlanda, Suiza e, incluso, en Austria y Polonia. En ninguno de estos países, empero –con la posible excepción de Inglaterra–, alcanzaron estos movimientos, ya fueran iniciados por monarcas «ilustrados», «patriotas» de la clase media o (con menor frecuencia) por el mismo pueblo, resultados apreciables. Pero únicamente en Francia tuvo lugar una revolución en 1789 que no solamente derribaría gobiernos e instituciones políticas, sino que transformaría radicalmente el mismo orden social.

Resulta comprensible que los acontecimientos que se produjeron en Francia durante diez años dieran nuevo impulso e, incluso, en algunos casos, contenido revolucionario a movimientos posteriores. Ello fue unas veces debido a la propagación de las ideas revolucionarias francesas; otras, a la influencia ejercida por los ejércitos revolucionarios franceses de ocupación; y, en mayor o menor medida, a la acción que los pueblos en cuestión emprendieron contra sus propios gobernantes. El resultado de todo ello fue una transformación tal de la Europa del Antiguo Régimen que raro fue el país al oeste de Rusia y Turquía y al norte de los Pirineos que al final de la era napoleónica y revolucionaria, en 1815, no hubiera sufrido profundas transformaciones en su sociedad y sus instituciones políticas. Algunos historiadores han llegado a la conclusión, a la vista de este resultado y de los acontecimientos que les precedieron, de que la Revolución francesa no fue un fenómeno único y particular,

sino una mera «fase» de una convulsión mucho más amplia que se ha denominado la revolución «occidental», «atlántica» o «mundial»[1]. Es esta una cuestión interesante, sobre la que volveremos en el próximo capítulo.

La primera consecuencia de la Revolución francesa consistió en dividir a la sociedad europea en dos grupos diferentes y mutuamente hostiles: sus partidarios o «patriotas», de un lado, y sus enemigos o «contrarrevolucionarios», del otro. Mas esta división no resultó visible desde un primer momento, ya que la caída de la Bastilla y otros acontecimientos tempranos tuvieron, en general, buena acogida. Por supuesto, también se produjeron excepciones: la emperatriz Catalina de Rusia, los reyes de España y Suecia y Edmund Burke en Inglaterra fueron resueltamente hostiles a la Revolución casi desde el comienzo. No obstante, la reacción inmediata más habitual fue de entusiasmo, alivio, neutralidad benevolente o, incluso, una especie de júbilo malicioso. Los emperadores «liberales», como José II y su sucesor, Leopoldo II de Austria, eran hermanos de la reina de Francia y, sin embargo, al principio no parecieron excesivamente inquietos por su futuro. Los disidentes ingleses, los nobles liberales polacos y los reformadores de todas partes, ya fueran aristócratas o plebeyos, recibieron esperanzas y aliento del triunfante desafío al «despotismo» en Francia. Aún más interesante resulta el coro de entusiasmo que se elevó desde Madrid a San Petersburgo: poetas y científicos ingleses (Blake, Burns, Coleridge, Southey, Wordsworth, Priestley y Telford), poetas y filósofos alemanes (Wieland, Klopstock, Fichte, Kant, Hegel y Herder), *illuminati,* racionalistas y francmasones italianos, Beethoven en Alemania y Pestalozzi en Suiza. Muchos de ellos cambiarían de parecer posteriormente, pero, en aquel momento, muy bien pudieron aplaudir los arrebatos poéticos de Wordsworth y suscribir el parecer de Samuel Romilly (compartido por Charles Fox), para quien la Revolución en Francia fue «el aconteci-

miento más glorioso y el más feliz para la humanidad que se ha producido desde que se guarda memoria de los asuntos humanos». En algunos países, como en Inglaterra, por ejemplo, había otras razones que justificaban la satisfacción general con que se veían los sucesos de Francia. Francia era el enemigo tradicional y se suponía que las convulsiones que la sacudían la debilitarían durante años en su calidad de rival comercial y beligerante activo. Muchos franceses previsores consideraron esta posibilidad y algunos le dijeron a Arthur Young, ya antes de la toma de la Bastilla que «los ingleses tienen que regocijarse de nuestra confusión actual». Este era el punto de vista del gobierno de Pitt. Lord Grenville, por entonces ministro del Interior, escribía en septiembre que los franceses «durante muchos años no estarán en condiciones de perturbar la valiosa paz de que hoy disfrutamos». El mismo Pitt opinó de modo similar hasta 1792.

De esta forma, por una u otra razón, la Revolución francesa tuvo un buen comienzo y, durante 1789 y la mayor parte de 1790, hubo una disposición general a dejarla seguir su curso y se discutió relativamente poco acerca de las consecuencias explosivas y peligrosas que podría tener para los vecinos de Francia. No obstante, los acontecimientos posteriores y la interpretación que se dio de ellos en el extranjero cambiarían rápidamente esta actitud, haciendo su aparición el temor y la preocupación, especialmente entre las clases privilegiadas y poseedoras. Se pudo ver que la Revolución francesa era muy distinta de la americana; las reformas agrarias radicales, la expropiación de las propiedades eclesiásticas, la emigración de nobles y moderados, así como las historias que estos contaban, todo ello contribuyó a alarmar a la opinión conservadora. Gran cantidad de belgas, holandeses y alemanes, algunos ingleses, escoceses e irlandeses y muy escasos italianos, españoles y rusos, todos ellos demócratas y reformadores que, procedentes de sus

países, llegaron a París y se empaparon de las nuevas ideas revolucionarias, al volver a sus países, o por medio de su correspondencia, fundaron clubes o periódicos, según el modelo de los franceses; en tanto que la propia prensa francesa tomó el periódico que dirigía Camille Desmoulins, y comenzó a interesarse cada vez más por los problemas de los «patriotas» simpatizantes de los franceses en el extranjero. Todo ello contribuyó a alarmar aún más a la sociedad respetable, de modo que cuando Edmund Burke publicó en noviembre de 1790 sus *Reflections on the Revolution in France,* halló un público bien dispuesto, que compró más de 30.000 ejemplares de la obra y agotó once ediciones en poco más de un año. A diferencia de la mayoría de los intelectuales contemporáneos, Burke condenó la Revolución desde el principio y en su totalidad. En lugar de saludarla como el medio necesario que habría de extirpar un mal antiguo de Francia, deploraba la destrucción del pasado, predicaba la santidad de la propiedad y la tradición y las virtudes del cambio gradual e, incluso, exaltaba los méritos del alto clero francés y de la reina María Antonieta. En su opinión, con los «Derechos del Hombre» los franceses se proponían demoler toda la estructura social, no solamente en Francia, sino también en todas partes, y lanzarse ciegamente por el sendero de la renovación total. Según él, «únicamente con precauciones infinitas podría aventurarse el hombre a desmontar un edificio que, durante tanto tiempo, ha respondido adecuadamente a las necesidades comunes de la sociedad, o a construirlo de nuevo sin tener ante sus ojos modelos o criterios que hubieran probado su utilidad». La emperatriz Catalina felicitó al autor por esta obra, que encontró gran cantidad de admiradores e imitadores en el extranjero, entre otros Friedrich von Gentz en Alemania y Mallet du Pan en Suiza. Las *Reflections* se convirtieron en la biblia indiscutible de la contrarrevolución en todos los países europeos.

Por supuesto, Burke tropezó con tanta enemistad como simpatía; en Inglaterra, ninguno de sus críticos se opuso a su defensa del Antiguo Régimen en Francia y del evolucionismo conservador con tanta energía y ventura como Thomas Paine, quien ya se había distinguido como libelista radical de la Revolución americana. En sus *Rights of Man* (1791), Paine contestaba a la apología que Burke hacía de la corte francesa con su famosa frase «Llora por el plumaje, pero se olvida del pájaro moribundo». Atacando el núcleo de la argumentación de su oponente, Paine sostenía que «la vanidad y la presunción de gobernar más allá de la tumba es la más ridícula e insolente de las tiranías». El libro tuvo mala acogida entre las clases poseedoras inglesas, y la situación se agravó cuando Paine continuó, en un segundo volumen, con un asalto frontal a la monarquía y a la Iglesia establecida británicas. Sin embargo, los reformadores, los disidentes protestantes, los demócratas, los artesanos londinenses y los trabajadores especializados del nuevo norte industrial leyeron sus obras con avidez: las ventas alcanzaron cifras prodigiosas, posiblemente por encima del millón de ejemplares. Con esto se inició la gran «polémica» sobre la Revolución francesa; en todas partes, la opinión política se dividió en dos grupos: partidarios y admiradores de los franceses –que, generalmente, aunque no siempre, pertenecían a las clases medias de profesionales, fabricantes y comerciantes y al artesanado de las ciudades– y sus más resueltos enemigos, aquellos que temían que la propiedad, la monarquía o la religión se hallaran en peligro por doquier. La contrarrevolución, así lanzada, adquirió una gran variedad de matices en los diferentes países; podía limitarse (como sucedió durante mucho tiempo en Inglaterra) a hostigar y perseguir a los «patriotas» y reformadores del propio país, a bloquear el camino de las reformas o bien a alentar sublevaciones entre los campesinos y los trabajadores urbanos bajo la consigna «rey e Iglesia» contra los partidarios de

la revolución, como sucedió en Birmingham, Mánchester, Bruselas, Nápoles y Madrid; o también lanzarse a una intervención abierta contra la Revolución en Francia, bien subvencionando las actividades de los *émigrés* franceses y sus agentes, bien formando coaliciones militares con el fin de restaurar el antiguo orden en Francia. En todos los países, con excepción de Francia y sus vecinos, la contrarrevolución intentó un resurgimiento religioso para desacreditar la Ilustración y desanimar a los reformadores. Volveremos a considerar más adelante algunos de estos aspectos; aquí nos interesa especialmente la influencia de la Revolución francesa sobre los movimientos democráticos y revolucionarios en Europa.

No es de extrañar que esta influencia variara mucho de un país a otro. Algunos países, como Rusia y Turquía, estaban muy lejos de las fronteras francesas y sus tradiciones y evolución sociales los inmunizaban casi por completo contra la penetración de las ideas revolucionarias. Otros, como era el caso de Baviera y algunas partes de Bélgica, estaban protegidos contra la infección por un campesinado devoto y la situación predominante del clero. España tenía frontera con Francia, pero sus condiciones eran similares a las de Baviera y, además, solo contaba con una pequeña clase media culta que pudiera servir de vehículo a las nuevas ideas. La evolución de Inglaterra fue muy distinta, pero su posibilidad de resistencia, mayor que ninguna otra, procedía de su nivel de vida, relativamente alto, de su posición isleña y de su tradicional enemistad con Francia. Por otro lado, había países cuya posición geográfica, tradiciones culturales y evolución social les hacían accesibles a las ideas revolucionarias francesas y a la penetración de sus ejércitos. Tales países eran Holanda, Bélgica, los estados del Rin, Suiza e Italia. Todos los países sufrieron la influencia de los acontecimientos en Francia, pero únicamente en estos últimos se produjeron revoluciones según el modelo francés y,

aun así, como ya veremos, ningún gobierno revolucionario consiguió sobrevivir a la retirada de la protección militar francesa.

Ya hemos visto que Inglaterra fue uno de los países en los que la Revolución francesa provocó una respuesta entusiasta desde el comienzo. Había varias razones que explicaban esta respuesta: Inglaterra tenía una prensa libre; sus gobernantes se sintieron más complacidos que ofendidos por el ataque francés al «despotismo»; además, tanto los disidentes religiosos como los reformadores parlamentarios o los lores de la oposición *whig* creían que se podían obtener ventajas políticas de los acontecimientos que tenían lugar al otro lado del Canal. Por último, y no menos importante, el país estaba pasando por los dolores y trastornos del nacimiento de la Revolución industrial. El ataque de Burke arrastró, naturalmente, a una serie de admiradores tempranos, pero, incluso después de que la opinión hubiera comenzado a volverse contra los franceses, estos encontraron partidarios entre una serie de elementos sociales que comprendían a radicales de la clase media, reformadores, aristócratas *whig* y portavoces de los artesanos londinenses y los trabajadores industriales del norte. Este apoyo se manifestó a través de diversas actividades. En Londres, el doctor Richard Price utilizó, como plataforma, la Sociedad Revolucionaria (fundada para conmemorar la «Gloriosa Revolución» de 1688) con el fin de exaltar las virtudes de los franceses, y la Sociedad envió mensajes de felicitación a la Asamblea Constituyente de París. Antiguas sociedades reformadoras renacieron a impulsos de los acontecimientos en Francia, en tanto que aparecían otras nuevas. La Sociedad para el Fomento de la Información Constitucional, del mayor Cartwright, fundada en 1780, que había languidecido durante largo tiempo, adquirió nuevas energías en 1791 y cayó bajo la influencia más radical de John Horne Tooke y Thomas Paine. En Mánchester, Sheffield, Norwich, Lee-

ds, Nottingham y otras ciudades surgieron sociedades reformadoras y constitucionales que mantenían correspondencia con Francia y hacían colectas de dinero y bienes para los ejércitos franceses. Los *whigs* de Fox fundaron una sociedad más moderada de Amigos del Pueblo y se embarcaron en prolijas discusiones con Pitt y Grenville en las Cámaras del Parlamento. Pero la más importante de todas fue la Sociedad Londinense de Correspondencia, fundada por Thomas Hardy en enero de 1792, que no solo mantenía correspondencia con franceses y con sus numerosos afiliados en el interior del país, sino que actuaba como centro de agitación radical en Inglaterra; estaba compuesta por artesanos y pequeños comerciantes y constituyó la primera asociación política de trabajadores del mundo. Más que en ningún otro país fuera de Francia, la Revolución influyó considerablemente en los trabajadores industriales; pero esta influencia no era lo bastante profunda para resistir los embates de la persecución y la guerra. A partir de 1792, el gobierno de Pitt tomó activas medidas para suprimir el «jacobinismo» y las sociedades reformadoras, tanto en Inglaterra como en Escocia: el más severo de los castigos recayó sobre los «mártires» escoceses, Muir, Palmer, Margarot y otros, deportados a la bahía de Botany bajo la acusación de haber convocado una Convención británica en 1793. Los jurados de Londres fueron menos rigurosos que los tribunales judiciales escoceses, pero, con todo, el movimiento radical fue apagándose lentamente y quedó en estado de letargo durante unos quince años. El último brote se produjo, sin embargo, con los motines de Spithead y Nore, en 1797. En un primer momento, fueron rebeliones de los marineros contra los bajos salarios, la disciplina brutal y la comida inmunda, pero Parker, dirigente de la sublevación de Nore, era miembro de la Unión Irlandesa y el comité central, reunido en su barco, propuso zarpar en dirección a Texel y pedir protección a la Convención Nacional francesa. Resulta significati-

vo, empero, que ni un solo barco obedeció la orden de zarpar y que los amotinados de Spithead realmente reclamaron que se les enviase contra los franceses, una vez satisfechos sus agravios. En esta época ya había acabado la primera etapa del «jacobinismo» popular en Inglaterra.

Resulta extraño que el «jacobinismo» encontrara un terreno más favorable en Irlanda que en Inglaterra o Escocia. Era de suponer que los irlandeses, predominantemente campesinos y católicos, como los españoles y los bávaros, estarían menos dispuestos a dejarse influir por las ideas de la Ilustración y de la Revolución francesa que los ingleses o los escoceses, y así hubiera sucedido de no ser porque la rebelión irlandesa, a la que las concesiones de 1782 a 1784 habían logrado calmar momentáneamente, volvió a estallar al amparo de la guerra europea, en 1794. Esta vez, la rebelión tuvo dos vertientes: el movimiento de independencia nacional de la Unión Irlandesa, dirigido por el católico lord Edward Fitzgerald y el protestante Wolfe Tone, y la rebelión agraria de masas, protagonizada por el campesinado irlandés, hambriento de tierra. Los dirigentes aristocráticos y de la clase media eran indudablemente hombres de la Ilustración, habían leído a Rousseau, predicaban los «Derechos del Hombre» y la tolerancia religiosa, y Tone y Fitzgerald habían ido a Francia a discutir sus planes con miembros de la Convención Nacional. Los campesinos católicos profesaban un odio tan profundo a su enemigo tradicional del otro lado del estrecho de San Jorge que encendían velas por la victoria de las armas francesas y se disponían a dar la bienvenida a una invasión procedente de Francia. El primer intento que realizó Hoche de desembarcar en el invierno de 1796 a 1797 resultó prematuro y fallido. Se planteó un segundo desembarco para la primavera de 1798, pero el gobierno británico se enteró de los planes y detuvo a los dirigentes rebeldes cuando estos se preparaban para embarcarse con rumbo a Francia. La rebelión campesina, que había

de coincidir con un desembarco que no se llegó a producir, estalló en junio, acabando en una despiadada represión. Cuando, por fin, llegó la flota del general Humbert en septiembre de 1798, ya era demasiado tarde. Este había de ser el último intento de desembarco, con lo que Inglaterra escapó (quizá menos milagrosamente de lo que entonces se creyó) del mayor peligro que se cernió sobre ella antes de la amenaza de invasión de Napoleón en el año 1805.

Aunque su estructura social impedía a Polonia seguir los pasos de la Revolución francesa, también este país resultó muy afectado por los sucesos que tuvieron lugar en Francia. Francia fue durante mucho tiempo aliada de Polonia y, entre todos los países, era aquel al que los polacos preocupados por la existencia de su país miraban con mayores esperanzas para oponerse a las ambiciones de sus vecinos rusos, prusianos y austriacos. El estallido de la Revolución en Francia provocó una respuesta más o menos entusiasta entre los intelectuales polacos, los miembros liberales de la *szlachta* (nobleza) e incluso su rey, el antiguo amante y *protégé* de Catalina, Estanislao Poniatowski. Al igual que en el caso de los irlandeses, lo que empujaba a los polacos hacia el campo de los revolucionarios franceses era el miedo a una invasión extranjera. Pero los polacos fueron más lejos que los irlandeses: fundaron un club «filosófico» en casa del príncipe Radziwill, que se ganó el airado calificativo de «jacobino» por parte de Catalina, y, mediante un *coup d'état* político, obligaron a la Dieta a adoptar una constitución en mayo de 1791 que, en muchos aspectos, era similar a la que los franceses habían adoptado aquel mismo año. La Constitución introducía muchas innovaciones: la Dieta se declaraba representante de «la nación en su totalidad», se abolía el *liberum veto* que, durante mucho tiempo, había venido obstaculizando todas las iniciativas legislativas y ejecutivas, el trono se tornaba hereditario y los jueces electivos. No obstante, como creación de los nobles liberales, la Constitución

conservaba un carácter aristocrático. Únicamente un puñado de burgueses tenía acceso a la Dieta y, lo que era más importante, el orden social quedaba tan inalterado por aquellas reformas como había quedado el de Rusia y Prusia tras las de sus respectivos «déspotas ilustrados»; es cierto que los campesinos gozaban ahora de la protección de la ley, pero la servidumbre seguía en pie. Aun así, estas reformas menores resultaron excesivas para los magnates más conservadores, quienes invitaron a Catalina a enviar un ejército ruso que obligase a Estanislao a derogar la Constitución. Poco después se producía el segundo reparto de Polonia entre sus tres poderosos vecinos. Esta nueva humillación nacional impulsó al patriota Kosciusko a dirigir una insurrección en la primavera de 1794. Esta vez se produjo una especie de movimiento popular nacional; Kosciusko encontró partidarios entre los artesanos y el pueblo trabajador de Varsovia. Los franceses, sin embargo, no podían ni querían (ya habían perdido todas sus simpatías por la causa de la aristocracia liberal polaca) prestar ayuda; a la rebelión siguió un tercer reparto y Polonia desapareció durante algunos años del mapa.

Hungría era un país con una sociedad y unas instituciones similares a las de Polonia; también tenía problemas «nacionales»: ya hemos visto su lucha contra María Teresa y contra el emperador José II, sobre todo. Pero el nacionalismo húngaro, si es que lo había, no pasaba de ser superficial: las grandes familias nobles hablaban alemán y únicamente hacían alarde de su adhesión a la lengua y tradiciones magiares a fin de conseguir el apoyo popular para sus rencillas privadas con la monarquía de los Habsburgo, que había usurpado sus «libertades». Los dirigentes de la revolución aristocrática contra José II citaban a Rousseau y a Voltaire, pero cuando Leopoldo II sucedió a aquel, insistieron en que se restaurase la servidumbre en sus posesiones, como precio a su adhesión. Sin embargo, la nobleza húngara con-

tinuó haciendo gala de sentimientos revolucionarios y, en 1793, la Dieta redactó un acta constitucional y una Declaración de los Derechos del Hombre, a imitación de la francesa, ambas retiradas dócilmente cuando el nuevo emperador, Francisco II, que había renunciado a los experimentos liberales de sus antecesores, se opuso a ellos. En realidad, tanto en Hungría como en Austria, los únicos «jacobinos» auténticos, que no solamente creían en la democracia, sino que tenían un programa político, eran pequeños grupos de oficiales, escritores, abogados, profesores y funcionarios públicos de la clase media, hombres como Lacskovicz, antiguo oficial, o Martinovicz, amigo de Condorcet, que se habían formado tanto en la escuela del «josefismo» como en la de la Ilustración y la Revolución francesa. Martinovicz y sus seis compañeros de «conspiración» fueron ejecutados en mayo de 1795, pocos meses después de que fueran ahorcados dos de sus compañeros austriacos en Viena. Su fracaso se debió a su divorcio del pueblo y a su imposibilidad de movilizar políticamente a los campesinos, hambrientos de tierra y cansados de la guerra. Pero sus ideas pervivieron y fueron ellos, y no los nobles rebeldes de 1788 a 1790, los auténticos precursores de la primera revolución nacional húngara de 1848.

De todos los países limítrofes con Francia, el menos afectado por su ejemplo fue España. En un capítulo anterior hemos visto que la sociedad y las instituciones españolas del siglo XVIII tenían mucho en común con las francesas en algunos aspectos; pero su clase media era más débil y menos madura; su campesinado, más pobre, analfabeto y sujeto a la dominación de los sacerdotes y los señores; su nobleza tenía menos razones que la francesa para competir por el dominio del gobierno central; y, por último, el país estaba dividido entre un norte y un este relativamente prósperos y un centro y un sur agobiados por la pobreza. Por estas y otras razones, la Ilustración hizo pocos progresos fuera de

los principales centros urbanos, no se produjo «revolución aristocrática» alguna y la Revolución francesa, incluso en sus comienzos, despertó pocas simpatías y escaso apoyo. Por si fuera poco, la Iglesia y el gobierno españoles recurrieron desde el principio a una represión sistemática de los «patriotas» e impusieron una cortina de silencio sobre todas las noticias procedentes de Francia: incluso las *Reflections* de Burke eran sospechosas, debido a los problemas que abordaban, y estuvieron largo tiempo condenadas por la Inquisición. Por todo ello, los demócratas españoles podían hacer muy poco, como no fuera emigrar al otro lado de la frontera, donde, en suelo francés, se reunieron pequeños grupos de «jacobinos», en Bayona y en otros lugares. Cuando los ejércitos franceses comenzaron a ocupar las ciudades y provincias españolas, en 1793, tropezaron con una singular resistencia ideológica. Se predicó una verdadera cruzada por la «religión, el rey y el reino», contra el francés impío, cruzada que ganó amplio apoyo popular hasta en las grandes ciudades, como Barcelona y Madrid. En 1797 y 1798 hubo revueltas populares en contra del aumento de los precios de los alimentos en Guadalajara, Sevilla y Asturias; pero, por entonces, España era ya la aliada de Francia contra Inglaterra. Es significativo, sin embargo, que la guerra contra Gran Bretaña fuera menos popular que la guerra contra Francia. España ofreció un ejemplo temprano de aquel conservadurismo militante de «Iglesia y rey» que, especialmente en las comunidades campesinas católicas, demostró ser un valioso auxiliar para los ejércitos de los enemigos de Francia.

El «jacobinismo» hizo escasos progresos (aunque, sin duda, existía) en Rusia, los Balcanes y los países escandinavos y aún menos en lugares tan alejados como Constantinopla, Aleppo y Esmirna; por tanto, nos limitaremos a considerar la temprana influencia de la Revolución en los pueblos cercanos a las fronteras orientales y sudorientales de Francia.

Ya vimos que algunos de estos, como los holandeses, los belgas y los ginebrinos, se vieron envueltos en conflictos políticos con sus gobernantes antes de julio de 1789. Cuando los patriotas holandeses fueron abandonados por sus aliados franceses, antes de la victoria orangista de 1787, cerraron sus clubes y sociedades, pero, con las noticias del estallido de la Revolución francesa, dos años después, volvieron a abrirlos. Sin embargo, los patriotas holandeses eran precavidos y relativamente inactivos; en enero de 1793, una vez que los ejércitos franceses invadieran Bélgica, el representante de Francia en Ámsterdam informaba al Ministerio de Asuntos Exteriores en París de que el partido patriota no existía en La Haya y de que en Ámsterdam y Rotterdam era débil. Además, a diferencia de los jacobinos en Francia, este partido, compuesto fundamentalmente por ricos comerciantes y fabricantes, estaba descontento con el estatúder y los regentes de la ciudad, pero conservaba un saludable respeto hacia la propiedad privada y le preocupaba la suerte que podrían correr sus negocios y fortunas. Por este motivo, los patriotas se mostraron poco decididos a sostener a los ejércitos franceses cuando estos ocuparon por algún tiempo el Brabante holandés en febrero de 1795. Durante las semanas siguientes, a medida que Dumouriez se retiraba a través de Bélgica antes de pasarse a los austriacos, revivió la actividad de los patriotas. No obstante, dos de las siete provincias –Zelanda y Gelderland– continuaron prestando inquebrantable adhesión a la causa del estatúder. En general, la mayoría de los habitantes del campo y de las ciudades parecía ver en los franceses meros aliados de la burguesía. Por todo ello, en contra de lo que los franceses esperaban, la tanto tiempo deseada revolución de los patriotas holandeses se fue demorando y únicamente estalló cuando los franceses ocuparon el país en enero de 1795.

Como ya vimos en el capítulo II, en Bélgica comenzó en 1787 una especie de revolución nacional contra las innova-

ciones de José II. En sus inicios, esta revolución tomó la forma de una «revolución aristocrática», dirigida por el Partido de los Estados de Van der Noot, aunque pronto apareció una dirección rival con el partido democrático moderado de J.-F. Vonck. Al igual que en Inglaterra y en las Provincias Unidas, el estallido de la Revolución francesa se recibió con gran entusiasmo en todo el país, aunque aquí esta influencia actuó también como estímulo para la rebelión abierta. Vonck se puso inmediatamente en contacto con las nuevas autoridades de París; los voluntarios «patriotas» se enrolaron en Brabante y en el vecino obispado independiente de Lieja, cuya población se alzó y expulsó al obispo; un ejército «patriota», al mando del general Vandermersch, expulsó a los austriacos de Gante y Bruselas. En diciembre, tras ofrecer escasa resistencia, los austriacos se retiraron de las provincias belgas. Una vez conseguida su independencia nacional, los belgas parecían dispuestos a seguir los pasos de la Revolución francesa; los vonckistas pretendían reorganizar las instituciones, siguiendo un modelo más democrático. Pero los acontecimientos en Francia, además de fortalecer momentáneamente a los demócratas frente a sus rivales, también consiguieron abrir un abismo más profundo entre los partidos belgas y dividir en dos el país. El Partido de los Estados tenía el sólido respaldo de la Iglesia católica y los gremios de comerciantes, con cuyo apoyo consiguió proclamar en enero unos Estados Unidos de Bélgica, basados en el modelo más conservador de los Estados Unidos de América y no en el de Francia, como querían sus rivales. Se inició una «caza de brujas» contra los vonckistas, cuyos moderados objetivos reformistas se presentaban como parte de un complot siniestro para destruir las tradiciones y «libertades» fundamentales de Bélgica. En Bruselas, que en diciembre aclamó a los «patriotas» y voluntarios, estalló una insurrección popular contra ellos en marzo. Durante la insurrección fueron asaltadas y destruidas las casas

de ricos vonckistas, lapidados y desarmados los voluntarios y un dirigente «patriota» obligado a arrodillarse y a declarar: «Por orden del pueblo de Bruselas reconozco que la Sociedad Patriótica, de la que soy miembro, no es más que una banda de bribones». Muchos demócratas fueron arrestados, mientras los demás buscaban refugio en Francia. De este modo, una «revolución aristocrática», enfrentada con las consecuencias de un alzamiento nacional revolucionario, se convirtió en una contrarrevolución. Aprovechándose de estas divisiones, los ejércitos austriacos regresaron en diciembre de 1790, reinstalaron al obispo-príncipe de Lieja y restablecieron el *statu quo* en las provincias belgas. Cuando vieron que sus enemigos patricios habían sido depuestos de los cargos públicos, muchos demócratas regresaron del exilio a esperar la «liberación» de su país y la suya propia de mano de los franceses.

Los cantones suizos y sus territorios asociados estaban formados por zonas rurales, algunas de las cuales disfrutaban de una especie de democracia primitiva, así como por ciudades-estado gobernadas por obispos y aristocracias mercantiles. En el decenio de 1760 se luchó, con éxito temporal, como ya vimos, contra esta forma oligárquica de gobierno en la ciudad de Ginebra. La Revolución francesa contribuyó a desarrollar el movimiento democrático y a extenderlo a otros cantones. En el año 1790 se fundó un Club Helvético entre los suizos refugiados y los demócratas residentes en París; editaban su propio periódico, distribuían propaganda revolucionaria en los cantones e invitaban a sus compatriotas del interior a seguir su ejemplo. Los suizos alemanes también se contagiaron con el ejemplo de la vecina provincia de Alsacia, francesa aunque de habla alemana. En Basilea, los «patriotas», dirigidos por Peter Ochs y Gobel (que más tarde sería obispo constitucional de París), iniciaron tal agitación entre los campesinos que el obispo se atemorizó y llamó a las tropas austriacas para que restaura-

ran el orden. Después de la primera victoria francesa en esta región, los demócratas votaron por la unión con Francia y parte de los territorios del obispo pasaron a formar el nuevo departamento francés de Mont-Terrible (marzo de 1793). También se produjeron insurrecciones campesinas en los distritos rurales de Vaud y Valais, que fueron reprimidas con todo rigor, y sus dirigentes ahorcados. En Ginebra, los demócratas, a quienes la intervención francesa de 1782 había arrebatado su primera victoria parcial, volvieron al poder de nuevo en diciembre de 1792 e hicieron extensivos los derechos de ciudadanía a todos, incluidos burgueses y nativos. Se instituyó un comité revolucionario para gobernar la ciudad, se fundaron clubes jacobinos (eran 50 en 1793), se instaló un Tribunal Revolucionario al que siguió un «reino del terror», durante el cual se apresó y ejecutó a muchos patricios o bien se les hizo pagar grandes impuestos. Sin duda este fue el estadio más avanzado que alcanzó la revolución en Suiza, pero fue probablemente en Zúrich, en la Suiza germanófona, donde la Revolución francesa consiguió más adeptos: entre estos se contaban personajes tan distinguidos como el pintor Fuseli, el reformador de la educación Pestalozzi y el pastor protestante Lavater, amigo de Roland. Todos ellos formaron un club revolucionario que, en 1794, lanzó un programa general de reformas políticas y sociales. Los «conspiradores» fueron cercados y 260 personas encarceladas o exiliadas. Pero la agitación prosiguió, extendiéndose a los distritos rurales vecinos de Glarus y St. Gall. En septiembre de 1798, los campesinos de St. Gall obligaron a su abad a cambiar parte de sus obligaciones feudales por una pequeña cantidad de dinero. En realidad, la fortaleza del movimiento revolucionario suizo en varios cantones, a diferencia de las provincias holandesas y belgas, residía en su composición tanto de miembros de las clases medias de las ciudades como de elementos campesinos.

Las reacciones alemanas ante la Revolución francesa fueron similares a las inglesas en un principio, pero también acusaron mayor variedad y sus consecuencias tuvieron mayor duración. Al margen de un pequeño número de grandes estados soberanos, como Prusia, Baviera y Sajonia, Alemania se componía de un conglomerado de ciudades libres y pequeños principados, tanto eclesiásticos como laicos, los cuales, si bien eran virtualmente soberanos, aún debían cierta obediencia al ya moribundo Sacro Imperio Romano: solo los estados del Rin, con una población de 1.300.000 habitantes, tenían más de 97 gobernantes distintos: duques, margraves, langraves, caballeros imperiales y electores y príncipes eclesiásticos. La confusión y multiplicidad de las instituciones políticas únicamente era superada por las de la situación social. Por regla general, se excluía a las clases medias de los asuntos públicos y, con excepción de las regiones occidentales y del estado de Baden, en el Sur, la servidumbre prevalecía en todos los demás. Sin embargo, el vigor de la vida intelectual y las instituciones alemanas contrastaba fuertemente con estas obstinadas supervivencias del pasado medieval. Ningún otro país tenía más y mejores universidades, ningún otro tenía una prensa tan floreciente (únicamente en el decenio de 1780 aparecieron 1.225 periódicos) y muy pocos países, si es que había habido alguno, produjeron una cosecha tan rica de talentos literarios y académicos durante los últimos treinta años. Fue la época de la *Aufklärung* (Ilustración), el periodo romántico del *Sturm und Drang* («Tormenta e ímpetu») de Goethe y Schiller y de un profundo renacimiento literario y cultural. Entre las ideas «ilustradas», habían arraigado las de Montesquieu y Rousseau, que, especialmente desde la Revolución americana, se venían discutiendo intensamente en la prensa, en las universidades, en las logias masónicas, en los clubes literarios y en los grupos de *illuminati.* En estos círculos, la Revolución encontró una respuesta casi unánime.

Johannes von Müller, historiador suizo y secretario del arzobispado de Maguncia, saludó la caída de la Bastilla como el acontecimiento más feliz desde la caída del Imperio romano y el historiador Herder la consideró como el momento más importante desde la Reforma. Entre los poetas que aclamaron el acontecimiento se contaban los venerables Klopstock, Wieland, Bürger, Hölderlin, Tieck y Wackenroder. Goethe y Schiller, sin embargo, aunque no eran hostiles, se mostraron relativamente indiferentes. Otros partidarios incluían, entre los filósofos, a Kant, Hegel, Fichte y Schlegel y, entre los periodistas políticos, a Schlözer en Gotinga y a Archenholz y Nicolai en Berlín. Hamburgo, la ciudad de Klopstock, celebró la Revolución con odas y banquetes, y gobernantes como el duque de Brunswick, el duque y la duquesa de Gotha y el príncipe Enrique de Prusia se sumaron al coro de alabanzas.

No obstante, también se escucharon voces disidentes, como las de los *whigs* a la vieja usanza, como Rehberg y Brandes en Gotinga. A estos se unieron inevitablemente otros, a medida que la Revolución avanzaba, esto es, cuando el fin del «despotismo» y del «privilegio» fue seguido de la venta de tierras de la Iglesia, la emigración, la caída y ejecución del rey, el Terror, la dictadura jacobina y el experimento democrático, y cuando las *Reflections* de Burke comenzaron a ejercer su hechizo sobre las mentes conservadoras. Uno de los primeros conversos fue Schlözer, quien, después de las «jornadas» de octubre en Versalles, comenzó a deplorar la «irreflexiva tiranía del populacho». Johannes von Müller, tan entusiasta al principio, comenzó a vacilar hacia 1790 y, en 1793, clamaba contra «esos locos y monstruos de Francia». Más radical fue la conversión de Friedrich von Gentz, quien, tras haber sido admirador de Rousseau y Mirabeau, se dejó convencer por la argumentación de Burke y, como el mismo Burke, pasó a ser el oráculo dirigente de la cruzada contrarrevolucionaria contra Francia. Para otros, más ra-

dicales, entre los que se contaban Wieland, Jean-Paul Richter, Schleiermacher, Klopstock y Hegel, la desilusión acaeció con el Terror o con la ejecución de Luis XVI, en tanto que Goethe y Schiller, aunque no eran indiferentes, mantenían su distanciamiento olímpico. Algunos, empero, jamás perdieron su entusiasmo, como los poetas Bürger, Tieck y Wackenroder, los filósofos Herder, Fichte y (de modo más inseguro) Kant, y George Forster, bibliotecario de la Universidad de Maguncia, quien no solamente sancionó la ejecución del rey y saludó el establecimiento de la República, sino que se convirtió en una figura dirigente durante la revolución de Maguncia, que siguió a la ocupación de la ciudad por las tropas del general Custine en el otoño de 1972.

A largo plazo, no cabe duda de que la actitud de los intelectuales tuvo gran importancia para determinar el futuro de Alemania, pero la influencia de la Revolución en otros sectores de la sociedad, esto es, sobre la burguesía, los políticos y los campesinos de una serie de ciudades y estados, tuvo un significado más inmediato. De todos estos, los más expuestos al «contagio» francés eran los de las provincias del Rin, colindantes con la frontera oriental de Francia. Las posesiones de los electores de Colonia, Tréveris y Maguncia y las de los gobernantes de Baden y del Palatinado bávaro estaban atrapadas, por decirlo así, entre las tenazas de las revoluciones de Alsacia y Lieja. En Baden, los disturbios campesinos carecieron de importancia y fueron rápidamente aplastados; en el Palatinado se produjeron motines en Lardau y Zweibrücken, donde los campesinos se sublevaron contra los derechos de caza de la nobleza y se negaron a pagar sus deudas. Los principados eclesiásticos de Colonia, Tréveris y Maguncia resultaron más profundamente afectados, en parte debido a la influencia de Elogius Schneider, exfranciscano y antiguo profesor en Bonn, quien, expulsado por el elector de Tréveris, ocupó un puesto en la Universidad de Estrasburgo, al otro lado de la frontera, donde se

convirtió en una figura política destacada. En Colonia, el Tercer Estado, tomando ejemplo de los franceses, exigió el fin de la desigualdad fiscal; en Bonn, los «patriotas» fundaron un club revolucionario; en Maguncia, cuyo elector se hizo doblemente impopular al sumarse a la guerra de Austria y Prusia contra Francia (abril de 1792), los habitantes de las ciudades se amotinaron contra la elevación de los precios y los campesinos contra las exacciones de los señores. De este modo, aquí, como en los cantones suizos, los ejércitos franceses victoriosos de 1792 y 1794 iban a encontrar una situación que favorecía sus fines políticos y militares.

Más allá del Rin, la influencia de Francia fue menos clara y únicamente se hizo perceptible en tiempos de Napoleón. En Sajonia, los campesinos protestaron contra la *corva* y las obligaciones feudales; pero Sajonia, como Mecklenburgo en el norte, se contaba entre aquellas zonas que resultaron relativamente ilesas frente a toda la experiencia revolucionaria y napoleónica. Baviera apenas si resultó afectada hasta la llegada del Directorio, cuando los franceses ocuparon por un momento Múnich y los *illuminati* y su dirigente, Montgelas, comenzaron a ejercer mayor predominio en la Corte. Como ya hemos visto, Hamburgo saludó a la Revolución con banquetes y, un año más tarde, los comerciantes liberales de la ciudad, inspirados por George Sieveking, acomodado príncipe-comerciante y mecenas de las letras, celebraron la fiesta de la Federación y continuaron haciéndolo durante varios años más. Pero, en realidad, las relaciones con Francia tenían tanto valor político como comercial y una vez que Hamburgo (por exigencias del Imperio) entró en guerra contra los franceses como aliada de los ingleses, el entusiasmo por Inglaterra comenzó a eclipsar al entusiasmo por Francia. Más tarde, después de que Napoleón anexionara Hamburgo, este fue uno de los pocos estados alemanes que se sublevaron contra su gobierno. En Prusia,

la influencia de la Revolución fue más profunda y duradera. El sucesor de Federico el Grande, Federico Guillermo II, fue un gobernante débil e indolente y su reinado vio un renacer aristocrático y clerical. Sin embargo, los franceses contaban con aliados en la Corte: el príncipe Enrique y Hertzberg, antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Federico, quien dirigía un partido de la paz que ayudó a acortar la guerra que había estallado contra Francia en 1792. La burguesía liberal, aunque vacilante, nunca fue completamente hostil a la Revolución. Se decía, además, que los jóvenes oficiales estaban infectados de ideas francesas; entre 1794 y 1796 se formaron sociedades secretas en Silesia por iniciativa de un grupo que comprendía a un hombre de negocios, un capitán del ejército y dos funcionarios del gobierno. Silesia fue también escenario de importantes disturbios populares: en el invierno de 1792, los campesinos se negaron a pagar sus deudas a los *junkers;* poco después, se sublevaron los tejedores a causa de los salarios y reclamaron la ayuda de los franceses. En 1793 se produjeron disturbios en Breslau y una revolución sangrienta entre los polacos de Silesia; en 1796, el «espíritu de revolución» generalizado entre los campesinos de Silesia se atribuía a la agitación que realizaron los soldados desmovilizados tras la guerra contra Francia. A largo plazo, la mayor parte de Alemania quedó transformada después del periodo revolucionario y napoleónico, pero durante los primeros años las zonas más afectadas no fueron las del norte, el sur o el centro, sino zonas fronterizas periféricas, las provincias del Rin y de Silesia.

También en Italia se dieron factores que favorecieron el progreso de las ideas revolucionarias francesas: una gran clase media culta y en buena parte anticlerical, ya iniciada en las enseñanzas de la Ilustración, un resentimiento muy extendido contra la dominación extranjera de los austriacos en el norte y en el centro y de los españoles en el sur, una nobleza que, en muchos aspectos, compartía las opiniones

avanzadas y las aspiraciones políticas de la clase media culta y una agitada masa de campesinos descontentos. Sin embargo, después del entusiasmo inicial, también aquí se hizo en seguida patente la debilidad del movimiento. En un país tan dividido, la primera dificultad residía en concertar los esfuerzos dispersos de los varios grupos que, en respuesta a las doctrinas revolucionarias de los franceses, comenzaban a pensar en términos de unidad y liberación nacionales. Existía también el problema, mucho mayor aún, de encontrar un común denominador político para la clase media acomodada, los «jacobinos» aristocráticos y los campesinos y masas urbanas empobrecidos. La primera de estas dificultades empezó a resolverse cuando el mismo Bonaparte apuntó a la solución imponiendo una especie de sistema unificado de administración en la mayor parte de la península italiana; el segundo problema resultó mucho más difícil de resolver en el sur, pobre y católico, que en el norte, más próspero y anticlerical. El reino de Piamonte, en el norte, y Cerdeña tenía la ventaja adicional, además, desde el punto de vista de los aspirantes a revolucionarios, de estar junto a la frontera francesa e incluir la provincia de Saboya, donde hacía mucho tiempo que existía un movimiento a favor de la unificación con Francia. Saboya fue la primera provincia italiana en rebelarse y, en 1789, los campesinos, que se habían liberado de los derechos señoriales, se negaron a pagar ninguna compensación a los terratenientes. Poco después, en el vecino Piamonte, los campesinos que se habían sublevado a favor de una reforma agraria se declararon ciudadanos de Francia, en tanto que en Turín, la capital, se producía un intento «jacobino» de derribar el gobierno en 1794. También en Bolonia las simpatías pro francesas unían a las clases cultas y al pueblo llano, al igual que en otras partes del norte; pero, más hacia el sur, los burgueses librepensadores, los *illuminati* y los «jacobinos» de la clase media solían estar aislados, e incluso ser objeto de profundas sospe-

chas y odios populares. En Nápoles, las logias masónicas y las sociedades «patriotas» eran, probablemente, más fuertes y numerosas que en cualquier otra parte de Italia, pero cuando los «jacobinos» intentaron dirigir una insurrección contra los gobernantes en 1794, el pueblo llano se mantuvo obstinadamente al margen. No es sorprendente que, al igual que en España y Bélgica, la Iglesia y los círculos gobernantes pudieran explotar aquellas antipatías y emplearlas en su propio beneficio. En enero de 1793, un enviado francés, Hugo de Bassville, fue asesinado en el curso de una sublevación popular y, en Nápoles, los pobres de la ciudad, aunque hostiles al «jacobinismo», al que asociaban con los ricos de la clase media, respondían, en cambio, a la consigna de «Iglesia y rey»[2].

Durante los primeros años de la Revolución francesa la reacción en Europa fue, pues, muy diversa. Si dejamos de momento a un lado la contrarrevolución y las actitudes de los gobiernos, ¿cómo podemos resumir brevemente la influencia de la Revolución en los países de Europa en vísperas de la expansión y las conquistas militares francesas? De un lado, hubo países como Turquía, Rusia, España, los Balcanes, Austria, Hungría y los estados escandinavos que, a despecho de pequeños brotes de «jacobinismo», durante esta época resultaron relativamente inmunes a la Revolución en Francia. Hubo países, como Inglaterra y Escocia, en los cuales el apoyo inicial a las ideas revolucionarias francesas había muerto de muerte natural hacia 1795, o se había paralizado y resultado ocultado por la represión y la influencia de la guerra. Hubo otros países, como Polonia e Irlanda, en los que, por razones verdaderamente excepcionales, la Revolución francesa encontró un amplio apoyo, pero dado que se encontraban fuera de las posibilidades francesas de ayuda militar, sus rebeliones fueron sojuzgadas con facilidad. Entre los vecinos más cercanos de Francia, la abortada «revolución» de los patriotas de Holanda en 1787

recibió nuevos bríos con los acontecimientos franceses, pero durante la primavera de 1793 aún tenía poco aspecto de evolucionar hacia una rebelión abierta. Únicamente en Bélgica había una situación revolucionaria en el verano de 1789 y en Lieja y Brabante la influencia de la Revolución francesa hizo estallar la crisis; sin embargo, la contrarrevolución interna y la restauración del poder austriaco debilitaron posteriormente el movimiento democrático. Por último, la influencia de la Revolución francesa fue notable en algunas zonas de Alemania y Suiza y en la mayor parte de Italia; no obstante, al igual que en Holanda, el entusiasmo por las ideas francesas quedó confinado a la clase media de las ciudades y a los círculos cultos, y únicamente en un puñado de cantones suizos, en los estados alemanes del Rin, en la Silesia prusiana y en las provincias italianas del Piamonte y Saboya estalló un movimiento popular hacia 1793, a consecuencia de los acontecimientos de Francia.

En el capítulo siguiente veremos cómo la entrada de Francia en la guerra, sus victorias y su expansión militar afectaron a estos diversos movimientos.

[1] Este asunto ha sido examinado por R. R. Palmer en «The Revolution of the West, 1763-1801», *Political Science Quarterly* (marzo de 1954); y *en The Age of the Democratic Revolution,* vol. I, *The Challenge,* pp. 4-6; por J. Godechot en *La Grande Nation* (2 vols., París, 1956), I, pp. 7-37, y en *Les Révolutions (1770-1799)* (París, 1963); y por Godechot y Palmer en una ponencia conjunta para el X Congreso de Ciencias Históricas (Roma, 1955), titulada «Le Problème de l'Atlantique du XVIIIe au XXe siècle», *Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche* (Florencia, s. d.), pp. 172-239. Véase también P. Amann (ed.), *The Eighteenth-Century Revolution: French of Western?* (Boston, 1963).

[2] Véase E. I. Hobsbawm, *Primitive Rebels* (Mánchester, 1954), pp. 112-113 [ed. cast.: Ariel]; y *The Age of Revolution* (Londres, 1962), pp. 82-83 [ed. cast.: Guadarrama, Madrid, 1974].

XI. LA GUERRA REVOLUCIONARIA

Ya se ha apuntado en un capítulo anterior que la guerra que estalló en 1792 no se debió a ninguna causa única y particular. La guerra no fue en ningún momento una cruzada de las cabezas coronadas de Europa contra la Francia revolucionaria. Sin embargo, este factor tuvo sin duda cierta importancia. Desde 1790, Burke venía predicando tal cruzada y, con su condena de la Revolución en abril de 1791, el papa Pío VI le dio su apoyo moral. La idea resultaba atractiva para una serie de gobernantes europeos, como Catalina de Rusia, Gustavo de Suecia, Carlos de España y Federico Guillermo de Prusia; también el emperador de Austria, Leopoldo II, aunque de mentalidad liberal, tenía buenas razones para considerar esta posibilidad, ya que se sentía obligado hacia su hermana y, además, tanto las obstinadas –e indeseadas– advertencias del *émigré* conde d'Artois, como la correspondencia secreta que mantenía con la Corte francesa le recordaba de continuo sus responsabilidades. Pero, cualesquiera que fueran sus sentimientos personales al respecto, los gobernantes europeos tenían otras preocupaciones: España y Suecia eran militarmente muy débiles para tomar iniciativa alguna contra su antiguo aliado; Suecia estaba ocupada también en hacer valer sus reivindicaciones sobre Finlandia; Rusia y Prusia se hallaban interesadas en Polonia; Leopoldo, además de su interés por Polonia y Turquía, tenía prisa por restaurar su autoridad en Bélgica y Hungría. Inglaterra, como ya hemos visto, a despecho de las instancias de Burke, se inclinaba por dejar que la Revolución siguiera su rumbo y, además, tenía bastante con vigilar ansiosamente los movimientos de Rusia en el Este. En estas condiciones era difícil conseguir una coalición de la antigua Europa contra la Revolución e, incluso cuando parecía posible (como en 1793-1795), los factores que conta-

ban eran no los puramente ideológicos y, por su naturaleza, amenazaban de continuo con desmoronarla.

No es necesario repetir aquí con detalle las razones que llevaron a Austria y a Prusia a la guerra con Francia en abril de 1792: la hostilidad hacia la Revolución del nuevo emperador, Francisco II, se conjugó con la disputa de los príncipes alemanes por Alsacia y la agitación que inició Brissot, reclamando una cruzada de los pueblos contra el «despotismo»[1]; además, las cortes de Berlín y Viena contaban con una guerra corta, creyendo que Francia se desmoronaría antes de la primera batalla[2]. Catalina ofreció 15.000 hombres, mas únicamente después de la pacificación de Polonia; Hesse y Maguncia fueron los dos únicos estados alemanes que proporcionaron un contingente. Después de la revolución de agosto en París, Inglaterra, Rusia, España, Holanda y Venecia mostraron su desacuerdo rompiendo las relaciones con Francia. Pero Rusia, aunque dispuesta a provocar a los austro-prusianos, seguía juzgando que Polonia era un campo de operaciones mucho más productivo, y España, Inglaterra y Holanda entraron en la coalición únicamente en la primavera de 1793, cada una de ellas por sus propios motivos. Holanda se sintió impulsada por la amenaza de una invasión francesa, en tanto que, para los otros, fueron la ejecución de Luis XVI y las consiguientes protestas diplomáticas las que proporcionaron el pretexto inmediato. Pero mientras España, a pesar de sus pretensiones contrarrevolucionarias, ingresaba en la alianza contra su voluntad (en Francia hubo una campaña *brissotinne* para destronar a todos los Borbones, que duró varios meses), el caso de Inglaterra era completamente distinto. No fueron las prédicas de Burke ni la furia antijacobina de Jorge III las que obligaron a Pitt a abandonar su neutralidad, sino la convicción de que los intereses británicos fundamentales y tradicionales se encontraban en peligro. Francia había sido el enemigo nacional desde los lejanos días de Luis XIV; en

el siglo anterior, los dos países estuvieron en bandos opuestos en casi todas las disputas que afectaron a Europa y a sus posesiones ultramarinas. Los temas que entonces se discutían continuaban sin resolver y volverían a aparecer a lo largo de un conflicto que duraría veinte años. A pesar de todo, no fueron estas causas generales, ni tampoco la supuesta amenaza a la propiedad y a la autoridad establecidas, las que impulsaron a Inglaterra a la guerra, sino los peligros particulares que para ella se derivaban de la ocupación francesa de Bélgica, su apertura del río Scheldt a la navegación (en contra del Tratado de Utrecht) y su próxima invasión de la antigua aliada de Inglaterra, Holanda. De este modo resultaba que, para los gobernantes ingleses, los franceses, independientemente de su forma de gobierno, estaban repitiendo las primitivas amenazas de Felipe II y Luis XIV a la seguridad de la isla.

A la entrada de Inglaterra, España y Holanda en la primera coalición contra Francia siguió la de Nápoles, Roma, Venecia y Cerdeña. En la primavera de 1793, Francia se encontraba enfrentada a una Europa hostil casi en su totalidad. Pero se trataba de una Europa que no había logrado resolver sus diferencias y que estaba dividida. A medida que la guerra avanzaba y mejoraban la capacidad militar y la moral francesas, coalición tras coalición, todas se desmoronaron, debido tanto a las victorias francesas como a su propia debilidad y a sus contradicciones internas. Así, tras las derrotas que sufrieron frente a los franceses en 1794-1795, España y Holanda cambiaron de bando y Prusia, hostil a Austria en Alemania y deseosa de arrebatarle Polonia, firmó una paz por separado y se retiró de la guerra. Las victorias de Bonaparte en Italia forzaron a Austria y a sus otros aliados continentales a aceptar la paz de Campoformio. Inglaterra, obligada a luchar sola, aumentó su imperio comercial y colonial a expensas de sus rivales, creó un gran poder marítimo en el Mediterráneo y mostró muy escasa preocu-

pación por los combates terrestres en Europa. El zar Pablo, sucesor de Catalina, considerando la ocupación de Malta por parte de Bonaparte como una provocación, se unió a Gran Bretaña, Turquía y Austria en una segunda coalición contra Francia y sus aliados en 1798. Esta coalición también se tambaleó cuando Rusia, en desacuerdo con Austria acerca de Italia y derrotada por Masséna en Suiza, retiró sus ejércitos al año siguiente, y se desmoronó por completo cuando Bonaparte, de vuelta de Egipto, derrotó a los austriacos en Marengo (1800) y les impuso el Tratado de Lundville (1801). Una vez más, Inglaterra quedó sola frente a Francia, pero esta vez sus pretensiones marítimas provocaron la neutralidad armada de sus antiguos aliados. Enfrentada con dificultades económicas y una crisis política en el interior, tuvo que aceptar la Paz de Amiens en mayo de 1802. Esta paz constituía un respiro momentáneo, pero no resolvía ningún problema. Francia conservó su nuevo régimen y sus conquistas continentales en Holanda y Nápoles, mientras que Inglaterra devolvió parte de sus recientes adquisiciones coloniales, pero siguió siendo dueña de los mares. Cuando estalló de nuevo la guerra, las coaliciones padecieron el mismo ritmo alternativo de derrota y deserción. Inglaterra iba a necesitar muchos años antes de conseguir una unidad de objetivos que inclinara la balanza a su favor.

Por supuesto, para asegurar los triunfos militares franceses era necesario algo más que las divisiones entre sus enemigos. El ejército francés que se organizó en abril de 1792 para enfrentarse a las fuerzas conjuntas de Austria y Prusia no estaba en absoluto preparado para la guerra y mucho menos para una ofensiva. Y no es que le faltaran conocimiento científico de la logística o de la utilización de las armas modernas. Gribeauval, el gran inspector general de los decenios de 1760 y 1770, introdujo un fusil de chispa mejorado y cañones de campaña más ligeros y eficaces; el Estado Mayor francés estudió a partir de la guerra de los Siete

Años los principios de la nueva estrategia de ofensiva que el perfeccionamiento de las armas hacía posible. Bourcet, director de la Academia del Estado Mayor de Grenoble, escribió un tratado sobre la guerra en montaña y demostró la superioridad de la estrategia ofensiva sobre la defensiva y la importancia de combinar la dispersión con la concentración, rompiendo así con las rígidas formaciones lineales que, por aquel entonces, recomendaban los mejores militares del momento. En su *Essai général de tactique,* de 1772, Guibert fue aún más lejos, señalando las virtudes de la simple columna de batallón contra las formaciones de combate del momento, insistiendo en que el ejército debe vivir sobre el terreno, dentro de su campo de operaciones, ahorrándose así los costosos y embarazosos trenes de provisiones; como, además, era un «filósofo», recomendaba que los ejércitos se reclutaran entre ciudadanos devotos de su país y capaces de iniciativa y no entre mercenarios, vagabundos o criminales, obligados a prestar servicio por hambre, por presiones o por miedo al patíbulo. Por último, Du Teil, en un ensayo de 1778, desarrolló la táctica de la nueva artillería de campaña, insistiendo en la concentración del fuego sobre el punto decisivo y en la combinación de la artillería y la infantería. Todas estas ideas, que suponían una revolución en la estrategia y táctica logística, hacía tiempo que habían salido del reino de la pura especulación; gran parte de ellas quedaron reflejadas en el manual de instrucción del ejército de 1788, que se difundió entre la tropa en 1791; y habían de convertirse en los principios con arreglo a los cuales se formaría y entrenaría una nueva generación de oficiales e ingenieros revolucionarios. La Revolución, con su destrucción de los privilegios y su evocación de la nación en armas, era la única que podía proporcionar las condiciones necesarias para que aquellas ideas se pusieran en práctica.

En 1792, sin embargo, el ejército carecía del equipo necesario para realizarlas: tenía hombres y entusiasmo, pero le

faltaba coordinación, disciplina, suministros y dirigentes. Las mismas tropas habían limpiado el ejército de cientos de antiguos oficiales aristocráticos; la guerra civil y los motines habían deshecho regimientos enteros y, del antiguo cuerpo de oficiales de 9.000 hombres, únicamente 3.000 conservaban el mando. Con el fin de rellenar los huecos en el ejército regular se habían reclutado batallones de voluntarios (unos 100.000 en total) procedentes de los Guardias Nacionales enrolados a partir de 1789. Estos soldados-ciudadanos, llenos de devoción patriótica, estaban relativamente bien pagados y elegían a sus oficiales, pero tenían más entusiasmo que disciplina o entrenamiento, los generales los trataban con desprecio y sus condiciones privilegiadas de servicio irritaban a los «regulares» y eran una causa de fricciones sin cuento. Tal ejército no podía estar a la altura de los 70.000 hombres adiestrados y avezados que Brunswick reunió en la frontera y, como ya hemos visto, la aventura de Brissot terminó en un desastre. Una fuerza invasora, enviada a través de la frontera hacia Tournai y Lieja, huyó aterrorizada tras su primer encuentro con el enemigo y retrocedió, junto con el grueso del ejército francés, hacia Lille. Francia se salvó de una catástrofe mayor únicamente gracias a la mentalidad cauta y tradicional del general Brunswick, quien no supo sacar partido de su ventaja.

En realidad fueron la debilidad y los pareceres contradictorios de sus enemigos, más que su propia fortaleza interna, los que dieron a Francia el respiro inicial necesario y le permitieron transformar en victoria la derrota. En la época de sus primeros éxitos en Valmy y Jemappes, en septiembre de 1792, ya había desaparecido el «comité austriaco», se había derribado a la monarquía, Brissot y su banda de gárrulos entusiastas habían perdido gran parte de su influencia, se había destituido a algunos generales traidores (entre ellos, a Lafayette) o bien estos habían desertado al enemigo, se había perfeccionado la artillería y se había reclutado, equipa-

do y entrenado a un mayor número de voluntarios. Pero los grandes problemas quedaban sin resolver: fundir a los nuevos soldados-ciudadanos con los antiguos regulares en un único ejército nacional, extraer la máxima ventaja militar de la masa de ciudadanos a quienes la Revolución había preparado para el servicio, crear y entrenar un cuerpo de oficiales eficaz y digno de confianza, y dotar al ejército de un número adecuado de las últimas armas, adaptando la industria a las necesidades de la guerra. Todas estas tareas fueron realizadas con notable eficacia gracias a los esfuerzos conjuntos de la Convención Nacional, el gran Comité de Salvación Pública y hombres de la talla de Carnot y el especialista militar jacobino Dubois-Crancé. El ejército *nacional,* basado en la conscripción general y obligatoria, no fue un hecho hasta la ley de Jourdan de septiembre de 1798, pero una serie de medidas intermedias –como la *amalgame* de febrero de 1793 y la *levée en masse* de agosto siguiente– ayudaron a borrar las diferencias entre los «azules» y los regulares y crearon ejércitos que superaban en hombres a los del Antiguo Régimen: 300.000 en febrero, 650.000 en agosto de 1793 y más de 750.000 en 1794. Estas cifras podían llegar a ser más bien un obstáculo que una ventaja y muchos de los generales formados en el espíritu del pasado estaban asustados ante la influencia de los reclutas, pero el genio de Carnot supo sacar provecho de ella, proporcionando instructores, armas y suministros y adaptando las enseñanzas de Bourcet y Guibert a las necesidades de los nuevos ejércitos de masas que la Revolución había levantado. Además, a medida que se destituía o guillotinaba a los antiguos generales o estos se pasaban al enemigo, se iban encontrando nuevos jefes para rellenar los huecos, muchos de los cuales tenían de veinte a treinta años al estallar la Revolución, hombres como Bonaparte, Hoche, Augereau, Jourdan, Murat, Masséna y varios más. Estos fueron los ejércitos y generales que, tras las primeras derrotas de 1792 y el desastre belga de fe-

brero a marzo de 1793, obtuvieron una serie casi ininterrumpida de victorias a partir de junio de 1794, llevaron la guerra al territorio del enemigo y destrozaron sucesivamente todas las coaliciones. El más grande de los nuevos comandantes, Bonaparte, había estudiado las enseñanzas de Bourcet, Guibert y Du Teil en las academias de Valence y Auxonne y había leído el relato de la campaña piamontesa de Maillebois cincuenta años antes.

Estos escritos le sirvieron, casi literalmente, como modelos para la campaña italiana de 1796 a 1797. No obstante, para llevar a cabo hazañas tan brillantes, se necesitaba algo más que la habilidad de encontrar modelos y aprender de los precedentes. En realidad, en los comienzos los franceses carecían de superioridad numérica: 38.000 hombres contra las fuerzas combinadas de sus enemigos austriacos y sardos, que poseían 47.000 hombres; tampoco tenían mejor equipo: seis semanas después de la apertura de las hostilidades, el joven general podía decirles a sus soldados (con bastante exactitud): «Habéis ganado batallas sin cañones, cruzado ríos sin puentes, realizado largas marchas sin botas y a menudo acampado sin comida»; se decía incluso que dos de sus lugartenientes se habían visto obligados a compartir un solo par de pantalones. Sin embargo, al cabo de un mes de su aparición en escena, el nuevo comandante había obtenido cuatro grandes victorias, introducido una cuña decisiva entre los ejércitos austriaco y sardo y obligado al rey Víctor Amadeo, haciendo caso omiso de las protestas austriacas, a solicitar una paz por separado[3]. Con un estilo similar, Bonaparte prosiguió su avance hasta limpiar de austriacos el centro y el norte de Italia y conducir a su ejército (que había recibido considerables refuerzos) hasta 80 millas de Viena, antes de firmar los preparativos para una paz general. En todas las etapas de esta notable campaña fue siguiendo de cerca los preceptos de sus maestros, demostrando con la rapidez de sus marchas, la flexibilidad de sus maniobras, la

concentración de su artillería y su habilidad para dar en cada momento el golpe decisivo en el punto más débil de su enemigo que había aprendido bien las lecciones de aquellos.

Pero las guerras «revolucionarias», aún menos que las otras, no se pueden llevar adelante únicamente con medios militares. Los dirigentes políticos franceses, más que los generales, nunca perdieron de vista este hecho y siempre consideraron la guerra como una operación política al mismo tiempo que militar. Una temprana medida en la guerra de propaganda fue el intento de identificar con la causa de Francia a extranjeros distinguidos –«patriotas», reformadores y hombres de letras–, confiriéndoles títulos de ciudadanía honorífica; en los últimos días de la Asamblea Legislativa se concedieron tales títulos a los ingleses Joseph Priestley, Jeremy Bentham, Thomas Paine y William Wilberforce, a los poetas alemanes Klopstock y Schiller, al polaco Kosciusko, a los americanos Washington y Hamilton y a algunos otros. Los resultados no fueron espectaculares y algunos de los agraciados se sintieron más embarazados que agradecidos por la distinción. Más importantes resultaron las sucesivas declaraciones de la Asamblea sobre la guerra, su curso, sus fines, su alcance y las posibilidades que ofrecía, declaraciones cuyo carácter se transformó a medida que nuevos dirigentes sustituían a los antiguos y, sobre todo, a medida que surgían nuevas situaciones políticas. En su primera declaración sobre la paz y la guerra, la Asamblea Constituyente declaró en mayo de 1790: «La nación francesa renuncia a emprender guerra alguna con el fin de hacer conquistas y nunca empleará sus ejércitos en contra de la libertad de ningún pueblo». Esta fórmula famosa de la «no-conquista» cuajó en la Constitución de 1791, y la Asamblea Legislativa la repitió en una declaración sobre política exterior el 14 de abril de 1792, pocos días antes de declarar la guerra a Austria. No es sorprendente que a la luz de los

acontecimientos posteriores se haya sugerido que los diputados hablaban de bocas para afuera y que nunca tuvieron intención de dejarse coartar por aquellos propósitos piadosos; pero pensar esto sería adelantarse a los acontecimientos y atribuirles una sagacidad y capacidad de previsión que no poseían. Para los miembros de todos los partidos resultaba casi un artículo de fe que las conquistas y la expansión territorial, inseparables de las guerras dinásticas del pasado (y de aquellas que realizaban aún sus enemigos), eran incompatibles con las nuevas ideas de fraternidad y con los derechos del hombre. Cuando estalló la guerra, la mayoría, convencida por Brissot, creyó que los «patriotas» belgas, holandeses y renanos iban a recibir a los franceses con los brazos abiertos y que su «liberación» sería rápida e indolora. En aquel momento, y aparte de los que secretamente trabajaban para la Corte, únicamente Robespierre y el grupito de sus aliados hicieron dos objeciones: en primer lugar, que el ejército no estaba preparado para la tarea que se le había asignado y, en segundo lugar, que los pueblos suelen ofrecer resistencia a los «misioneros armados», en lugar de darles la bienvenida.

La primera de estas objeciones se puso a prueba dos meses después del comienzo de la guerra y con los resultados que ya conocemos, pero la segunda no pudo comprobarse hasta que los ejércitos franceses, tras haber obtenido sus primeras victorias en otoño de 1792, estuvieron dispuestos a marchar sobre Bélgica y Holanda y la Asamblea tuvo que considerar las reclamaciones de los «patriotas» de Saboya, Niza y los estados del Rin, referentes a que Francia anexionara sus respectivos territorios. Si la Asamblea iba a aceptar esta proposición no era algo que se pudiera decir con seguridad de antemano, como no se pudo hacer tampoco cuando en septiembre de 1791, tras larga dilación, aceptó anexionarse el enclave papal de Aviñón, en respuesta a los deseos de la población local. Pero Aviñón se encontraba a

cien millas, dentro del territorio francés, y parecía difícilmente compatible con la teoría de la «soberanía popular» abandonar a los aviñoneses, en contra de sus propios deseos, al dominio extranjero. Los mismos argumentos se utilizaron para justificar el rechazo de las reivindicaciones de los príncipes alemanes respecto a sus inmunidades feudales en Alsacia. Pero Niza y Saboya se hallaban fuera de las fronteras francesas y formaban parte del reino de Cerdeña. Aun así, se citó el precedente de Aviñón en apoyo de la solicitud de los saboyanos de unirse a Francia. La cuestión se debatió calurosamente en septiembre de 1792, cuando un internacionalista tan ardiente como Camille Desmoulins advirtió de que la anexión de Saboya, aunque fuera en respuesta a una petición popular, significaría embarcarse en una política de conquistas que la Asamblea había rechazado expresamente. De este modo, en un principio se rechazó la petición, mas poco después los esfuerzos combinados de Danton, de los diputados girondinos y de los «patriotas» internacionalistas extranjeros, como el prusiano Anacharsis Cloots, convencieron a la Convención para encontrar una nueva fórmula que justificara tales medidas. Esta fue la famosa doctrina de las «fronteras naturales» de Francia, que, según definición de Carnot, transcurrían a lo largo del Rin, los Alpes y los Pirineos. Estos argumentos prevalecieron y el 27 de noviembre de 1792, con solamente dos votos en contra, la Convención decidió anexionar Saboya.

El problema de los Países Bajos y los territorios del Rin resultó más complicado. Por el momento, Francia estaba libre de enemigos: los austriacos, expulsados de Bélgica; los príncipes alemanes, de las provincias renanas; y los sardos de Niza. La Convención declaró el 19 de noviembre que «prestaría ayuda fraterna a todos los pueblos que desearan recobrar su libertad». Desde luego, esta era una provocación directa y deliberada a todos los gobernantes europeos, incluidos los ingleses, pero, al mismo, tiempo, planteaba

nuevos problemas: ¿quién sería el portavoz de los «pueblos», quién definiría la «libertad» y qué sucedería con aquellos que la rechazaran? En el caso de Niza no había gran problema, debido a que los nizardos, al igual que los saboyanos, estaban deseosos de conseguir la unión con Francia, lo cual se les concedió. Pero la Convención había decidido el 15 de diciembre que las nuevas juntas y asambleas revolucionarias que se formaran en los territorios ocupados habrían de ser elegidas únicamente por los ciudadanos que hubieran prestado juramento de «ser fieles a la libertad y a la igualdad y de renunciar al privilegio». De esta manera, únicamente los «patriotas» tenían derecho al voto. Sin embargo, los «patriotas» de Bélgica y de los territorios del Rin, que saludaron la «liberación» y votaron a favor de la anexión, resultaron ser una minoría. En consecuencia, la Convención, lejos de acceder a los deseos espontáneos y entusiastas de los pueblos «liberados», se dejó llevar por el camino de la conquista y la anexión, gracias a la convincente oratoria de los dantonistas y girondinos, a las camarillas de «patriotas» extranjeros, a la lógica de la teoría de las «fronteras naturales» de Francia y a las exigencias de la guerra.

La Gironda y los grupos de «patriotas» de París tenían, además, otros fines expansionistas, como la creación de «repúblicas hermanas» en aquellos países más allá de las «fronteras naturales» de Francia, en los que pudieran asegurarse el apoyo necesario. Estas repúblicas ofrecían, además, la ventaja de que, como los territorios anexionados, pondrían en circulación el *assignat* francés, colocarían su oro y plata a disposición de Francia y contribuirían, por medio de subsidios e impuestos, a sufragar sus gastos de guerra. Estos planes estaban ya muy avanzados en enero de 1793, cuando la ocupación de Holanda se hallaba a la orden del día. Pero los holandeses y los ingleses se sumaron a la coalición antifrancesa en febrero; en abril los franceses habían sido obligados a retirarse de los Países Bajos y del

Rin y, poco después, caía la Gironda. Surgió una nueva situación y nuevos hombres accedieron al poder. Su dirigente, Robespierre, se había opuesto desde el principio a la guerra de «liberación», a la conquista de las «fronteras naturales» de Francia y a la formación de «repúblicas hermanas». Por el contrario, señalaba la urgente necesidad de respetar los tratados en vigor y los derechos de las naciones pequeñas y neutrales: lo más que podía prometer Francia era auxiliar a una revolución que ya se hallara en marcha. De resultas de este cambio, los «patriotas» extranjeros en París pasaron a ser sospechosos y Cloots, implicado en un pretendido *complot de l'etranger,* pasó por la guillotina. Aun así, tras haber rechazado un plan de anexión de Cataluña (ocupada por el ejército francés en abril de 1794), el Comité de Salvación Pública aceptó otro que convertía a la zona en una república independiente bajo «protección» francesa[4]. En general, no solo habían cambiado los principios, sino también las oportunidades y las circunstancias. Lejos de hallarse en una situación de expansión, de abril de 1793 a junio de 1794 la República tuvo que enfrentarse una vez más con la invasión extranjera y luchar por su existencia. Como sabemos, Robespierre cayó del poder un mes después de la victoria de Fleurus y únicamente después de Fleurus se pudo poner a prueba aquellas profesiones de fe.

Los sucesores de Robespierre volvieron a los objetivos expansionistas de la Convención girondina. Por supuesto, en su caso la tentación era mayor que en el de aquel. En el otoño de 1794, Bélgica y las provincias renanas se encontraron de nuevo bajo ocupación militar francesa; las tropas republicanas entraron en Ámsterdam y La Haya y el estatúder huyó a Inglaterra. ¿Qué había que hacer con los territorios ocupados? Por aquel tiempo, Carnot ya no defendía la teoría de las fronteras naturales, sino que, ya fuera por su recuerdo de Robespierre, o por sus crecientes simpatías realistas, se oponía a las anexiones. Para ello contaba con el

apoyo de algunos generales y comisarios del ejército –entre otros, Joubert y Kléber–, quienes sostenían que una política de anexiones llevaría a una guerra sin fin. Los realistas, que deseaban la paz a cualquier precio, añadían sus voces a las de estos. A este grupo se oponía otro expansionista muy fuerte, que incluía a Sieyes y Merlin de Douai, nuevos abogados de una red de «repúblicas hermanas»; al alsaciano Reubell, partidario de la frontera del Rin y de la anexión directa; a Barras y Larevellière-Lépaux, ambos directores; así como a un conjunto de «patriotas» holandeses, generales, periodistas, contratistas del ejército e industriales. Algunos de ellos, como Barras, apenas si se preocupaban de algo más que de sus propios intereses; otro, como Reubell y los generales, argumentaban en términos de seguridad militar; y otros, por último, señalaban las ventajas que podrían obtenerse de un «mercado común» con Bélgica y los territorios del Rin. Poco después, en el *coup d'état* del 18 de Fructidor (4 de septiembre de 1797) se eliminaba a Carnot y al partido de la paz, aunque ya desde mucho antes pudo verse que prevalecía una vez más el punto de vista de los expansionistas. Para satisfacer a estos se anexionó a Bélgica como provincia francesa en octubre de 1795, en tanto que los territorios del Rin quedaban bajo gobierno militar francés antes de ser anexionados por completo, sin que jamás llegaran a convertirse en una república independiente, como los «patriotas» nacionales habían esperado. Este fue el modelo que se siguió en casi todos los casos; sin embargo, más allá de las «fronteras naturales», y solamente en respuesta a los insistentes requerimientos de los «patriotas» holandeses y suizos, se convirtió a Holanda en la República Bátava en 1795 y, tras larga demora, a Suiza en la República Helvética en 1798.

Por otro lado, la victoriosa campaña italiana de Bonaparte, su incansable ambición e iniciativa personal habían abierto nuevas perspectivas allende los Alpes. Se obligó a

los sardos a aceptar el hecho consumado de la cesión de Niza y Saboya. En la paz de Campoformio, Austria reconoció la cesión de Bélgica (otro hecho consumado), así como la cesión por parte de los príncipes alemanes de las provincias renanas, y los derechos de Francia a las Islas Jónicas; a cambio (y en contradicción con todos los precedentes revolucionarios) se entregaba al emperador Venecia, a quien las tropas francesas habían liberado de su aristocracia nacional. Quedaba el resto de Italia por repartir. Los miembros del Directorio, que tenían los ojos puestos en Alemania más que en Italia, estaban deseosos de obtener tributos de aquellos territorios, pero preferían dejar la dirección de los asuntos italianos a sus respectivos gobernantes. Pero Bonaparte tenía otros planes y su posición era lo bastante sólida para imponer sus condiciones, en especial después de que su amenaza de dimisión obtuviera una negativa rotunda. A despecho de la protesta de los jacobinos locales, se anexionó Piamonte a Francia y, en tanto se elaboraba una solución similar para Génova, se le concedía un respiro temporal como república nominalmente independiente. Muchos «patriotas» italianos abrigaban esperanzas parecidas; a las ciudades liberadas de Parma, Módena, Ferrara y Bolonia les faltó tiempo para declararse repúblicas independientes. Sin embargo, Bonaparte ahogó estas intentonas en sus mismos comienzos; convocó una asamblea en Milán de la que surgió la efímera República Cispadana, que pronto habría de fusionarse, con la adición de Lombardía y de fragmentos de antiguos territorios venecianos y papales, en una República Cisalpina más amplia. Poco después se creaba la República Ligur, con centro en Génova y que se extendía a lo largo de la costa noroeste. Tras el regreso de Napoleón a Francia y su partida para Egipto, aquellas repúblicas se convirtieron al poco tiempo en modelos que habrían de seguir sus sucesores. En 1798 el papa era deportado a Siena y en el centro se proclamaba una República romana bajo protección mili-

tar francesa. A comienzos de 1799, Championnet ocupaba Nápoles, cuyo rey se había unido a los austriacos en un asalto sobre Roma, y, saltándose las órdenes del Directorio, proclamaba una República Partenopea en el Sur. Estas «repúblicas hermanas» (o, al menos, las que sobrevivieron) iban a adoptar nuevas formas bajo el Consulado y el Imperio, pero, por el momento, respondían bien a los fines expansionistas revolucionarios del Directorio y halagaban las ambiciones de sus generales.

Ya durante la primera ocupación de Bélgica, el decreto de la Convención de 15 de diciembre de 1792 había formulado el principio de que los pueblos «liberados» tenían que reclutar tropas y contribuir al mantenimiento de los ejércitos franceses. De este modo, en el plazo de seis semanas, se pagaron 64 millones de libras al Tesoro francés. Más tarde, Bélgica, con sus ricas zonas cerealeras, sus pastos y sus cantidades de *thalers* austriacos, fue considerada como una especie de vaca lechera que podía salvar a Francia de las condiciones de hambre de 1795 y 1796. Los agentes del gobierno consiguieron superarse a sí mismos, se abatieron como langostas sobre las provincias anexionadas y tales fueron sus extorsiones y requisas que zonas completas quedaron sin recursos y, al poco tiempo, Bélgica y Holanda participaban también en la crisis francesa y recogían su parte en los disturbios populares. Al convertirse en República Bátava, Holanda aceptó mantener un ejército de ocupación de 25.000 hombres y pagar una indemnización de 100 millones de florines en monedas de plata o en letras de cambio sobre bancos extranjeros. Estas exacciones se hicieron aún mayores a medida que progresaba la guerra y el Directorio tenía que atender a obligaciones financieras mayores, lo que revirtió en beneficio de Bonaparte en cuanto este descubrió que el método más seguro de convencer al Directorio para que sancionara sus métodos cesaristas en Italia era volver a llenar las arcas de la República con el botín y los tesoros de

los territorios ocupados. De este modo, el recaudador de impuestos comenzó a seguir los carros de los ejércitos conquistadores y, en julio de 1796, Salicetti, comisario del ejército de Italia, estimaba que los primeros tres meses de la campaña ya habían procurado un tributo de 60 millones de francos. Pero Bonaparte llegó más lejos con sus exacciones: en un mensaje que Joubert llevó al Directorio en noviembre de 1797, el general presentaba un balance sorprendente de sus victorias, en términos de número de prisioneros, cañones de campaña capturados, tratados, negociaciones y pueblos «liberados». A todo esto añadía el siguiente alarde: «Enviadas a París todas las obras maestras de Miguel Ángel, Guercino, Tiziano, Pablo Veronés, Correggio, Albani, los Carracci, Rafael y Leonardo da Vinci».

La campaña de Egipto de Bonaparte fue aún más evidentemente imperialista: no estableció ninguna institución duradera, la esclavitud quedó inalterada y, además, ni persiguió ni realizó objetivo «revolucionario» ninguno, lo que, desde luego, no se puede decir del periodo de expansión militar de la República francesa en Europa de 1792 en adelante. La frase que hemos citado más arriba sobre el estandarte de la victoria de Napoleón en 1797 iba precedida de esta otra: «Concedida la libertad a los pueblos de Bolonia, Ferrara, Módena, Massa-Carrara, Romaña, Lombardía, Brescia, Bérgamo, Mantua, Cremona, parte de Verona, Chiavenna, Bormio, los Valtellina, Génova, los feudos imperiales, los departamentos de Corfú, el mar Egeo e Ítaca». Y no se trataba de un alarde vacío o de una figura retórica, ni tampoco significaba simplemente que se hubiera expulsado de sus posesiones o de sus cargos a los enemigos de Francia o a los antiguos gobernantes locales. Los ejércitos de la República no se limitaron en Italia, como tampoco lo hicieron en Bélgica, Holanda, Suiza, Renania y Saboya, a las operaciones militares, a saquear o a extraer subsidios, ni siquiera durante el Directorio. Allí donde fue posible contar

con el apoyo de los «jacobinos» nacionales, introdujeron nuevas leyes e instituciones políticas, modeladas sobre las francesas, e incluso transformaron el antiguo sistema social. Príncipes, estatúderes y gobernantes extranjeros fueron destituidos e instaladas nuevas autoridades revolucionarias; se reclutaron nuevos ejércitos nacionales; se impusieron leyes y constituciones francesas y este proceso continuó incluso bajo el Imperio, como en Polonia, Nápoles y Alemania, por ejemplo. Por supuesto, el carácter de estas medidas y su naturaleza «revolucionaria» o «democrática» tendían a reflejar la situación interna de Francia. La constitución democrática francesa de 1793, ampliamente aclamada por «jacobinos» en otros países, encontró pocos imitadores porque, en aquel tiempo, Francia no estaba en situación de imponer sus propias instituciones más allá de sus fronteras y los «patriotas» extranjeros que las admiraban en muchos casos carecían de la fuerza necesaria para aplicarlas sin el auxilio francés. Hubo una excepción, sin embargo: la pequeña ciudad-estado de Ginebra, donde los demócratas en mayoría en la recién constituida Asamblea Nacional, en febrero de 1794, elaboraron una constitución que, en muchos aspectos, estaba calcada de la adoptada por la Convención jacobina unos meses antes, y que la misma Convención había arrinconado después. La ginebrina no duró más que dos años; con la caída de Robespierre, las ideas e instituciones del año II dejaron de estar de moda entre los vecinos de Francia. Una nueva Constitución, más liberal que la francesa de 1795, aunque de todos modos copiada de ella, vino a ocupar su lugar. En realidad, el modelo general que siguieron las otras constituciones fue el de la burguesa del año III y no el de la de 1793; estas constituciones, introducidas en las «repúblicas hermanas» entre 1796 y 1799[5], llegaron a ser diez en total; variaban mucho en los detalles y algunas se discutieron más libremente y fueron impuestas con menos perentoriedad por los agentes de Francia que otras. Por

ejemplo, en la República Bátava, la Constitución que se impuso en 1798 fue acaloradamente debatida durante casi tres años: los demócratas holandeses llevaban mucho tiempo exigiendo el sufragio masculino adulto y una Asamblea unicameral, y únicamente cedieron ante la insistencia del agente francés en La Haya. En los demás sitios, las constituciones, por lo general, se impusieron o adoptaron tras una mínima discusión en el país, tomando los modelos de París o elaborados por el Estado Mayor de Napoleón. Pero, cualesquiera que fueran los métodos de consulta, los resultados finales se revelaron casi uniformemente los mismos: un sufragio más o menos restringido (a menudo era más liberal que en Francia), elecciones en dos vueltas, una Asamblea bicameral, derechos civiles para los judíos y tolerancia religiosa.

En general, estas constituciones tuvieron corta vida: a medida que la República burguesa en Francia cedía el paso al Consulado y al Imperio, las instituciones políticas de sus satélites se transformaban para adaptarse a las nuevas situaciones. No obstante, de un modo o de otro, las nuevas autoridades revolucionarias llevaron adelante medidas que a menudo resultaron duraderas. Se cerraron los guetos de Roma y Venecia, como se había hecho antes en Bonn; en Génova, Malta y Sicilia se liberó a los esclavos; se abolieron los derechos feudales, el diezmo y los residuos de la servidumbre (como en los territorios del Rin, en Cerdeña y Suiza); se disolvieron las órdenes privilegiadas y se confiscaron y sacaron a pública subasta las tierras de la Iglesia. Estas medidas, similares en líneas generales a las que se aplicaron en Francia de 1789 a 1791, fueron aplicadas en todos estos territorios. No obstante, la revolución social, como la política, se inspiró en el espíritu de 1795, no en el de 1793. La distribución de las propiedades tras la confiscación fue menos extensa que en Francia y únicamente se beneficiaron de ella los burgueses ricos y los campesinos acomodados. En

particular, en el sur de Italia, que era una zona de campesinos pequeños y sin tierra, empobrecidos, pero no siervos, estos no ganaron nada con el nuevo régimen, ni nunca pensaron hacerlo; un hecho que ayuda a comprender su hostilidad contra los franceses y, en parte, la historia posterior del Risorgimento italiano, con el gran renacimiento del odio de los campesinos del sur contra los terratenientes y los ricos burgueses de las ciudades. En los cantones suizos se redimieron a un alto precio los diezmos y las obligaciones señoriales; en Bélgica y en algunas partes de Italia, las nuevas medidas de asistencia pública no consiguieron compensar a los pobres por la pérdida de la asistencia religiosa. Y, en general, aquellos que se habían beneficiado de la liberación de la tierra de diezmos y obligaciones feudales vieron cómo estos beneficios se esfumaban ante los aumentos de precios y las exacciones de los recaudadores de impuestos. Por esta razón, los «liberadores» franceses no solo no encontraron gratitud a su paso, sino que se enfrentaron con una serie de manifestaciones hostiles de los campesinos y los pequeños consumidores de las ciudades, como en Bélgica y Suiza de 1798 a 1799 y en casi toda Italia, desde las de 1796 a 1797 en Pavía y Verona, en el Norte, hasta la gran insurrección popular de Toscana, Roma y Nápoles en 1798 y 1799. Estas protestas se produjeron a menudo bajo la bandera de la Iglesia católica: los ciudadanos romanos, los campesinos toscanos y los *lazzaroni* napolitanos se amotinaron y saquearon a los gritos de «¡Viva María!». Por supuesto, también hubo excepciones: los protestantes holandeses y ginebrinos se resistieron a tomar parte en tales disturbios y los habitantes católicos de los territorios del Rin, quienes se beneficiaron más que los otros de la supresión de las obligaciones feudales, permanecieron relativamente tranquilos. La más notable de todas fue la insurrección que tuvo lugar en el Piamonte en 1799, tras su anexión por los franceses. Lejos de reclamar el Antiguo Régimen y la desaparición del nue-

vo, los insurgentes, dirigidos por los jacobinos locales y formando bandas de campesinos de Asti, Alba y Mondovi, protestaron por la violación francesa del sagrado derecho de la «soberanía popular», llevando retratos de los mártires revolucionarios, Marat y Lepeletier, y reclamando una República italiana unida. El incidente es significativo, porque proporcionó un ejemplo temprano de cómo se utilizó contra los franceses la nueva idea revolucionaria de «nacionalismo» y demostró, además, que los piamonteses eran los únicos en toda la Italia del decenio de 1790 dispuestos a seguir a los franceses por el camino de una revolución popular más radical de lo que iban a tolerar aquellos que en la propia Francia le habían vuelto la espalda a la revolución «democrática».

El ejemplo del Piamonte, a pesar de su excepcionalidad, plantea una importante cuestión de orden general: ¿en qué medida eran capaces los «patriotas» locales, como agentes independientes, de dirigir revoluciones por su cuenta en sus propios países, y en qué medida eran meros auxiliares de los franceses, que aceptaban soluciones francesas? Como ya hemos visto, en todos los países ocupados por los franceses, o que cayeron bajo su influencia política, había grupos de «patriotas» o «jacobinos» que simpatizaban con las ideas francesas y estaban más o menos dispuestos a ponerlas en práctica. La denominación de «jacobino» resulta un poco ambigua, ya que los contemporáneos, particularmente los enemigos de la Revolución francesa, la utilizaron indiferenciadamente, aplicándola a todos los «patriotas», independientemente de sus respectivas filiaciones políticas. Así, Catalina denunció airadamente como «jacobinos» a los nobles polacos reformistas de 1791; Thomas Paine, «jacobino» en Inglaterra, en Francia era considerado moderado en 1793 y, como miembro girondino de la Convención francesa, escapó por poco al arresto y, posiblemente, a la ejecución. Las autoridades francesas de 1795 lo aplicaron con mayor rigor

a los demócratas más avanzados de los países ocupados por los ejércitos de Francia. En realidad, entre los diversos grupos nacionales de «patriotas» solía haber importantes diferencias políticas: la mayoría de los belgas suizos y alemanes eran moderados; después de 1792, los holandeses estaban divididos entre su lealtad a la Gironda y a la Montaña; los italianos se sentían más atraídos que los demás hacia las ideas de Babeuf, probablemente debido a la influencia de Buonarrotti. Pero, ya se tratase de moderados, girondinos, montañeses o «babouvistas», la influencia que podían ejercer dependía menos del carácter de sus opiniones respectivas que del desarrollo social de sus países, su historia reciente, la importancia de la Iglesia en la vida nacional y su proximidad o apertura a Francia. Estos factores, y no los objetivos y esfuerzos de los «jacobinos» nacionales, son los que explican por qué países como Inglaterra, España y la mayor parte de Alemania no sufrieron revolución alguna. El ejemplo de España demuestra que ni siquiera los franceses, cuyos ejércitos ocuparon Cataluña a comienzos de 1794, pudieron exportar la revolución en contra de la decidida resistencia de los habitantes del país o en contradicción con su historia. De los países que los franceses «revolucionaron» realmente con ayuda de los «jacobinos» nacionales, algunos estaban más maduros para la revolución que otros y, por tanto, resultaban más accesibles a las ideas francesas; estos eran también los países en los que los «patriotas» tenían más posibilidades de actuar con independencia y de tratar de conseguir el poder por su propia cuenta. Ya hemos observado ejemplos de esto en Lieja y Bruselas antes de 1789, en Saboya y algunas partes de Suiza y los territorios del Rin antes de 1795 y en el norte de Italia, a partir de esta fecha. Mas en las otras zonas de ocupación militar francesa, especialmente en Italia, al sur del Piamonte, los «jacobinos» locales eran completamente incapaces de dirigir una revolución popular o de tomar el poder sin el apoyo del

ejército francés. Los «jacobinos» romanos, toscanos y napolitanos fueron propagandistas activos y celosos, ayudaron a preparar el camino para la ocupación militar francesa y actuaron como diputados y administradores bajo las nuevas autoridades revolucionarias; pero eran abogados e intelectuales, comerciantes y nobles, separados de las masas, a las que tenían poco que ofrecer e, incluso bajo la protección francesa, estaban continuamente expuestos a la hostilidad del pueblo. En estos países no podía considerarse que la revolución fuera un producto nacional; había focos sociales y geográficos favorables al desarrollo interno de aquella, pero solo podía imponerse firmemente desde fuera y por medio de la ocupación militar francesa. Aun allí donde los «patriotas» no eran meros instrumentos de los franceses, sino que tenían sus propias ideas acerca del futuro político de su país –y ya hemos visto ejemplos de ello en Holanda, Ginebra y Piamonte–, la situación final fue la de la Francia postermidoriana, más bien que la prevista por los grupos de «patriotas». Resulta significativo también que en ningún caso estos nuevos regímenes pudieran sobrevivir por un momento a una derrota francesa o a la retirada de las tropas de aquel país.

Se nos vuelve a plantear una cuestión que ya aparecía al comienzo del último capítulo: ¿se trata aquí de una revolución esencialmente *francesa,* con sus ramificaciones en otros países occidentales, o tienen razón los profesores Godechot y Palmer al suponer que todas estas revoluciones, incluida la francesa y la americana, no son sino «fases» de una revolución «democrática» más general, de Occidente? Puede que existan motivos para definir de esta manera a todas las revoluciones que se han producido en Europa y América desde, pongamos, 1550 hasta 1850, comprendiendo no solamente la americana y la francesa, sino también la holandesa del siglo XVI, la inglesa del XVII y algunas revoluciones sudamericanas y europeas de comienzos del siglo XIX. To-

das ellas ponen al descubierto, de un modo u otro, problemas comunes relativos al feudalismo y al capitalismo, a la democracia y a la soberanía nacional. En este contexto más amplio, la revolución americana de los decenios de 1760 y 1770 puede parecer tan estrechamente relacionada con la inglesa de ciento veinte años antes, como con la francesa veinte años después; y las revoluciones alemana e italiana se pueden considerar en toda su dimensión, más bien que en sus comienzos. Pero si nos decidimos a considerar únicamente las revoluciones del siglo XVIII, lo que sorprende son las diferencias más que las similitudes, así como el escaso número de aquellas puede afirmar sus condiciones de revoluciones en sentido propio. En Europa, las únicas revoluciones «democráticas» (o, más exactamente, «liberales») que se produjeron en aquella época, independientes de la francesa, fueron las de Lieja, Bruselas y Ginebra, pero las dos primeras ya habían sido derrotadas en 1790, reviviendo únicamente con la ocupación militar francesa. Germinaron también movimientos revolucionarios, inspirados por el ejemplo francés, en los territorios del Rin, en Piamonte y en algunas partes de Suiza, pero estos movimientos solo alcanzaron carácter serio al aproximarse los ejércitos franceses. En toda Europa occidental, las revoluciones, si bien en parte organizadas por los «patriotas» nacionales y favorecidas por las condiciones locales, fueron impuestas por los franceses. En realidad, de las 29 constituciones adoptadas en otros países europeos además de Francia entre 1791 y 1802, todas ellas, con excepción de tres (dos ginebrinas y una polaca), fueron el resultado de la intervención francesa[6]. Estrictamente hablando, la única revolución en sentido propio, excepción hecha de la de América y la del pequeño Estado de Ginebra, fue la francesa.

Quizá más importante sea el hecho de que la revolución en Francia llegó más lejos que en cualquier otra parte, no solamente en el sentido de que fue más violenta, más radi-

cal, más democrática y más prolongada, sino en el de que planteó problemas e hizo surgir clases que las otras revoluciones (incluida la americana) dejaron intactos. Esto se debió en parte al hecho de que los otros países tenían un desarrollo histórico distinto del francés y, en parte también al hecho de que, después de julio de 1794 (cuando comenzaron a imponer sus ideas a sus vecinos), los franceses ya no estaban interesados en fomentar el desarrollo de los ideales democráticos de 1793 y aplastaron despiadadamente a los piamonteses cuando intentaron hacerlo. Si lo único que se considera es la difusión de las ideas de la Ilustración, la legislación permanente de las asambleas revolucionarias y los liberales «principios de 1789», entonces, las similitudes entre las revoluciones de Francia y de los otros países son muchas: todos ellos pasaron por una revolución burguesa más o menos completa, que destruyó las viejas instituciones y obligaciones feudales, expropió a la Iglesia, abolió la servidumbre, las desigualdades sociales y las clases privilegiadas y declaró las carreras «abiertas a la inteligencia»; este proceso se prosiguió, si bien de una forma amputada, en Alemania y Polonia bajo el Imperio. Mas, por importante que esto sea, no tiene en cuenta un elemento esencial de la Revolución francesa: la participación activa del pueblo llano a partir de 1789 y las consecuencias que se derivaron de ello. Como recordaremos, John Adams criticó a los patriotas holandeses de 1787 por haber «ignorado el sentir del pueblo llano»; y eso fue lo que continuaron haciendo. No fue esta una incapacidad típica de los holandeses: los «jacobinos» belgas, romanos y napolitanos estaban igualmente divorciados del pueblo e hicieron pocos esfuerzos para salvar las distancias. Es cierto que en algunos de estos países se dieron a veces movimientos en los que colaboraron «patriotas» y campesinos o pobres de las ciudades y en los que los últimos se hicieron eco de las consignas y las ideas de sus aliados burgueses, pero estos movimientos constituyeron la ex-

cepción y tuvieron corta vida. Únicamente en Francia, debido a las circunstancias particulares en las que estalló y se desarrolló la revolución (y no, por supuesto, a una cualidad gala innata), el «Cuarto Estado» se convirtió en el aliado indispensable del Tercero, exigió su recompensa y llegó a constituir un movimiento político independiente. Así, en Francia encontramos fenómenos como la «revolución» campesina, el movimiento de *sans-culottes* de 1793, la dictadura jacobina, la *levée en masse,* las *armées révolutionnaires,* los experimentos sociales y la República del año II. Estos factores reaparecieron, a menudo en formas más agudizadas, en las revoluciones europeas del siglo XIX, pero –con algunas excepciones menores– no figuraron en las del decenio de 1790 y aún menos bajo el Consulado y el Imperio. En este sentido, la Revolución francesa, aunque arrojó su sombra sobre toda Europa, continuó siendo completamente peculiar y única.

[1] Véase cap. IX.

[2] Véase G. Lefebvre, *The French Revolution from its Origins in 1793* (Londres y Nueva York, 1962), pp. 220-223.

[3] Para una relación completa, véase S. Wilkinson, *The Rise of General Bonaparte* (Oxford, 1930).

[4] R. Herr, *The Eighteenth-Century Revolution in Spain* (Princeton, 1958), pp. 286-296 (ed. cast.: Aguilar).

[5] Véase J. Godechot, *La grande nation,* II, pp. 418-449.

[6] H. B. Hill, «The Constitutions of Continental Europe, 1789-1813», *Journal of Modern History* VIII (1936), p. 82.

CUARTA PARTE
LA ERA NAPOLEÓNICA

XII. NAPOLEÓN Y FRANCIA

Al llamar en su ayuda a Napoleón Bonaparte en Brumario, Sieyes y sus compañeros de conspiración esperaban, al igual que Barère en Termidor, mantener el dominio político en sus manos. Su objetivo era instalar una dictadura militar que defendiera las «fronteras naturales» de Francia como ellos las entendían, y que mantuviera a raya a los jacobinos y *sans-culottes.* El recurso a un gobierno autoritario no era algo nuevo en la Revolución: durante los peligros de 1793, la Llanura otorgó su bendición a la dictadura del Comité de Salvación Pública; la Convención «liberal» de 1795 negó a los electores sus derechos constitucionales por medio del decreto de los «dos tercios» y sus sucesores del Directorio arrinconaron la Constitución en más de una ocasión a fin de hacer frente a los peligros del realismo y del jacobinismo, respectivamente. Pero esta vez el hombre al que se había seleccionado para cumplir tal función resultó ser de temple y temperamento distinto a todos los anteriores. De este modo, en lugar de retener el dominio de la situación, los hombres de Brumario iban a darse cuenta muy pronto de que su pretendido auxiliar estaba completamente decidido a imponer su propio criterio sobre los acontecimientos. En efecto, debido a una combinación poco frecuente de voluntad, inteligencia y fuerza física, aquel hombre iba a dejar huella durante largos años en Francia y Europa.

En la medida que resulta posible separar la realidad del mito en un fenómeno tan notable, puede decirse que era un hombre de contradicciones y paradojas extrañas: un héroe romántico moderno, fundido en el molde de un César o un Alejandro, un hombre de acción y de decisiones rápidas y, al mismo tiempo, un poeta que soñaba con la conquista del mundo, un realista político supremo y un aventurero vulgar que lo jugaba todo a una sola carta; el enemigo de los privilegios, que alardeaba de su «tío» Luis XVI y aspiraba a fun-

dar una nueva dinastía real, un organizador y hombre de Estado genial al que le preocupaba tanto garantizar los privilegios del clan Bonaparte como fomentar la mayor fortuna y gloria de Francia, un producto de la Ilustración que desconfiaba de las ideas y despreciaba a los intelectuales y a los «sistemas», un lúcido intelecto, con una gran sed y capacidad de conocimientos que, al mismo tiempo, era extrañamente incapaz de entender las fuerzas que él mismo había ayudado a desatar. Y la mayor paradoja de todas: el advenedizo «soldado de la Revolución», que llevó los «principios de 1789» a la mitad de los países de Europa, por su ambición personal y su desprecio hacia sus semejantes acabó creando un nuevo despotismo y una nueva aristocracia sobre las cenizas de los antiguos. Este cuadro queda un poco obscurecido por la leyenda de Napoleón, surgida de sus monólogos de Santa Elena, donde deseaba presentarse como un hombre de paz, ansioso por unificar a Europa en una confederación de Estados capaces de autogobernarse. Aunque no corresponde con la realidad, es precisamente esta parte de sus acciones y objetivos la que él glosó en Santa Elena –su sueño de la conquista del mundo, su agresividad incansable, su despotismo personal y su progresiva negación de los principios igualitarios de la Revolución– y la que menos ha resistido la prueba del paso del tiempo. En cierto sentido, por tanto, el mito ha coincidido con la realidad, porque lo que ha sobrevivido ha sido la obra del «soldado de la Revolución» y no la del déspota, el conquistador o el creador de nuevas aristocracias y dinastías.

Incluso en sus peores momentos de renuncia, Napoleón reconoció siempre su deuda con la Revolución y, por supuesto, ninguna otra carrera ilustra tan cabalmente la exactitud de la afirmación de que la Revolución había abierto las carreras a la inteligencia. Napoleón nació en Ajaccio, Córcega, en 1769, hijo de un pequeño noble que, aunque genovés de nacimiento, se había convertido en francés a

causa de la conquista de la isla por los franceses un año antes del nacimiento de Napoleón. De 1779 a 1785, el joven Napoleón asistió a las academias militares de Autun, Brienne y París, tras lo cual prestó servicios como lugarteniente de artillería en Auxonne y Valence; en Auxonne estuvo a las órdenes de Du Teil, hermano del especialista en asuntos de guerra de montañas. Como muchos otros jóvenes oficiales del momento, especialmente los pobres como él, saludó la llegada de la Revolución; leyó ansiosamente a Rousseau e intervino decididamente en política como «patriota» en Córcega, en apoyo de Paoli, el Liberador. Ya antes de su ruptura final con Paoli y de su expulsión de Córcega, en junio de 1792, fue a París, donde tuvo ocasión de presenciar la humillación de Luis XVI en las Tullerías por el «populacho» de París; la experiencia dejó en él una huella perdurable. En la lucha entre los partidos, se declaró a favor de la Montaña, en contra de la Gironda, y se distinguió como capitán de artillería en el auxilio a Tolón, en septiembre de 1793. Ascendió a *brigadier* y ganó la estima y la amistad de Augustin Robespierre, que se encontraba en misión en el ejército de Italia. Esta amistad estuvo a punto de poner fin a su carrera: en Termidor fue detenido coma robespierrista y encerrado en Fort Carré, en Antibes. Liberado al cabo de un mes, tardó algunos más en encontrar un empleo adecuado. Rechazó el puesto de comandante de artillería en el ejército del Oeste en 1795. Por fortuna para él, se hallaba en París en septiembre, cuando atrajo la atención de Barras, y, tras aplastar a los rebeldes realistas en Vendimiario, ascendió a la categoría de general. De nuevo gracias a Barras, conoció a Josefina de Beauharnais, viuda de un general revolucionario, con la que se casó el 9 de octubre de 1796. Una semana antes había recibido el mando del ejército de Italia, nombramiento que no era inesperado, habida cuenta de que tenía partidarios poderosos y de que hacía mucho

tiempo que abogaba por un plan de campaña que ahora tenía la oportunidad de poner en práctica.

Como ya hemos observado, las razones que impulsaron a Sieyes y a sus colaboradores a seleccionar a Napoleón para desempeñar una función en Brumario fueron el gran éxito del general en Italia, su popularidad entre el público, y la aureola de fama que ganó a través de la campaña de Egipto. Si se examina ahora retrospectivamente, resulta sorprendente que los conspiradores esperaran que un hombre con aquella carrera se sometiese mansamente a su dirección. En todo caso, pronto pudieron desengañarse, pues antes de que hubiera transcurrido un año, Napoleón había creado un sistema político por su cuenta y, en consecuencia, procedió a consolidar su autoridad personal, cuando las circunstancias le fueron favorables. Su primer choque con Sieyes se produjo a propósito de la nueva Constitución posterior a Brumario. Como maestro consumado que era de la manipulación constitucional, Sieyes propuso un complejo sistema de *checks and balances,* basado, como él decía, en el principio de la «autoridad desde arriba» y la «confianza desde abajo». Se restauraba el sufragio adulto masculino, pero los electores de las asambleas primarias solamente podrían elegir a una décima parte de los miembros de las asambleas de departamento, los cuales, a su vez, elegirían a una décima parte de sus miembros, para componer una «lista nacional». Un Senado, elegido por cooptación central, seleccionaría un Tribunado a partir de esa lista para que propusiera las leyes y una Legislatura que las aprobara. Los cónsules nombrarían funcionarios del gobierno central y local a partir de las listas nacionales y departamentales. El ejecutivo se compondría de un gran elector, nombrado por el Senado y sujeto a revocación ante este, y de dos cónsules nombrados por aquel, uno para los asuntos exteriores y otro para los interiores. De este modo, la autoridad política estaría en manos de los «notables», quienes, mediante su

dominio del Senado, podrían determinar a placer el carácter del gobierno del dictador que habían nombrado.

Napoleón no tenía nada que oponer a los planes de Sieyes para restringir los poderes de los electores, pero poseía ideas muy distintas en cuanto a la función que le correspondía desempeñar a él en la Constitución. Con el fin de alcanzar toda la autoridad ejecutiva, el general enfrentó hábilmente a un grupo contra otro y terminó proponiendo una solución de compromiso que, en realidad, garantizaba la consecución de sus proyectos. Se conservaba la lista de «notables» de Sieyes, su Senado y Tribunado (aunque el último quedaba reducido a la iniciativa en materia de legislación), pero por encima de todos ellos surgía la figura de un primer cónsul, elegido por un periodo de diez años, cuyos poderes superaban a los de sus colegas, responsable tan solo del nombramiento de ministros y funcionarios y con capacidad de iniciativa legal, previa consulta de un Consejo de Estado, nombrado por él mismo. La Constitución, sometida a plebiscito en febrero de 1800, fue adoptada por tres millones de votos a favor y 1.500 en contra.

Sin embargo, el Senado, el Tribunado y la Legislatura que aquel nombraba conservaban gran autoridad. Sieyes y sus colegas aún creían que, conservando el dominio de estas instituciones, todavía podrían obligar al primer cónsul a contar con ellos. No eran estas las intenciones de Napoleón, sin embargo. La Constitución le permitía completar la labor de la Legislatura por medio de la promulgación de decretos, conocidos con el nombre de *senatus-consulta,* que él utilizó con generosidad y buenos resultados; además de esto, y de modo completamente ilegal, permitió al Consejo de Estado que interpretase las leyes aprobadas por la Asamblea. En realidad, el Consejo de Estado, compuesto por los legisladores más experimentados de la Revolución, nombrados por el primer cónsul, cooperó con él para dar forma a

la mayoría de las leyes más ilustradas del Consulado. Gran parte de esta legislación, por supuesto, estaba dirigida a centralizar la administración y fortalecer la autoridad del gobierno. La policía ocupó desde el primer momento un lugar prioritario en sus quehaceres. El Ministerio de Policía, creado por el Directorio, creció en importancia y recibió mayores poderes, confiándosele a Fouché, quien estaba bien calificado para el puesto tanto por su pasado «terrorista» como por el papel que había desempeñado en Brumario. Colaborador de Fouché fue Dubois, prefecto de policía de París, así como otros prefectos en cada departamento. Esto no era más que un ejemplo del ataque de Bonaparte al principio de elección local y a la transferencia del poder de la autoridad local a la capital: en ello seguía el precedente del Antiguo Régimen y del Comité de Salvación Pública, más bien que el de la Asamblea Constituyente y el Directorio. Las comunas y departamentos, creados en 1790, conservaban su existencia –y la han conservado hasta el día de hoy–, pero una ley de febrero de 1800 situaba a los departamentos a cargo de los prefectos, responsables ante el Ministerio del Interior y conformados a ejemplo de los intendentes y «representantes en misión» del pasado; hasta los alcaldes los nombraba el gobierno. También en materia de finanzas y administración de justicia, el primer cónsul abandonó el precedente adoptado en 1790 y volvió a los métodos del Antiguo Régimen. Se arrebató a las autoridades locales la recaudación de impuestos, que se confió a un organismo central: con ello se completaba un proceso que ya había comenzado con el Directorio. Una vez más, aparecieron tribunales criminales en los departamentos, dotados de jueces nombrados por el mismo primer cónsul, que habían de entender en delitos de derecho común; se crearon otros tribunales extraordinarios que entenderían de la subversión realista; en varios departamentos se suspendieron los jura-

dos y se recurrió de nuevo a las famosas *lettres de cachet* de la monarquía de los Borbones.

La oposición liberal dentro del Tribunado y de la Legislatura criticaba todas estas medidas excepcionales, lo cual condujo a la ruptura final de Napoleón con sus antiguos aliados de Brumario. Por aquella época, tenía otras cuentas que saldar, ya que, cuando inició la segunda campaña de Italia, en mayo de 1800, París se convirtió en un centro de intrigas de todos los enemigos airados y todos los frustrados aspirantes a los diversos cargos; en provincias revivió la agitación realista y el destino del nuevo régimen parecía hallarse en el fiel de la balanza. La victoria de Marengo en junio –a pesar de su carácter inseguro– y la más decisiva de Moreau en Hohenlinden en diciembre restauraron la confianza del interior y obligaron a los austriacos a aceptar las negociaciones. Una vez preparado el terreno para la Paz de Lunéville (febrero de 1801), que devolvía a Francia las conquistas de Campoformio e, incluso, las ampliaba, Napoleón regresó victorioso a la capital. Allí le faltó tiempo para reafirmar y reforzar su autoridad, depurando al Tribunado de sus miembros más rebeldes, cortando de raíz un complot militar en el que estaban implicados Moreau y Bernadotte, desterrando de París a Madame de Staël, cuyo salón se había convertido en un centro de oposición, y deportando, fusilando o guillotinando a gran cantidad de sus oponentes jacobinos, con el pretexto de haber descubierto una «maquinación infernal» de los terroristas realistas con el fin de hacer saltar por los aires al primer cónsul en su camino hacia la Ópera. Una vez más, se restauraba el orden, pero también se necesitaban medidas más radicales desde el punto de vista constitucional para acallar a la oposición en el Senado y en la Legislatura. La Paz de Amiens, que terminaba una guerra con Inglaterra de nueve años, en mayo de 1802, proporcionó la ocasión requerida. En medio del júbilo general, el Senado propuso, en principio, que se exten-

diera la duración del Consulado por otros diez años, pero Napoleón insistió en un plebiscito que, por tres millones y medio de votos a favor contra 8.000, le concedió el Consulado vitalicio. Además, un *senatus-consultum* de mayo de 1802 reformaba la Constitución y le concedía virtualmente poderes dictatoriales; el Senado, que ahora presidía él y cuyos miembros completó él también por cooptación, recibía el poder de reformar la Constitución a su voluntad por medio de *senatus-consulta,* de disolver la Legislatura y el Tribunado y de nombrar cónsules subordinados. La lista nacional de «notables» de Sieyes quedó definitivamente suprimida, siendo sustituida por una red de colegios electorales, en cuyo nombramiento el poder decisivo pertenecía, como siempre, al primer cónsul. Por último, se le concedía a Napoleón el poder de negociar tratados sin necesidad de someterlos a aprobación y, además, se le invitaba a nombrar su propio sucesor.

De este modo, Napoleón daba los primeros pasos hacia la restauración de la monarquía hereditaria. De hecho, ya que no de derecho, poseía todos los atributos de un monarca absoluto. Cuanto se necesitaba ahora eran los jaeces de una corona imperial, una corte imperial y una nueva aristocracia imperial. Una vez más, fueron los acontecimientos exteriores los que proporcionaron la ocasión precisa. La guerra con Inglaterra estalló de nuevo en 1803 y el dirigente realista Georges Cadoudal consiguió apoyo de Londres para su plan de raptar a Napoleón y llevarle a Londres. Méhée de la Touche, antiguo jacobino, ahora confidente de la policía, dio el aviso de la conspiración. En ella estaban complicados Moreau y Pichegru: el primero fue exiliado y el segundo estrangulado en su celda; el duque D'Enghien, nieto de Condé, capturado en territorio alemán, fue llevado a Francia en secreto y, tras interrogatorio, fusilado como agente inglés. En la excitación provocada por aquel asunto se vio claramente la necesidad de asegurar la sucesión here-

ditaria; en mayo de 1804, el Senado proclamaba que «se confía el gobierno de la República a un emperador hereditario». De momento, habida cuenta de que el emperador no tenía hijos, se designó como heredero a su hermano José y luego a su hermano Luis. Se centralizó y reforzó a la policía, y Fouché, depuesto a raíz de sus intrigas después de Marengo, recuperó su puesto y desde entonces hasta 1810, en que perdió finalmente el cargo, suministró al emperador boletines diarios con información acerca de la labor de su vasta red de agentes. Por lo demás, la administración continuó igual que antes. La Corte, que estaba comenzando a perfilarse ya en las Tullerías, fue dotada de mayor empaque, dignidad y ceremonial; se fundó una nueva nobleza imperial, al conferir el rango de príncipes a los hermanos de Napoleón, ducados italianos hereditarios a Bernadotte, Talleyrand y Fouché y otras dignidades y títulos a 18 mariscales del Imperio, seis grandes dignatarios imperiales y una serie de servidores fieles. Incluso Sieyes, aquel gran enemigo de los privilegios aristocráticos, había de aparecer al poco tiempo con todos los honores de un barón del Imperio. Por supuesto, llevó su tiempo hasta que la nueva sociedad imperial y sus instituciones asumieron una forma definitiva, pero, entre tanto, el nuevo orden recibía la bendición pontificia: haciendo caso omiso de las protestas de los *émigrés* y los disidentes realistas, Pío VII se apresuraba a asistir en París a la coronación del emperador en Notre Dame (diciembre de 1804).

De este modo, tras haber oscilado durante cinco años al borde de su tumba, la República recibía definitiva sepultura. Una vez alcanzadas sus ambiciones en el interior, Napoleón comenzó a dedicar su atención a otros problemas. No resulta sorprendente, por tanto, que su trabajo constructivo en materia de legislación en Francia, que en muchos aspectos completaba y consolidaba el de los revolucionarios, se diera durante el Consulado y no durante el Imperio. En

realidad, los diez años del Imperio resultaron especialmente estériles en materia legislativa y, en este sentido, dejaron poco de valor duradero para las siguientes generaciones.

La mayoría de las grandes reformas del Consulado se llevaron a cabo en los tres años que van de julio de 1800 a mayo de 1803. Durante esta época, Napoleón pasó casi todo su tiempo en París, rodeado de un pequeño grupo de ministros y consejeros de Estado, principalmente republicanos moderados o antiguos realistas, entre los que destacaron Cambacérès, Lebrun, Talleyrand, Gaudin, Portalis, Treilhard y Thibaudeau. Con todo, la importancia de todos estos era secundaria en relación con la del Señor, quien asistía a la mayor parte de sus reuniones, daba unidad y sentido a sus quehaceres y caracterizaba estos con su peculiar sentido de la autoridad, el realismo, el desprecio por el privilegio y los derechos abstractos, la escrupulosa atención a los detalles y el respeto por una jerarquía social ordenada.

El periodo revolucionario francés resultó perjudicado por el carácter débil y azaroso de la política financiera y bancaria. Bajo los *feuillants,* los girondinos y los termidorianos, la inflación fue galopante, la moneda de metal desapareció y los gobiernos sucesivos estuvieron a merced de los especuladores, los financieros y los contratistas. Durante un breve periodo, el Comité de Salvación Pública consiguió dominar la especulación y dar una estabilidad temporal a las finanzas nacionales, por medio del terror político y económico. También el Directorio tomó medidas para restaurar la moneda y centralizar el sistema impositivo, después de años de inflación caótica, pero aquellas medidas fueron incompletas. El *coup d'état* de Brumario y la promesa de Bonaparte de instaurar un gobierno fuerte devolvió la confianza a los banqueros y, con la activa cooperación de uno de estos, Perregaux, se fundó el Banco de Francia en febrero de 1800. Su capital inicial de 30 millones de francos au-

mentó a 45 tres años más tarde, cuando el banco obtuvo el monopolio de la emisión de papel moneda. Se mantuvo una rígida fiscalización de los asuntos fiduciarios y, una vez más, el metal pasó a ser la moneda corriente. El hecho de que entre 1799 y 1814 se volvieran a poner en circulación unos 75 millones de francos en oro y plata da la medida de la saludable política financiera de la época, así como de los prejuicios de Napoleón contra el papel moneda.

El trabajo legislativo más importante realizado por el primer cónsul y su Consejo de Estado fue el Código Civil, completado en 1804 y rebautizado en 1807 con el nombre de Código Napoleón. No se trataba en modo alguno de un trabajo original, si bien Napoleón se enorgullecía más de él que de sus cuarenta batallas. La tarea de codificar las numerosas leyes y decretos de la Revolución había sido iniciada por la Convención en 1792; un año más tarde aparecía un proyecto de código de 779 artículos, ampliado hasta 1.104 artículos durante el Directorio en 1796. En realidad, antes de que Napoleón y sus colaboradores comenzaran su trabajo, en 1800, ya se habían discutido cinco redacciones. Aunque se trataba de una vasta tarea, no cabe duda de que su falta se hacía sentir con anterioridad. Antes de la Revolución la monarquía había hecho poco por la unidad legal: había unos 360 códigos locales en vigor y, en líneas generales, el país se dividía entre el sur, donde predominaba el derecho romano, y el norte, donde prevalecía el derecho consuetudinario. La Revolución allanó mucho el camino, eliminando los privilegios y las herencias feudales y arrebatando todas las relaciones de propiedad al derecho canónico; sin embargo, quedaba en pie el gran problema: ¿debía basarse el nuevo Código sólidamente en el derecho natural abstracto, ignorando las tradiciones del pasado, o conseguir un equilibrio adecuado entre los dos derechos rivales, el romano y el consuetudinario, siempre teniendo en cuenta los

cambios que habían tenido lugar en las relaciones de propiedad y personas desde 1789?

Los argumentos racionales de la Ilustración influyeron mucho sobre la Convención, que reconoció derechos abstractos como la igualdad de las personas, el matrimonio civil, el divorcio, la adopción, el derecho de herencia de los hijos ilegítimos y la división igual de la propiedad entre los herederos; fue, además, hostil al autoritarismo del derecho romano y favorable al mayor liberalismo del derecho consuetudinario. El código de 1804 establece el equilibrio entre ambos: preserva los principios igualitarios de 1789, atemperados por una nueva y más intensa insistencia sobre los derechos de propiedad y sobre la autoridad del padre y del esposo. A diferencia de sus predecesores, Napoleón veía muchas virtudes en el derecho romano, que casaba con su carácter autoritario. Además, aquel derecho podía ayudar a superar en buena parte el relajamiento moral de la sociedad postermidoriana. ¿Acaso no había experimentado él mismo algo de esto en el caso de su propia esposa, Josefina? De acuerdo con esta preocupación, las cláusulas que tratan del matrimonio, la paternidad, el divorcio y la adopción fueron las que sufrieron mayor influencia del derecho romano y, además, aquellas en cuya redacción intervino más eficazmente el propio Napoleón. De este modo, el divorcio se restringe notablemente; hasta un cuarto del total de la propiedad puede dejarse en herencia fuera de la familia; únicamente de modo excepcional puede reconocerse a los hijos ilegítimos; se restaura la autoridad paterna sobre los hijos, tal como se practicaba durante el Antiguo Régimen; en los artículos que tratan de «los derechos y deberes respectivos del esposo y la esposa», encontramos joyas como la siguiente: «El esposo debe protección a la esposa; la esposa, obediencia al esposo»; «las mujeres casadas carecen de potestad para contratar»; y «la esposa solamente puede interponer demanda de divorcio en el caso de que el esposo

introduzca una amante permanente en el hogar». Por supuesto, esto no proporciona más que un aspecto parcial del cuadro general. Aun rechazando los principios democráticos de 1793, el Código admite por completo los nuevos derechos de propiedad y derechos de los ciudadanos legados por los revolucionarios de 1789, y sanciona la desaparición del feudalismo y de los privilegios feudales, así como la libertad de conciencia y empleo; pero posiblemente el artículo más importante del Código es aquel que insiste sobre el reparto igual del legado hereditario entre los hijos. Estas disposiciones han influido profundamente sobre el desarrollo social no solamente de Francia, sino de unos treinta países en todos los continentes, con excepción de Australasia.

Parecida mezcla de autoridad e igualdad aparece en la institución por Napoleón de la Legión de Honor en mayo de 1802. Esta fue invención personal suya, en mayor medida aún que el Código Civil, y tropezó con una vigorosa oposición en el Tribunado, la Legislatura e, incluso, en el Consejo de Estado. La Convención había suprimido, como contrarias a la igualdad, las antiguas insignias y decoraciones de la monarquía, tales como la Orden de San Luis; aunque en ocasiones se concedieran «coronas cívicas» a individuos que se hubieran distinguido por sus relevantes servicios a la nación. Napoleón ideó su Legión teniendo en cuenta ambos tipos de distinción. Se preveía la existencia de quince «cohortes», cada una compuesta de 250 miembros de diferentes categorías, de acuerdo con los servicios prestados, seleccionados por un Gran Consejo presidido por el primer cónsul. La intención de este era doble: crear un nuevo orden de méritos, abierto a todos aquellos que se distinguieran por sus servicios personales, tanto militares como civiles, independientemente de su origen social, y compensar la lista nacional de «notables» de Sieyes (por entonces, aún en vigor), por medio de una institución que se encontraba bajo su propia y estricta dirección. La oposición

liberal, interesada en limitar las pretensiones autocráticas de Napoleón, no podía dejar de ver las implicaciones de la nueva medida; mas sus objeciones, como en otros asuntos, resultaron infructuosas y la Legión sobrevive todavía, como otro monumento al celo de su creador.

Las reformas educativas del Consulado (completadas durante el Imperio) también reflejan las opiniones sociales de Napoleón y su desprecio por las mujeres. Como ya nos podemos imaginar, consideraba que el objetivo de la educación era la formación de los jóvenes para el servicio al Estado: los muchachos como médicos, funcionarios públicos y empleados o, simplemente, como artesanos, trabajadores o soldados llanos, y las muchachas como sumisas y obedientes amas de casa y madres. Los pobres podían beneficiarse únicamente de la instrucción imprescindible, por lo que la escuela primaria –o *école communale,* a la que tanta atención había dedicado la Convención– quedaba en manos de los municipios, complementada por numerosas escuelas religiosas a las que abrió las puertas el Concordato de 1801. La Convención creó cerca de cien escuelas secundarias, públicas o centrales, reorganizadas y situadas bajo la directa competencia de un director de Enseñanza Pública, por una ley de mayo de 1802. La Iglesia obtuvo permiso para invadir de nuevo el campo educativo. Pero la creación peculiar de Napoleón fueron los *lycées,* escuelas secundarias selectivas para la formación de dirigentes y administradores, con planes de estudio estrictamente seculares y dirigidas únicamente por el Estado. Se preveía la apertura de 45 *lycées* en un principio, con 6.400 plazas, financiadas por becas del Estado, de las que 2.400 estaban reservadas para hijos de oficiales y funcionarios públicos y las otras para los alumnos más aventajados de las escuelas secundarias ordinarias. Estas escuelas tuvieron un mal comienzo, en parte debido a que la disciplina militar que había en ellas disgustaba a muchos padres de la clase media, pero, hacia 1813, la enseñan-

za que en ellas se impartía era, probablemente, la mejor y la más avanzada en Europa y 6.000 de sus estudiantes pasaron en aquel tiempo a las universidades francesas. La educación de las muchachas, por el contrario, era asunto de menor importancia, que se dejaba, en su mayor parte, al cuidado de las órdenes religiosas, ahorrando de este modo gastos al Estado. En un escrito desde su cuartel general de Finkenstein, en Alemania, durante la campaña de 1807, el emperador apremiaba a su ministro del Interior a que comprobara si las muchachas que asistían a la nueva escuela superior de Ecouen recibían sólida base religiosa. «Lo que le pedimos a la educación –escribía– no es que las muchachas piensen, sino que crean»; y añadía que «hay que tener cuidado de que no vean nada de latín o de cualquier otro idioma extranjero».

Al igual que un «déspota ilustrado», Napoleón se interesaba continua y activamente en la dirección de la economía de Francia. Su temperamento autoritario le hacía inclinarse a favor de la dirección estatal, más que a fomentar las teorías librecambistas de Adam Smith o de los «economistas» franceses del decenio de 1770 y de 1780. Sin embargo, su concepción de la intervención del Estado se acercaba más al mercantilismo de Colbert, el gran ministro de Luis XIV durante el siglo XVII, que a la economía fiscalizada practicada por Robespierre y el Comité de Salvación Pública durante el Año II de la Revolución. Los jacobinos estaban interesados, naturalmente, en adecuar la economía a las necesidades de la guerra, en equipar a sus ejércitos y en alimentar a la población civil; pero también tenían la ambiciosa intención de elevar las condiciones de vida y la dignidad de los seres humanos. Los fines de Napoleón eran más conservadores y más pedestres: el Estado debía intervenir con el fin de proteger la agricultura y asegurar una balanza exterior favorable, así como un suministro adecuado de armas y soldados para el ejército. Las condiciones materiales del

pueblo, siempre que no abocaran a desórdenes públicos u obstaculizaran el reclutamiento, eran asuntos de menor importancia. Se debían frenar las importaciones, especialmente las inglesas. Ya antes de que pusiera en marcha su Bloqueo Continental en 1806, Napoleón adoptó la política de sus predecesores de excluir las mercancías inglesas de los mercados franceses. Su pasión por la reglamentación le llevó a acariciar la idea de resucitar los gremios comerciales del Antiguo Régimen, en claro desafío al carácter general de la legislación revolucionaria. De hecho, bajo su dirección sancionó el prefecto de policía de París el renacimiento de los gremios de panaderos y carniceros en la ciudad, aunque no se atrevió a ir más lejos. En las relaciones laborales, Napoleón siguió el precedente que, a su vez, los Constituyentes habían heredado de los Borbones: la ley de Le Chapelier de 1791 prohibía a los trabajadores la organización de sindicatos; una ley de abril de 1803 repetía la prohibición, y, en diciembre del mismo año, se obligaba a los trabajadores a llevar consigo un salvoconducto firmado por su patrono. El mismo espíritu caracteriza al Código Civil de 1804 por lo que se refiere a las relaciones entre el trabajador y el patrono: se abandona la garantía del mínimo vital para los pobres prometida en 1793 y, en asuntos de litigación, únicamente se acepta la palabra del patrono. Sin embargo, a pesar de su inclinación temperamental a mirar hacia el pasado, más bien que hacia el futuro, en asuntos económicos, el realismo de Napoleón, en este como en otros campos, se impuso. Recordando los motines por los alimentos de la Revolución (el peligro de que se repitieran era especialmente grande en 1801), Napoleón reconocía que el orden y la estabilidad públicos y, por tanto, el suministro de soldados para sus ejércitos dependía en gran medida de la satisfacción de las necesidades elementales del pueblo. Aquí, como en cualquier parte, la teoría tenía que ceder el paso a las apremiantes necesidades del Estado; de ahí que, con excep-

ción de los años de abundancia, se impusieron límites estrictos a las exportaciones de granos. En 1812, el emperador llegó a seguir el ejemplo de la Convención, estableciendo un *maximum,* o tope, en el precio del pan y la harina. Por estas y otras razones, Napoleón conservó el apoyo y la confianza de los campesinos franceses y del *menu peuple* durante mucho más tiempo del que conservó el de la burguesía, que le había alzado al poder. De no haber sido por su firme dominio del ejército, la oposición liberal, los nuevos ricos y los airados funcionarios y ministros (entre los que destacaban los eternos intrigantes Fouché y Talleyrand) hubieran tenido más éxito en sus continuos esfuerzos para derribarle. Pero la lealtad del pueblo llano, para quien carecía de significado el galardón de libertad política ofrecida por la oposición, se mantuvo con notable constancia y únicamente se resquebrajó bajo el peso de la conscripción y la penuria en los años de escasez de 1813 y 1814.

También fueron razones de Estado las que llevaron a Napoleón a restablecer la Iglesia católica en Francia, firmando el Concordato con el papa en 1801. Después de sus diversas tribulaciones en los primeros años de la Revolución, descritas en capítulos anteriores, la Iglesia quedó finalmente suprimida por ley de septiembre de 1795. La política del Directorio fue, alternativamente, de tolerancia e indiferencia o duras persecuciones, especialmente de los sacerdotes no juramentados, sospechosos o convictos de actividades traidoras. Durante aquella época surgieron una serie de cultos y, cuando se produjo el *coup d'état* de Brumario, se observaban prácticas religiosas muy diversas, relativamente inmunes a las persecuciones, por parte de los católicos (juramentados y no juramentados), protestantes, decadistas y teofilántropos. Esto produjo lo que el historiador radical Aulard llamó «un rico y variado florecimiento de la vida religiosa»; pero no era esta una situación que pudiera complacer a los católicos ni a los *émigrés,* ni tampoco a un go-

bernante con el espíritu autoritario y ordenancista de Napoleón. Él mismo era un escéptico volteriano, poco inclinado a la experiencia mística o a creencias de ninguna clase: es dudoso, por ejemplo, que compartiera la creencia de Robespierre en la inmortalidad del alma. Pero, como otros librepensadores y deístas del momento, estaba convencido de que la religión organizada podía ser buena para los otros, ya que no para él, y, especialmente, para las mujeres. Además, la religión ayudaría a preservar la paz social. «En la religión –escribió en una ocasión– no veo el misterio de la encarnación, sino el misterio del orden social»; y, más adelante: «La sociedad es imposible sin la desigualdad, intolerable sin un código moral, y un código moral es inaceptable sin la religión». La religión también podía ser un arma política valiosa. Las experiencias de Italia y Egipto le habían precavido contra el peligro de permitir que los prejuicios «filosóficos» determinaran una política que pudiera herir la susceptibilidad religiosa de aquellos a los que se proponía gobernar. En Egipto prohibió estrictamente a sus tropas que ofendieran las prácticas religiosas musulmanas y en sus tratos con el Papado, en 1797, se negó a seguir las instrucciones anticlericales del Directorio. La destrucción de los guetos de Roma y Venecia se debió tanto a su proyecto de ganarse las simpatías de los judíos como a su necesidad de manifestar sus opiniones «ilustradas». En una ocasión llegó a decir, sin que ello fuera una observación necesariamente cínica, que «si tuviera que gobernar a los judíos, restauraría el Templo de Salomón». No obstante, antes de decidirse a restablecer la Iglesia católica en Francia, tenía que hacer un balance cuidadoso de sus ventajas políticas y de la oposición que sin ninguna duda iba a provocar. De un lado, una docena de años de revolución y muchos más de pensamiento «ilustrado» habían erradicado del pensamiento y las acciones de los hombres la mayor parte de la antigua influencia de la Iglesia. La burguesía republicana, por ejem-

plo, había descartado la religión y no la consideraba como un componente necesario de la virtud cívica; y, para aquellos que sí la consideraban, los nuevos cultos, tales como el de los teofilántropos, cumplían su función igualmente bien. El anticlericalismo también estaba muy arraigado en el ejército, como pudo comprobarse cuando, por fin, se firmó el Concordato. Por otro lado, la masa de la población francesa, el campesinado, nunca había terminado de aceptar el abandono de sus antiguas formas de culto y era un cálculo razonable suponer que la restauración iba a acallar las quejas que todavía mantenían latente la guerra civil en la Vandea y en Bretaña. Además, también en los círculos intelectuales el antiguo escepticismo había perdido su anterior atractivo y cedido paso a un renacimiento religioso romántico. Por otra parte, desde 1795, Francia se había extendido allende sus fronteras prerrevolucionarias, con lo que la restauración en Bélgica, Suiza, los territorios del Rin e Italia cortaría de raíz las rebeliones latentes y acallaría a la opinión católica en las poblaciones sometidas. Un arreglo con el papa podría también ayudar a establecer una paz en las condiciones que Francia deseaba y a eliminar las aprensiones de muchos *émigrés,* más católicos que realistas, a los que el primer cónsul estaba deseoso de atraer de nuevo a Francia y reconciliar con su régimen. Por supuesto, antes de que se pudiera llegar a arreglo ninguno, el papa tenía que aceptar dos condiciones importantes: «Esta religión [citamos los propios términos de Napoleón] tiene que estar en manos del gobierno»; y no se podrían restituir a sus antiguos dueños las propiedades encautadas a la Iglesia.

Poco antes de la batalla de Marengo se había elegido un nuevo papa, Pío VII, y, en vísperas de abandonar Italia, en junio de 1800, Napoleón había hecho algunas insinuaciones a Roma. Únicamente después de un año de negociaciones, en cuyo curso se cambiaron 1.279 documentos y diez proyectos distintos entre ambas partes, se llegó a un acuerdo.

Los temas principales en discusión eran el nombramiento y el pago de los obispos, el futuro de las propiedades eclesiásticas confiscadas durante la Revolución, la posición de la Iglesia católica en el seno de la comunidad religiosa en general y las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Al principio, el papa insistió en que todos los obispos refractarios retuvieran sus sedes y en que no se reconociera a los nombrados desde la entrada en vigor de la Constitución Civil de 1790; se negó a reconocer los derechos de los que habían comprado propiedades eclesiásticas; quería que se pagase al clero por medio de dotaciones; exigía que se declarase el catolicismo romano como la única *religion d'état* (religión oficial) y que se produjera un mínimo de interferencias del Estado en los asuntos de la Iglesia. Por su parte, Napoleón exigía que todos los obispos, tanto refractarios como constitucionales, renunciaran a sus sedes y solicitaran un nuevo nombramiento; que a los compradores de las propiedades eclesiásticas se les garantizara la posesión; que se pagara al clero como si fueran funcionarios públicos; y que la fe católica no se aceptara como «fe dominante» –lo que implicaría una restricción de los derechos de los otros creyentes–, sino como la «religión de la gran mayoría de los ciudadanos». De hecho, esta fue la fórmula sobre la que ambos se pusieron de acuerdo. También se acordó que el gobierno eliminaría los obstáculos al libre ejercicio de la religión católica. La cuestión del nuevo nombramiento de los obispos se resolvió a satisfacción de Napoleón, ahorrándole al papa el problema de una vergonzosa concesión: los obispos dimitirían *en bloc* y, tras su nombramiento por el primer cónsul, serían reinstaurados por el papa en sus sedes (a cuyo fin este publicó dos bulas, una para los juramentados y otra para los no juramentados). Además, Napoleón consiguió que los obispos y los clérigos (estos últimos nombrados por los obispos) recibieran un salario del Estado, en tanto que todo el clero tendría que prestar juramento de lealtad al go-

bierno, pero no a la Constitución, como en 1790. Por último, se encontró una elegante fórmula para facilitar al papa la aceptación del hecho de que la Iglesia hubiera sido despojada de sus tierras; esto era muy importante, ya que Napoleón no hubiera podido convencer a los compradores de las propiedades eclesiásticas, enriquecidos por la Revolución, de que aceptaran el arreglo de otra manera.

De este modo, el Concordato parecía una solución de compromiso, aunque, en todos los puntos esenciales, el primer cónsul había obtenido lo que quería. Aun así, tuvo necesidad de emplear todo su prestigio, reforzado por la Paz de Amiens, que se acababa de firmar con Inglaterra, para vencer la fuerte resistencia dentro del Tribunado y del Consejo de Estado y entre los generales. La crítica más seria era la que señalaba que, a pesar de la fórmula del acuerdo, el catolicismo romano se había convertido de nuevo en la única religión oficial del Estado. A fin de paliar este defecto se decidió, sin buscar sanción papal alguna, añadir al Concordato dos series de leyes orgánicas, una de las cuales era una carta de libertades protestantes, en tanto que la otra colocaba a la Iglesia galicana más decididamente que nunca bajo el control del poder secular.

Aun sin contar los problemas ocasionados por las leyes orgánicas, el entendimiento entre el papa y el emperador no resultó sencillo. Las relaciones resultaron especialmente tensas en virtud de la exigencia de Napoleón de extender su poder sobre la totalidad de Italia, incluyendo los Estados Pontificios. En 1809, Francia se anexionaba Roma y se arrestaba al papa en el Vaticano, al que únicamente se le permitiría volver tras cinco años de cautividad, primero en Sayona y luego en Fontainebleau. Sin embargo, todas estas disputas tenían como objeto asuntos temporales y el Concordato no se revocó nunca, ya que servía a los propósitos de ambas partes: el papa había devuelto al redil a la más

preciada de las iglesias cristianas, en tanto que Napoleón se había asegurado la lealtad de todos aquellos súbditos suyos que ponían la autoridad del sacerdote por encima de la del emperador. Fue este un arreglo que sobrevivió a una larga serie de gobiernos y constituciones; la Iglesia y el Estado quedaron reunificados en Francia, según la fórmula napoleónica, durante los siguientes cien años.

XIII. EL IMPERIO NAPOLEÓNICO

Hasta 1803, Napoleón aparecía ante los ojos de sus súbditos como el pacificador que, además de asegurar las «fronteras naturales» de Francia, había puesto fin a la guerra con Europa en términos beneficiosos para Francia y conseguido una paz también favorable en Lunéville y Amiens. En 1803 volvió a estallar la guerra contra Inglaterra, si bien esta no se convirtió en una guerra general hasta dos años después. A partir de este momento, Francia tendría que acostumbrarse a la otra imagen del emperador: no el pacificador, dedicado a promulgar nuevas leyes y constituciones, sino el conquistador, el fundador de un nuevo imperio, cuyo dominio se extendía sobre la mayor parte de Europa.

Se puede discutir interminablemente si la guerra contra Inglaterra y la conflagración general en que desembocó poco después eran inevitables o si se hubieran podido obviar mediante habilidad diplomática y buena voluntad. En conjunto, esta segunda posibilidad parece poco realista. Una vez que Francia inició su política de expansión, hasta alcanzar primero y luego rebasar sus «fronteras naturales», ya no podían existir límites absolutos a las exigencias territoriales francesas en Europa. Por otro lado, la situación existente, especialmente en Italia, suponía una invitación constante para que Napoleón interviniera imponiendo nuevas soluciones. Además, no era propio de su carácter aceptar como definitivos acuerdos sostenidos en un equilibrio tan inestable como los que se firmaron con Austria en 1801 y con Inglaterra un año después. Como él mismo admitió: «En la situación actual, cualquier tratado de paz no significa para mí más que un breve armisticio». Tampoco debe olvidarse que, por su parte, Inglaterra tenía ambiciones coloniales que únicamente podían realizarse mediante la guerra con Francia. Por último, aun excluyendo estas consideraciones gene-

rales, la paz firmada entre Francia e Inglaterra en Amiens resultaba demasiado precaria para ser duradera. A fin de tomarse un respiro, Pitt había aceptado las «fronteras naturales» de Francia, incluyendo, por supuesto, la ocupación de Bélgica. Mas pocos meses después el emperador anexionaba el Piamonte, Parma y Elba, era elegido presidente de una República italiana recientemente constituida, encontraba nuevos pretextos para proseguir la ocupación de Holanda, intervenía contra los príncipes católicos en Alemania e imponía una nueva Constitución en Suiza. De este modo, a los seis u ocho meses de la Paz de Amiens, el equilibrio de fuerzas en Europa había cambiado aún más a favor de Francia. Además, Napoleón daba muestras de embarcarse en una nueva fase de expansión colonial: había comprado Luisiana a España, enviado una expedición a Santo Domingo (que resultó ser un fracaso) e incluso parecía estar planeando un ataque a la India y Egipto. En consecuencia, Inglaterra, que se había comprometido a ceder Malta por el acuerdo de Amiens, se negó a hacerlo y, animada por el apoyo de Rusia, presentó un ultimátum a los franceses. Evidentemente, no era Napoleón, sino la «pérfida Albión» quien violaba el tratado y provocaba la guerra que estalló de nuevo en mayo de 1803.

Era inevitable que la guerra se desarrollara en el mar, puesto que las otras potencias europeas aún no participaban en ella; y en el mar Inglaterra gozaba de considerables ventajas. La marina francesa no había conseguido recuperarse nunca de la catástrofe que para ella supuso la Revolución. Depuestos, eliminados en los motines o emigrados a cientos los antiguos oficiales aristocráticos, las Asambleas revolucionarias no habían conseguido encontrar un Carnot que asegurara la eficacia y el uso de la táctica moderna o que buscara a nuevos almirantes para mandar los barcos, a pesar de los esfuerzos realizados para llenar los huecos. La debilidad de Francia en la guerra en el mar se había puesto

de manifiesto por su imposibilidad de prestar ayuda a la rebelión irlandesa y, más tarde, por el desastre en que había de acabar la expedición de Napoleón a Egipto. A partir de esta expedición, los barcos franceses habían estado pudriéndose en los puertos. El único almirante francés de categoría, Latouche-Tréville, que había proporcionado brillante apoyo a los «patriotas» de Napoleón en diciembre de 1792, murió en el verano de 1804, poco después de que comenzaran las operaciones más importantes en aquella fase de la guerra. Al comienzo de la guerra, Inglaterra tenía 55 barcos de línea, en tanto que los franceses tenían 42, de los cuales únicamente 13 estaban dispuestos para prestar servicio. Así pues, al poco tiempo los ingleses dominaban los mares: bloquearon los puertos franceses y recuperaron las islas del Caribe de Santa Lucía y Tobago, así como la Guayana holandesa. La única esperanza que tenía Napoleón de inclinar la balanza a su favor era atacar el mismo Londres, que, una vez cruzado el Canal, estaría débilmente defendido; a finales de 1803 comenzó a prepararse para una invasión de Gran Bretaña, reuniendo una flotilla de varios cientos de gabarras y un gran ejército –el «Ejército de Inglaterra»– en Boulogne, el cual habría de pasar el Canal con auxilio de la flota francesa. «Si dominamos los estrechos durante seis horas», escribía a Latouche-Tréville, «dominaremos el mundo». Después de la muerte de Tréville, se arrinconó de momento el proyecto, mas la entrada de España en la guerra como aliada de Francia a finales de 1804 le animó a revivirlo. Villeneuve, el nuevo comandante de Tolón, recibió órdenes de evitar la flota de Nelson en el Mediterráneo, zarpar hacia Martinica escoltado por una escuadra española y, una vez allí, unirse a otras escuadras francesas, al mando de Ganteaume, procedente de Brest y Rochefort. El plan era atraer a la flota inglesa al Caribe, forzarla a dispersarse y volver luego, como fuerza conjunta hasta el Canal, donde,

una vez asegurado el dominio temporal del mar, ayudarían a escoltar a las gabarras de invasión a Inglaterra.

Aunque comenzó bien, el plan fracasó. Villeneuve zarpó de Tolón el 30 de marzo de 1805, evadió con éxito a Nelson y alcanzó la Martinica el 14 de mayo, en tanto que Nelson, que no estaba seguro de si los franceses se habían dirigido hacia el oeste o hacia el este, no alcanzó las Indias Occidentales hasta el 4 de junio. Pero Ganteaume no consiguió romper el bloqueo británico en Brest, y Villeneuve, tras aguardar los cuarenta días convenidos, y alarmado ante la proximidad de Nelson, zarpó, como se le había dicho, hacia El Ferrol, en el norte de España. Aunque el plan se hubiera seguido paso a paso, habrían surgido problemas considerables en su ejecución, algunos incluso insuperables. ¿Cómo iba a coordinar Villeneuve sus movimientos con los de Ganteaume? Toda la flota británica estaba entre los dos; además, existía el problema de encontrar un viento adecuado, ya que el viento que acercara a Villeneuve a Brest tendría un carácter completamente distinto para Ganteaume, que intentaba salir de allí. Para acabar de complicar las cosas, Nelson se las arregló para informar al Almirantazgo de los planes de Villeneuve y un destacamento de la flota principal del Canal estaba esperando para interceptarle. Este destacamento le obligó a buscar puerto más al sur de su objetivo: primero en Vigo y después en La Coruña. Aquí le esperaban mayores calamidades. Cuando un día salía de La Coruña hacia el Norte, creyó divisar a la flota inglesa, aunque no se trataba más que de una flota francesa, al mando de su colega el almirante Allemand. A fin de evitar un encuentro (con los peligros de un fuerte viento del Nordeste que se había levantado), el cauto Villeneuve puso proa hacia el Sur, yendo a amarrar a Cádiz el 20 de agosto. Esto sellaba el destino de toda la expedición. El error se debió a Napoleón, más que a Villeneuve; el 20 de octubre, cuando Villeneuve salió de Cádiz siguiendo órdenes del emperador,

ya no lo hacía para reunirse con las fuerzas de Ganteaume en Brest, sino para proporcionar apoyo naval a los franceses en el Mediterráneo. La gran victoria de Nelson en Trafalgar poco después, que desbarató eficazmente las flotas conjuntas de Francia y España, no contribuyó a hacer que Napoleón abandonara su plan de invasión. Esto se había decidido dos meses antes; el 24 de agosto el emperador dio órdenes a Berthier, jefe de su Estado Mayor, para que levantara el campo; en cuanto al «Ejército de Inglaterra», rebautizado ahora con el nombre de Gran Ejército, iba a resultar de mayor provecho marchando sobre Europa Central. Había comenzado la segunda fase de la guerra.

La tercera coalición contra Francia –que se formó entre abril y agosto de 1805– no era en absoluto un resultado ineluctable. Aunque Napoleón sostenía que era inevitable, ni Prusia, ni Austria, ni Rusia –que se unirían con Inglaterra poco después para constituirla– tenían intenciones claras de saldar viejas cuentas con Francia, atacar sus «fronteras naturales» o atentar contra el equilibrio alcanzado en la Paz de Lunéville. Inglaterra no estaba en situación de tomar la iniciativa en el continente y sus futuros aliados interpretaban la guerra de aquella contra Francia como un asunto privado entre dos enemigos marítimos. Por otro lado, Rusia no aceptó nunca del todo la ocupación inglesa de Malta. Prusia se había retirado de la primera coalición en 1795 a fin de tomar parte en el reparto de Polonia y no participó en la segunda; su gobernante, Federico Guillermo III, cauto y vacilante, prefería conservar intactas sus fuerzas y, además, se sentía atraído por el señuelo de Hannover, que el emperador le ofrecía. Austria estaba agotada financieramente y, aunque había perdido Bélgica y las provincias italianas en Campoformio y Lunéville, no parecía dispuesta a renovar la disputa, siempre que se la dejara libre para consolidar las posesiones de los Habsburgos y mantener su influencia en el sur de Alemania; además, la renovación de las

exigencias rusas en Turquía y Polonia la tenían preocupada. En realidad, de todos los futuros aliados de Inglaterra, Rusia era la única cuyas ambiciones, por el momento, la enfrentaban con Francia. A diferencia del emperador, el joven zar Alejandro era un hombre dotado de una ambición incansable y poco firme; sus consejeros más íntimos en aquella época le predisponían hacia la alianza con Inglaterra, la unidad de Polonia bajo soberanía rusa, la mediación entre Francia e Inglaterra y la contención de la influencia creciente de Francia en Europa Central. Por supuesto, esta política no era compatible con la alianza que el emperador le ofrecía. Aparte de las ambiciones de Alejandro, las propias medidas agresivas de Napoleón y su completo desinterés por cualquier equilibrio europeo parecían calculados para alarmar no solamente a Rusia, sino también a Austria y Prusia. Después de haber recomenzado la guerra contra Inglaterra, se había apoderado de Hannover, establecido guarniciones francesas en Nápoles y renovado sus amenazas sobre Egipto, todo lo cual lo veía Rusia como una amenaza para sus intereses en Turquía y Alemania. En consecuencia, Alejandro comenzó a negociar con Pitt en septiembre de 1804 y en la Convención anglo-rusa de abril de 1805 tomó forma una alianza encaminada a expulsar a Francia de Bélgica y de los territorios del Rin. Austria se enfrentaba a Francia también a propósito de las reivindicaciones opuestas de los príncipes y del emperador Habsburgo en el sur de Alemania; Baviera llamó en su auxilio a Francia, quien inmediatamente firmó tratados con ella y con Würtemberg y Baden. Austria se vio obligada a buscar un acuerdo con Rusia, acuerdo que se mantuvo inactivo hasta que Napoleón violó el Tratado de Lunéville y alteró aún más el equilibrio en Italia. En marzo de 1805 aceptó la corona del reino de Italia, de reciente creación, y accedió a la petición de Génova de anexionarse a Francia. Así, el emperador de los franceses (título que ya era bastante ofensivo para el sacro emperador

romano en Viena) daba la impresión de codiciar claramente la corona imperial de Carlomagno. Austria se unió a la coalición anglo-rusa en agosto e invadió Baviera en septiembre. De momento, Prusia permaneció neutral.

El Gran Ejército que salió de Boulogne el 26 de agosto era, probablemente, el mejor que Napoleón había llevado a la batalla: las tropas más aguerridas de Europa, a pesar de que estaban mal pagadas, mal calzadas y peligrosamente escasas de munición; todo lo cual ilustra la parsimonia del emperador, sus métodos improvisados y su fe en una rápida victoria. Tras invadir Baviera, con 60.000 hombres, el general austriaco, Mack se retiró hacia el Danubio, donde esperaba enlazar con los rusos al mando de Kutusov, quien estaba protegiendo Viena. Pero tal fue la rapidez de Napoleón que, a fines de septiembre, había atravesado el Rin con 190.000 hombres y rodeado a Mack en Ulm el 20 de octubre, obligándole a rendirse con 50.000 hombres. Los rusos se retiraron y Napoleón ocupó Viena, donde abrió conversaciones para establecer la paz. Pero los austriacos no tenían prisa en firmar, porque sus aliados rusos disponían de 90.000 hombres y, además, el zar había convencido en Potsdam a los prusianos para que se comprometieran a una mediación armada, cosa que ignoraba el emperador francés. El zar Alejandro, que había tomado el mando de las tropas austro-rusas, se hacía ilusiones de ser un comandante, y a un jefe de Estado Mayor incompetente le costó poco trabajo convencerle de que Napoleón estaba en una posición de debilidad y podía ser derrotado con facilidad. Seducido con la perspectiva, el zar se dejó atraer a la aldea de Austerlitz, en Moravia, donde Napoleón, en su victoria más decisiva, dividió su ejército en dos y le infligió una pérdida de 27.000 hombres (2 de diciembre de 1805). A partir de este momento, los aliados se desmoralizaron y Francisco II firmó la paz de Presburgo (27 de diciembre), por la que perdía Venecia, el Tirol, Voralberg y sus últimos territorios en Alema-

nia, al reconocer como reinos independientes a Baviera, Baden y Würtemberg. Los prusianos, a su vez, firmaron una alianza con Francia y aceptaron cambiar Neuchatel y Anspach por Hannover, codiciada de antiguo.

Sin embargo, Prusia se encontraba al poco tiempo ante la incómoda alternativa de convertirse en un humilde vasallo de Napoleón o de luchar contra él en solitario. En febrero de 1806, Federico Guillermo se vio obligado a ceder el ducado de Cleves y a cerrar sus puertos a los ingleses; en julio, la creación de la Confederación del Rin, bajo la protección de Napoleón, le arrebató toda esperanza de desempeñar una función dirigente en Alemania; por último, se murmuraba que, con el fin de apaciguar a Inglaterra, Napoleón tenía intenciones de devolver la independencia a Hannover. En agosto, Prusia movilizó a su ejército y, dos meses más tarde, envió un ultimátum a Francia para que retirara sus tropas al otro lado del Rin. Aun en estas condiciones, la victoria de Napoleón fue sorprendente, por su rapidez y magnitud: los prusianos, al igual que los franceses, llevaron a la batalla 130.000 hombres, un ejército que todavía iba aureolado por la gloria de Federico el Grande; pero debido a la lentitud de movimientos y al mando de los viejos oficiales, que no habían aprendido nada de las guerras revolucionarias, el ejército prusiano quedó desbaratado en el curso de una campaña de tres semanas. Napoleón ganó las dos batallas de Jena y Auerstädt, avanzó rápidamente y ocupó Berlín. Federico Guillermo buscó refugio en Königsberg, mientras Napoleón, prometiendo a los polacos la restauración de su independencia nacional, enrolaba a 30.000 de estos y se preparaba para enfrentarse con los rusos.

Luchando por primera vez en las condiciones desconocidas de la Europa del norte, el ejército francés únicamente arrancó una escasa victoria tras la sangrienta batalla de Eylau (febrero de 1807), pero pudo coger desprevenido al ge-

neral ruso Bennigsen en Friedland (junio), infligiéndole una pérdida de 25.000 hombres. Inesperadamente, Alejandro reclamó un armisticio, lo que, más que a los éxitos militares franceses, se debía a sus crecientes dificultades con sus aliados ingleses y prusianos. Lo que aún resulta más sorprendente es que se dice que, fascinado por la personalidad de Napoleón, no solamente hizo la paz con él, sino que firmó una alianza con el emperador en Tilsit, en julio de 1807, por el que los dos dirigentes se dividían prácticamente todo el continente en dos esferas de influencia: el Oeste para Napoleón y el Este para Alejandro, al que se dejaba mano libre en Suecia y Turquía. Entretanto, había que arrebatar a Prusia sus provincias occidentales y polacas e Inglaterra debía morder el polvo, obligándola a reconocer la «libertad de los mares», teoría que venía ya discutiéndose desde mucho antes.

La campaña de 1805 a 1807 fue una sucesión de éxitos asombrosos para Napoleón, quien, aunque él no lo sabía aún, se encontraba en el pináculo de su fama y de su fortuna. Pero aquella campaña también había traído problemas: ¿cómo digeriría sus conquistas y cómo las utilizaría para asestar el golpe decisivo a Inglaterra? La respuesta a la primera vendría dada por su organización del gran imperio y la respuesta a la segunda por el bloqueo económico a Inglaterra, conocido con el nombre de Bloqueo Continental.

Como ya vimos, desde 1799 Napoleón venía siguiendo la política mercantilista y restrictiva de sus predecesores, excluyendo las mercancías inglesas de Francia y de sus «fronteras naturales»; ello coincidía con sus propias opiniones mercantilistas y con los intereses proteccionistas de la industria textil francesa, que, desde 1793, había podido, por fin, liberarse del tratado de «Libre Comercio» firmado con Inglaterra en 1786. A partir de la renovación de la guerra, se extendió el bloqueo a lo largo de toda la costa, hasta

Hannover. Sin embargo, ni el bloqueo original ni su ampliación fueron adoptados en un principio como arma de la guerra económica que, al desmantelar el comercio inglés, haría arrodillarse a aquella nación. El mar Báltico y el Adriático, por no hablar del Atlántico, estaban aún abiertos a la navegación británica y Napoleón no se tomó demasiado interés en interceptar los barcos neutrales que transportaban mercancías inglesas, como había hecho el Directorio en 1798. Las conquistas de 1806 y 1807 hicieron cambiar el panorama: ahora surgía la oportunidad de cerrar el continente a la navegación y al comercio ingleses, siempre y cuando colaboraran los españoles, los portugueses, los rusos y los austriacos. «Quiero conquistar el mar mediante el control de la tierra», decía Napoleón. Como primer paso, promulgó el Decreto de Berlín de noviembre de 1806, que declaraba a las Islas Británicas «en estado de bloqueo», prohibía todo comercio con ellas y ordenaba la captura de todas las mercancías que fueran o vinieran de Gran Bretaña y sus colonias. Después de Tilsit, tanto Austria como Rusia acordaron adherirse al bloqueo. En represalia, los ingleses tomaron medidas para protegerse y reafirmar su monopolio en contra de las crecientes intromisiones de los países neutrales: por las órdenes del Consejo de noviembre y diciembre de 1807, todos los países neutrales que comerciaban con el continente tenían que obtener un permiso y pagar derechos sobre sus cargamentos en los puertos ingleses; si no se hacía así, se requisarían sus barcos, como precio legal. A su vez, Napoleón replicó ampliando los efectos de su bloqueo continental; sus decretos posteriores de Fontainebleau y Milán (octubre y diciembre de 1807) amenazaban a todos los barcos neutrales que obedecieran las órdenes del Consejo con su confiscación en puerto o en alta mar, como propiedades británicas. De este modo, para los franceses, ya que no para los ingleses, el bloqueo pasó de ser una medida proteccionista para restringir las importaciones de una na-

ción comercialmente rival, a ser un arma en la guerra económica. El objetivo ya no era proteger a las industrias de Francia y conservar sus reservas de metales preciosos, aunque este objetivo no se abandonó nunca del todo, sino obligar a Gran Bretaña a rendirse, ahogando su comercio y privándole de su oro.

Mientras Inglaterra siguiera siendo la dueña de los mares, este proyecto estaría lleno de dificultades y peligros, ya que Napoleón no podía considerar en ningún momento la posibilidad de cercar por hambre a Inglaterra y obligarla a la rendición, aislándola de sus colonias y de sus alimentos y materias primas procedentes de ultramar. Sin embargo, un tercio de sus exportaciones directas y tres cuartas partes de sus reexportaciones se dirigían normalmente a Europa; si el continente se cerraba a la navegación, el comercio y la economía ingleses tendrían que resentirse. Al principio, la situación se presentó tan desfavorable que, en 1807, Inglaterra se abrió camino una vez más hacia el Báltico, bombardeando Copenhague y apoderándose de la flota danesa. Esto resultó ser una victoria parcial y, durante 1808, el comercio británico con Europa (incluso por medio de navíos neutrales) descendió considerablemente; y no solamente con Europa, ya que los americanos, que entendieron las órdenes del Consejo como una provocación, colocaron bajo embargo las mercancías inglesas y, aunque el embargo se levantó un año después, la confiscación de los barcos neutrales por los ingleses condujo a una guerra con los Estados Unidos en 1812. El retroceso que sufrió su comercio con Europa en 1808 indujo a Inglaterra a suavizar las consecuencias de las órdenes y a expedir licencias a todos los navíos neutrales que comerciaban con el continente: entre 1807 y 1812 se expidieron más de 44.346 licencias y casi 26.000 de ellas únicamente en 1809 y 1810[1]. La desaparición repentina de los obstáculos dio buenos resultados en su comienzo, pero a partir de la primavera de 1810 y hasta el fracaso de

la campaña rusa de Napoleón a finales de 1812, el Bloqueo Continental, que por entonces alcanzaba su máximo rigor, afectó duramente al comercio y la industria británicos y elevó el precio del pan. El momento más peligroso para toda Gran Bretaña fue cuando, en 1811, se produjo una crisis económica, a consecuencia de una mala cosecha que dejó tras de sí masas de parados, descensos en los salarios, motines luditas y una grave escasez de alimentos. La total supresión de los suministros del continente hubiera sido fatal para la supervivencia de Inglaterra, pero Napoleón no supo aprovechar esta ventaja. Cegado por sus prejuicios mercantilistas, nunca consideró que fuera una parte necesaria de su plan privar a Gran Bretaña de los suministros alimenticios. En 1810, más del 80 por 100 de las importaciones de trigo de Inglaterra procedían de Francia y de sus aliados y, en 1811, fue precisamente el grano continental el que le proporcionó el respiro necesario para recobrarse de la crisis.

Sin embargo, el año de 1811 fue una excepción; en cualquier otro momento, el bloqueo –a pesar de sus efectos impresionantes– no habría podido resultar fatal para su víctima, porque, como Inglaterra mantenía abiertas sus vías de comunicación, encontró otros mercados para reemplazar a los antiguos: Buenos Aires en 1806, Brasil en 1808, el Próximo Oriente, a consecuencia de un acuerdo comercial con Turquía, en 1809 y también el Báltico, en 1810. Al mismo tiempo, viendo los aliados de Napoleón que su comercio se estancaba y que sus puertos declinaban, comenzaron a escapar a su dominio: en 1809, Turquía, España, Portugal y las colonias españolas; un año más tarde, Rusia; e incluso Holanda, bajo Luis, hermano del emperador, continuó abierta a las manufacturas inglesas hasta 1810. Por otro lado, no solamente los vasallos y aliados de Napoleón comenzaban a reaccionar con vigor contra las restricciones comerciales que les imponía el bloqueo, sino también los mismos franceses: tal fue el caso, en particular, del Decreto de Fon-

tainebleau de octubre de 1810, que creaba tribunales especiales que juzgarían los casos de contrabando y ordenarían la quema pública de las mercancías inglesas alijadas. En parte como respuesta a estas presiones, y en parte con el fin de atender a sus propias necesidades financieras y militares, Napoleón, al igual que hicieron los ingleses antes que él, comenzó a vender licencias para exportación al enemigo. Iniciados en marzo de 1809, los decretos de St. Cloud y Trianon de 1810 regularizaron el nuevo bloqueo. De este modo, aunque Francia sufrió una crisis económica en 1811, sus intereses comerciales quedaron parcialmente a salvo; pero no los de sus aliados, ya que Napoleón solo daba licencias a los franceses y, excepcionalmente, a los americanos, y los intereses de Francia recibían siempre prioridad sobre los de sus vecinos. En realidad, cabe preguntarse si, a largo plazo, el bloqueo y el contrabloqueo inglés resultaron tan perjudiciales para Inglaterra como lo fueron para Francia. En Inglaterra, seguramente la consecuencia fue un descenso temporal del índice de crecimiento industrial y un desplazamiento de las inversiones hacia otros campos[2]; en Europa, sin embargo, produjeron un indecible resentimiento contra los franceses y contribuyeron decisivamente, como ya veremos, a establecer la cadena de acontecimientos que, pasando por Portugal, España y Rusia, condujo a la caída del Imperio.

Poco a poco, el Gran Imperio, con su red de territorios anexionados, satélites y principados vasallos, iba tomando forma. Desde 1802, y bajo la presión de las armas y la diplomacia francesas, las fronteras de Europa habían sufrido cambios frecuentes y radicales. Estos cambios reflejaron, en sus diferentes momentos, la transición de la República al Imperio en Francia, las ambiciones dinásticas de Napoleón y las necesidades bélicas del Bloqueo Continental. En la medida que seguían algún plan, estaban inspirados por el recuerdo de la monarquía universal de Roma o Carlomag-

no, más que por cualquier precedente moderno; y lo último que reflejaron –a pesar de las protestas posteriores del emperador en Santa Elena– fue el deseo profundo de satisfacer las aspiraciones nacionales de los pueblos europeos. A Napoleón no le repugnaba, sin embargo, explotar estos sentimientos cuando lo juzgaba productivo, como hizo en sus tratos con los italianos y los polacos. En Italia, la creación de la República Cisalpina hizo que los «patriotas» alimentaran algunas esperanzas en 1796, aunque Venecia hubiera pasado temporalmente a Austria y se hubiera anexionado el Piamonte, negándole la independencia. Las esperanzas nacionalistas resucitaron cuando la República Cisalpina cambió su nombre por el de República Italiana; pero todo ello se vino abajo con la coronación del emperador en Francia. En 1805 surgía el reino de Italia, gobernado en nombre de Napoleón por su hijastro, Eugenio de Beauharnais; hacia 1810 se habían ampliado sus territorios hasta el Adriático, incluyendo Venecia (arrebatada a Austria en 1806), las Marcas, Ancona y Trentino. Entre tanto, el Imperio francés había engullido Génova en 1805, Parma, Piacenza y Toscana (el efímero reino de Etruria) en 1808 y, en 1809, los Estados Pontificios y las Provincias Ilirias, a lo largo del Adriático, incluyendo Carintia, Croacia y Dalmacia. En 1806, el reino de Nápoles (el que fuera República Partenopea) pasó a José Bonaparte y, en 1808, cuando José se trasladó a España, a Murat, como esposo de la hermana del emperador, Catalina. Todos estos territorios parecían destinados a ser posteriormente absorbidos por el Imperio francés cuando, en 1811, el hijo del emperador, junto a su segunda esposa, María Luisa de Austria, recibió el título de rey de Roma. En aquel momento, y aparte de algunos enclaves vasallos, como Luca y Piombino, Italia se dividía en cuatro partes principales: el territorio imperial francés, que se prolongaba a lo largo de la costa mediterránea, más allá de Roma; los reinos satélite de Italia en el Nordeste y Nápo-

les en el Sur; y los últimos bastiones antifranceses, mantenidos por la flota inglesa, de Sicilia y Cerdeña.

Al norte de Italia, la República Helvética se había convertido, por el cambio en las modas, en la Confederación Suiza. Flanqueados por el principado de Neuchâtel, en manos de Berthier, y por los cantones anexionados de Valais y Ginebra, sus otros 19 cantones estaban subordinados a Francia y dependían de su protección. Aún más al norte se encontraban las provincias renanas y Bélgica, que, desde 1795, estaba incluida dentro de las «fronteras naturales». Al norte de Bélgica, la República Bátava había sido conferida en 1804 al hermano mayor de Napoleón, Luis, con el nombre de reino de Holanda; mas Luis se mostró excesivamente blando en relación con los intereses de sus súbditos y Holanda quedó anexionada a Francia cuando aquel perdió el trono en 1810.

A diferencia de Italia y de los Países Bajos, durante sus primeras conquistas Napoleón dejó intactas las fronteras y el sistema político de Alemania allende el Rin. Sin embargo, la campaña de 1805 a 1807 provocó cambios radicales. El primer paso fue la aparición, en julio de 1806, de la Confederación del Rin, formada al principio por 16 y luego por 18 príncipes alemanes que se situaron bajo protección francesa. Entre los participantes se encontraban los gobernantes de Baviera, Baden y Würtemberg, que habían aumentado sus posesiones a expensas de Austria; más tarde se les añadió Sajonia; por último, la Confederación llegó a extenderse desde el Ducado de Mecklenburgo, en el norte, hasta el Tirol, en el sur. Muchos de sus miembros, los antiguos gobernantes hereditarios, eran nominalmente independientes, pero algunos de ellos, que le debían su situación a Napoleón, también le adeudaban una lealtad más estrecha. Así, el Gran Ducado de Berg, arrebatado a Prusia en 1806, se le concedió primero a Murat y, tras el traslado de este a

Nápoles, en 1808, al sobrino del emperador, el infante Luis; entre 1807 y 1810 se formó el reino de Westfalia, con partes de Hannover, Brunswick, Hesse-Cassel y las provincias renanas cedidas por Prusia después de Tilsit y entregadas al más joven de los hermanos de Napoleón, Jerónimo. El imperio francés se había extendido en 1811 más allá de la frontera holandesa, englobando los puertos hanseáticos de Bremen, Lübeck y Hamburgo y el Ducado de Oldemburgo, de modo que la costa norte imperial alcanzaba el mar Báltico, allende la frontera sur danesa.

Mientras que la nueva Confederación servía de contrapeso al truncado reino de Prusia en el Norte y de Austria en el Sur y en el Este, la Polonia prusiana se transformó en el Gran Ducado de Varsovia en 1807, bajo el mando del rey de Sajonia. Esta nueva organización proporcionó al Imperio un cojín amortiguador frente a Rusia (tanto más eficaz cuanto que se podía engañar a los polacos con el señuelo de la independencia) y al emperador una nueva amante, la encantadora condesa María Walewska. Así pues, en vísperas de la campaña de Rusia de 1812, el Gran Imperio y sus satélites aparecían como un conglomerado de estados entrelazados. El corazón del mismo Imperio francés abarcaba desde Hamburgo, en el Norte, hasta Roma en el Sur; dividido en 130 departamentos, tenía una extensión de más de un millón de kilómetros cuadrados y comprendía una población de 44 millones de habitantes. Más allá del Imperio, hacia el Este y el Sur, había una gran cantidad de Estados vasallos y satélites, algunos gobernados por el clan Bonaparte y otros por príncipes protegidos del emperador, independientes desde un punto de vista nominal, pero incapaces de afirmar su independencia aunque hubieran querido hacerlo. Había dos Estados más que recibían esta denominación en teoría, sin que la práctica lo justificase: eran Suecia en el Norte, donde Bernadotte, elegido príncipe gracias a la influencia francesa en 1810, ya estaba planeando una traición,

y España en el Sur, donde José, enviado a ocupar un trono vacante en 1808, pronto se encontró con que era un rey sin reino[3]. Al margen de este sistema había un grupo de potencias continentales –Austria, Dinamarca y Prusia– nominalmente iguales e independientes, pero cuya alianza, debido a la preponderancia militar francesa, podía, según la ocasión, exigirse, comprarse o ganarse con halagos. En realidad, Prusia perdió su insegura independencia en 1812 y se convirtió en otro Estado vasallo.

Al principio, Napoleón soñaba con la posibilidad de imponer un cierto grado de uniformidad política sobre sus conquistas, pero como estas eran el producto de unas guerras y servían a los objetivos de otras, estaban sujetas a continuas transformaciones y cambios políticos. A pesar de todas sus variaciones internas, llevaban la huella de la mentalidad ordenancista y autoritaria de su creador y de los cambios constitucionales en la misma Francia. Era improbable que, una vez asumidos poderes dictatoriales en Francia, Napoleón dejara intactas las instituciones representativas de las «repúblicas hermanas» o de sus sucesores. A partir de 1800 se inició un proceso caracterizado por la tendencia a restringir los derechos de los electores, marginar a los demócratas, conceder los puestos principales de autoridad a los «notables» y aristócratas, fortalecer el ejecutivo y centralizar más aún la administración. En la República italiana de 1802, un conjunto de colegios electorales designados eclipsó el sufragio popular y cuando la República se convirtió en monarquía en 1805, la Legislatura desapareció por completo. En la Francia imperial se abolió el Tribunado en 1807, raramente se convocó la Legislatura y, una vez cumplida su tarea en lo relativo al Código Civil, el Consejo de Estado quedó reducido a sus funciones puramente judiciales. Esto marcó el camino de las nuevas constituciones del Gran Imperio y en las que se redactaron en 1807 y 1808 para los reinos de Westfalia y Nápoles el emperador reveló por prime-

ra vez su auténtica intención de prescindir por completo del principio electivo. Dentro del cuadro de libertades que podía tolerar el emperador –entre las que figuraban la tolerancia religiosa y el libre comercio interno– no se incluía, por supuesto, la libertad de expresión política o el auténtico derecho al sufragio. «Resulta ridículo –escribía a Jerónimo– que cites contra mí las opiniones del pueblo de Westfalia. Si atiendes a la opinión popular, nunca harás nada. Si el pueblo rechaza su propia felicidad, el pueblo es culpable de anarquía y merece ser castigado.»

Era inevitable que, en un Imperio construido como aquel lo estaba, la «felicidad» del pueblo incluyera las visitas casi continuas del empleado de aduanas, el sargento de la conscripción y el recaudador de impuestos. Estas consideraciones tenían gran importancia en los cálculos del emperador. No obstante, aun negando el derecho a la democracia o al sufragio popular, al igual que negaba el de la autodeterminación, Napoleón buscaba siempre la realización de medidas radicales de reforma política y social en los países que se hallaban bajo su dominación y ello porque, por una parte, consideraba oportuno coquetear con los campesinos y la clase media, y, por otra, porque le cuadraba, en su calidad de heredero de la Revolución, pasear por Europa aquellos principios de 1789 que no eran incompatibles con su autocracia o con sus necesidades militares. Al enviar a Jerónimo la nueva Constitución para el Reino de Westfalia en noviembre de 1807, escribe: «Lo que reclama impacientemente la opinión alemana es que los hombres sin distinción, pero de reconocida capacidad, tengan un derecho igual a tu favor y a tu empleo, y que desaparezca toda huella de servidumbre y de jerarquía feudal entre el soberano y la clase más baja de sus súbditos. Los beneficios del Código Napoleón, el proceso público y la aparición de los jurados serán los rasgos característicos de tu gobierno… ¿Quién deseará volver al gobierno arbitrario prusiano, una vez que haya ex-

perimentado los beneficios de una administración sabia y liberal?». Westfalia había de ser un modelo para la Confederación alemana, por el efecto que pudiera ejercer sobre la vecina Prusia y sus anteriores provincias. La receta prescrita para Jerónimo iba a ser la que, con algunas variantes, se aplicara en cada uno de los Estados anexionados o vasallos. Al igual que cualquier «déspota ilustrado», Napoleón trataba de centralizar y modernizar su gobierno, de fortalecer su autoridad (o la de su virrey), en contra de cualquier «cuerpo intermedio» entre el soberano y su pueblo. Por eso, solemos encontrar en los primeros puestos de sus listas de reformas para cada una de sus posesiones la construcción de carreteras y canales, las zonas aduaneras unificadas, sistemas unificados de justicia y pesas y medidas, economía en el gasto del gobierno, la institución de ejércitos nacionales, constituciones escritas, la secularización de las propiedades de la Iglesia y la clausura de monasterios. También encontramos reformas sociales que nos recuerdan las de José II, como tolerancia religiosa, derechos civiles para los judíos y –en casi todas partes– abolición de la servidumbre allí donde aún subsistía. Reformas de otra clase comprenden el Concordato, que prestó un servicio admirable, ganando partidarios y neutralizando opositores en la católica Bélgica, en Nápoles y en Alemania del sur y del oeste. Destruyó de modo más radical que cualquier otro «déspota ilustrado» las instituciones del Antiguo Régimen allí donde todavía estaban profundamente arraigadas e introdujo la igualdad ante la ley, el matrimonio civil y la educación secular, abolió los privilegios, las corporaciones, el diezmo y los derechos feudales y aplicó los nuevos derechos de herencia y propiedad que se encerraban en el Código Civil. Por encima de todo, el Código Civil había de ser la piedra de toque, la panacea universal. Se lo recomienda a Jerónimo como el medio de implantar en Alemania el sistema de jurados y el «procedimiento legal en un tribunal abierto»; y a José, rey

de Nápoles, le escribe: «Tienes que establecer el Código Civil… El Código Civil fortalecerá tu poder, ya que con él se suprimen todos los bienes vinculados y no podrá haber grandes propiedades, aparte de las que tú mismo crees». Así pues, se podían producir cambios de propiedad y de situación a capricho del gobernante, desde los antiguos propietarios exclusivos de bienes y privilegios heredados hasta los nuevos grupos sociales, enriquecidos por el comercio o la compra de tierras y con derecho a una participación total en las distinciones, de acuerdo con sus servicios prestados o su posición social dentro del nuevo Estado napoleónico. Pero no era cuestión de resucitar las viejas prácticas de 1793, ni los pequeños campesinos o los *sans-culottes* de las ciudades iban a tener más que migajas ocasionales en la redistribución de la propiedad y la riqueza.

Aunque este fue el modelo general, los cambios aplicados tendieron a ser más profundos en las zonas ya incorporadas durante el Directorio o el Consulado, o donde la existencia de una clase media culta favoreció su desarrollo. Tal fue el caso de Bélgica, los territorios del Rin, Ginebra, y las provincias de Liguria y el Piamonte en Italia. En todas estas zonas se aplicó el sistema napoleónico casi de modo uniforme, y las nuevas clases tuvieron el tiempo necesario para afirmarse y, aun teniendo que sufrir las consecuencias de los impuestos elevados, la ausencia de libertad política y las restriciones del Bloqueo Continental, beneficiarse del desarrollo económico, de las mayores posibilidades de progreso y de la abolición del diezmo y las obligaciones feudales sobre la tierra. Algunas de estas, además, estaban en buenos términos con el gobierno, merced a la reconciliación con Roma. Cualesquiera que fueran sus agravios secretos, estas clases jamás dieron muestras de intentar sacudirse el yugo napoleónico. En el Reino de Italia, el régimen llegó a establecerse sólidamente: la vieja aristocracia terrateniente resultó difícil de ganar, pero la burguesía y los funcionarios

milaneses, muchos de los cuales pertenecían a logias masónicas, se contaron entre los más leales partidarios del Imperio. En el resto de Italia –esto es, en Roma y en el sur– la situación fue bastante distinta. En Roma, el comercio se resintió y los sentimientos religiosos se encresparon por la ausencia del papa; resulta extraño que aquí el único apoyo de los franceses proviniese de la aristocracia liberal. Hasta Carolina, la hermana del emperador, escribía desde Nápoles que «toda Europa yace aplastada bajo el yugo de Francia». Por supuesto, la nobleza napolitana se negó a cooperar y los pequeños campesinos y el pueblo de las ciudades permanecieron recelosos –ya que eran demasiado pobres para poder beneficiarse de las reformas napoleónicas–, cuando no manifestaron abierta hostilidad, a instigación de los sacerdotes. Hasta los «patriotas» de la clase media se unieron a los airados nobles a partir de 1806 para formar sociedades secretas antifrancesas, como los *carbonari* o los *federati.* No obstante, la administración de Murat fue ilustrada y notablemente independiente y las reformas, aunque tardías, echaron firmes raíces, hasta el punto de que cuando regresó el rey Fernando, un Borbón, en 1815, no consideró aconsejable restaurar el feudalismo o derogar el Código Napoleón.

Holanda, al igual que Italia, sufrió una serie de cambios constitucionales desde su ocupación por los franceses en 1795; pero, a diferencia de Italia, contaba con una poderosa clase media fuertemente arraigada, carecía de servidumbre, tenía pocas reliquias medievales, su población era, por lo general, protestante y con la República Bátava se había constituido en un Estado unificado. Por esta razón, la administración napoleónica tuvo que hacer aquí menos cambios que en otras partes. A pesar de todo, los gremios, abolidos nominalmente en 1796, aún sobrevivían en Ámsterdam diez años más tarde; solamente en 1809 se abolió la discriminación fiscal contra los judíos, y el Código Civil no

se aplicó por entero hasta la incorporación de Holanda al Imperio francés, en 1810. Sin embargo, aún quedaban restos del Antiguo Régimen: con el fin de no disgustar a los terratenientes, nunca se llevó a término por completo la reforma agraria, como se hizo en Italia o en Francia; el diezmo se conservó como renta secular y no se redimieron los derechos señoriales.

Las provincias alemanas y polacas no entraron en el sistema napoleónico hasta después de 1805. En consecuencia, las reformas aquí fueron más apresuradas o más superficiales y, en general, se manifestó una tendencia mayor a hacer concesiones a los antiguos grupos e intereses, lo que se explicaba en función de las necesidades inmediatas y de la simpatía cada vez mayor con que el emperador miraba a la aristocracia. La primera provincia napoleónica que se estableció al otro lado del Rin fue el Gran Ducado de Berg, con algo menos de un millón de habitantes, formada entre 1806 y 1808 con un conglomerado de pequeños principados y obispados. Murat, su primer gobernante, centralizó la administración, unificó las aduanas, introdujo la conscripción y el impuesto sobre la tierra, medidas que consolidaron después los comisionados que le sucedieron en 1808. El Código Civil, empero, se implantó únicamente en 1811 y la Constitución (atribuyendo la autoridad a los «notables» designados directamente) en 1812; apenas si se tocaron las posesiones de la Iglesia; el Concordato no se aplicó; se abolieron la servidumbre, los derechos y servicios feudales, pero las rentas feudales fueron sometidas a redención y el emperador se puso del lado de los señores cuando los campesinos se negaron a pagar. En líneas generales, nadie quedó completamente satisfecho y la asimilación fue incompleta. En cambio, el reino «modelo» de Jerónimo, Westfalia, fue sometido desde el principio a una operación de limpieza gracias a la reforma napoleónica. Se proclamó una constitución en 1807; pronto surgió una administración centraliza-

da y unificada; se introdujeron el Código Civil y el sistema judicial francés; las tierras de la Iglesia pasaron a pública subasta; se abolieron las servidumbres, los privilegios y los gremios, si bien también aquí las rentas feudales y la *corvée* quedaron sometidas a redención, o se mantuvieron en contra de la resistencia de los campesinos. No obstante, la asimilación fue rápida y, en general, completa y aquí, como en Italia del norte, el régimen napoleónico encontró apoyo entre la aristocracia liberal y la burguesía profesional. No fue este el caso de la zona noroeste de Alemania, anexionada en diciembre de 1810 y situada bajo un gobierno militar cuya mayor preocupación fue erradicar el contrabando de las zonas costeras.

El Gran Ducado de Varsovia, formado con la Polonia prusiana después de Tilsit, presentaba sus propios problemas. Por un lado, los polacos, a diferencia de los alemanes, deseaban la independencia nacional. Por otro lado, la clase media era débil; la vida política y social estaba dominada por la nobleza, dentro de la cual descollaba un activo grupo liberal, nutrido de las ideas francesas y de Rousseau, que había impuesto la Constitución liberal de 1791. Para estos nobles, los franceses eran los liberadores de la tiranía y la agresión rusas y prusianas; ello concedía a Napoleón una clara ventaja, mientras pudo presentarse como el adalid del nacionalismo polaco y no hirió los intereses de la aristocracia, lo que hizo al crear un Estado unificado y mantener «libertades» que en otras partes se habían rechazado o abolido y dejar el sistema social esencialmente intacto. Después del breve gobierno del rey de Sajonia, nombrado por Napoleón, el Gran Ducado fue dotado de un gobierno central fuerte, un sistema judicial y una administración –con departamentos, comunas y prefectos– calcados de los franceses. La Iglesia se sometía a la autoridad del Estado, el gran duque nombraba a los obispos; una nueva Constitución garantizaba la igualdad ante la ley y la libertad de conciencia a to-

dos los ciudadanos; se implantó la conscripción y el Código Civil se aplicó a partir de 1810. De esta manera, y por primera vez en su historia, Polonia tenía un gobierno fuerte y una administración centralizada y comenzaba a crear un cuerpo de funcionarios públicos profesionales. El gobierno era autoritario, pero las aspiraciones políticas de la nobleza quedaban satisfechas con la existencia de una Dieta, que funcionaba normalmente y se componía, en su mayoría, de diputados nobles. Se abolió la servidumbre, aunque los campesinos poco ganaron con ello, puesto que se mantuvo el antiguo sistema de organización de las tierras, con sus derechos feudales, sus rentas y su *corvée,* y el diezmo y las propiedades de la Iglesia quedaron intactos. Además, para mitigar los temores eclesiásticos se privó a los judíos de parte de sus libertades constitucionales, suspendiéndoles sus derechos políticos e impidiéndoles comprar tierras. De toda esta operación fragmentaria, el principal beneficiario sería la baja nobleza, cuya lealtad –y no la de los magnates terratenientes o los príncipes de la Iglesia– aseguró a Napoleón el contingente polaco cuando fue a la guerra con Rusia en 1812.

La mayoría de los príncipes de la Confederación del Rin, que por entonces se extendía sobre la mayor parte de Alemania, eran nominalmente independientes y aliados de Napoleón, en lugar de vasallos. Por lo tanto, las reformas que se realizaron en sus territorios reflejaron las impuestas en el Gran Imperio únicamente en la medida en que se adaptaban a sus caprichos y antojos, o coincidían con sus obligaciones militares hacia el emperador. Así, en Mecklemburgo y Turingia se idearon métodos perfeccionados para reclutar tropas, pero la antigua sociedad aristocrática y el antiguo equilibrio entre la monarquía y la aristocracia quedaron inalterados y el rey de Sajonia, reformador por necesidad en Polonia, no lo fue en sus propios dominios hereditarios. Algunos de los príncipes, especialmente los del Sur, estaban

interesados en consolidar y asimilar sus adquisiciones recientes, tanto seculares como eclesiásticas, lo que les movió si no a imitar a Napoleón o a seguir sus consejos, por lo menos a emular los métodos de los «ilustrados» reyes de Prusia y Suecia. El rey Federico de Würtemberg, por ejemplo, fue un autócrata que negó a su pueblo toda representación o libertad civil y creó un Estado policía que todo lo vigilaba; sin embargo, abolió la servidumbre, arrebató a la nobleza sus derechos de ejercer la justicia privada, concedió libertad religiosa y derechos civiles a los judíos y secularizó las tierras de la Iglesia, al tiempo que dejaba prácticamente intactos los gremios, el feudalismo, los privilegios aristocráticos y el antiguo orden social. Más «ilustrados» fueron los gobernantes vecinos de Baviera y Baden, quienes adoptaron el Código Napoleón e introdujeron constituciones en las que se garantizaban las libertades civiles y la igualdad ante la ley. No obstante, y con excepción del pequeño Estado de Anhalt-Köthen (29.000 súbditos), el sistema francés no se aplicó por entero en ninguna parte y los privilegios de la antigua sociedad aristocrática, su sistema de propiedad de la tierra y su libertad de disponer a voluntad del trabajo de los campesinos quedaron, en esencia, intactos. Hasta los más «ilustrados» de los príncipes alemanes independientes habían aprendido de la triste experiencia de José II que era necesario mantener a toda costa la antigua alianza entre la monarquía y la aristocracia.

La Revolución, por supuesto, había enseñado otra cosa y, dentro del Gran Imperio, a pesar de estar plagado de contradicciones y llevar en su seno las semillas de su propia decadencia, los ejércitos conquistadores de Napoleón hicieron tambalearse la estructura del antiguo orden social y sentaron las bases del moderno Estado burgués. A pesar de su despotismo, de su despreocupación arrogante por la soberanía popular y nacional, de sus ambiciones dinásticas y de su creciente devoción por el orden jerárquico, en sus tra-

tos con Europa el emperador se consideraba a sí mismo como el heredero y soldado de la Revolución. Con titubeos e imperfecciones, Europa continuó siendo «revolucionada» bajo el Imperio, como lo había sido bajo el Consulado y el Directorio.

[1] G. Lefebvre, *Napoléon* (París, 1953), p. 344.

[2] Para un debate completo, véase F. Crouzet, *L'Economie britannique et le blocus continental* (2 vols., París, 1958).

[3] Véase cap. XIV.

XIV. LA CAÍDA DE NAPOLEÓN

Resulta un interesante juego de sobremesa discutir y decidir cuál fue la fecha o el episodio que determinó el comienzo de la decadencia en la carrera de Napoleón. ¿Cuándo se inició el cambio de aquel ascenso sorprendente y comenzó a entrar en un periodo de gradual descenso que desembocó en Waterloo y en Santa Elena? Algunos dirán que comenzó en España, otros que en Moscú y otros que en Leipzig en 1813; algunos afirmarán que, si no en Waterloo, sí en el reducto de la Francia sitiada y combatida en la primavera de 1814. El mismo Napoleón parece participar del primer punto de vista, cuando confiesa más tarde que fue la «úlcera española» la que le destruyó. Es poco probable que su destino resultara sellado a partir de aquella fecha, y, desde luego, de Bailén y Torres Vedras a Waterloo no hay una línea ininterrumpida y directa de unión, pero es cierto que la guerra peninsular, que comenzó en 1808, se convirtió en el doloroso cáncer que minó al Gran Ejército, infundió nuevas esperanzas y posibilidades a sus enemigos de Inglaterra, Austria y Rusia y estimuló aquel general «despertar de los pueblos» al que, normalmente, se atribuye su caída y derrota.

Todo comenzó en Portugal. Portugal era el más antiguo aliado comercial de Gran Bretaña (era casi su colonia) y, una vez en marcha el Bloqueo Continental en 1806, resultaba imperioso para Napoleón cerrar la totalidad de la costa ibérica a los barcos y al comercio ingleses. Los portugueses no quisieron acceder a ello y, en Tilsit, el emperador decidió conquistar el país. Pero, para llegar a Portugal, Napoleón tenía que cruzar España. La corrupción de la corte española bajo el débil e incompetente Carlos IV parecía favorecer sus planes. En realidad, quien gobernaba en España no era Carlos IV, sino el favorito de la reina, Godoy, quien había mantenido la alianza con Francia desde 1804 con la

esperanza de que se le entregara Portugal como recompensa. Sin embargo, la ayuda militar española, especialmente después de Trafalgar, había sido débil e incierta y ya antes de Jena Godoy había hablado incluso de retirarla completamente. Con el fin de intervenir en Portugal y de ejercer mayor presión sobre los españoles, Napoleón envió un ejército al mando de Junot para ocupar Portugal en octubre de 1807.

Con la promesa de entregarle el sur de Portugal, Napoleón volvió a ganarse a Godoy, pero, a medida que el ejército de Junot cruzaba el territorio español, se produjo una crisis que dejaba entrever otro tipo de soluciones. El príncipe heredero Fernando sospechaba que Godoy estaba intrigando para usurpar el trono de su padre a la muerte de este, por lo cual él mismo pidió ayuda a Napoleón para destronarle. De este modo, e inesperadamente, caía en manos del emperador el problema de la sucesión española. Era un cebo tentador y, en tanto que consideraba las soluciones posibles –instaurar a Fernando o sustituirlo por un príncipe Bonaparte–, envió a Murat con un ejército a Madrid. Godoy se había hecho odioso a la población y, mientras Murat se aproximaba, estalló una revuelta militar a favor de Fernando. Carlos IV abdicó; Godoy fue hecho prisionero. Las tropas francesas acabaron de ocupar el país, en tanto que Napoleón convocaba a Carlos y a Fernando a Bayona, para que escucharan su veredicto. Padre e hijo fueron persuadidos de que tenían que renunciar a sus reivindicaciones y plegarse a la decisión que tomara el emperador, el cual, con manifiesto desprecio hacia los sentimientos españoles, y fascinado ante la perspectiva de un nuevo Reino napoleónico, falló en contra de Fernando y ordenó al reacio José de Nápoles que fuera a ocupar la vacante del trono español. Al mismo tiempo, Murat (que había esperado ganar España para sí) salía hacia Nápoles, en Bayona se promulgaba una nueva Constitución de carácter napoleónico, mientras se

enviaba en cautividad a la familia real española al *château* de Talleyrand en Valençay.

Este fue un error de cálculo muy grave. Ya la llamada de Fernando a Bayona había encendido una insurrección popular en Madrid, salvajemente aplastada por Murat. Napoleón, confiando en lograr en España los mismos éxitos que por doquier, e ignorando las formas de ser y las instituciones españolas, se negó a interpretar el significado de aquellos hechos. Fernando había demostrado ser un candidato que gozaba del favor popular y, por lo tanto, el hecho de haber defendido su causa contra Godoy hubiera asegurado a los franceses la gratitud de los españoles, en tanto que la decisión de entronizar a José no podía sino acarrerar los efectos opuestos. Aun antes de la llegada de José a Madrid, en julio de 1808, su reino estaba en rebelión y, tras once días de estancia, fue expulsado de la capital. La rebelión comenzó casi al mismo tiempo en Asturias, al Norte, y Sevilla, al Sur, y, poco a poco, fue extendiéndose a la mayor parte del territorio español. Desde el punto de vista militar, la rebelión adoptó la forma de guerrillas campesinas, apoyadas a menudo por unidades regulares, que atacaban a las tropas y convoyes franceses y asesinaban a los liberales y funcionarios españoles colaboracionistas. Desde el punto de vista político se organizó en forma de una serie de juntas insurgentes, que usurparon la autoridad local, declararon la guerra a los franceses e, incluso, enviaron delegaciones a Inglaterra, además de una Junta Central, que surgió en Cádiz. A los enemigos de Francia la rebelión les parecía, naturalmente, un levantamiento nacional espontáneo contra los invasores franceses y, en Londres, Sheridan la saludó como el primer ejemplo de cómo una nación oprimida volvía los principios de la Revolución en contra de los mismos franceses. Sin embargo, ello era un error: los campesinos españoles no solamente no se podían ganar para los principios de la Revolución, sino que habían demostrado estar más inmuniza-

dos a esta que cualesquiera otros pueblos en Europa, como ya se vio en 1793. De hecho, los dirigentes de las juntas no eran revolucionarios de la clase media, inspirados en la Ilustración o en los principios de 1789, sino, con mayor frecuencia, sacerdotes y nobles a quienes perjudicaba la decisión francesa de secularizar los bienes de la Iglesia o transformar las relaciones sociales de la aldea. Dado que los campesinos eran muy devotos de su fe y de las antiguas tradiciones, como lo eran también de la dinastía de los Borbones, aquellas personas podían volver el movimiento a su favor y oponer resistencia a las reformas. En este sentido, se trataba de otro movimiento de «Iglesia y rey», al estilo de la Vandea. Pero era algo más que esto, puesto que también era un movimiento patriótico que pretendía defender al país al mismo tiempo que a la Iglesia y al rey, aunque Southey tenía razón cuando escribía que «el fuego patriótico ascendió con mayores llamas debido al sagrado aceite de la superstición». Además, y especialmente a nivel nacional, al lado de los sacerdotes y los nobles, entre los dirigentes había otros elementos. En realidad, tanto la Junta Central como las Cortes revolucionarias reunidas en 1810 estaban dominadas por la burguesía patriótico-liberal de Cádiz, que quería destruir los *señoríos* y la Inquisición y acabar con el gobierno extranjero. En 1812, las Cortes elaboraron una Constitución monárquica limitada que, en muchos aspectos, recordaba la Constitución francesa de 1791.

Con independencia de su más profundo significado, la rebelión produjo consecuencias inmediatas y dramáticas. Los franceses derrotaron con facilidad al ejército español, pero dos divisiones francesas, que llevaban la orden de ocupar Cádiz, cayeron en la emboscada tendida por un contingente español de 30.000 hombres, apoyados por los guerrilleros, y tuvieron que capitular en Bailén (julio de 1808). La noticia tuvo un vivo efecto en toda Europa, y Napoleón se vio obligado a llamar a una parte del Gran Ejército, que se

hallaba en Alemania. A fines de año, asumió personalmente el mando en España y casi consiguió atrapar y destruir a las tropas inglesas de sir John Moore, que huían de La Coruña. Sin embargo, los acontecimientos europeos requerían su presencia y nunca más tuvo tiempo para volver. La «úlcera española» creó un nuevo problema al proporcionar a los ingleses un punto de apoyo a largo plazo en el continente. Además, los portugueses siguieron el ejemplo de los españoles y se sublevaron contra los franceses. Para respaldar a sus antiguos aliados, los ingleses utilizaron su superioridad marítima, enviando una fuerza expedicionaria de 13.000 hombres al mando de Arthur Wellesley, más tarde duque de Wellington. Junot, aislado de los suministros y refuerzos de Francia, fue derrotado y, por la Convención de Cintra (agosto de 1808), tuvo que acceder a retirar sus tropas y sus aliados portugueses a Francia. Junot protegió así sus tropas para emplearlas en una campaña próxima, pero los ingleses pudieron ocupar Lisboa y, desde allí, enviar armas a las guerrillas españolas. Por el momento, el camino hacia Madrid estaba libre, aunque unos meses más tarde Napoleón volvía a cerrarlo y el gobierno británico no se decidía a emplear en la Península más que una fuerza simbólica, desanimado por el desastre que estuvo a punto de sufrir Moore en La Coruña y por las pérdidas que sufrió la otra fuerza expedicionaria, enviada a Walcheren, en Holanda. En consecuencia, cuando Wellington fue enviado de nuevo a Portugal en abril de 1809, llevaba instrucciones de administrar sus recursos, evitar los grandes enfrentamientos y desarrollar una estrategia defensiva. Utilizando Portugal como base, se mantuvo en comunicación con las guerrillas, reorganizó el ejército portugués e hizo salidas a España de vez en cuando. En 1810 Masséna llegó a España, con un ejército de 140.000 hombres y con órdenes de echar a los ingleses al mar, como primera tarea. Soult, celoso de la primacía que se había dado a Masséna, no le proporcionó el apoyo nece-

sario desde el sur de España, con lo cual el primero no pudo atravesar las líneas de Wellington en Torres Vedras y fue expulsado de Portugal. Poco después, a medida que Francia se absorbía más y más en el problema de Rusia y Alemania, Wellington tomó la ofensiva, llevó la guerra a España y, tras las victorias de Salamanca (1812) y Vitoria (1813), limpió la Península de invasores.

A pesar de todo, es dudoso que la resistencia española y el genio defensivo de Wellington hubieran alcanzado este resultado sin las repercusiones que la guerra peninsular alcanzaron en el resto de Europa y en Austria en primer lugar. El humillante Tratado de Presburgo, impuesto tras la derrota de Austerlitz, provocó una resurrección patriótica. La cesión del Tirol suscitó gran descontento y mientras el archiduque Carlos y Stadion, el nuevo canciller liberal, hacían lo que podían para vencer la resistencia del emperador a reconstruir y modernizar el ejército, una oleada de literatura patriótica reclamaba la guerra y la venganza. No obstante, mientras el Gran Ejército continuara en Alemania y el zar siguiera siendo aliado de Napoleón, el riesgo era demasiado grande. Pero las noticias de la derrota de Bailén y la retirada de las tropas francesas cambiaron el cuadro y aseguraron nuevos aliados al partido de la guerra: hasta el cauteloso Metternich, embajador austriaco en Francia, escribía –aguijoneado por Talleyrand– que no se debía perder la oportunidad. El emperador francés se enfrentaba con grandes dificultades: la rebelión española continuaba, los ingleses estaban en Portugal, en los rusos no se podía confiar y, a su vuelta a París, se encontró con nuevos complots realistas y jacobinos y con la traición instalada en los altos cargos: Fouché y Talleyrand estaban conspirando de nuevo para derribarle. Únicamente otra victoria podía devolver la confianza y salvar la situación. Talleyrand cayó en desgracia y se llamó a filas a 140.000 nuevos reclutas. En conjunto, pudo reunirse un ejército de 300.000 hombres, si bien la

mitad de ellos eran extranjeros y, en líneas generales, se trataba de un pobre sustituto del Gran Ejército de 1805. Por otro lado, los austriacos estaban mejor armados y dirigidos que en Ulm y Austerlitz y únicamente la rapidez de Napoleón y la disposición maestra de sus tropas le salvaron del desastre. De una sola arremetida se halló en Viena, pero los puentes estaban cortados y el grueso del ejército austriaco estaba acampado en la orilla norte del Danubio; al intentar alcanzarlo, fue rechazado hasta Essling, con una pérdida de 20.000 hombres. Era su primera derrota de importancia y la noticia provocó una sublevación en el Tirol contra sus aliados bávaros. Dirigidos por Andreas Hofer, los insurgentes lucharon durante meses con valor y ferocidad, por la santa Iglesia y por Austria, al modo de las guerrillas españolas y vandeanas. Movimientos similares se produjeron en el centro de Italia. Pero Napoleón conservó Viena y trajo refuerzos del frente italiano. El 5 de julio de 1809, con un ejército de 190.000 hombres, cruzó el Danubio para enfrentarse con los austriacos en Wagram. Ambos bandos sufrieron pérdidas de 20.000 hombres, pero los austriacos, sin ser aplastados como en Austerlitz, resultaron derrotados y pidieron un armisticio. Por la Paz de Schönbrunn, en octubre siguiente, Austria entregaba las provincias ilirias a los franceses, Salzburgo a los bávaros y Cracovia y Lublin al Gran Ducado de Varsovia. Se selló una nueva alianza entre los dos emperadores y, con el fin de subrayar su nuevo respeto por la legitimidad, Napoleón repudió a Josefina (que no pudo darle un hijo) y se casó con la archiduquesa María Luisa, de dieciocho años de edad, hija del emperador Francisco II. Entre tanto, se había expulsado al papa de Roma y esta se había anexionado a Francia. Silenciada la oposición en París, comenzó a reunirse un nuevo ejército al mando de Masséna para solucionar los asuntos de España. Parecía que la crisis había sido dominada y que el emperador se encontraba más firmemente establecido que nunca.

Pero la realidad era muy diferente. El matrimonio de Napoleón resultó un motivo más de irritación para el zar. Al principio se había hablado de un matrimonio con la hermana de Alejandro, Catalina; pero habiéndose recibido mal la propuesta en la corte rusa, Napoleón se adelantó a la negativa, trasladando la petición a la corte austriaca, a sugerencia de Metternich. Si bien esto ahorró al zar una situación embarazosa, la manera en que se hizo puso al descubierto la desavenencia que comenzó a surgir entre Alejandro y Napoleón casi desde antes de que se secara la tinta sobre los dos acuerdos de Tilsit y Erfurt. La nobleza rusa no aceptó nunca de buen grado la alianza con Napoleón: le temían y le despreciaban, como a la criatura advenediza de la Revolución, y, además, el Bloqueo Continental al que Alejandro se había comprometido en Tilsit les condenaba a la ruina económica, dado que ponía fin a su beneficioso comercio de maderas con los ingleses. El mismo Alejandro había esperado obtener ventajas de la alianza, siempre que no hubiera serios intentos de «revolucionar» a los polacos y que pudiera contar con la neutralidad benevolente, si no con la ayuda, de Napoleón en la lucha contra los turcos y en la toma de Constantinopla. Sin embargo, en Erfurt quedó ya claro que Napoleón no iba a consentir la partición de Turquía según los planes de los rusos, porque ello se oponía a sus ambiciones en el Mediterráneo. Por otro lado, el Gran Ducado de Varsovia solo podía ser tolerable desde el punto de vista de Alejandro, que tenía puesta su mirada en Polonia, si obtenía Galitzia como recompensa. Pero, tras la derrota de Austria en 1809, las provincias de Galitzia occidental fueron cedidas no a Rusia, sino al Gran Ducado de Varsovia; y Napoleón, que ya había hecho los preparativos para su matrimonio con la archiduquesa, se negó a ratificar un acuerdo de no resucitar una Polonia independiente. Para mayor irritación de Alejandro, los suecos, sus enemigos tradicionales, adoptaron a Bernadotte como príncipe heredero

con apoyo francés, un peligro que era más aparente que real. Por último, ambos gobernantes mostraron su mutuo desprecio rompiendo los acuerdos de Erfurt: Napoleón anexionando el ducado alemán de Oldemburgo (cuyo gobernante era el propio cuñado del zar) y Alejandro mediante su ucase de 31 de diciembre de 1810, que imponía tarifas más altas sobre las importaciones imperiales y abría los puertos rusos a los barcos neutrales y, con ello, al comercio británico. De este modo, el Bloqueo Continental recibió un golpe mortal y la guerra parecía ya inevitable.

Por un momento, pareció que Alejandro iba a tomar la iniciativa. En la primavera de 1811 concentró tropas en la frontera con Polonia e hizo sucesivos intentos para encontrar aliados entre los austriacos, los suecos, los polacos y los prusianos. Sin embargo, el nuevo canciller austriaco, Metternich, que se había hecho más cauteloso desde la experiencia de 1809, rechazó la oferta de las provincias danubianas; Bernadotte se hallaba en tratos con los franceses para comprar Noruega a Dinamarca; Federico Guillermo carecía de espíritu para oponerse a Napoleón y los polacos, deseosos de ganar su independencia, tenían más esperanzas en Napoleón que en el zar. Por estos motivos, en lugar de una estrategia ofensiva, se prefirió una de precaución y desgaste. El modelo era Wellington y no Napoleón.

Entre tanto, los polacos avisaron a Napoleón de las intenciones de Rusia. El emperador comenzó sus preparativos, tanto diplomáticos como de movilización de tropas. La primera en someterse fue Prusia: se depuso a los consejeros «patriotas» y se prometió un contingente de 20.000 hombres. Austria pareció superarla, prometiendo 30.000 hombres, pero Metternich jugaba un doble juego y mantuvo abierta la puerta trasera para negociar con los enemigos de Francia. En total, contando con sus propios recursos y los de sus vasallos, Napoleón pudo reunir más de 600.000

hombres en Polonia. Pero, por sus demoras, permitió que el enemigo obtuviera una doble victoria diplomática: un tratado de paz con los turcos y la promesa de apoyo militar por parte de Bernadotte, a cambio de la cesión de Noruega. Con todo, los rusos eran inferiores en número: al comienzo de la campaña, sus generales, Barclay de Tolly y Bagration, tenían una fuerza conjunta de 160.000 hombres, frente a los 450.000 que cruzaron el Niemen el 25 de junio a las órdenes de Napoleón.

Visto retrospectivamente, el intento de Napoleón de conquistar Rusia por medio de un ataque frontal parece un acto de locura inexplicable; además de esto, aunque no tuvo a su disposición la experiencia de «conquistadores» posteriores, al menos tenía la de Carlos XII de Suecia, quien cien años antes fracasó en el empeño. En realidad, el emperador admitió más tarde a Las Cases en Santa Elena que esta había sido la mayor equivocación de su carrera. Sin embargo, quince años de victorias casi continuas en el campo de batalla le habían conferido un sentimiento de invencibilidad y un desprecio arrogante hacia sus enemigos. Por otro lado, aun en el caso de que fuera un juego de azar (y también lo fue la campaña de 1809), las apuestas eran enormes: esta vez se trataba de «la última batalla» (como él mismo dijo), la sumisión del último poder continental rival, la restauración del Bloqueo Continental, la rendición de Inglaterra y, quizá, también la del Este. Parece que Napoleón no alimentó duda alguna acerca del resultado: como siempre, contaba con una guerra muy breve y (aunque parezca increíble) se avitualló a las tropas con una ración de pan de cuatro días, en tanto que los convoyes que seguían al ejército llevaban un suministro de harina para tres semanas. Desconociendo al enemigo y las llanuras rusas, esperaba conseguir una repetición de sus victorias anteriores, rodeando a sus enemigos por medio de un movimiento envolvente y obligándoles a afrontar una única batalla decisiva. No hay duda

de que si hubiera conseguido obligar a los rusos a dar esta batalla, la hubiera ganado, a pesar de su enorme y embarazoso ejército, compuesto en gran parte por los contingentes semientrenados de unos aliados reticentes y formado en no más de un tercio por franceses curtidos. Pero la pura necesidad, y no una mayor previsión o mejor estrategia, obligó a los rusos a retirarse y, en la retirada, a «asolar» las tierras y a dejar tras ellos aldeas abandonadas, hogares carbonizados, campos sin cultivar y grandes extensiones desérticas. Así continuó el avance, a través de Vilna y Vitebsk, hasta que, en Smolensko (a poco más de la mitad del camino hasta Moscú), el agotamiento y las deserciones dejaron las fuerzas invasoras reducidas a 160.000 hombres. En Borodino, junto al río Moscova, consiguió Napoleón, por fin, obligar al general ruso Kutusov a librar la batalla, pero aunque le infligió severas bajas, no consiguió dividir su ejército, que se retiró detrás de Moscú. El 14 de septiembre, un ejército francés de 100.000 hombres entró en la ciudad, solo para encontrar sus calles desiertas; y aquella misma noche el gobernador mandaba incendiarla. «Todas las casas de la nobleza», escribía un testigo presencial inglés, «todos los almacenes de los comerciantes, todas las tiendas, todo ardió; y… el incendio se extendió, convirtiendo a Moscú en una hoguera». Durante un mes, el emperador hizo vanos intentos para negociar la paz con el zar, que se hallaba en San Petersburgo, a 300 millas de distancia. En cambio, ya por cálculo político, ya por aversión, no dio el único paso que pudiera haber inclinado la balanza contra sus enemigos: liberar de la servidumbre a los campesinos rusos.

Aunque quizá ya hubiera sido demasiado tarde, pues, cuando un mes después comenzó la gran retirada, la venganza campesina vino a sumarse a los rigores del invierno, para convertir el regreso en un infierno viviente. Las primeras nieves cayeron antes de que el ejército alcanzara Smolensko y, a partir de entonces, desde el paso del Beresina

hasta Vilna, miles de hombres murieron helados debido a las bajas temperaturas (entre 28 y 35 grados bajo cero) y otros tantos murieron a manos de los campesinos o en escaramuzas con cosacos. En diciembre, un remanente de 30.000 hombres volvía a cruzar el Niemen en desorden; una vigésima parte de los que lo cruzaran en junio. El Gran Ejército ya no existía.

Asombrosamente, Napoleón no perdió la seguridad. Dejó a Murat al mando del ejército y regresó a París, donde se habían urdido más conspiraciones durante su ausencia; allí se preparó para reclutar tropas de refresco e, incluso, pidió nuevos contingentes a los prusianos y a los austriacos. Y, por supuesto, no todo estaba perdido. En Francia, una vez que se hubo alejado a los conspiradores, la posición del emperador volvió a ser temporalmente segura; el ejército ruso estaba agotado y Kutusov, a quien le quedaban 40.000 hombres, no parecía interesado en cruzar las fronteras. Prusia desconfiaba de las intenciones rusas en Polonia y, como siempre, estaba dividida por la disyuntiva política que planteaba un rey tímido de un lado y un partido patriótico de la guerra, del otro; Metternich se negaba a comprometerse: tanto le preocupaban las ambiciones rusas como las francesas y, además, no quería participar en una cruzada alemana dirigida por los «patriotas» prusianos. Así las cosas, Napoleón hubiera podido salvar una parte importante de su imperio si se hubiera decidido a cortar por lo sano en España o Alemania o a aceptar las ofertas de Metternich, de regresar a los términos del Tratado de Lunéville. Sin embargo, Napoleón temía que un imperio construido por medio de la guerra únicamente pudiera sobrevivir obteniendo más victorias y que una paz negociada significara un hundimiento. Las negociaciones podían servir para ganar tiempo, por lo que las emprendió con su habitual actividad febril, pero, en última instancia, sería la baza militar la que ganaría la partida. Rebañando donde pudo para conseguir nuevos reclutas,

movilizando a la Guardia Nacional y a los conscriptos de 1813 y 1814, en abril de 1813 había reunido otro ejército de 150.000 hombres para luchar en Alemania.

La determinación de Napoleón obligó a sus enemigos a reunir sus fuerzas. Pero en los cálculos se había deslizado un nuevo elemento: la voz de protesta de los pueblos europeos. Cualesquiera que fueran sus ventajas en tiempos de paz, el sistema napoleónico no podía dejar de ser un fardo cada vez más pesado en tiempos de guerra. Un rasgo característico de este sistema era hacer pagar a los países ocupados y vasallos por el mantenimiento de las tropas francesas y de las suyas propias. Los dos millones de habitantes de Westfalia pagaban 26 millones de francos de impuestos, de los cuales 10 millones estaban destinados a sostener una guarnición francesa de 12.500 hombres. En 1807, José de Nápoles gastó 44 millones en el ejército, de los que se le devolvieron seis. De un presupuesto nacional de 127 millones en 1809, el reino de Italia pagaba 30 millones a Francia y gastaba 42 millones en mantener tropas en apoyo de los franceses. Entre 1808 y 1813, en el Gran Ducado de Berg, los impuestos aumentaron a más del doble y en Venecia se triplicaron. El ejército italiano aumentó de 49.000 hombres en 1810 a 91.000 en 1812[1]. A todo esto había que añadir las penurias originadas por el Bloqueo Continental, el acuartelamiento de las tropas y el pillaje y devastación de los campos que atravesaban los ejércitos camino de la batalla. Por supuesto, España fue la que más sufrió, pero Alemania tuvo que dar cobijo al Gran Ejército de 700.000 hombres en el verano de 1811 y, en vísperas de la campaña de Rusia, fue Prusia quien soportó el mayor peso. Westfalia sufrió mucho menos que Prusia, aunque fue Jerónimo quien dio la voz de alarma en una carta de diciembre de 1811:

> Hay un profundo descontento… Se recomienda el ejemplo de España y, si estalla la guerra, todos los países, entre el Rin y el Oder, se convertirán

> en escenario de una insurrección activa. La causa subyacente de todos estos desórdenes no es solamente el resentimiento ante la dominación extranjera: las causas más profundas radican en la ruina de todas las clases, el peso aplastante de los impuestos, las conscripciones, el mantenimiento y acuartelamiento de las tropas y otras infinitas vejaciones.

Jerónimo fue, al parecer, un alarmista, porque, incluso después de Moscú, no se produjo tal insurrección general, ni en los Estados vasallos, ni en los territorios que Francia había anexionado; sin embargo, señala lo que también era evidente en otras partes; esto es, que lo que causaba el resentimiento y la indignación era el peso de los impuestos y de la ocupación militar, más que la humillación de servir a un amo extranjero. Ello no quiere decir que el nacionalismo ultrajado no cumpliera una función. Como ya hemos visto, en España e Italia del Norte, la ocupación francesa hirió los sentimientos nacionales, que ya existían desde antes o que la misma Revolución francesa despertó con su mensaje de soberanía popular y nacional. La situación en Polonia era distinta, ya que aquí los franceses aparecían como los liberadores del yugo de Rusia, Prusia y Austria, al menos hasta 1812. En Alemania también era diferente la situación, ya que, frente a Polonia y España, este país había estado dividido a lo largo de los siglos en una mezcolanza de estados mayores y menores y carecía de fronteras nacionales claramente definidas. Tampoco aquí fueron las clases rurales –ya se tratara de terratenientes o de campesinos– quienes formaron el soporte principal de un movimiento nacional, sino una alianza de la clase acomodada liberal del campo y burgueses profesionales (especialmente los últimos), las mismas clases que, después de 1815, librarían una batalla más duradera e importante por los derechos nacionales y constitucionales. Pero, en esta etapa, el movimiento era débil, estaba diseminado y carecía de objetivos precisos, tanto más cuanto que no tenía contactos con los campesinos y las masas urbanas, ni gozaba de sus simpatías, y cuanto que una gran parte –quizá la mayor– de las clases profesionales, le-

jos de ser hostiles a Napoleón, se contaban entre sus partidarios más ardientes. En realidad, la idea tan cara a muchos historiadores alemanes del pasado, de que el sistema napoleónico fue destruido por una «guerra de liberación» o *Befreiungskrieg,* de todos los alemanes, es un mito. Es cierto que en el extranjero existía una conciencia del patriotismo alemán, que comenzó con la revolución cultural a fines del siglo y comienzos del siguiente, cuando escritores como Herder, Tieck, Arndt, Brentano y los Schlegel evocaron las glorias legendarias del Reich alemán, equipararon lo gótico a lo germánico y alabaron las virtudes del piadoso y sencillo *Volk* alemán. Esta noción de *Volkstum* adquirió un carácter más profundo y político en la obra del filósofo Fichte, quien en sus clases en Berlín, después del desastre de Jena, llamó a la «nación» alemana para que se uniese contra el despotismo de los franceses. Al principio, los patriotas volvieron la mirada a Austria, lo cual resultaba explicable, por cuanto Prusia era de aparición bastante reciente; pero también era una muestra de su confusión e inmadurez, ya que el imperio de los Habsburgo no pasaba de ser un conglomerado de naciones dependientes que, en su mayor parte, no eran germánicas, y al que los gobernantes de Austria no tenían la menor intención de conceder la libertad. Después de 1807, empero, cuando Federico Guillermo nombró ministros a dos reformadores, Stein y Hardenberg, Prusia pasó a convertirse en la gran esperanza de los patriotas. En verdad, Stein creía en las ventajas de tomar prestados, con moderación, algunos de los principios franceses de 1789: abolió la servidumbre, e hizo posible que los campesinos prósperos pudiesen comprar tierras; quiso convocar también una asamblea nacional y constituir una Guardia Nacional y, animado por las noticias de España, incluso apoyó un llamamiento para organizar un levantamiento de todos los alemanes contra Napoleón. Pero este, enterado de sus intenciones, se alió con los *junkers* para expulsarle del car-

go; de este modo, sus planes quedaron en nada. Después de esto, los *junkers* (cuyos fines eran completamente prusianos) se hicieron con el poder y, aunque se reformó y aumentó secretamente el ejército, ya no volvió a hablarse de reformas sociales y Prusia no intentó romper con Napoleón hasta que se supo que su fracaso en Moscú había sido completo. De nuevo alentaron las esperanzas de los patriotas con los preparativos militares de Napoleón y con la determinación del zar de sentar plaza como el defensor de los derechos de las naciones. Alejandro hizo llamar como consejero a Stein; el general Yorck, comandante de las fuerzas prusianas, desobedeció las órdenes del rey y se unió a los rusos, que habían cruzado la frontera prusiana oriental; se pudo convencer al rey de que accediese a armar a la población civil (aunque con oficiales aristocráticos), encuadrándola en una recién formada *Landwehr,* o milicia, y, en febrero de 1813, Prusia firmó un tratado de alianza con Rusia y declaró la guerra a Francia. Se disolvió la Confederación del Rin: Hamburgo se rebeló y los rusos la ocuparon; Sajonia y Mecklemburgo se retiraron de la alianza francesa. Entre tanto, Inglaterra ofrecía subvenciones, pero Metternich, que prefería mediar entre ambos campos mientras constituía su ejército, pidió tiempo. Los gobernantes austriacos no profesaban mayor simpatía por los objetivos «nacionales» de los patriotas alemanes que los prusianos y, ya mucho antes de que, a los seis meses, los austriacos se sumaran a la coalición, había muerto toda idea de movilización en pro de cualquier forma de «guerra de liberación» nacional[2].

Como viera que Austria dudaba, Napoleón pensó descargar un rápido golpe, con el fin de quedar luego frente a sus otros dos enemigos. Disponía de superioridad numérica: 150.000 soldados contra los 100.000 de su enemigo, pero su caballería era débil, sus nuevos reclutas novatos y desentrenados y sus generales habían perdido mucho de su fuego y su agudeza. Con el plan de capturar Leipzig, ganó dos esca-

ramuzas en Lützen y Bautzen y el rey de Sajonia regresó al redil; pero, por falta de caballería, no pudo explotar estas victorias e, ignorante de la debilidad de los aliados, consintió en el armisticio de Pleiswitz (junio de 1813). De este modo, ganaba tiempo para pedir refuerzos (incluyendo caballería), pero sus enemigos sacaron mayor ventaja: la *Landwehr* prusiana estaba ahora preparada para la acción; Bernadotte aprestó 23.000 suecos, en tanto que Austria, tras liquidar las conversaciones con Napoleón, se unió a los aliados y puso 127.000 soldados a su disposición. Cuando en agosto se abrieron de nuevo las hostilidades, Napoleón tenía 450.000 hombres en el campo de batalla, ejército que solo era ligeramente inferior en número al de todos sus enemigos juntos; pero tenía la desventaja de la insegura lealtad de sus aliados y la escasa capacidad de sus ayudantes. Por todo ello, no pudo aprovecharse de la ventaja que le deparó la brillante victoria de Dresde y, agotadas sus fuerzas y habiendo desertado los bávaros y los sajones, sufrió una derrota decisiva en Leipzig (octubre de 1813). Con sus 60.000 hombres restantes, se retiró a lo largo del Rin. Comenzaba la batalla por Francia; la primera desde hacía quince años.

El genio militar del emperador no le había abandonado, y la campaña que llevó a cabo en Francia en la primavera de 1814, con fuerzas netamente inferiores a las de sus adversarios, fue una de las más brillantes de toda su carrera. Sin embargo, la situación política había cambiado radicalmente. Se habían perdido Alemania, España y la mayor parte de Italia, y el Gran Imperio se estaba desmoronando. No obstante, mientras sus enemigos no consiguieran ponerse de acuerdo para establecer los objetivos comunes de la guerra, aún había espacio para maniobrar y para cerrar un trato con el más alto postor, con Metternich, por ejemplo, quien, temeroso de las ambiciones rusas, insistía en ofrecer al emperador un tratado de paz basado en las «fronteras naturales», las llamadas Proposiciones de Frankfurt. Pero,

mientras Napoleón contemporizaba, Holanda se sublevó y llamó de nuevo al estatúder; Castlereagh, secretario inglés del Exterior, llegó al cuartel general de los aliados, en Basilea, para insistir en que ni los Países Bajos ni los territorios del Rin quedaran en posesión de Francia; en febrero, los aliados retiraron formalmente la oferta de Frankfurt y exigieron que Francia se replegara a sus fronteras de 1792. Un mes más tarde, Castlereagh, que era quien disponía del dinero, persuadió a sus reticentes aliados para que llegaran más lejos: en Chaumont, el 9 de marzo, las cuatro potencias se comprometieron a sellar una alianza de veinte años para derrotar a Napoleón y reorganizar Europa; si fuere preciso, cada participante pondría un ejército de 150.000 hombres en el campo de batalla. Entonces, y únicamente entonces, haría efectiva Inglaterra su promesa de subvención de cinco millones de libras. Y esto no era todo: Inglaterra no esperaba sino una señal favorable por parte de los enemigos de Napoleón en París para comprometer a sus aliados no solo a derribar al emperador, sino a entronizar en su lugar al pretendiente Borbón, Luis XVIII. De este modo, después de veinte años, se cumplían por fin los fines de Burke y de la contrarrevolución y Europa se unía para aplastar a la Francia revolucionaria.

Aun así, si Francia hubiera ofrecido una resistencia firme y unida frente al invasor, quizá no se hubiera realizado el proyecto. Después de todo, en 1793, la situación era igualmente grave. Napoleón era consciente de ello y habló de armar al pueblo, de movilizar a la Guardia Nacional y de resucitar el antiguo grito de *la Patrie en danger.* Pero ¿cómo? Desde hacía más de doce años venía exhibiendo su desprecio por *«la vile populace»,* se había alejado del pueblo, dentro de su corte imperial o de su estado mayor militar, había gobernado por decreto o por medio de su Ministerio de Policía y había desaprobado toda manifestación de iniciativa popular. Por eso, sus requisas y su envío de representan-

tes «en misión» a los departamentos no eran más que huecas imitaciones del Comité de Salvación Pública. Además, sus recientes derrotas y su frenética búsqueda de reclutas (más de un millón de hombres solo en 1812-1813) le acabaron de arrebatar la lealtad y el respeto de sus súbditos. Hasta los oficiales imperiales eran hostiles o indiferentes y andaban buscando ya nuevos amos a los que servir. Como siempre en los momentos de crisis, la Asamblea Legislativa impuso sus condiciones: la restauración de las libertades públicas y una paz basada en las antiguas fronteras de Francia; después de una sesión de diez días, fue disuelta. Toda la nación quería la paz y mostraba su indiferencia u hostilidad resistiendo pasivamente los intentos del gobierno de movilizarla para la guerra: los impuestos no se pagaban, las órdenes de requisa no se obedecían y los conscriptos (especialmente los de las quintas de 1801 a 1808, todos ellos hombres mayores y casados) eran lentos en el avance. De hecho, únicamente 120.000 hombres se presentaron al servicio en 1814, menos de la octava parte de los nominalmente alistados. Lo más grave de todo era que la población civil, desanimada y acobardada, no ofrecía resistencia al avance de las tropas aliadas, hasta que las actividades de pillaje de los cosacos y los prusianos incitaron a los campesinos a tomar represalias. Entre tanto, los agentes realistas trabajaban por doquier: Burdeos se rindió sin combate a los ingleses y abrió sus puertas al duque de Angulema; y una vez que Napoleón resultó derrotado en el campo de batalla (lo que sucedió solo tras dos meses de campaña) y el camino de París quedó expedito, a instancias de los aliados y del siempre atareado Talleyrand, el Senado y la Asamblea depusieron a Napoleón e invitaron a subir al trono a Luis XVIII, quien prometió otorgar una Carta liberal. El golpe final fue el de los mariscales del emperador, que se negaron a seguir a su servicio. Después de todo esto, Napoleón tuvo que aceptar lo inevitable y abdicó el 6 de abril. Por el Tratado de Fon-

tainebleau, del 11 de abril, los aliados le concedieron como refugio plena soberanía sobre la isla de Elba, el ducado de Parma para María Luisa y una cuantiosa pensión para él y su familia. Napoleón embarcó el 20 de abril y, quince días más tarde, entraba en posesión de sus nuevos dominios.

Después de la marcha de Napoleón, los aliados firmaron el Tratado de Paz de París: Francia quedaba reducida a sus fronteras de 1792, esto es, no solamente perdía Italia y Alemania, sino también Bélgica y la orilla izquierda del Rin, pero no se la desarmaba, se la ocupaba o se la obligaba a pagar indemnización alguna (incluso los tesoros de arte que saqueara en Italia quedaron a su disposición). La nueva Francia legitimista, con el versátil Talleyrand como ministro de Asuntos Exteriores, fue invitada a participar, con iguales derechos que los demás, en el congreso que había de realizarse para negociar la organización general de Europa. Después de este tratado, los aliados aplazaron los debates y se reunieron de nuevo en Viena, donde volvieron a aparecer los viejos desacuerdos acerca de Polonia, los territorios del Rin, Sajonia e Italia y, en una de sus etapas, el congreso se dividió en dos facciones opuestas. Pero la unidad fue recobrada gracias a un acontecimiento familiar, ya que en marzo de 1815 llegó la noticia de que Napoleón había abandonado su reino insular y desembarcado en el sur de Francia.

En Elba, el emperador se mantuvo al corriente de los acontecimientos en Viena y en Francia. Los franceses habían aceptado a los Borbones sin entusiasmo, únicamente para poner fin a la guerra, y toleraban a Luis XVIII mientras dejara intactas las disposiciones básicas de la Revolución en materia de tierras y de propiedad. La burguesía y la nueva nobleza, que fueron quienes depusieron a Napoleón y llamaron a Luis XVIII, saludaron la implantación de la Carta, que prometía restaurar su derecho al sufragio y sus libertades constitucionales. Pero el regreso en masa de la

nobleza *émigrée* creó inevitables problemas: el gobierno procuró buscarle puestos y propiedades y pronto se extendió el rumor de que las propiedades incautadas a la Iglesia y a la nobleza serían devueltas a sus primitivos propietarios. También el ejército estaba descontento, en gran medida porque era objeto de las sospechas del nuevo régimen y, al parecer, se había retirado a sus oficiales ignominiosamente con media paga. Sin duda, estos fueron los factores que contribuyeron a explicar la entusiasta bienvenida con que se recibió el avance triunfal de Napoleón hacia la capital, donde llegó el 20 de marzo. Luis XVIII ya había huido; comenzaba el último episodio en la vida pública de Napoleón, el de los Cien Días.

Pero, a pesar de la recepción entusiástica, no se podía ni hablar de un retorno a la autocracia del pasado: el emperador tenía que apelar a las antiguas tradiciones jacobinas y revolucionarias de 1793 o llegar a una solución de compromiso con los liberales, sobrepasando las libertades de la Carta de Luis XVIII. Escogió el segundo camino: admitió a dos liberales, anteriores enemigos suyos, Carnot y Benjamin Constant, como partícipes en el gobierno y, con la ayuda de Constant, promulgó un «Acta Adicional a las Constituciones del Imperio», que no satisfizo a nadie, por cuanto se enajenaba en favor de los «patriotas», apelando a la aristocracia, e incomodaba a los «notables» liberales al restaurar el sufragio masculino. Pronto estuvo claro para todos que Napoleón estaba esperando solamente un giro más favorable de los acontecimientos para disolver la Cámara y gobernar como antes.

Una vez más, todo dependía de la baza que se pudiera ganar con una victoria rápida allende las fronteras. Al saber del regreso de Napoleón, las potencias del Congreso resolvieron sus querellas, declararon a Napoleón fuera de la ley y renovaron sus compromisos para asegurar su caída. Movi-

lizaron sus recursos humanos y se prepararon para asestar un rápido golpe. Por su parte, Napoleón pudo poner en el campo de batalla inmediatamente a 120.000 hombres (de una movilización total de 700.000) y con estos llegó a la frontera belga el 14 de junio, antes de que Wellington y Blücher, los comandantes aliados, tuvieran idea de sus intenciones. Las fuerzas de los aliados eran mayores en número –un ejército compuesto por 96.000 hombres bajo las órdenes de Wellington y 124.000 bajo las de Blücher–, pero estaban diseminadas a lo largo de un amplio frente y Napoleón contaba con la rapidez y la sorpresa para arrebatarles una victoria inicial, y casi lo consiguió, si bien es dudoso que ello hubiera afectado el resultado final. Napoleón derrotó a los prusianos de Blücher en Quatre Bras, en el camino hacia Bruselas, pero, debido a una confusión de órdenes –y, quizá a una pérdida de habilidad del comandante supremo–, no se materializó el esperado movimiento envolvente y el ejército de Blücher consiguió escapar. Por ello, cuando dos días más tarde, en Waterloo, los 74.000 hombres de Napoleón se enfrentaron a los 67.000 de Wellington, el emperador fue derrotado, tanto porque Wellington (cuya habilidad aprendió a apreciar demasiado tarde) le superaba en capacidad estratégica, como porque Blücher apareció en escena con sus prusianos en un momento decisivo de la batalla.

Era la última apuesta del jugador. Con optimismo increíble, Napoleón regresó a París, creyendo todavía que podía imponer su voluntad a la Cámara, convencer al pueblo para que hiciera nuevos sacrificios y remplazar al viejo ejército por uno nuevo. La única esperanza –y sin duda muy débil– habría sido apelar directamente al pueblo: el viejo *faubourg* revolucionario de St. Antoine aún le apoyaba y el ejército hubiera podido responder. Pero, a instancias de Fouché, la Cámara se negó a cooperar y, preocupado por la sucesión dinástica, Napoleón decidió abdicar a favor de su hijo. Sin

embargo, la Cámara prefirió establecer un gobierno provisional que se sometió a Luis XVIII cuando este regresó a París el 8 de julio, escoltado por los prusianos. Esta vez, los aliados estaban dispuestos a tomar medidas más estrictas. Por el segundo Tratado de París (20 de noviembre de 1815), las fronteras de Francia se redujeron a las de 1790 (perdiendo, con ello, el Sarre y Saboya), el país quedó bajo ocupación militar, que duraría de tres a cinco años, y obligado a pagar una indemnización de 700 millones de francos. Entretanto, Napoleón se había rendido a los ingleses en Rochefort, con la esperanza de recibir asilo en Inglaterra, si no en los Estados Unidos. Pero sus captores tenían demasiado miedo de su carrera pasada y de la fascinación de su nombre para permitirse ser magnánimos. Se le envió a Santa Elena, una isla a 5.000 millas, en mitad del Atlántico, donde murió en 1821.

Del exilio en Santa Elena surgió la leyenda napoleónica, que eclipsó la imagen del déspota advenedizo y el soñador del imperio mundial detrás de la del paladín de 1789, la víctima del rencor de los reyes y no del odio de los pueblos. Aunque esta imagen no era falsa por completo, sí era unilateral y debió su origen y su persistencia tanto a los actos de los conquistadores como a la imaginación fértil del propio emperador. Porque, en el nuevo reparto de Europa, al insistir en englobar a Napoleón y a la Revolución en un único acto de venganza y olvido, aquellos los presentaron inevitablemente ante los pueblos como un mismo tema de odio o veneración.

[1] G. Lefebvre, *Napoléon,* p. 505.

[2] Véase H. A. L. Fisher, *Studies in Napoleonic Statesmanship: Germany* (Oxford, 1908): «La guerra de liberación fue más un movimiento de los pueblos que una coalición de príncipes» (p. 384).

XV. CONCLUSIONES

Con el aplazamiento de Viena, después del primer Tratado de París (mayo de 1814), las potencias aliadas terminaron sus trabajos en un año y, ya antes de la derrota de Napoleón en Waterloo, se pusieron de acuerdo acerca de los caracteres generales de la organización territorial de Europa. Las principales disposiciones del Tratado de Viena (junio de 1815) fueron añadir a Holanda los antiguos Países Bajos austriacos (Bélgica) y el Ducado de Luxemburgo, para establecer un único Estado (el reino de los Países Bajos) que sirviera de freno contra Francia en el Norte; dar a Prusia los territorios del Rin y una parte de Sajonia; crear en Alemania una confederación de 39 Estados bajo la presidencia de Austria; reintegrar Lombardía a Austria y concederle Venecia (como hizo Napoleón en Campo Formio) y los señoríos de Parma, Módena y Toscana; restaurar a los Borbones españoles en Nápoles y Sicilia y al papa en Roma y en los Estados Pontificios. Por lo demás, se confiaba a Rusia el Gran Ducado de Varsovia; Noruega pasaba de Dinamarca a Suecia y Finlandia de Suecia a Rusia; Gran Bretaña aumentaba sus posesiones coloniales añadiendo la colonia de El Cabo y Ceilán de Holanda, Mauricio, Tobago y Santa Lucía de Francia y Malta de los Caballeros de San Juan. Este arreglo territorial se completó con el segundo Tratado de París (noviembre de 1815), que, como hemos visto, castigaba a Francia por su participación en los Cien Días, retrotrayendo sus fronteras a las de 1790; de hecho, faltó muy poco para que también tuviera que ceder Alsacia y Lorena.

En este acuerdo quedaban patentes los objetivos de los pacificadores: castigar y contener a los agresores; recompensar a los vencedores, a menudo satisfaciendo o equilibrando reivindicaciones expuestas desde 1780; destruir el Gran Imperio de Napoleón; devolver a las antiguas dinas-

tías prerrevolucionarias –los Hohenzollern, los Habsburgo, los Borbones y los príncipes seculares alemanes– sus posesiones ancestrales; y restablecer algo parecido al viejo equilibrio de poderes. En todo esto, a despecho de las actitudes de Alejandro y de las ruidosas denuncias que se hicieron del desprecio que Napoleón sentía por los derechos nacionales, no se tomaron en consideración las aspiraciones nacionales de los pueblos europeos: se volvió a dividir a los polacos entre los prusianos, los austriacos y los rusos; se entregó los noruegos a los suecos, los belgas a los holandeses, los venecianos a los austriacos, e Italia adquirió de nuevo su carácter de tablero de ajedrez de Estados dominados por potencias extranjeras. Además de todo esto, acosados por su miedo a la revolución, las potencias se comprometieron a un acuerdo de veinte años, denominado el «Concierto de Europa», cuyos propósitos eran solucionar las disputas sin recurrir a la guerra (lo que, en sí, era una innovación admirable) y mantener por la fuerza su acuerdo político contra todos los intentos de derribarlo que pudieran provenir de pretendientes bonapartistas, liberales, demócratas o nacionalistas. En tanto que, a iniciativa de Castlereagh, las cinco grandes potencias se comprometían a este acuerdo, movidos por el zar, los monarcas absolutos de Rusia, Austria y Prusia deseaban ir más lejos. Los gobernantes del siglo XVIII, educados en las enseñanzas de la Ilustración, rehuyeron las viejas consignas de las cruzadas y los gritos ideológicos de batalla, mas el miedo a la revolución y el renacimiento de la religión cambiaron todo y proporcionaron nuevas oportunidades; por ello, el zar y sus aliados formaron una unión cristiana, o «Santa Alianza», cuyo objetivo era emprender una cruzada ideológica contra las ideas racionalistas y escépticas de la Ilustración y la Revolución. Poco después, todos los gobernantes europeos firmaban esta empresa, con excepción de un trío extrañamente compuesto: el príncipe regente de Inglaterra (aconsejado por

Castlereagh, para quien ello no era sino «una muestra sublime de misticismo y estupidez»), el papa Pío VII y el infiel sultán de Turquía.

Era, pues, evidente que las potencias victoriosas estaban decididas a restaurar el antiguo orden y a contener por la violencia, si era necesario, las fuerzas políticas que la Revolución había liberado en Europa. No era esta su única intención, pues gran parte de sus acuerdos eran sensatos, justos y no vengativos; mas, en cuanto que intentaban hacer desaparecer deliberadamente el recuerdo de los efectos de la historia durante el último cuarto de siglo, su tarea estaba condenada al fracaso, fracaso que, como en todos los esfuerzos anteriores para contener la revolución, se debió en parte a sus propias disensiones. Desde el principio, Castlereagh había dicho claramente que, aunque comprometida a mantener las fronteras acordadas en París y Viena, y a impedir una restauración bonapartista, Inglaterra no apoyaría una intervención armada en los asuntos internos de otro Estado. Su sucesor, Canning, llevó más lejos este criterio y, después de 1822, Gran Bretaña no solamente no se negó a aplastar, sino que animó activamente los movimientos nacionales y liberales en Grecia, España, Bélgica y América Latina; tampoco Rusia dejó de hacerlo cuando convenía a sus intereses imperiales, como en Grecia y Serbia. Hacia 1830, el Sistema del Congreso, cuyo único defensor consecuente era Metternich, estaba en ruinas. Más eficaces aún que las divisiones entre las potencias a la hora de obstaculizar la restauración de la antigua Europa fueron las nuevas fuerzas liberadas por los veinticinco años de guerra y revolución y los cambios que ocasionaron. Estos cambios no se limitaron, en absoluto, a Francia y a sus satélites durante la era napoleónica: no es exagerado decir que todos los Estados europeos al oeste de Rusia y Turquía y al sur de Escandinavia acusaban ya sus efectos. Fue un proceso de cambio que, lejos de invertirse o detenerse a causa de la victoria de

los enemigos de Francia, continuaría destruyendo el antiguo orden y configurando el futuro.

En primer lugar, la misma sociedad había quedado completamente trastocada: la antigua sociedad aristocrática que describíamos en nuestro primer capítulo había sido destruida o transformada de un modo irreversible. Desde luego, esto es especialmente cierto aplicado a Francia, donde de 1789 en adelante la antigua aristocracia fue despojada de sus derechos de jurisdicción, su monopolio de los altos cargos en el ejército, la Iglesia y el Estado, sus derechos y servicios feudales (finalmente sin compensación), sus títulos y privilegios y sus derechos a disponer libremente de las tierras del común y a dejar en herencia a sus primogénitos sus propiedades indivisas. Cierta parte de la aristocracia perdió aún mucho más: la *noblesse de robe* perdió sus viejos cargos hereditarios y se confiscaron las propiedades de los nobles *émigrés,* así como las de todos los dignatarios de la Iglesia –obispos, canónigos, abades y capítulos catedralicios–, que no se reintegraron a sus dueños sino excepcionalmente. Por supuesto, la aristocracia no desapareció. La mayoría, aunque con sus títulos y privilegios recortados, conservó sus tierras, incluso en lo más álgido del terror jacobino. Napoleón utilizó las «propiedades nacionales» no distribuidas para dotar a su nueva nobleza imperial, compuesta en parte de «notables» de la Revolución y en parte de viejos aristócratas, reconciliados con el nuevo régimen. Luis XVIII reconoció estos títulos y legados en 1814 y, desde entonces, los monarcas de la Restauración, al mismo tiempo que respetaban los derechos de los compradores de tierras de la Iglesia y la nobleza, crearon nuevos títulos y fundaron nuevas propiedades para recompensar a sus seguidores a su regreso de la emigración. De esta manera, se amplió la aristocracia, que poseía considerables propiedades y, además, ejercía una gran influencia en las Cámaras y en los ministerios. Pero era una nueva aristocracia, estrechamente asocia-

da con el comercio y las finanzas y con los grandes propietarios burgueses, que estaba netamente separada de la antigua *noblesse* por el acuerdo territorial de 1789 y la aplicación del Código Napoleón.

También la situación del campesinado había cambiado radicalmente, en primer lugar la de los antiguos siervos, aunque, en Francia, estos eran escasos en número. Mucho más importante que la abolición de la servidumbre fue la supresión de la carga del diezmo y de las obligaciones señoriales; además, algunos campesinos (aunque fueran minoría) pudieron beneficiarse de la venta de los *biens nationaux,* especialmente después de que la ley de junio de 1793 hizo posible, durante una corta temporada, que los campesinos se aliaran para comprar pequeños lotes. Los campesinos pobres y sin tierras se resistieron a los cercamientos y a la apropiación de las tierras comunes, por lo que lograron conservar algunos de sus derechos colectivos y proteger la antigua comunidad rural: hoy quedan todavía restos de ambos. En resumen, la transferencia de tierras de una clase a otra se realizó a escala relativamente modesta; fue la burguesía, más bien que el campesinado, la que recogió el mayor beneficio; perdedora fue la Iglesia, en mayor medida que la nobleza, y los menos favorecidos fueron los campesinos más pobres[1]. Con todo, el campesinado en su conjunto obtuvo una nueva situación social y un mayor grado de seguridad económica, que explica, más que ningún otro factor, el conservadurismo pertinaz de gran parte de la Francia rural durante el siglo XIX.

Más allá de las fronteras tradicionales francesas se produjo un proceso similar, aunque posterior y menos completo. Ya hemos visto que la asimilación de las nuevas leyes e instituciones de Francia, y los consiguientes cambios sociales, fue más rápida y completa en los territorios que absorbió directamente dentro de su Imperio o que eran limítrofes

con él. Así, la destrucción de los vestigios feudales y de los privilegios aristocráticos fue casi tan completa en Bélgica, en las provincias renanas, en partes de Suiza, Saboya, Lombardía y Piamonte como en la misma Francia. En Venecia, antes de su absorción en el reino napoleónico de Italia, la destrucción de la antigua oligarquía cívica fue obra de Austria, del mismo modo que los primeros golpes contra las inmunidades aristocráticas, patricias y eclesiásticas en Toscana y Lombardía procedieron, incluso antes de 1789, de los reformadores austriacos «ilustrados» como José II y Leopoldo II. Pero todo esto no fue sino un comienzo, al igual que en Nápoles (donde las reformas del borbón Carlos III se adelantaron a la Revolución); fueron el Código Civil de Napoleón y el enérgico gobierno de sus virreyes y vasallos los que finalmente terminaron con las posesiones feudales (así como con la servidumbre allí donde aún persistía) en toda la península italiana. Los ingleses realizaron en Sicilia reformas similares e, incluso el reaccionario Fernando I, aun retirando la constitución liberal y restaurando el Santo Oficio en Palermo, retrasó, pero no invirtió este proceso. Aunque se disminuyeron o suprimieron las antiguas inmunidades y privilegios de la aristocracia, los efectos sobre el campesinado no fueron los mismos, en general, que en Francia. En primer lugar, la redistribución de propiedades que siguió a la incautación de las de la Iglesia fue menos extensa: los compradores de la clase media, o incluso los aristocráticos, prosperaron, pero se hizo muy poco, o nada, para ayudar a los campesinos pobres a adquirir tierras, incluso puede que estos salieran perdiendo a causa de la confiscación de los derechos comunales tradicionales. Es cierto que en Lombardía y en el Piamonte la abolición de los derechos y los diezmos feudales benefició a todos los propietarios rurales y contribuyó en cierto grado a la prosperidad campesina general, pero en el Sur, en Calabria, Nápoles y Sicilia, el problema eran los grandes latifundios y el campesinado em-

pobrecido y sin tierras y no las propiedades feudales, el diezmo y las obligaciones serviles; y, para esto, la revolución exportada desde Francia a partir de 1795 no ofrecía solución alguna. Por este motivo, los problemas básicos de la tierra siguieron sin resolver y han sobrevivido hasta el día de hoy a través de las tribulaciones y las esperanzas frustradas del Risorgimento.

La sociedad patricia y aristocrática quedó destruida en Holanda y en ciertas partes de Alemania, del mismo modo que en el norte de Italia. El rey Guillermo, de los Países Bajos Unidos, estaba convencido de la necesidad de conservar la sustancia de las reformas francesas con el fin de apaciguar a sus nuevos súbditos belgas; las nuevas provincias occidentales, reintegradas a Prusia, o adquiridas por esta (los territorios del Rin, Berg y partes de Westfalia), heredaron igualmente las consecuencias sociales del Código Civil, así como la abolición de los derechos, diezmos y servidumbres feudales. Metternich tenía mayores esperanzas puestas en los estados alemanes del sur, reintegrados ahora a la esfera de influencia austriaca, pero también aquí quedaron intactas las reformas realizadas por sus gobernantes en calidad de aliados de Napoleón. Hasta la misma Prusia tradicionalista, en su deseo de sacudirse el yugo napoleónico, encontró adecuado tomar prestadas medidas de los franceses, abolir la servidumbre personal y permitir a una minoría de oficiales de la clase media la posesión de cargos en sus ejércitos: no era una revolución social, pero sí un comienzo. El Imperio de los Habsburgo, radicalmente hostil a los experimentos, heredó los restos de la reforma agraria de José II en Austria, Bohemia y Hungría, además de la de Napoleón en el norte de Italia e Iliria; con todo, el meollo de la servidumbre sobrevivió hasta 1848. En Suecia, Bernadotte, que fue el único usurpador a quien se permitió mantener su trono, ayudó a debilitar el privilegio aristocrático abriendo los cargos públicos a hombres de origen humilde. En Espa-

ña, los liberales afrancesados de Madrid y Cataluña y los antifranceses de Cádiz compitieron por el favor de la clase media aboliendo el diezmo y destruyendo los *señoríos;* pero este fue uno de los pocos países de Europa en los que el monarca restaurado en 1814 hizo retroceder firmemente el reloj del tiempo. Polonia fue asimismo el único de los países ocupados por los ejércitos de Napoleón en el que si bien se abolió la servidumbre, quedaron intactos el sistema de reparto de las tierras y las relaciones entre los terratenientes y los campesinos y, a pesar de sus palabras liberales, Alejandro se guardó de hacer algo más.

Resulta evidente que la destrucción de los vestigios feudales, la supresión de los obstáculos al comercio y a la industria y la liberación de la tierra de los derechos, las aduanas y la jurisdicción señoriales fomentarían y estimularían por sí mismas el crecimiento de la sociedad burguesa. Como ya hemos visto, en Francia fue la clase media (incluyendo a los campesinos más acomodados) quien cosechó los mayores beneficios de la Revolución y, aunque Napoleón les negó las libertades políticas y concedió con menos generosidad las recompensas, no hizo nada para cambiar esta situación. Lo mismo se puede decir, en líneas generales, de los otros países ocupados por los franceses, aparte de Polonia: la venta de las propiedades confiscadas, la eliminación de antiguos enclaves e inmunidades feudales, la apertura de las carreras a los hombres de talento, la creación de una nueva clase de funcionarios del Estado, la liberación del mercado interior de aduanas y gremios restrictivos –por no mencionar la prohibición de las asociaciones de trabajadores–: todo contribuyó a fomentar el aumento y la elevación de la situación social de la burguesía. En este sentido, especialmente cuando el trabajo se liberó de la vinculación a la tierra, se allanó el terreno para el desarrollo del capitalismo industrial. Y, sin embargo, no fue la Francia revolucionaria o napoleónica la que obtuvo la parte del león en la expan-

sión comercial e industrial, sino Inglaterra, su adversario más inveterado y resistente, quien surgió de una batalla de veinticinco años con la balanza aún más inclinada a su favor que cuando entró en ella. La guerra impuso una pesada carga fiscal sobre los ingleses: entre 1793 y 1815, estos pagaron 52 millones de libras solamente en subvenciones a sus aliados y, como ya hemos observado, el Bloqueo Continental retrasó la expansión industrial inglesa. Inglaterra, empero, encontró nuevos mercados, obtuvo nuevas colonias y, una vez pasadas la guerra y los penosos reajustes posteriores, se las arregló en un plazo increíblemente corto para afirmar su supremacía sobre todos los demás como el indiscutible «taller del mundo». Además, la guerra civil y la Revolución provocaron una catástrofe entre las manufacturas francesas e, incluso bajo Napoleón, su producción en muchos terrenos se estancó, perdió más colonias a manos de Inglaterra y el comercio de sus puertos atlánticos descendió hasta convertirse en la mínima expresión de lo que fuera antes. Y ello por más que, durante el Imperio napoleónico, pudo explotar los recursos y dominar los mercados de una gran parte del continente, obligar a sus Estados vasallos y aliados a pagar la mayor parte del coste de sus guerras y asimismo utilizar el Bloqueo continental para aumentar sus beneficios nacionales a expensas de sus vecinos, incluso de aquellos a quienes englobó dentro de sus fronteras. La explicación de este hecho reside, en parte, en el trastorno ocasionado por la Revolución (aunque no hasta después de 1799), en la gran estabilidad social de sus campesinos y en el bloqueo impuesto a sus costas por Gran Bretaña. Pero quizá lo más importante de todo fuera que, en el decenio de 1780 a 1790, únicamente Inglaterra pasó por una revolución industrial que no solo «revolucionó» sus procedimientos técnicos, sino que comenzó a transformar su sociedad, haciendo aparecer nuevas clases productivas: fabricantes industriales y trabajadores fabriles. Para Francia y sus países veci-

nos, la limpieza que supusieron las reformas revolucionarias y napoleónicas allanó el camino para una transformación social similar y, después de 1800, las innovaciones técnicas hicieron progresar las industrias textiles de Lyon y Normandía, así como las mismas de Bélgica y del Sarre. Pero esto no era más que un comienzo: para crear la nueva sociedad industrial, en la cual los *sans-culottes* cederían el terreno a los proletarios, y los maestros de taller a los fabricantes industriales, Francia necesitaba una revolución industrial además de la política. La Revolución de 1789 aceleró este proceso en algunos aspectos y lo retrasó en otros. El remedio a esta situación aparecería durante los años de paz que siguieron, principalmente después de 1830[2].

Las consecuencias de la Revolución fueron más inmediatas y directas en otra esfera de la actividad humana. Ya hemos visto que, pasados apenas tres años desde el comienzo de aquella, comenzó a aparecer en Francia un nuevo tipo de ejército, un ejército nacional de masas compuesto de voluntarios civiles (más tarde, conscriptos) y soldados regulares, dirigido principalmente por oficiales de la clase media, equipado con las últimas armas y entrenado en los principios estratégicos de la guerra móvil y ofensiva. Por supuesto, hubo de pasar algún tiempo hasta que, por medio de la *amalgame* y la *levée en masse* de 1793 y de la Ley de conscripción de Jourdan de 1798, este ejército alcanzara la perfección del Gran Ejército de Napoleón en 1805 y, para completar esta transformación, se necesitó la habilidad organizadora de Carnot y el genio práctico de Napoleón en el campo de batalla, ambos inspirados en las enseñanzas de Bourcet, Guibert y Du Teil. Únicamente las condiciones creadas por la Revolución permitieron obtener el mejor partido de estas innovaciones. Así lo reconocieron los enemigos de Francia, y algunos de ellos no tardaron en aprender la lección. Inglaterra, cuyos problemas sociales eran muy distintos de los del continente, se limitó a modernizar

sus armas y a disponer mayores ejércitos en el campo de batalla: en 1813-1814, a diferencia de lo que era práctica habitual, acumuló equipo para unos 300.000 soldados en su ejército regular y 140.000 marineros en su flota. Prusia, bruscamente despertada de su sueño por el fracaso de Jena, aún fue más lejos en la imitación de los franceses: Hardenberg señalaba que la Revolución le había otorgado a Francia un «poder inesperado» e insistía en que se imitara su ejemplo aplicando (aunque con precaución) «principios democráticos» a la reorganización del ejército y del Estado. Los *junkers* no estaban dispuestos a ir tan lejos como hubieran deseado Hardenberg o Stein, pero las reformas del ejército que, posteriormente, realizaron Gneiseneau y Scharnhorst abandonaban muchos de los antiguos principios de Federico, llamando a la nación a las armas en las filas de la Landwehr y el Landsturm, asignando cargos a personas de origen humilde, disolviendo a sus mercenarios extranjeros y prescindiendo de gran parte de la embarazosa impedimenta. Los aliados de Napoleón en Alemania del Sur fueron todavía más lejos y crearon ejércitos nacionales modelados directamente sobre el francés. De este modo, el ejército de Federico el Grande, adecuado para una sociedad aristocrática, dejó de ser el modelo que seguir por los otros, y el ejército de Napoleón, el producto de la Revolución, con su llamada a la nación en armas, comenzó a ocupar su lugar.

Otras instituciones resultaron también profundamente transformadas. Allí por donde pasaron los ejércitos de Napoleón se implantó el Código Civil francés, se revisó la administración, se destruyeron los vestigios de la justicia eclesiástica y señorial y se impuso un sistema nacional de tribunales y jurados. Un gobierno barato y eficaz reemplazó o amalgamó a las miles de autoridades y jurisdicciones rivales o coincidentes, que sobrevivían del pasado feudal. Por primera vez en su atribulada historia, Polonia conoció una ad-

ministración eficaz y un sistema de funcionarios públicos nacionales y la lección no se olvidó jamás del todo. A partir de 1803, en Alemania, Napoleón abolió el desgastado Sacro Imperio Romano, y cortó por lo sano la maraña de pequeños principados y ciudades libres, reduciendo su cantidad de 396 a 40. Quienes más sufrieron fueron las ciudades libres, reducidas a cuatro, y los principados obispales, cuyos territorios fueron distribuidos por completo entre sus vecinos seculares: así, antiguas ciudades y principados imperiales, como Lieja, Tréveris, Maguncia, Coblenza y Salzburgo, desaparecieron englobadas en unidades administrativas mayores. De los estados germánicos sobrevivientes, 18 entraron más tarde a formar parte de la Confederación del Rin y comenzaron a fusionarse dentro de una unión aduanera. Tampoco en este aspecto hubo posibilidad de retroceder al pasado prerrevolucionario. Fueron restauradas en el trono las antiguas dinastías y abolidas las constituciones liberales y la mayoría de los gobernantes de Europa no podían comprender las nuevas fuerzas que estaban actuando, pero fue escasa la reestructuración de las fronteras geográficas del Gran Imperio y muchas de sus instituciones quedaron sustancialmente intactas. El Código Civil quedó en vigor en una multitud de Estados europeos, desde Bélgica a Nápoles y desde los territorios del Rin hasta el nuevo reino de Polonia, creado a partir del Gran Ducado de Varsovia de Napoleón. Los aliados de Viena disolvieron la Confederación napoleónica del Rin y en su lugar crearon una confederación mayor de 39 estados alemanes. Estaba presidida por Austria y su fin no era fomentar en absoluto los objetivos nacionales alemanes. Pero, cualesquiera que fueran las intenciones de sus creadores, esta confederación constituyó la estructura para una unión política más estrecha y pronto comenzó a funcionar una zona de tarifa única. Quizá lo más significativo de todo ello fue que no se hizo intento serio alguno para reconstituir el Sacro Imperio Romano o restau-

rar la soberanía de los principados eclesiásticos; y la católica Austria se mostró tan poco deseosa de devolver Salzburgo a la autoridad temporal de la Iglesia, como la protestante Prusia con respecto a Maguncia, Tréveris y Colonia.

De hecho, los años de reformas revolucionarias y napoleónicas afectaron profundamente y para siempre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Es cierto que el acuerdo de 1815 fue acompañado por un gran renacimiento religioso: el papa recuperó el trono de San Pedro en medio del júbilo general; se volvió a instaurar el Índice, la Inquisición y la Orden de Jesús; el ultramontanismo se puso de moda; la Iglesia católica recuperó su dominio sobre la educación y, en España, Baviera, Cerdeña y Nápoles, también la mayor parte de su antiguo poder; y, como ya hemos visto, los gobernantes de las más diversas categorías aseguraban que su política se basaba en principios cristianos. Pero gran parte de todo ello tuvo una corta duración, por cuanto el poder de la Iglesia estaba minado y el gobierno de los príncipes eclesiásticos se había convertido casi en una cosa del pasado. En Francia, el día de su coronación, se ungió con óleo a Carlos X, según la tradición de sus antepasados, pero la Iglesia quedó despojada de sus bienes y, a cambio de la seguridad de la autoridad temporal, permaneció más íntimamente ligada al poder secular de lo que lo estuvo con Francisco I o con Luis XIV. Por todas partes se continuaron vendiendo las propiedades de la Iglesia y disolviendo los monasterios, y los gobernantes católicos se negaron con frecuencia a utilizar la mayor libertad que, en sus tratos con el papa, les sugería el Concordato de Napoleón, como un ejemplo que seguir. La atribución de grandes cantidades de súbditos católicos a los gobernantes protestantes de Prusia y los Países Bajos debilitó inevitablemente la autoridad del papa en Europa occidental. Además de esto, de todos los prelados principescos de los tiempos prerrevolucionarios, el papa era el único que conservaba su poder temporal, y, cin-

cuenta y cinco años más tarde, también él tendría que entregarlo como parte del precio que habría que pagar a cambio de la unificación de Italia bajo el rey católico de Cerdeña.

También el nacionalismo sobrevivió como legado de la Revolución. A pesar de que reprimió y despreció el espíritu nacional, Napoleón lo fomentó inconscientemente. Más tarde, en Santa Elena, reclamaría que se le reconociese el mérito de haber intentado deliberadamente unir a los 15 millones de italianos y los 30 millones de alemanes, al igual que a los 30 millones de franceses y los 15 millones de españoles, «cada uno en una nación». Las uniones del Piamonte, Parma, Toscana y Roma con Francia, le contó a Las Cases, fueron «únicamente medidas temporales, destinadas a garantizar la educación nacional de los italianos». Fue este un punto de vista propagandístico muy útil, ya que, por aquel tiempo, estaba claro para todos que, tras haber denunciado a gritos los métodos imperialistas de Napoleón, las potencias victoriosas no demostraban ningún tipo de interés por las aspiraciones nacionales de los pueblos que habían liberado. Como hemos visto, el mismo Napoleón aplastó en realidad los movimientos nacionales de España e Italia y, en 1810, le dijo a Luis que una de sus mayores ambiciones en Alemania era «superar *(dépayser)* el espíritu alemán». Además, aparte de los principios revolucionarios que los ejércitos franceses extendieron por toda Europa, las reformas administrativas de Napoleón, el Código Civil, la destrucción del feudalismo, la racionalización del gobierno, la institución de un sistema uniforme de pesos y medidas y la desaparición de las aduanas internas no podían dejar de tener los mismos efectos unificadores sobre los países ocupados que tuvieran las reformas de la Asamblea Constituyente y de la Convención en la misma Francia. Y no solamente esto: Napoleón jugó también con el espíritu nacional en sus tratos con los polacos y los italianos. Por ejemplo, el reino

de Italia se creó no para satisfacer la amplias aspiraciones de los patriotas italianos, sino, en parte, con la intención de despertar sus esperanzas respecto al futuro. Era inevitable que el desengaño de tales esperanzas enajenara a muchos patriotas italianos, cuya simpatía por los franceses, con el paso del tiempo, se tornó en resentimiento y hostilidad e, incluso, en la organización de sociedades secretas antifrancesas. En Alemania, aunque este resentimiento nacional jamás estalló en rebelión abierta, se hizo más agudo y coherente, identificándose con la política nacional de Prusia y Austria. En 1815, en lugar de encontrarse soluciones (excepto en España), se exacerbaron los problemas, lo que empujó a los nacionalistas alemanes, italianos y polacos –por no hablar de los belgas, los griegos y los latinoamericanos– a buscar remedios más desesperados en los años por venir.

Otro resultado del acuerdo de 1815 fue el de conjugar el nacionalismo con el liberalismo. Aunque los dos procedían en gran medida de los años de la Revolución, su colaboración no fue estrecha en la Europa de Napoleón. Los patriotas, si incluimos bajo esta denominación el nacionalismo del tipo español, así como alemán e italiano, tuvieron tendencia, a partir de 1808, a ser más hostiles que simpatizantes de los franceses. Por otro lado, los liberales, compuestos más bien por «notables» de la clase media que por pequeños artesanos, nobles o campesinos, fueron más a menudo aliados que adversarios de Francia. En la misma Francia, las ideas políticas de los liberales fueron proclamadas y sostenidas por los constituyentes, girondinos y termidorianos, si bien la Convención jacobina y Napoleón, por razones diferentes, las reprimieron y proscribieron. Aunque amordazados y reprimidos en Francia bajo el Consulado y el Imperio, en Europa los liberales tenían la vista puesta en los franceses, que eran quienes traían las reformas, y no en sus propios gobernantes, que se oponían a ellas o las obstaculizaban. Por supuesto, hubo excepciones notables, como los jacobinos ita-

lianos, quienes después de 1805 constituyeron sociedades secretas, para oponerse a los franceses, que incluían en sus filas a liberales y a demócratas revolucionarios; en España, los liberales antifranceses predominaban en la Junta Central de Cádiz y en las Cortes que adoptaron la Constitución de 1812, y en Alemania había liberales entre los patriotas que volvieron los ojos a Prusia para que dirigiera una cruzada alemana contra Napoleón y reformara sus propias instituciones liberales. Probablemente sea exacto afirmar que tanto en Italia como en Alemania, no menos que en Holanda, Suiza y Polonia, los liberales saludaron por lo general la llegada de las reformas de Napoleón y tendieron a poner sus esperanzas más bien en la supervivencia que en el hundimiento del imperio napoleónico. Por su misma naturaleza, los acuerdos de 1815 iban a acabar con este divorcio entre patriotas y liberales. En España, el nacionalismo campesino murió de muerte natural con el fin de la ocupación francesa y la restauración de la Iglesia y la dinastía, y, en 1820, los liberales de tendencia napoleónica y antinapoleónica, unidos por la marcha de los franceses, juntaron fuerzas para volver a proclamar la Constitución de 1812. En Alemania e Italia, los acuerdos del Congreso no ofrecían mayores esperanzas a los liberales que a los nacionalistas; ambos sufrían igualmente por la política de las tres potencias centrales y orientales. Hasta 1848, Austria continuó siendo, específicamente, el objetivo de sus animosidades comunes, porque ahora ocupaba los estados del norte de Italia, dominaba la Confederación Alemana e invocaba, con más insistencia que sus aliados, los acuerdos del «Concierto» europeo, con el fin de intervenir contra los patriotas y los liberales alemanes, italianos, españoles y belgas.

La democracia, otro producto de la Revolución, tuvo una historia ligeramente distinta. Aunque resultaba inherente a la concepción de Rousseau de la «soberanía del pueblo», no era el resultado inevitable de la victoria del Tercer Esta-

do, como el liberalismo. Al igual que sus similares en otros países, las clases medias francesas de 1789 deseaban terminar con el «despotismo» real, destruir el privilegio aristocrático y extender el sufragio a todos los propietarios; pero, aunque proclamaban los Derechos elementales del Hombre, estas clases no tenían la intención de compartir la autoridad política con las «clases inferiores», o «Cuarto Estado». La colaboración y la igualdad de derechos de sufragio que acompañó a aquella fueron producto, como ya hemos visto, de circunstancias que caían fuera de su esfera de acción. La clase media demostró que no podía acabar con el privilegio y el despotismo sin el apoyo activo del pueblo llano de la ciudad y del campo. Sin embargo, este estadio democrático de la Revolución fue de corta duración. Los jacobinos prescindieron de la Constitución de 1793, que sus sucesores ya rechazaron abiertamente. Se suprimió el sufragio adulto masculino y se destruyó el movimiento popular. Después de esto, no se produjo ningún otro gesto, ni con el Directorio ni con Napoleón, para restaurar la democracia en Francia y, en Europa, si bien hubo movimientos populares en Italia y en Ginebra, el modelo impuesto fue, por lo general, el mismo que en Francia. A pesar de recibir tan escaso apoyo oficial, la democracia echó raíces, en primer lugar, en un país que no solamente no estaba dentro de la esfera de influencia de Francia, sino que se convirtió en su adversario más implacable. El movimiento radical inglés, enriquecido con las lecciones aprendidas de la Francia revolucionaria y desorganizado temporalmente por la persecución posterior a 1792, revivió hacia 1807 y, con sus ideas democráticas, contribuyó a los movimientos de reforma del siglo XIX. También aquí la Revolución industrial desempeñó una función muy importante, ya que creó en Inglaterra, antes que en cualquier otro sitio, una clase trabajadora educada políticamente, que leía con ansia los escritos de los demócratas y aseguraba al movimiento radical la base de ma-

sas en las fábricas y en las minas. Después de la derrota de 1795, en otros países la democracia revivió más lentamente. Las potencias del Congreso la consideraban como una amenaza mayor que el nacionalismo y el liberalismo, por lo que, mientras perduró el sistema del Congreso, fue duramente reprimida. Reapareció en Francia en la revolución de 1830 y su evolución posterior, tanto allí como en Norteamérica y en otros países europeos, fue el resultado tanto de la industrialización como de la expansión de las ideas revolucionarias.

Aparte de estos legados tangibles, la Revolución también dejó en herencia sus mitos y tradiciones al siglo siguiente. En primer lugar, la tradición de la propia revolución popular: la violencia, el heroísmo y el idealismo apasionado de las «jornadas» de 1789, 1792 y 1793 fueron nuevamente escenificados por masas similares, aunque movidas por otros objetivos, a lo largo de toda Europa, en 1848 y, en Francia, en 1871. Los liberales españoles de 1820 y 1836, como los liberales franceses, alemanes, belgas, suizos e italianos de 1847 a 1848, se inspiraron en la Declaración de Derechos del Hombre y la Constitución de 1791. Hasta en Inglaterra parecía lógico atribuir la gran agitación popular de 1830 y 1831 a la influencia contagiosa de los franceses. Muchos de los «tribunos» populares de las revoluciones posteriores –Lamartine, Ledru-Rollin, Kossuth, Mazzini, Garibaldi– encontraron ya modelos elaborados en la Gironda y la Montaña de 1792; y, en todas partes, el nacionalismo insurgente –en Grecia, Bélgica, Polonia, Alemania e Italia– heredó, con los cambios oportunos, la bandera tricolor de la Francia revolucionaria. La República igualitaria del año II legó su propio recuerdo nostálgico y duradero, proclamado en los ayuntamientos por los radicales y los socialistas en París, Berlín y Viena en 1848, y extinto con la Comuna de París de 1871. En cambio, la tradición de la nación en armas, de la defensa revolucionaria y la guerra total –otro legado de la

Francia jacobina– tuvo una historia más larga: invocada sucesivamente por Gambetta, Clemenceau y De Gaulle, sirvió como modelo para los beligerantes de ambos bandos en dos guerras mundiales. Aunque especialmente ineficaces en la Francia de 1796, Babeuf y los Iguales encontraron imitadores entre los carbonarios italianos, los decembristas rusos y los blanquistas franceses. Para los socialistas, el «babouvismo» tenía un significado aún más especial: el plan de Babeuf para la división y la propiedad comunales de los bienes fue introducido en 1830 por su discípulo Buonarrotti en los clubes de trabajadores, traducido al inglés por el cartista Bronterre O'Brien y estudiado cuidadosamente desde entonces por todos los dirigentes socialistas, desde Marx a Jaurès y Lenin. Por otro lado, el bonapartismo se había ido separando de la corriente principal de la tradición revolucionaria y había ido ofreciendo sus propias soluciones a aquellos deseosos de suavizar la libertad con el «orden» y de poner fin a la anarquía de los partidos en guerra, configurando de modo autoritario las instituciones parlamentarias. Esto llegó a convertirse en un fenómeno francés peculiar y el culto del *coup d'état,* el plebiscito, el Hombre destinado y la *grande nation* ha tenido una gran importancia en la historia de la Francia posrevolucionaria, desde la resurrección del Imperio bajo Luis Napoleón hasta el general Boulanger y el *coup* argelino de mayo de 1958.

Del mismo modo que la revolución tuvo su contrarrevolución, también la tradición revolucionaria alimentó su propia antítesis. A lo largo de toda Europa, las *Reflections* de Burke suscitaron una respuesta entre aquellos a quienes la revolución había desposeído o amenazado con desposeer, o entre aquellos que se aferraban a los valores tradicionales como la fortaleza contra la infección penetrante de los Derechos del Hombre. Burke fue seguido por Gentz en Alemania y Austria y Bonald y Joseph de Maistre en Francia. De este modo creció una ideología de la contrarrevolución,

dedicada a la restauración del trono y del altar y hostil a toda la corriente del pensamiento europeo, de Newton a Montesquieu y de Voltaire a Rousseau. La contrarrevolución pareció triunfar ampliamente en 1815 y la situación estaba madura para el regreso a las antiguas fronteras, dinastías, instituciones, Iglesia y modos de vida. Pero, como ya hemos visto, Europa había cambiado durante los años intermedios, hasta el punto de resultar imposible toda restauración; e incluso el sistema de Metternich, apoyado por las promesas, más que por los actos de las otras potencias del congreso, fue impotente para detener la corriente revolucionaria, que volvió a estallar de nuevo con toda su fuerza en 1848. Pero la derrota de 1848 trazó una nueva línea de separación entre el nacionalismo y el liberalismo; como en 1815, resucitó el ultramontanismo, el cual, a su vez, alimentó el anticlericalismo y las polémicas sobre la educación, que han durado hasta el día de hoy. En 1871 se agravó el conflicto en Francia, donde apareció un nuevo conservadurismo que a menudo estaba divorciado de la religión y que combatía a la revolución en una actitud puramente secular: así, la amarga condena de Taine de la Revolución de 1789 superó en acritud a la de Burke, porque se alimentaba del miedo engendrado por la Comuna de París.

Esta batalla se ha mantenido en Francia y, por ello, resulta tentador trazar toda la historia de la Europa del siglo XIX como una proyección de la Revolución; si bien ello sería un gran error. La Revolución tuvo relativamente poca influencia en la Inglaterra victoriana y en la Rusia imperial. En la Europa occidental, central y meridional, esta influencia fue grande y continua hasta 1848: hasta entonces, la Francia revolucionaria, tanto la pasada como la presente, sirvió como una fuerza internacional poderosa que atraía la lealtad e inspiraba el pensamiento y la actividad de los patriotas, los liberales, los radicales y los socialistas en muchos países. La situación cambió después de las derrotas y la de-

silusión de 1849. Si bien las leyes y las instituciones derivadas de las francesas perduraron, así como las tradiciones, surgieron nuevas fuerzas para configurar los destinos de las naciones y dirigirlas por otros senderos. La vieja generación de liberales y patriotas alemanes e italianos luchó duramente para imitar a los franceses, pero las Alemania e Italia unificadas que surgieron en 1870 no estaban moldeadas a imagen de aquellos, sino de Bismarck y Cavour, quienes debían relativamente poco a las ideas de 1789. El industrialismo europeo, siguiendo el camino marcado por la Revolución industrial en Inglaterra, resultó ser, a largo plazo, una fuerza tan importante para el cambio social como lo fue la revolución política que tuvo su origen en Francia. Fue de la primera de estas revoluciones, antes que de la segunda, de donde emergió una clase trabajadora industrial, así como el nuevo conflicto social dominante entre el capital y el trabajo; el socialismo moderno, tal como lo formuló Marx, deriva tanto de la experiencia industrial inglesa como de las enseñanzas de los *philosophes* y los revolucionarios franceses. La expansión ultramarina europea y su posterior dominio sobre la totalidad del mundo no americano fue el resultado de las fuerzas explosivas que se desarrollaron dentro de la nueva sociedad industrial. Los principios desafiantes de 1789 y 1793 no se habían perdido de vista y, en consecuencia, se exportaron a los pueblos que habían permanecido intactos ante los fermentos tempranos de la «Europa revolucionaria». En líneas generales, sin embargo, estos principios habían ido perdiendo su carácter, hasta confundirse con las ideologías de posteriores revoluciones. La batalla por los Derechos del Hombre continuaba, pero ahora se iba a disputar bajo banderas y consignas muy distintas de aquellas de 1789.

[1] Para un resumen, véase N. Hampson, *op. cit.,* pp. 251-254.

[2] Para la comprensión de esta «revolución dual», véase E. J. Hobsbawn, *The Age of Revolution,* pp. 168-181.

BIBLIOGRAFÍA

Es conveniente que, dentro de la enorme bibliografía existente acerca de la Europa revolucionaria y napoleónica, el estudiante proceda con cautela y busque una orientación constante. Una guía bibliográfica útil para la Europa del siglo XVIII es la obra de J. S. Bromley y A. Goodwin (comps.), *A Select List of Works on Europe and Europe Overseas, 1715-1815* (1956.) También se encontrarán *bibliografías* selectas en las siguientes series: W. L. Langer (comp.), *The Rise of Modern Europe;* L. Gershoy, *From Despotism to Revolution, 1763-1789* (1944); C. Crane Brinton, *A Decade of Revolution, 1789-1799* (1934); y G. Bruun, *Europe and the French Imperium, 1799-1814* (1938). En las series *Clio:* E. Preclin y V. L. Tapié, *Le XVIII[e] siècle* (2 vols., 1952), y L. Villat, *La Révolution et l'empire* (2 vols., 1936). En las series *Peuples et Civilisations* (comp. por L. Halphen y P. Sagnac): P. Sagnac, *La Fin de l'ancien régime et la Révolution américaine, 1763-1789* ([3]1952); G. Lefebvre, *La Révolution frangaise* ([3]1951); *Napoléon* ([4]1953).

Además de las anteriores, se pueden recomendar las *historias generales* siguientes: W. F. Reddaway, *A History of Europe from 1715 to 1814* ([4]1951); L. R. Gottschalk, *The Era of the French Revolution, 1715-1815* (1929); R. Mousnier y C.-E. Labrousse, *Le XVIII[e] siècle: l'époque des «lumières» (1715-1815)* ([3]1959). *The Age of Revolution: Europe, 1789-1848* (1962) (ed. cast.: *Las revoluciones burguesas,* 2 vols., Madrid, Guadarrama, 1974), de E. J. Hobsbawm, resulta original y sugestiva. También se debe recurrir de vez en cuando a los volúmenes VI-X de la antigua *Cambridge Modern History* (1900-1910) y a los caps. correspondientes de *The New Cambridge Modern History* (1957), vols. VII-IX.

Las guerras y la diplomacia se pueden estudiar en A. Sorel, *L'Europe et la Révolution frangaise* (8 vols., 1895-1904); A. Fugier, *La Révolution française et l'empire napoléonien*

(1954); J. H. Rose, *The Revolutionary and Napoleonic Era* ([7]1935), y L. Gershoy, *The French Revolution and Napoleon* (1933). Para la *guerra,* véase A. Vagts, *A History of Militarism* (nueva edición, 1959); C. Falls, *The Art of War* (1961); R. A. Preston, S. F. Wise y H. O. Werner, *Men in Arms* (1956), y B. H. Liddell Hart, *The Ghost of Napoleon* (1933). Para el *derecho internacional,* véase J. L. Brierley, *The Law of Nations* ([5]1955), y R. Pares, *Colonial Blockade and Neutral Rights, 1739-1763* (1934). Para las *Constituciones,* véase J. A. Hawgood, *Modern constitutions since 1787* (1939), y M. Beloff, *The Age of Absolutism, 1660-1815* (1954). El *desarrollo económico* se puede estudiar en A. Birnie, *An Economic History of Europe, 1760-1939* (1962). Para la *ciencia y la tecnologia,* además de Mousnier y Labrousse, ya citados, véase A. Wolf, *A History of Science, Technology and Philosophy in the Eighteenth Century* (ed. rev., 1952); D. McKie, *Antoine Lavoisier* (1952), y A. P. Usher, *A History of Scientific Inventions* (1929).

EUROPA EN VÍSPERAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Los primeros caps. de M. S. Anderson, *Europe in the Eighteenth Century, 1713-1783* (1961), son una introducción excelente al tema. En R. R. Palmer, *The Age of Democratic Revolution. A Political History of Europe and America, 1760-1800,* vol. I, *The Challenge* (1959), se encuentra una relación viva e interesante de los movimientos y las ideas políticos. La economía, la ciencia, las instituciones y la guerra se pueden estudiar en las obras citadas más arriba. Para la *sociedad aristocrática,* véase A. Goodwin, *The European Nobility in the Eigteenth Century* (1953). En el extenso y ya bien trillado campo de las *ideas políticas y la Ilustración,* se pueden recomendar los siguientes títulos seleccionados: P. Hazard, *European Thought in the Eighteenth Century: from Montesquieu to Lessing* (1954); C. L. Becker, *The Heavenly City of the Eighteenth Century Philosophers*

(1932); K. Martin, *French Liberal Tought in the Eighteenth Century* ([2]1954); A. Cobban, *In Search of Humanity* (1960) y *Rousseau in the Modern State* (1934); y P. Gay, *Voltaire's Politics: The Poet as Realist* (1959). Para la influencia ejercida por *América sobre el pensamiento europeo,* véase H. N. Fairchild, *The Noble Savage* (1928); M. Kraus, «America and the Utopian Ideal in the Eighteenth Century», *Mississippi Valley Historical Review* XXII (1936), y L. Gottschalk, «The Place of the American Revolution in the Causal Pattern of the French Revolution», *Publications of the American Friends of Lafayette* 2 (1948). Para el *Despotismo ilustrado,* véase F. Hartung, *Enlightened Despotism* (folleto de la Asociación de Historia, 1957).

Los problemas de los países europeos concretos, hasta 1789, se pueden estudiar en la siguiente selección breve:

Francia

E. G. Barber, *The Bourgeoisie in Eighteenth-Century France* (1955); D. Dakin, *Turgot and the Ancien Régime in France* (1939); F. L. Ford, *Robe and Sword. The Regrouping of the French Aristocracy after Louis XV* (1953); F. Funck-Brentano, *The Old Régime in France* (1929); C. E. Labrousse, *Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII[e] siècle* (2 vols., 1933) y *La Crise de l'économie française a la fin de l'ancien régime et au début de la Révolution* (1944); E. Levasseur, *Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789* (2 vols., [2]1901); J. Lough, *An Introduction to Eighteenth Century France* (1960); D. Mornet, *Les Origines intellectuelles de la Révolution frangaise, 1715-1787* (1933); R. R. Palmer, *Catholics and Unbelievers in Eighteenth Century France* (1939); H. Sée, *La France économique et sociale au XVIII[e] siècle* ([4]1946), y, sobre todo, consúltese A. de Tocqueville, *The Old Regime and the French Revolution* (ed. cast.: *El Antiguo Régimen y*

la Revolución, Daniel Jorro [ed.], 1911), y A. Young, *Travels in France, 1787-1789* (ed. de C. Maxwell, 1929).

Inglaterra

T. S. Ashton, *An Economic History of England: the Eighteenth Century* (1955); H. Butterfield, *George III, Lord North and the People* (1949); M. D. George, *England in Transition* (1953); L. S. Namier, *The Structure of Politics at the Accession of George III* ([2]1957); R. Pares, *King George III and the Politicians* (1953); J. Steve Watson, *The Reign of George III, 1760-1815* (1960); C. R. Ritcheson, *British Politics and the American Revolution* (1954); S. Maccoby, *English Radicalism, 1762-1785* (1955).

Bélgica (Países Bajos Austriacos)

T. K. Gorman, *America and Belgium: a Study of the Influence of the United States on the Belgian Revolution of 1789-1790* (1925); P. Harsin, *La Révolution liégeoise de 1789* (1953); S. Tassier, *Les Démocrates belges de 1789: essai sur le Vonckisme et la revolution brabançonne* (1930).

Imperio de los Habsburgo (aparte de Bélgica):

F. Fejtö, *Un Habsbourg révolutionnaire, Joseph II* (1953); K. J. Kerner, *Bohemia in the Eighteenth Century* (1932); H. Marczali, *Hungary in the Eighteenth Century* (1910); P. F. Sugar, «The Influence of the Enlightenment and the French Revolution in Eighteenth-Century Hungary», *Journal of Central European Affairs* XVII (1958), pp. 331-355; E. Wangermann, *From Joseph II to the Jacobin Trials (1959).*

España

R. Herr, *The Eighteenth-Century Revolution in Spain* (1958) (ed. cast.: *España y la Revolución del siglo XVIII,* Madrid).

Italia

L. Salvatorelli, *A Concise History of Italy* (1940).

Alemania y Prusia

W. H. Bruford, *Germany in the Eighteenth Century* (1939); W. L. Dorn, «The Prussian Bureaucracy in the Eighteenth Century», *Political Science Quarterly, 1931-1932;* P. Gaxotte, *Frederick II* (1941); H. Rosenberg, *Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy: The Prussian Experience, 1660-1815* (1958).

Suecia

R. N. Bain, «The Hats and Caps and Gustavus III», *Cambridge Modern History* VI (1900); R. Svanström y C. V. Palmstierna, *A Short History of Sweden* (1934).

Provincias Unidas

A. Cobban, *Ambassadors and Secret Agents: The Diplomacy of the First Earl of Malmesbury at The Hague* (1954); F. Edler, *The Dutch Republic and the American Revolution* (1911); B. H. M. Vlekke, *The evolution of the Dutch Nation* (1954).

Suiza

E. Chapuisat, *La prise d'armes de 1782 Genève* (1932).

Polonia

R. N. Bain, *The Last King of Poland and his Contemporaries* (1909); B. Lesnodarski, «Les facteurs intellectuels de la formation de la société polonaise moderne au siècle des Lumières», en *La Pologne au X.ᵉ Congrès international des sciences historiques à Rome* (Varsovia, 1955), pp. 167-261; R. H. Lord, *The Second Partition of Poland* (1915).

Rusia

P. Putman (comp.), *Seven Britons in Imperial Russia, 1698-1812* (1952); B. H. Sumner, *Peter the Great and the Emergence of Russia* (1950); G. Scott Thomson, *Catherine the Great and the Expansion of Russia* (1947); R. Portal, *L'Oural au XVIIIᵉ siècle* (1951).

Imperio otomano

H. A. R. Gibb y R. Bowen, *Islamic Society and the West,* vol. I, *Islamic Society in the Eighteenth Century* (1950-1957).

REVOLUCIÓN FRANCESA

La documentación impresa sobre la Revolución es innumerable; aquí se relacionará únicamente una pequeña parte. Ya se han citado los *Travels in France,* de Young. Hay extractos útiles de la prensa revolucionaria en G. Walter (comp.), *La Révolution française vue par ses journaux* (1948). Los discursos se pueden estudiar en H. Morse Stephens (comp.), *The Principal Speeches of the Statesmen and Orators of the French Revolution, 1789-1795* (2 vols., 1892). Ya se ha terminado la edición, en cuatro volúmenes, de los discursos, escritos y correspondencia de Robespierre, compilados por M. Bouloiseau, G. Lefebvre y A. Soboul. La colección más completa de documentos en traducción inglesa es la de J. H. Stewart, A *Documentary Survey of the French Revolution* (1951). Particular interés, para quien quiera estudiar el movimiento popular de las secciones de París, tiene W. Markov y A. Soboul (compiladores), *Die Sans-culotten von Paris: Dokumente zur Geschichte der Volksbewegung, 1793-1795* (1957), con textos en francés y alemán. J. M. Thompson, en *French Revolution Documents, 1789-1794* (en francés), hace una útil selección de leyes y decretos; la obra, más pasada de moda, de L. G. Wickham Legg, *Select Documents Illustrative of the History of the French Revolution. The Constituent Assembly* (2 vols., 1905), presta atención a la prensa revolucionaria.

Sucesivas generaciones de franceses han ido expresando sus opiniones acerca de las causas, historia y significado de la Revolución francesa: se discuten los puntos de vista de las distintas escuelas en P. Geyl, *Encounters in History* (1963), pp. 115-187, y en dos folletos de la Asociación de Historia: uno, de A. Cobban, *Historians and the Causes of*

the French Revolution (ed. revisada, 1958); el otro, de G. Rudé, *Interpretations of the French Revolution* (1961). El lector no especializado puede pasar por alto las historias más antiguas, como las de Thiers (1823-1827), Mignet (1824), Carlyle (1837), L. Blanc (1847-1862), Taine (1876) e incluso las de Michelet (1847-1853), Acton (1895-1899), Aulard (1901) y Jaurès (1901), a pesar de su interés literario; sin embargo, el estudio comparativo de Tocqueville *El Antiguo Régimen y la Revolución,* ya citado, tiene una mayor importancia para la actualidad y constituye lectura obligada. De los historiadores franceses posteriores, los mejores estudios son los de A. Mathiez, *La Révolution française* (3 vols., 1922-1927); G. Lefebvre, *La Révolution française* (1951), y A. Soboul, *Précis d'Histoire de la Révolution française* (1962) (ed. cast.: *La Revolución francesa,* Tecnos, 1966). Una interpretación más limitada, pseudo-marxista, es la de D. Guèrin, *La lutte de classes sous la première République: bourgeois et «bras nus»* (1793-1797) (2 vols., 1946). De las relaciones generales, además de las de Brinton y Gottschalk, ya citadas, se recomiendan las siguientes: G. Salvemini, *The French Revolution, 1788-1792;* J. M. Thompson, *The French Revolution* (1943); A. Goodwin, *The French Revolution, 1787-1794* (1953); y N. Hampson, *A Social History of The French Revolution* (ed. cast.: *Historia social de la Revolución francesa,* Madrid, 1963).

En cuanto a la historia interna de los estadios principales de la Revolución, J. Egret, en *La Pré-Révolution française, 1787-1788* (1962), estudia admirablemente los aspectos políticos de la difusa zona que une la «revolución aristocrática» de 1787-1788 con el estallido revolucionario de 1789. También tratan de la «revolución aristocrática» H. Carré, en *La fin des parlements, 1788-1790* (1912); P. Renouvin, en *Les Assemblées provinciales de 1787* (1921), y A. Goodwin, en «Calonne, the Assembly of Notables and the Origins of the Révolte Nobiliaire», *English Historical Review* (1946),

pp. 203-234 y 329-377; no obstante, los aspectos sociales de aquella aún no se han tratado debidamente. La mejor obra sobre el estallido de la Revolución es la de G. Lefebvre, *Quatre-vingt-neuf* (1939) (ed. cast.: *1789: Revolución francesa,* Laja, 1973). También debe leerse la introducción *a Crise de l'économie française,* de Labrousse (citada más arriba), así como el estudio magistral de G. Lefebvre sobre los movimientos campesinos de 1789, *La Grande Peur de 1789* (1932). Asimismo, puede encontrarse algún interés en la tendenciosa obra de F. Braesch *1789: l'année cruciale* (1941).

La obra de la Asamblea Constituyente se resume en P. Sagnac, *La Legislation civile de la Revolution frangaise* (1898); y las leyes y decretos de todo este periodo aparecen en L. Cahen y R. Guyot, *L'Oeuvre legislative de la Revolution* (1913). Las ideas que subyacen en la legislación de 1789-1791 se examinan en E. Thompson, *Popular Sovereignty and the French Constituent Assembly, 1789-1791* (1952); los movimientos políticos de este periodo se tratan en A. Mathiez, *Les Grandes journées de la Constituante, 1789-1991* (1913), y en *Le Club des Cordeliers pendant la crise de Varennes et le massacre du Champ de Mars* (1910). Los acontecimientos de 1792 se relatan en Mathiez, *Le Dix aout* (1931), y en P. Carron, *Les massacres de septembre* (1935). Para la lucha entre la Gironda y la Montaña en 1792-1793, véanse los puntos de vista opuestos de Mathiez, en *Girondins et Montagnards* (1930), y M. J. Sydenham, en *The Girondins* (1961). Para la obra y composición del gran Comité de Salvación Pública, véase R. R. Palmer, *Twelve who ruled* (1941), y para una parte importante de sus tareas en 1794, véase A. Ording, *Le Bureau de Police du Comité de Salut Public* (Oslo, 1935). La obra donde se trata de modo más actual y exhaustivo el Año II y, en especial, las relaciones entre el gobierno revolucionario y el movimiento popular de las secciones de París es *Les Sans-culottes parisiens en*

l'an II: mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire, 2 juin 1793-1799 Thermidor an II, de A. Soboul (1958). La función de la Comuna de París en los acontecimientos que condujeron a Termidor se examina en P. Sainte-Claire Deville, *La Commune de l'an II* (1946). Para la actividad del terror en las provincias, véase, sobre todo, R. C. Cobb, *Les Armées révolutionnaires: instrument de la Terreur dans les departements avril 1973-floreal an II* (2 vols., 1961-1963).

Los historiadores han tratado de modo más sucinto el periodo postermidoriano. Para el año siguiente a la caída de Robespierre son recomendables A. Mathiez, *La réaction thermidorienne* (1929); G. Lefebvre, *Les Thermidoriens* ([4]1960), y K. D. Tönnesson, en su estudio de los movimientos populares de Germinal y Pradial, *La défaite des sans-culottes: mouvement populaire et reaction bourgeoise en l'an III* (Oslo, 1959). Para el Directorio, véase G. Lefebvre, *Le Directoire* (1946); A. Vandal, *L'avènement de Bonaparte* (2 vols., 1907-1908), y D. Thompson, *The Babeuf Plot: The Making of a Republican Legend* (1947).

Respecto a los temas concretos, las instituciones (aparte de las militares) se pueden estudiar en J. Godechot, *Histoire des institutions de la France sous la Revolution et l'Empire* (1951); también hay que mencionar a M. Marion, *Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles* (1923). El mismo Godechot ha hecho el primer estudio exhaustivo de la *contrarrevolución* en *Le Contre-Revolution: doctrine et action, 1789-1804* (1961). Los aspectos financieros se examinan en J. Bouchary, *Les manieurs d'argent à Paris à la fin du XVIIIe siècle* (3 vols., 1939-1943); M. Marion, *Histoire financière de la France depuis 1715* (1914); S. G. Harris, *The Assignats* (1930); R. G. Hawtrey, «The Collapse of the French Assignats», en *Econ. Journal* XXVII (1918), pp. 300-314; y M. Marion, *La Vente des biens nationaux* (1908). Las relaciones entre la Iglesia y el Estado son la ma-

teria de J. McManners en *French Ecclesiastical Society under the Ancien Regime: A Study of Angers in the Eighteenth Century* (1960); A. Latreille, en *L'Eglise catholique et la Revolution française* (2 vols., 1946-1950); J. Leflon, en *La Crise revolutionnaire, 1789-1846* (1949); A Aulard, en *Christianity and the French Revolution;* así como en las siguientes obras de A. Mathiez: *Les origines des cultes révolutionnaires, 1789-1792* (1910); *Rome et le clergé français sous la Constituante* (1907); *La Révolution et l'Eglise* (1910); *La Question religieuse sous la Révolution* (1930); y *La Théophilanthropie et le culte décadaire, 1796-1802* (1904).

Jaurès, en su *Histoire socialiste de la Révolution française* (4 vols., 1901), inició los estudios sociales de la Revolución francesa, que, no obstante, tuvieron lento comienzo y aún se encuentran, por así decirlo, en su infancia. Las grandes obras que abrieron camino, después de la de Jaurès, fueron las de G. Lefebvre sobre la cuestión campesina, *Les Paysans du Nord pendant la Révolution française* (2 vols., 1924; nueva ed. en 1957), sus *Questions agraires au temps de la Terreur* (1932), y la de Mathiez *La Vie chère et le mouvement social sous la Terreur* (1927). Para otros intentos de análisis social –además de los de Soboul, Cobb y Tönnesson, ya citados– véase C. Crane Brinton, *The Jacobins* (1930); D. Greer, *The Incidence of the Terror during the French Revolution* (1935) *y The Incidence of the Emigration during the French Revolution* (1951); N. Hampson, *La Marine de l'an II* (1959); y G. Rudé, *The Crowd in the French Revolution* (1959). Otros estudios acerca de la agricultura, el abastecimiento de víveres, las ventas de los *biens nationaux,* las relaciones entre las clases, la población, la aplicación de las leyes del Maximum, etc., han aparecido en los *Annales historiques de la Révolution française* y en periódicos locales. Véase también A. Cobban, *The Social Interpretation of the French Revolution* (1964).

Entre la enorme masa de comunicación biográfica pueden citarse los siguientes títulos: J. M. Thompson, *Robespierre* (2 vols., 1939); M. Reinhard, *Carnot* (2 vols., 1950-1952); L. R. Gottschalk, *Marat* (1927); O. J. G. Welch, *Mirabeau* (1951); L. Madelin, *Fouché* (2 vols., 1900); G. Walter, *Hébert* (1939); R. Barthou, *Danton* (1932); y L. Gershoy, *Bertrand Barère, a Reluctant Terrorist* (1962).

EUROPA REVOLUCIONARIA

Para la política exterior de la Francia revolucionaria y sus relaciones internacionales, véanse, además de las historias y obras generales de Sorel, Fugier, Rose y Gershoy (citadas más arriba), P. Rain, *La Diplomatie française de Mirabeau et Bonaparte* (1950), y R. Guyot, *Le Directoire et la paix de l'Europe* (1911). Para el estallido de la guerra en 1792, véanse J. H. Clapham, *The Causes of the War of 1792* (1899) y, más especialmente, G. Michon, *Robespierre et la guerre revolutionnaire, 1791-1792* (1937). Acerca de los agentes extranjeros en París, véase A. Mathiez, *La Revolution et les étrangers* (1918). Para el ejército francés, véase Lefebvre, *Napoléon,* y las obras de Vagts, Liddell Hart, etc., ya citadas. Para la cuestión de las «fronteras naturales», véase G. Zeller, «La Monarchie d'ancien régime et les frontières naturelles», *Revue d'histoire moderne* VII (1933), pp. 305-333. Para las Constituciones europeas de 1791-1813, véase H. B. Hill, «The Constitutions of Continental Europe, 1789-1813», *Journal of Modern History VIII* (1936), pp. 82-94, y J. Godechot, *La Grande Nation* (véase más abajo). Para los plebiscitos europeos, véase Sarah Wambaugh, *A Monograph on Plebiscites* (1920).

En cuanto a la extensión de las ideas revolucionarias francesas en Europa en 1789-1793, véase G. Lefebvre, *The French Revolution from its origins to 1793,* ya citada, parte III. Las relaciones más exhaustivas de la «revolucionización» de Europa hasta 1799 son las de J. Godechot, *La*

Grande Nation: expansion révolutionnaire de la France dans le monde de 1789 a 1799 (2 vols., 1956), y *Les Revolutions (1770-1799)* (1963). Habrá que esperar la aparición del segundo volumen de R. R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution,* que trata similares aspectos.

En lo relativo a las consecuencias de la Revolución en los diferentes países, se pueden consultar los siguientes títulos:

Inglaterra

A. Cobban (comp.), *The Debate on the French Revolution* (²1950); P. A. Brown, *The French Revolution in English History* (1918); G. S. Veitch, *The Genesis of Parliamentary Reform* (1913); J. Deschamps, *Les Iles britanniques et la Revolution française* (1949); H. W. Meikle, *Scotland and the French Revolution* (1912); R. Birley, *The English Jacobins* (1924); J. Holland Rose, *William Pitt and the Great War* (1911); E. Burke, *Reflections on the Revolution in France* (Everyman [comp.], 1910); T. Paine, *The Complete Writings* (P. Foner [comp.], 2 vols., 1945).

Irlanda

R. B. MacDowell, *Irish Public Opinion, 1750-1800* (1944); H. McAnally, *The Irish Militia, 1793-1816* (1949); R. Jacob, *Rise of the United Irishmen, 1791-1794* (1937); R. Hayes, *Ireland and Irishmen in the French Revolution* (1932); H. L. Calkin, «La Propagation en Irlande des Idées de la Revolution française», *Ann. hist. de la Rev. franc.* (1955), pp. 143-160).

Bélgica

Además de las obras de Gorman, Harsin y Tassier, citadas más arriba, véanse H. Pirenne, *Histoire de Belgique,* vol. 5 (1921), y S. Tassier, *Histoire de Belgique sous l'occupation française en 1792 et 1793* (1934).

Imperio de los Habsburgo (aparte de Bélgica)

Además de las obras de Kerner, Marczali, Sugar y Wangermann (citadas más arriba), véanse P. Bödy, «The Hunga-

rian Jacobin Conspiracy of 1794-1795», *Journal of Central European Affairs* XXII (1962), pp. 3-26, y K. Benda, «Les Jacobins hongrois», *Ann. hist. de la Rév. franc.* (1959), pp. 38-60.

España

Véanse Herr, citado más arriba, y el *Apéndice bibliográfico.*

Italia

P. Hazard, *La Révolution française et les lettres italiennes* (1910); A. Ramm, *The Risorgimento* (folleto de la *Asociación de Historia*) (1962); G. B. MacLellan, *Venice and Bonaparte* (1931); M. Reinhard, *Avec Bonaparte en Italie* (1946); P. Gaffarel, *Bonaparte et les républiques italiennes, 1796-1799* (1895).

Alemania

G. P. Gooch, *Germany and the French Revolution* (1920); J. Droz, *L'Allemagne et la Révolution française* (1949); P. Sagnac, *Le Rhin français pendant la Révolution et l'Empire* (1917).

Suecia

R. Petiet, *Gustave IV Adolphe et la Révolution française* (1914).

Provincias Unidas (Holanda, República Bátava)

L. Legrand, *La Révolution française en Hollande* (1894); R. R. Palmer, «Much in little: the Dutch Revolution of 1795», *Journal of Modern History* XXVI (1954), pp. 15-35.

Suiza (República Helvética)

E. Chapuisat, *La Suisse et la Révolution française* (1945).

Polonia

Véanse las obras de Bain, Lesnodarski y Lord, citadas más arriba.

Rusia

C. de Larivière, *Cathérine II et la Révolution française* (1895).

Imperio otomano

B. Lewis, «The Impact of the French Revolution on Turkey», *Journal of World History* (1953-1954).

La tesis de una revolución «occidental» o «atlántica», propuesta por Godechot y Palmer, es materia de discusión entre varios expertos en la obra compilada por P. Amann, *The Eighteenth-Century Revolution: French or Western?* (Boston, 1963).

LA ERA NAPOLEÓNICA

Aquí se ofrece solamente una selección de la inmensa cantidad de literatura acerca de Napoleón. El estudio más serio y exhaustivo sobre el periodo napoleónico en todos sus aspectos es el de G. Lefebvre, *Napoléon,* en la serie *Peuples et Civilisations,* citado anteriormente, y que contiene una extensa bibliografía de todo el material publicado hasta 1952. Entre las narraciones más útiles se cuentan las de Bruun, *Europe and the French Imperium, 1799-1814* (ya citado); L. Madelin, *Le Consulat et l'Empire* (2 vols., 1933); y F. M. H. Markham, *Napoleon and the Awakening of Europe* (1954), breve y excelente investigación. La obra de H. A. L. Fisher *Napoleon* (1912), más anticuada, conserva cierto valor. Las memorias y las biografías sobre Napoleón son innumerables; las hay precisas y las hay novelescas, y muchas de ellas carecen de valor. Son recomendables para el lector inglés las siguientes: J. H. Rose, *The Life of Napoleon I* ([11]1934), y J. M. Thompson, *Napoleon Bonaparte: his Rise and Fall* (1952). Las opiniones que mereciera Napoleón se examinan en P. Geyl, *Napoleon For and Against* (1949); P. Farmer, *France reviews its Revolutionary Past* (1944), y J. Savant, *Napoleon in his Time* (1958). La importancia histórica de Napoleón es tema del breve esbozo de D. Dowd, *Napoleon: was he the Heir of the Revolution?* (1957). Para

una selección de la correspondencia de Napoleón, véase J. M. Thompson (comp.), *Letters of Napoleon* (1934).

Para la consolidación de la autoridad de Napoleón en Francia, véase F. Porteil, *Napoléon Ier et l'organisation autoritaire de la France* (1956); J. Thiry, *Le Coup d'état du 18 brumaire* (1947), *L'Aube du Consulat* (1948) y *Le Sénat de Napoléon* (1931); J. Bourdon, *La Constitution de l'an VIII* (1942); E. de Hauterive, *Napoléon et sa police* (1943), y A. Aulard, *L'Etat de France en l'an VIII et IX* (1897). Para las reformas hechas durante el Consulado, véase, además de Lefebvre y Madelin (citados más arriba), M. Leroy, *L'Esprit de la législation napoléonienne* (1898); P. Belle, *Portalis et les travaux préparatoires du Code Civil* (1949), y C. Durand, *Le Fonctionnement du conseil d'état napoléonien* (1949). En cuanto a Napoleón y la Iglesia católica, véanse, además de las obras de Latreille y Leflon (citadas anteriormente), H. H. Walsh, *The Concordat of 1801* (1934); G. L. M. J. Constant, *L'Eglise de France sous le Consulat et l'Empire* (1928), y C. Latreille, *L'Opposition religieuse au Concordat* (1910). Para la organización política de la Francia Imperial (incluidos los territorios anexionados), véase G. Lefebvre, *Napoléon,* pp. 342-376, y para la vida económica francesa véanse A. Chabert, *Essai sur le mouvement des revenus et de l'activité économique en France de 1798 à 1820* (1949), y J. Vidalenc, «La Vie économique des départements méditerranéens pendant l'Empire», *Révue d'Histoire Moderne et Contemporaine* I (1954), pp. 165-198.

Entre las numerosas obras sobre el ejército de Napoleón, su estrategia y campañas militares, se pueden recomendar las siguientes: Lefebvre, *Napoléon,* y los estudios de Vagts y Liddell Hart (ya citados); S. Wilkinson, *The Rise of General Bonaparte* (1930); J. Colin, *Education militaire de Napoleon* (1900); T. A. Dodge, *Napoleon: a History of the Art of War* (2 vols., 1904-1907); C. Oman, *History of the Peninsular*

War (7 vols., 1902-1930); E. Tarlé, *Napoleon's Invasion of Russia in 1812* (1942); H. Houssaye, *1814* (1888), y A. F. Becke, *Napoleon and Waterloo* (1914). La obra más aceptada acerca de la guerra en el mar es la de A. T. Mahan, *The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1793-1812* (2 vols., 1893); véase también J. H. Rose, «Napoleon and Sea Power», *Camb. Hist. Journal* I (1924), pp. 138-157.

La diplomacia y la política exterior se pueden estudiar en las obras de Sorel, Fugier y Rose (ya citados), y en R. B. Mowat, *The Diplomacy of Napoleon* (1924); H. C. Deutsch, *The Genesis of Napoleonic Imperialism* (1938); V. J. Puryear, *Napoleon and the Dardanelles* (1951); H. Butterfield, *The Peace Tactics of Napoleon, 1806-1808* (1929); E. Dard, *Napoleon and Talleyrand* (1937); A. Vandal, *Napoléon et Alexandre I* (3 vols., 1891-1896); H. Heath, *Napoleon and the Origins of the War of 1812* (1929); F. A. Updyke, *The Diplomacy of the War of 1812* (1955), y E. Driaud, *Napoléon et l'Europe* (5 vols., 1910-1927).

Para el bloqueo continental y el contrabloqueo británico, véanse F. E. Melvin, *Napoleon's Navigation System* (1919); E. F. Hekscher, *The Continental System: An Economic Interpretation* (1922); W. F. Galpin, *The Grain Supply of England during the Napoleonic Period* (1925); E. Tarlé, *Le Blocus continental et le royaume d'Italie* ([2]1931); E. Crouzet, *L'Economie britannique et le blocus continental* (2 vols., 1958), y G. Lefebvre, *Napoléon,* pp. 342-376. Para la organización política del Gran Imperio y la «revolucionización» de Europa de 1802 a 1813, véase, especialmente, G. Lefebvre, *Napoléon,* pp. 427-479; también se deben consultar H. A. L. Fisher, *Napoleonic Statesmanship in Germany* (1903); A. Hardman, *Napoléon et la Pologne, 1806-1807* (1909); A. Fugier, *Napoléon et l'Espagne* (1930) y *Napoléon et l'Italie* (1947); J. Rath, *The Fall of the Napoleonic Kingdom of Italy*

(1941); y R. M. Johnston, *The Napoleonic Empire in Southern Italy and the Rise of the Secret Societies* (2 vols., 1904).

Entre las numerosas relaciones sobre la caída de Napoleón y el crecimiento del «nacionalismo», se recomiendan las siguientes: las de Lefebvre, Fugier, Rath, Johnston y Markham (ya citados); F. D. Scott, *Bernadotte and the Fall of Napoleon* (1936); G. S. Ford, *Stein and the Era of Reform in Prussia, 1807-1815* (1922); J. d'Ursel, *La Défection de la Prusse* (1907) y *La Défection de l'Autriche* (1912); W C. Langsam, *The Napoleonic Wars and German Nationalism in Austria* (1930); F. Ponteil, *La Chute de Napoléon I et la crise de 1814-1815* (1943); y los primeros caps. de R. W. Seton-Watson, *Britain in Europe, 1789-1914* (1937). Hay una relación interesante acerca de la rebelión española de 1808-1814 en K. Marx y F. Engels, *Revolution in Spain* (ed. cast.: *Revolución en España,* Barcelona, Ariel).

La obra más conocida en inglés acerca de los últimos años de Napoleón en Santa Elena es la de lord Rosebery, *Napoleon: the Last Phase* (1900). Véase también O. Aubry, *St. Helena* (1937), y P. Gonnard, *The Exile of St. Helena: the Last Phase in Fact and Fiction* (1909).

CONSECUENCIAS

En cuanto a la configuración posterior de Europa, se recomiendan: D. Thompson, *Europe since Napoleon* (1957), parte II: «Europe in 1815», y dos obras de C. K. Webster: *The Foreign Policy of Castlereagh, 1812-1815: Britain and the Reconstruction of Europe* (1931), y *The Congress of Vienna, 1814-1815* (1919). Para la sociedad europea de la posguerra, los movimientos y perspectivas intelectuales, véase F. B. Artz, *Reaction and Revolution, 1814-1832* (1934), y E. J. Hobsbawm, *The Age of Revolution* (ya citado). En cuanto a la Iglesia y el Estado, véase E. E. Y. Hales, *Revolution and Papacy, 1769-1846* (1960). Para el legado de las ideas revolucionarias francesas, véase E. L. Woodward,

French Revolutions (1934), y lord Elton, *The Revolutionary Idea in France, 1789-1871* (1952). Para los movimientos liberales y nacionales, véanse Thompson y Artz (citados más arriba); R. Hinton Thomas, *Liberalism, Nationalism and the German Intellectuals, 1822-1847* (1952); F. Ponteil, *L'Eveil des nationalités et le mouvement libéral, 1815-1848* (1960); y A. Colquhoun, *The Risorgimento* (1958).

APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO

Parece oportuno facilitar al lector una bibliografía sumaria sobre la historia de España para que pueda ampliar, si tal es su deseo, sus conocimientos al respecto.

Teniendo en cuenta la limitación cronológica y que los años entre los que discurre la obra de Rudé (1783-1815) distan mucho de tener en España –hasta 1808– el mismo relieve que en Francia, será necesario aludir en ocasiones a libros que abarcan un periodo más amplio que el estudiado por el autor.

LOS REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS

Es obligada la consulta de la obra de B. Sánchez Alonso *Fuentes de la historia española e hispanoamericana. Ensayo de una bibliografía sistemática de impresos y manuscritos que ilustran la historia política de España y sus antiguas provincias de Ultramar,* 3.ª ed. corregida y puesta al día. Madrid, Publicaciones de la *Revista de Filología Española,* Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante, CSIC), 1952, 3 volúmenes. El periodo tratado en este tomo se encuentra en el vol. II, cap. VII, apartado 5 (1788-1808), pp. 479-508, y en el vol. III, cap. IX, apartados 1, 2 y 3 (1808-1874), pp. 3-90.

Desde 1953 el Centro de Estudios Históricos Internacionales de la Universidad de Barcelona publica el *Índice Histórico Español,* fundado por Jaime Vicens Vives, que proporciona reseñas críticas y de contenido de libros, folletos y artículos publicados en todo el mundo. Desde 1953 a 1958 se publicó trimestralmente, y desde 1958 aparece cada cuatro meses. El Centro de Estudios Históricos Internacionales depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, y de la edición se ocupa la editorial Teide.

J. J. Linz ofrece una visión de conjunto sobre la historiografía española actual en su trabajo «Five Centuries of Spa-

nish History: Quantification and Comparison», incluido (pp. 177-261) en el libro *The Dimensions of the Past. Materials, Problems and Opportunities for Quantitative Work in History.* Compilado por V. R. Lorwin y Jacob M. Price, New Haven y Londres, Yale University Press, 1972. Véanse, especialmente, pp. 195-204 y ss. Alianza prepara una traducción de parte del libro citado.

Entre los repertorios documentales puede verse el desigual de M. C. García Nieto, J. M. Donézar y L. López Puerta: *Bases documentales de la España contemporánea* (11 vols.), Madrid, Guadiana de Publicaciones, 1971-1974, de cuyo primer volumen, *Revolución y reacción, 1808-1833,* pueden consultarse las pp. 9-95.

LOS MANUALES

La fecunda transformación de la historiografía española, debida a Jaime Vicens Vives y a su escuela, hace que, a pesar del tiempo transcurrido, haya que tener en cuenta la *Historia social y económica de España y América,* Barcelona, Teide, 1957, dirigida por el propio Vicens, y cuyos tomos IV *(Los Borbones. El siglo XVIII en España y América)* y V *(Burguesía. Industrialización. Obrerismo)* comprenden el periodo aquí estudiado. Recientemente se ha reeditado en edición de bolsillo (Barcelona, Vicens-Vives, 1972) con un apéndice bibliográfico en el que se recogen y comentan –en muchas ocasiones con manifiesta parcialidad– las obras más significativas aparecidas después de la primera edición, relativas al periodo correspondiente a cada volumen.

De la excelente síntesis que constituye la *Historia de España Alfaguara,* dirigida por M. Artola, no se ha publicado aún el tomo IV *(El Antiguo Régimen: Los Borbones),* a cargo de Gonzalo Anes, pero sí el V, debido al propio M. Artola, *La burguesía revolucionaria (1808-1869),* Madrid, Alianza-Alfaguara, 1973, 434 pp., del que pueden consultarse los dos primeros capítulos, pp. 7-127.

Del manual de A. Ubieto, J. Reglá, J. M.ª Jover y C. Seco, *Introducción a la Historia de España,* Barcelona, Teide, [2]1965, pueden consultarse las pp. 404-409 y 425-446.

El difundido libro de R. Carr *España, 1808-1939,* Barcelona, Ariel, 1969, 734 pp., se ocupa del periodo en sus tres primeros capítulos, pp. 17-127. M. Tuñón de Lara dedica a este periodo el primer capítulo (pp. 9-40) de *La España del siglo XIX,* París, Librería Española, ([3]1971, 429 pp.). Hay una edición en formato de bolsillo en Barcelona, Laja, 1974.

LA DEMOGRAFÍA

De la evolución demográfica del periodo se han ocupado J. Nadal, *La población española (siglos XVI a XX),* Barcelona, Ariel, 1966, 223 pp., del que interesan concretamente las pp. 91-127. Hay una segunda edición, publicada en 1971, por la misma editorial, en la que, aparte de ciertas supresiones, se han corregido algunos ligeros errores deslizados en la primera. También más recientemente P. Romero de Solís, *La población española en los siglos XVIII y XIX. Estudio de Sociodemografía histórica,* Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1973, 288 pp., del que interesa especialmente el capítulo III, pp. 158-230.

Para aspectos más concretos pueden verse los trabajos de M. Livi Bacci, «Fertility and Nuptiality Changes in Spain from the late XVIIIth to the early XX[th] century», publicado en *Population Studies,* XXII, 1 (1968), pp. 83-102, y 2, pp. 211-234; y de Pierre Vilar, «Essai d'un bilan démographique de la période 1787-1814 en Catalogne», *Annales de Démographie Historique,* París, 1965.

Tan vinculado al tema de la demografía como a la historia social está el estudio de las epidemias y del estado sanitario de la población, cuya precaria situación han reconstruido los hermanos Mariano y José Luis Peset en *Muerte en España. (Política y sociedad entre la peste y el cólera.)*

Prólogo de Pedro Laín Entralgo, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1972, 256 pp.

LA HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL

Los manuales más difundidos de historia económica son los de Jaime Vicens Vives, *Manual de historia económica de España,* con la colaboración de J. Nadal Oller, Barcelona, Teide, 1959, 706 pp. (cito por la 1.ª ed.), profusamente reeditado, del que se pueden consultar los capítulos XXXII a XLVIII, pp. 425 y 668, y el de J. A. Lacomba, *Introducción a la historia económica de la España contemporánea,* Madrid, Guadiana de Publicaciones, 1969, 492 pp. (cito igualmente por la 1.ª ed.), del que pueden verse los capítulos I a VII de la primera parte, pp. 23-100, para la primera mitad del siglo XIX.

Ya clásico es el trabajo de J. Vicens Vives «Coyuntura económica y reformismo burgués. Dos factores de la evolución de la España del Antiguo Régimen», que abre (pp. 17-58) el volumen *Coyuntura económica y reformismo burgués y otros estudios de Historia de España.* Notas preliminares y selección de textos de José Fontana Lázaro, Barcelona, Ariel, 1968, 215 pp.

Pierre Vilar ofrece una síntesis de la estructura social española a mediados del siglo XVIII, que sirve de marco al periodo, en «Estructures de la societat espanyola cap al 1750», publicado (pp. 9-32) en *La formació de la Catalunya moderna,* en *Recerques. Historia, Economía, Cultura,* n.º 1, Barcelona, Ariel, 1970, 270 pp.

En el mismo sentido hay que destacar las monografías que, bajo el título genérico de *La España del Antiguo Régimen,* ha dirigido y editado M. Artola; M.ª D. Mateos, *Salamanca,* Universidad de Salamanca, 1966, 61 pp.; M.ª D. Marcos, *Castilla la Nueva,* y P. Calonge, E. García y E. Rodríguez, *Castilla la Vieja.*

De la agricultura se ha ocupado ampliamente G. Anes, *Las crisis agrarias en la España moderna,* Madrid, Taurus, 1970, 517 pp., y «La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868: algunos problemas», trabajo aparecido (pp. 235-263) en *Ensayos sobre la economía española en el siglo XIX,* realizados por el Servicio de Estudios del Banco de España, Madrid, Raycar, 1970, 399 pp.

Más datos sobre la economía a principios del siglo XIX pueden encontrarse en J. M.ª Tallada Pauli, *Historia de las finanzas españolas en el siglo XIX,* Madrid, Espasa-Calpe, 1946, 267 pp.; véase el cap. II, pp. 24-37; y J. Sardá, *La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX,* libro cuya primera edición se remonta a 1948 y que ha sido reeditado en Barcelona, Ariel, 1970, 366 pp.; véanse especialmente pp. 5-42.

Aspectos más circunstanciados de la economía de los siglos XVIII y XIX pueden encontrarse en D. R. Ringrose, *Los transportes y el estancamiento económico de España (1750-1850),* Madrid, Tecnos, 1972, 222 pp. La edición original inglesa es de 1970. E. J. Hamilton, «El Banco nacional de San Carlos (1782-1829)», incluido (pp. 199-231) en el libro –tan interesante como su accidentada historia– titulado *El Banco de España. Una historia económica;* prefacio de Mariano Navarro Rubio, Madrid, Banco de España, 1970, XIII + 540 pp. G. Anes Álvarez, «La economía española (1782-1829)», en *El Banco de España…,* pp. 227-260. J. Fontana Lázaro, «Colapso y transformación del comercio español entre 1792 y 1827. Un aspecto de la crisis de la economía del Antiguo Régimen en España», *Moneda y Crédito* 115 (1970), Madrid. R. Herr, «Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV», *Moneda y Crédito* 118 (1971), Madrid, pp. 37-100.

Fundamental es el trabajo de J. Fontana Lázaro *La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820. (La crisis del Anti-*

guo Régimen en España), Barcelona, Ariel, 1971, 499 pp., en el que, a pesar de las fechas consignadas en el título, se encuentran análisis sobre diversos aspectos de la economía española en los años finales del siglo XVIII y primeros del XIX (véase, por ejemplo, III, 6, pp. 145 y ss., «Los eclesiásticos y la resistencia a las reformas en el seno del Antiguo Régimen»). Lo mismo sucede con otro libro de Fontana, *Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español: 1823-1833,* Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1973, 360 pp., del que pueden verse los dos primeros capítulos (pp. 13-72), dedicados a la situación de la Hacienda en el siglo XVIII y principios del XIX.

Más breves, aunque no menos sugestivos, resultan los trabajos de J. Fontana Lázaro, «Formación del mercado nacional y toma de conciencia de la burguesía» y «Nacimiento del proletariado industrial y primeras etapas del movimiento obrero», incluidos ambos (pp. 13-53 y 57-95) en el volumen titulado *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX,* Barcelona, Ariel, 1973, 196 pp. El primer trabajo fue publicado en catalán («La primera etapa de la formació del mercat nacional a Espanya») en el tomo II (pp. 143-161) del *Homenaje a Jaime Vicens Vives,* Barcelona, Universidad de Barcelona, Facultad de Filosofía y Letras, 1967, 2 vols. Del segundo trabajo interesan especialmente las pp. 57-84.

Por lo que respecta a la historia económica de Cataluña, la obra fundamental es la de P. Vilar, *Catalunya dins l'Espanya moderna. Recerques sobre eis fondaments económics de les estructures nacionals,* Barcelona, Edicions 62, 1964-1968, 4 volúmenes, de los que interesan especialmente el III *(Les transformacions agraries del segle XVIII cataba)* y el IV *(La formació del capital comercial):* véase también P. Vilar, «Transformaciones económicas, impulso urbano y movimiento de salarios: la Barcelona del siglo XVIII», trabajo

incluido (pp. 51-81) en *Crecimiento y desarrollo. Economía e historia. Reflexiones sobre el caso español,* Barcelona, Ariel, 1964, 542 pp.

I. Castells ha estudiado uno de los motines producidos por la crisis de subsistencia en «Els rebomboris del pa de 1789 a Barcelona», incluido (pp. 51-81) en *La formació de la Catalunya moderna,* en *Recerques. Historia, Economía, Cultura,* n.º 1, Barcelona, Ariel, 1970, 270 pp.

Para el País Valenciano pueden verse: M. Ardit Lucas, «Los alborotos de 1801 en el reino de Valencia», *Hispania* XXIX (1969), pp. 526-542. M. Ardit Lucas y A. Cucó, «Aportación al estudio de la reacción señorial en el País Valenciano a finales del siglo XVIII», *Saitabi* XXI (1971), pp. 121-138.

Para Aragón puede consultarse como fuente de la época la obra de I. de Asso *Historia de la economía política de Aragón,* publicada en Zaragoza en 1789 y reeditada, con un prólogo e índices de J. M. Casas Torres, en Zaragoza por la Estación de Estudios Pirenaicos, CSIC, 1947.

Véanse también los trabajos de D. R. Ringrose, «Perspectives on the economy of the eighteenth century Spain», y de B. H. y S. I Stein, «Concepts and realities of Spanish economic growth, 1759-1789», publicados ambos en *Historia Ibérica,* publicación dirigida por C. E. Lida y N. Sánchez Albornoz, Nueva York, Anaya-Las Américas Publ. Co., 1973.

Aunque prestan mucha más atención a los aspectos jurídicos que a los económicos, hay que citar los trabajos de S. de Molxó, *La disolución del régimen señorial en España,* Madrid, CSIC, Escuela de Historia Moderna, 1965, 271 pp.; véase especialmente el capítulo I, pp. 1578; y B. Clavero, *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836,* Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1974, XI + 434 pp.; el periodo aquí tratado coincide casi exactamente con la primera sección de la tercera parte, pp. 291-360.

Los aspectos sociales están más dispersos. Pueden consultarse las obras de A. Jutglar, *La era industrial en España (Aproximación a la historia social de la España contemporánea),* Barcelona, Nova Terra, 1963, 349 pp., véanse pp. 21-55; e *Ideología y clases en la España contemporánea. Aproximación a la historia social de las ideas,* Madrid, Edicusa, 1968-1969, 2 vols., véase I, pp. 15-42.

LOS AÑOS FINALES DEL SIGLO XVIII

Entre las obras que se ocupan de los años finales de nuestro siglo XVIII hay que tener en cuenta la ya clásica de J. Sarrailh, *La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII,* México, Fondo de Cultura Económica, 1957, 784 pp. (la edición original francesa es de 1954). Un año después de publicarse la traducción española del libro de Sarrailh apareció un trabajo que contribuyó mucho al conocimiento de nuestro siglo XVIII, el de A. Domínguez Ortiz, *La sociedad española en el siglo XVIII* (prólogo de C. Viñas y Mey), Madrid, Instituto Balmes de Sociología del CSIC, 1958, 396 pp., del que interesa especialmente el capítulo I de la segunda parte («El ocaso del régimen señorial»), pp. 299-342.

Véase también C. Corona Baratech, *Revolución y reacción en el reinado de Carlos III,* Madrid, Rialp, 1957, 434 pp., del que interesan especialmente los capítulos VI a VIII, pp. 220-414.

Otro libro fundamental sobre nuestro siglo XVIII, el único que cita Rudé en su amplia bibliografía, es el de R. Herr, *España y la revolución del siglo XVIII,* Madrid, Aguilar, 1964, XVI + 417 pp., del que interesa sobre todo la segunda parte («La revolución»), pp. 197-372.

Las raíces del pensamiento tradicional han sido estudiadas por J. Herrero, *Los orígenes del pensamiento reaccionario español,* Madrid, Edicusa, 1973, 409 pp.

Diversos aspectos de la ideología de los ilustrados españoles que entran de lleno en el periodo estudiado han sido investigados por A. Elorza, *La ideología liberal en la ilustración española,* Madrid, Tecnos, 1970, 309 pp.

Para la actuación de la Inquisición en el siglo XVIII pueden consultarse el ya clásico trabajo de M. Defourneaux, *Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII,* Madrid, Taurus, 1973, 268 pp. (la edición original francesa es de 1963), y el libro de G. García Pérez, *La economía y los reaccionarios al surgir la España contemporánea. Denuncia a la Inquisición de la primera cátedra española de economía* (prólogo de E. Tierno Galván), Madrid, Edicusa, 1974, 410 pp.

La historia eclesiástica de nuestro país, elaborada con rigor científico y sin ánimo apologético, no se cultiva mucho. Excepción en este campo resulta el libro de J. M. Castells, *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea, 1767-1965. Un estudio jurídico-administrativo* (prólogo de Miguel Artola), Madrid, Taurus, 1973, 502 pp. Interesa especialmente el cap. I, pp. 13-147.

Muy interesante, aunque se refiera a la totalidad del siglo, es el libro de C. Martín Gaite, *Usos amorosos del dieciocho español,* Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1972, XXI + 273 pp.

Sobre la masonería, véase el documentado libro de J. A. Ferrer Benimeli, *La masonería española en el siglo XVIII,* Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1974, XXII + 507 pp.

Sobre la moral, véase el trabajo de J. L. López Aranguren, *Moral y sociedad. Introducción a la moral social española del siglo XIX,* Madrid, Edicusa, 1965, 202 pp. Véanse especialmente pp. 9-58.

Véase el breve trabajo de J. Marichal, *From Pistoia to Cadiz.* A *Generation's Itinerary, 1786-1812,* incluido (pp. 97-

109) en *The Ibero-American Enlightenment,* University of Illinois Press, Urbana, 1971, X + 335 pp. Se trata de una de las comunicaciones presentadas al simposio convocado en 1969 por la Universidad de Illinois y la Sociedad Hispánica de Estados Unidos.

Sobre las repercusiones de la Revolución francesa, véase el trabajo de G. Anes, «La Revolución francesa y España», incluido (pp. 141-198) en su libro *Economía e «Ilustración» en la España del siglo XVIII,* Barcelona, Ariel, 1969, 215 pp. También, además del libro antes mencionado del mismo autor, *Pan y toros y otros papeles sediciosos de fines del siglo XVIII,* recogidos y presentados por Antonio Elorza, Madrid, Ayuso, 1971, 110 pp.

Asimismo, M. Ardit Lucas, «La Revolución francesa y Valencia. Los alborotos de 1793», *Boletín de la Real Sociedad Castellanense de Cultura,* XLVI, I (1970), pp. 411-421; e I. M. Zavala, «Picornell y la Revolución de S. Blas, 1975», en *Historia Ibérica,* Nueva York, Anaya-Las Américas, Pubi. Co., 1973.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, LAS CORTES DE CÁDIZ Y EL REINADO DE FERNANDO VII

La bibliografía sobre estos temas es muy amplia. Una breve síntesis es la ofrecida por J.-R. Aymes, *La guerra de la Independencia en España (1808-1814),* Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1975. La edición original es de 1973.

El estudio más completo sobre el periodo es, sin duda, el de M. Artola, *La España de Fernando VII* (introducción de C. Seco Serrano), tomo XXVI de la *Historia de España* dirigida por Ramón Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, Sociedad Anónima, 1968, XXXVI + 999 pp.

Del mismo autor son dos trabajos fundamentales para el estudio del periodo: M. Artola, *Los afrancesados,* con un prólogo de G. Marañón, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1953, XXI + 335 pp., en el que se estudia

con detalle el reinado de José I; y *Los orígenes de la España contemporánea,* Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1959, 2 vols., que estudia minuciosamente la revolución liberal y las Cortes de Cádiz, sin descuidar los aspectos económicos. Véase también J. Mercader Riba, *José Bonaparte, rey de España, 1808-1813. Historia externa del reinado,* Madrid, Escuela de Historia Moderna, Instituto Jerónimo Zurita, CSIC, 1971, XI + 376 pp.

Puede también consultarse el trabajo de P. Vilar, «Catalunya i Espanya davant la invasió francesa: resistència i «nació», practica y conceptualizació», incluido (pp. 93-171) en *Assaigs sobre la Catalunya del segle XVIII,* Barcelona, Curial, 1973, 179 pp.

E. Tierno Galván ha dirigido una antología de las *Actas de las Cortes de Cádiz,* Madrid, Taurus, 1964, 1.229 pp., en 2 vols., y publicado *Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936),* Madrid, Tecnos, 1968, 534 pp., donde pueden consultarse la Constitución de Bayona y la de 1812 (pp. 3-74), textos que también figuran en D. Sevilla Andrés, *Constituciones y otras leyes y proyectos políticos de España,* Madrid, Editora Nacional, 1969, 2 vols., en el tomo I, pp. 49-68 y 115-215, respectivamente.

Véanse también los libros de L. Sánchez Agesta, *Historia del constitucionalismo español,* Madrid, Instituto de Estudios Políticos, [2]1964, 461 pp., especialmente 45-112, y M. Artola, *Partidos y programas políticos, 1808-1936,* t. I, «Los partidos políticos», Madrid, Aguilar, 1974, 705 pp., que constituye un importante estudio de teoría e historia política.

Para cerrar este apéndice, no hay que olvidar las agudas observaciones relativas a los comienzos de nuestro siglo XIX dispersas a lo largo de los artículos de Marx y Engels: *Revolución en España* (prólogo, notas y traducción de Manuel Sacristán), Barcelona, Ariel, [3]1970, 222 pp.

Fernando Reigosa Blanco
Madrid, octubre de 1974.

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL

EL ANTIGUO RÉGIMEN

Sobre el Antiguo Régimen en Francia, véanse W. Doyle, *The Ancien Régime* (1986), y E. Le Roy Ladurie, *The Ancien Régime* (1998). Para un análisis de los conflictos sociales en Francia antes, durante y después de la Revolución, véase Ch. Tilly, *The Contentious French* (1989).

LA REVOLUCIÓN FRANCESA

La Revolución continúa engendrando nuevas lecturas. Sobre los orígenes de la Revolución, véanse W. Doyle, *Origins of the French Revolution* (1988), y T. C. W. Blanning, *The Origins of the French Revolutionary Wars* (1986). Si se buscan nuevos tratamientos y análisis narrativos, véanse D. Andress, *French Society in Revolution 1789-1799* (1999); F. Aftalion, *The French Revolution: An Economic Interpretation* (1990); W. Doyle, *The Oxford History of the French Revolution* (1990); F. Furet, *The French Revolution, 1770-1814* (1996) y *Revolutionary France, 1770-1880* (1995); J. M. Roberts, *The French Revolution* (1997); G. Rudé, *French Revolution: Its Causes, Its History, and Its Legacy after 200 Years* (1988); S. Schama, *Citizens: A Chronicle of the French Revolution* (1989); y la traducción inglesa de la obra de A. Soboul, *The French Revolution, 1787-1799: From the Storming of the Bastille to Napoleon* (1975). Sobre los ejércitos y las guerras de la Francia revolucionaria, véanse K. Alder, *Engineering the Revolution: Arms and Enlightenment in France, 1763-1815* (1999); J. P. Bertaud, *The Armies of the French Revolution* (1988); T. C. W. Blanning, *The French Revolutionary Wars, 1787-1802* (1996); R. Cobb, *The People's Armies: The Armies Revolutionnaires: Instrument of the Terror in the Departments April 1793 to Floreal Year II* (1987); y A. Forrest, *The Soldiers of the French Revolution* (1990). Véanse también R. Cobb, *The French and Their Revolution* (1999); O. Connelly, *French Revolution and Napoleonic Era*

([2]1997); y P. L. Higonnet, *Goodness beyond Virtue: Jacobins during the French Revolution* (1998).

ESTUDIOS CULTURALES DE LA REVOLUCIÓN

Se han escrito muchas obras originales de investigación sobre la historia cultural de la Revolución. Entre los muchos estudios publicados, véanse los de R. Chartier, *The Cultural Origins of the French Revolution* (1990); R. Darnton, *Literary Underground of the Old Régime* (1985); R. Thomas Denomme (ed.), *Unfinished Revolutions: Legacies of Upheaval in Modern French Culture* (1998); P. Griffith, *The Art of War of Revolutionary France* (1998); J. A. W. Heffernan (ed.), *Representing the French Revolution: Literature, Historiography, and Art* (1992); L. Avery Hunt, *Politics Culture and Class in the French Revolution* (1984); E. Kennedy, *A Cultural History of the French Revolution* (1989); L. Mason, *Singing the French Revolution: Popular Culture and Politics, 1789-1799* (1996); T. B. Porterfield, *The Allure of Empire: Art in the Service of French Imperialism, 1798-1836* (1998); D. Roche, *France in the Enlightenment* (2000); W. Roberts, *Jacques-Louis David and Jean-Louis Prieur, Revolutionary Artists: The Public, the Populace and Images of the French Revolution* (1999); y W. H. Sewell, Jr., *Work and Revolution in France* (1980).

INTERPRETACIONES DE LA REVOLUCIÓN

La Revolución y su legado siguen siendo cuestionados por escritores de todo el espectro intelectual y político. Mientras sigan sin cumplirse los ideales de «Libertad, Igualdad y Fraternidad», seguiremos luchando por cómo ha de recordarse la Revolución. Véanse K. Baker, C. Lucas y F. Furet (eds.), *French Revolution and the Creation of Modern Political Culture* (1994); G. Best, *The Permanent Revolution: The French Revolution and its Legacy, 1789-1989* (1989); G. C. Comninel, *Rethinking the French Revolution: Marxism and the Revisionist Challenge* (1987); T. C. W.

Blanning, *The French Revolution: Class War of Culture Clash?* (1998); R. Darnton, *What was Revolutionary about the French Revolution?* (1998); F. Feher (ed.), *The French Revolution and the Birth of Modernity* (1990); F. Furet, *Interpreting the French Revolution* (1981); E. J. Hobsbawm, *Echoes of the Marseillaise: Two Centuries Look Back on the French Revolution* (1990); S. Laurence Kaplan, *Farewell, Revolution: Disputed Legacies: France, 1789/1989* (1995); S. Laurence Kaplan, *Farewell, Revolution: The Historians' Feud: France, 1789/1989* (1995); y G. Kates (ed.), *The French Revolution: Recent Debates and New Controversies* (1997).

OBRAS DE REFERENCIA

F. Furet, *A Critical Dictionary of the French Revolution* (1989); J. Hardman, *The French Revolution Source Book* (1999); y S. F. Scott y B. Rothaus (eds.), *Historical Dictionary of the French Revolution, 1789-1799,* vol. 1 (1985).

LOS CAMPESINOS EN LA REVOLUCIÓN

Básicamente rindiendo tributo a la obra pionera sobre los campesinos en la Revolución, escrita por el gran historiador francés Georges Lefebvre, los historiadores han prestado una considerable atención a lo que sucedió en el campo durante la Revolución. Véanse I. Woloch (ed.), *The Peasantry in the Old Régime: Conditions and Protests* (1977); P. Jones, *The Peasantry in the French Revolution* (1990); J. Markoff, *The Abolition of Feudalism: Peasants, Lords and Legislators in the French Revolution* (1996); P. McPhee, *Revolution and Environment in Southern France, 1780-1830: Peasants, Lords, and Murder in the Corbières* (1999); y Ch. Tilly, *The Vendée* (1964).

LAS MUJERES

El área de estudio de la Revolución más reciente, y quizás el más apasionante, es la historia de las mujeres. Sobre este tema véanse M. Gutwirth, *The Twilight of the Goddesses:*

Women and Representation in the French Revolution (1994); D. Godineau, *The Women of Paris and Their French Revolution* (1997); D. Y. Kadish, *Politicizing Gender: Narrative Strategies in the Aftermath of the French Revolution* (1991); J. B. Landes, *Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution* (1988); S. E. Melzer y L. W. Rabine (eds.), *Rebel Daughters: Women and the French Revolution* (1992); y Sh. Elson Roessler, *Out of the Shadows: Women and Politics in the French Revolution, 1789-1795* (1996).

LA EUROPA REVOLUCIONARIA

Si se buscan estudios sobre la Revolución más allá de las fronteras de Francia, véanse E. Bahr y Th. P. Saine (eds.), *Internalized Revolution: German Reactions to the French Revolution, 1789-1989* (1992); T. C. W. Blanning, *The French Revolution in Germany* (1983); K. J. Brauer y W. E. Wright, *Austria in the Age of the French Revolution, 1789-1815* (1990); K. Carpenter y Ph. Mansel (eds.), *The French Emigrés in Europe and the Struggle against Revolution, 1789-1814* (1999); O. Dann y J. Dinwiddy (eds.), *Nationalism in the Age of the French Revolution* (1988); Th. P. Saine, *Black Bread: German Intellectuals and the French Revolution* (1988); S. Schama, *Patriots and Liberators: Revolution in the Netherlands, 1780-1813* (1977); y J. Klaits, *The Global Ramifications of the French Revolution* (1994).

LA ERA NAPOLEÓNICA

Siguen apareciendo nuevas obras sobre Napoleón y sus campañas. Véanse G. Ellis, *The Napoleonic Empire* (1991); Ch. J. Esdaile, *The Wars of Napoleon* (1995); M. Finley, *The Most Monstrous of Wars: The Napoleonic Guerrilla War in Southern Italy, 1806-1811* (1994); D. Gates, *The Napoleonic Wars: 1803-1815* (1997). J. Ch. Herold, *The Age of Napoleon* (1987); M. Lyons, *Napoleon Bonaparte and the Legacy of the French Revolution* (1994); R. K. Riehn, *1812: Napoleon's Russian Campaign* (1991); J. Weller, *Wellington in the*

Peninsula: 1808-1814 (1999). Véase además la obra de O. Connelly *et al.* (eds.), *Historical Dictionary of Napoleonic France, 1799-1815* (1985).

CONSECUENCIAS

Si se buscan obras sobre Francia tras la Revolución y la era napoleónica, véanse P. M. Pilbeam, *Constitutional Monarch in France, 1814-1848* (2000), e I. Woloch, *The New Regime: Transformations of the French Civic Order, 1789-1820s* (1994).

Harvey J. Kaye

GLOSARIO

Aides: Impuestos de sisa sobre los vinos y los licores bajo el Antiguo Régimen en Francia.

Amalgame: Unificación de soldados regulares y voluntarios que se llevó a cabo dentro del ejército francés en 1793.

Anobli: Plebeyo del Antiguo Régimen, recientemente ennoblecido.

Año II: El segundo año de la República Francesa, o sea, desde el 22 de septiembre de 1793 hasta el 21 de septiembre de 1794. La mayoría de las veces se aplica al periodo de dominio del gran Comité de Salvación Pública (28 de julio de 1793 a 28 de julio de 1794).

Armée révolutionnaire: Ejército ciudadano de *sans-culottes* (véase más abajo), organizado en varios lugares en otoño de 1793 y cuyo fin originario era asegurar el suministro de grano a París y otras ciudades.

Assignat: Papel moneda revolucionario que se emitió al principio para financiar la venta de las tierras eclesiásticas y que adquirió circulación generalizada después del verano de 1791.

Ateliers de charité: Talleres públicos organizados en 1789 para dar trabajo a los desempleados.

Aufklärung: Acepción alemana de «Ilustración».

Autel de la patrie: Altar cívico, dedicado a la Nación y erigido en el centro del Campo de Marte, al oeste de París.

Bailliage, sénéchaussée: Centro provincial de jurisdicción real, presidido por un *bailli* o un *sénéchal,* el primero de los cuales actuaba en el norte de Francia y el segundo en el sur.

Banalités: Monopolio feudal que permitía al *seigneur* provincial (el señor del feudo) obligar a sus arrendatarios

a llevar su grano, su harina y sus uvas al molino, al horno y a la prensa señoriales.

Barrières: Puestos aduaneros que rodeaban la ciudad de París, erigidos por los recaudadores generales de impuestos poco antes de la Revolución.

Biens nationaux: Propiedades confiscadas a la Iglesia, a la aristocracia o a los «sospechosos», nacionalizadas y vendidas en subasta durante la Revolución.

Brissotins: Seguidores de Jacques-Pierre Brissot en la época de la Asamblea Legislativa.

Brumaire: El mes «brumoso» (23 de octubre a 20 de noviembre) del calendario revolucionario. El término se aplica, en particular, al *coup d'état* de Bonaparte del 18 al 19 Brumario del año VII (9 al 10 de noviembre de 1799).

Burgeois, Bourgeoisie: Término genérico, más o menos sinónimo de clases medias urbanas, banqueros, corredores, comerciantes, grandes fabricantes y profesionales de todas clases.

Cahiers de doléances: Listas de agravios confeccionadas por separado por los tres «estamentos» en las ciudades, aldeas y gremios, en preparación de los Estados Generales de 1789.

Capitation: Impuesto sobre los ingresos individuales que, originalmente, pagaban todas las clases. Durante el siglo XVIII, el clero fue eximido legalmente y, en la práctica, también solía estarlo la nobleza.

Cens: Renta feudal en moneda.

Champart: Renta feudal en especie.

Chouans: Guerrillas campesinas contrarrevolucionarias que actuaron en Normandía y Bretaña después de 1793.

Comité des Trente: Comité de los Treinta, al que pertenecían Duport, Talleyrand, Mirabeau, Sieyes y otros y al

que se suele atribuir una importancia exagerada en los acontecimientos de 1789.

Comité de Salvación Pública: El más importante de los dos comités del gobierno del año II. Por regla general, responsable tanto de los asuntos internos como de los externos; sus poderes coincidían a veces con los del Comité de Seguridad General en asuntos policiales y judiciales.

Comité de Seguridad General: Uno de los dos principales comités del gobierno del año II, especialmente encargado de la policía y la seguridad interna.

Comités révolutionnaires: Comités provinciales, adscritos a las secciones (véase más abajo), responsables de la policía y de la seguridad interna.

Complot de l'étranger: El famoso «complot del extranjero». Por regla general se acusaba a Pitt y a sus agentes de Francia de estar tramando el hundimiento de la República en 1793-1794 y esta acusación gozaba de amplio crédito.

Cordeliers, Club des: El más plebeyo y, también, el más radical de los dos clubes principales de París, durante la Revolución. Los más conocidos de sus dirigentes (en varias ocasiones) fueron Marat, Danton, Hébert y Ronsin.

Corvée: Obligación de los campesinos de hacer trabajos no pagados en los caminos o de redimirlos por medio de dinero.

Distritos: Nombre que se dio a las 60 unidades electorales en que se dividió París en abril de 1789. Después de mayo y junio de 1790 fueron sustituidos por las secciones (véase más abajo).

Don gratuit: «Don gratuito», que hacía la asamblea del clero francés a la Corona, en lugar de pagar los impuestos acostumbrados.

Dvoryanstvo: Nobleza cortesana rusa.

Emigres: Nobles y otros que emigraron de Francia desde julio de 1789 en adelante, durante la Revolución.

Enragés: Partido revolucionario extremista, dirigido por Jacques Roux, Jean Varlet y Théophile Leclerc, quienes, aunque condenados por los jacobinos y los cordeleros al mismo tiempo, tenían mucha influencia sobre los *sans-culottes* de París en 1793.

Faubourgs: Literalmente, «suburbios» que, originalmente, quedaban fuera de los muros de París, pero que, desde 1785, estaban comprendidos dentro de la ciudad. El término se aplica más especialmente a los grandes «faubourgs» populares de St. Antoine y St. Marcel.

Gabelle: El impuesto de la sal; el más impopular y humillante de los impuestos indirectos del Antiguo Régimen en Francia.

Généralites: Zonas que coinciden, en líneas generales, con las antiguas provincias en que se dividía Francia con vistas a la contribución desde los tiempos de Richelieu. Había 23 *generalités,* cada una de ellas a cargo de un *Intendant,* en 1789.

Girondins: (Véase nota 1 del cap. IX.)

Gobierno revolucionario: Término aplicado al gobierno sumamente centralizado de Robespierre, Saint Just y sus colaboradores del Comité de Salvación Pública a partir de octubre de 1793.

Hidalgo: Caballero o noble español pobre que vivía en el campo.

Hobereau: Caballero o noble francés pobre que vivía en el campo.

Illuminati: Miembros de una secta dedicada a extender las ideas de la Ilustración en varios países.

Intendants: (Véase *generalités).*

Junkers: Nombre que se dio a la nobleza campesina prusiana (en un principio, panalemana).

Laboureurs: Próspero propietario campesino francés.

Lazzaroni: Las clases más humildes de la ciudad de Nápoles.

Lettres de cachet: «Cartas selladas» emitidas en nombre del rey, que permitían encarcelar a los infractores sin proceso.

Levée en masse: Ley del 23 de agosto de 1793 que movilizaba a toda la nación francesa para la guerra. Posteriormente se utilizó para designar la situación de nación en armas en cualquier país.

Liberum veto: Principio de unanimidad aplicado a las votaciones en la Dieta polaca durante el siglo XVIII.

Lit de justice: Reunión ceremonial del *Parlement* de París (véase más abajo), presidida por el rey, sentado sobre un *lit* o pila de cojines. En tales ocasiones, el *Parlement* no tenía derecho a protestar antes de registrar los edictos.

Livre: En 1789, equivalente más o menos a un chelín y ocho peniques. Una *livre* tenía 20 *sous.*

Lods et ventes: Derecho feudal sobre la venta de la sal.

Marc d'argent: Marco de plata con valor de 52 francos. Por ley de diciembre de 1789, esta era la cantidad anual que había que pagar en impuestos directos para ser admitido como candidato a diputado de la Asamblea Nacional. A consecuencia de las protestas, en agosto de 1791 el requisito pasó a ser el de ciudadanía «activa».

Maréchaussée: Policía rural del Antiguo Régimen.

Menu peuple: El pueblo llano: asalariados y pequeños propietarios (véase también *sans-culottes).*

Métayers: Aparceros que, por regla general, compartían la producción a un 50 por 100 con el terrateniente (o aun en condiciones menos ventajosas).

Montaña: Nombre adquirido por el grupo principal de diputados jacobinos, dirigido por Robespierre, que, después de su elección a la Convención Nacional en septiembre de 1792, se sentaba en los escaños superiores de la Cámara.

Muscadins: Término con el que los *sans-culottes* designaban a los ciudadanos burgueses y a la juventud de la clase media en el periodo posterior al 9 Termidor. El término quiere decir lechuguino y hace referencia a la indumentaria elegante.

Noblesse: Aristocracia o nobleza francesas cuyo meollo estaba compuesto por la *noblesse d'épée* originaria (nobleza de la espada), quien derivaba sus privilegios tradicionales del servicio militar a la Corona. Las adiciones más recientes eran la *noblesse de robe* (nobleza de magistrados), creada por medio de la venta de los cargos públicos, principalmente en los tiempos de Luis XIV, y la *noblesse de cloche,* formada por los que detentaban cargos municipales.

Parlements: Los tribunales más importantes de la jurisdicción real ordinaria francesa, que eran tribunales de última instancia. De los 13 *parlements* existentes, el más importante de todos, con mucho, era el de París, cuya jurisdicción se extendía sobre una gran parte del país y que, especialmente bajo reyes débiles o indolentes, había establecido el uso de «protestar» antes de autorizar el registro de los edictos reales, con lo que, virtualmente, usurpaba poderes legislativos.

Partie congrue: El salario que pagaban los abades y capellanes que recibían diezmos a los curas párrocos franceses que no poseían uno.

«Patriotas»: Nombre que se dio al partido radical en Inglaterra y Holanda antes de la Revolución francesa y, durante la Revolución, a sus partidarios y a los reforma-

dores avanzados en cada país (en el último caso, como alternativa de «jacobino»). No hay que confundirlos con los patriotas (sin comillas) como mantenedores de una causa nacional.

Pays d'élections: La mayoría de las provincias francesas del Antiguo Régimen en las que no había asambleas provinciales para repartir los impuestos a prorrateo, o para aspirar a una forma limitada de autogobierno. (Véase *Pays d'états.*)

Pays d'états: Provincias, principalmente fronterizas, y territorios recién adquiridos que habían mantenido sus estamentos tradicionales, cuyas funciones eran muy limitadas, pero que, en ocasiones, suscitaban esperanzas de un grado más amplio de autogobierno.

Prévôt des Marchands: Magistrado mayor del gobierno real de la ciudad de París, antes de la Revolución.

Privilégiés: Clases francesas privilegiadas, esto es, el clero (aunque, por regla general, únicamente se suele entender el alto clero bajo esta denominación) y la nobleza.

Rentiers: Gente que vivía de ingresos fijos, por ejemplo, pensionistas, accionistas, etc.

Sans-culottes: Término general (literalmente, aquellos que llevan pantalones, pero no calzones) que a veces se aplicó a todas las clases humildes de la ciudad y el campo, pero, más particularmente, a los artesanos urbanos, los pequeños tenderos y comerciantes, oficiales, trabajadores y pobres de la ciudad. Por extensión, se aplica como denominación política a todos los revolucionarios militantes de 1792 a 1795, con independencia de su origen social.

Séance royale: «Sesión real» convocada por Luis XVI en Versalles el 23 de junio de 1789 para emitir su parecer acerca de las cuestiones que dividían a los tres estados.

Secciones: Las 48 unidades en que se dividió París con fines electorales (y, en general, políticos), en lugar de los 60 distritos (véase más arriba), por ley municipal de mayo-junio de 1790.

Señoríos: Grandes propiedades territoriales poseídas por los grandes de España.

Sociétés populaires: Sociedades «populares». Término general aplicado a los clubes políticos que se formaron en las diversas secciones de París después del verano de 1791. Muchos se cerraron en la primavera de 1794, otros después de Termidor (véase más abajo) y el resto en los primeros meses de 1795.

Sou: (Véase *livre*).

Szlachta: Clase acomodada, o baja nobleza campesina polaca.

Taille: Principal impuesto directo pagado por todos los plebeyos *(roturiers)* en Francia antes de la Revolución, que habitualmente se obtenía del ingreso personal *(taille personnelle)* y, menos frecuentemente, de la tierra *(taille réelle).*

Termidor: Mes del calendario revolucionario que cubre parte de julio y agosto. Se aplica en particular a los dos días de Termidor del año II (el 9 y el 10), que vieron la caída de Robespierre y de sus colaboradores. De aquí, *termidorianos:* esto es, los sucesores inmediatos de Robespierre.

Terror: El término se utiliza aquí no tanto para describir un método, cuanto para definir un periodo, el periodo de septiembre de 1793 a julio de 1794, cuando el gobierno jacobino impuso su autoridad cambiando los medios de coacción militares, judiciales y económicos.

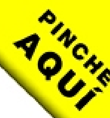
Tiers état: Literalmente, los representantes del estado no «privilegiado» de los tres convocados para asistir a los

Estados Generales. Más ampliamente, designa todas las clases sociales, excepto la aristocracia, el alto clero o los magistrados privilegiados; esto es, tanto el *menu peuple* como la burguesía.

Ucase: Decreto del zar ruso.

Unterthanspatent: Ley de 1781 del emperador José II, que abolía formalmente la servidumbre y aliviaba la suerte del campesinado dentro de los dominios de los Habsburgo. Sufrió importantes enmiendas antes y después de la muerte del emperador en 1790.

Vingtième: Impuesto sobre los ingresos que gravaba a todos con excepción del clero. Nominalmente, era un impuesto de un «vigésimo», pero a menudo se extendía a un «décimo» e, incluso, en alguna ocasión, a un «cuarto» de los ingresos.


PINCHE
AQUÍ


SIGLO
XXI
ESPAÑA

ÍNDICE